

# **Reparación penal de víctimas de violencia sexual del conflicto armado colombiano**

Angélica María Anichiarico González

Tesis depositada en cumplimiento parcial de los requisitos para el  
grado de Doctora en  
Estudios Avanzados en Derechos Humanos

Universidad Carlos III de Madrid

Director/a (es/as):  
Javier Dorado Porras

Getafe, diciembre de 2020

Esta tesis se distribuye bajo licencia “Creative Commons **Reconocimiento – No Comercial – Sin Obra Derivada**”.



*Para todas aquellas víctimas sobrevivientes de violencia sexual en los conflictos armados*

## **AGRADECIMIENTOS**

Mi eterno agradecimiento a todas las mujeres víctimas sobrevivientes por su valentía de seguir adelante, por construir y transformar a pesar de la adversidad.

Agradezco a mi mamá, papá y mi hermano por su apoyo, compromiso y esfuerzo. También a todas las personas que han contribuido para culminar esta tesis, familia, amigos, amigas, colegas.

A mi Tutor, Javier Dorado por su guía y confianza; a María Eugenia Rodríguez Palop por crear espacios de investigación para conocer las experiencias de las mujeres, a Maria Elena de la Fundación Hombres Nuevos y Mujeres Nuevas por permitirme conocer su labor y a todas aquellas feministas que me enseñaron a observar través de las gafas violeta, la violencia sexual contra las mujeres en los conflictos armados mi gratitud y admiración ya que su aproximación cuenta con un aparato histórico desafiante y propositivo que sin lugar a duda es la base para que estas páginas pudieran concluir.

## CONTENIDOS PUBLICADOS Y PRESENTADOS

González, Angélica María Anichiarico. "Una visión de la terminación de los conflictos armados centrada en la justicia transicional *UNIVERSITAS. Revista de Filosofía, Derecho y Política* (2016): 165-194.

- Rol: Autora
- DOI: <http://dx.doi.org/10.20318/universitas.2016.3179>
- Incluida: parcialmente en la tesis. La inclusión de material de esta fuente en la tesis se especifica en una nota a pie de página en cada uno de los capítulos en los que se produce dicha inclusión.
- Capítulos en los que se incluye: primer y segundo capítulo.
- Declaración: Todo material de esta fuente incluido en la tesis está señalado por medios tipográficos y una referencia explícita.

González, Angélica María Anicharico, et al. "Hacia Una Mirada Feminista Del Rol De La Mujer En El Posconflicto Colombiano." *Journal of International Women's Studies*, 20.6 (2019): 75-93.

- Rol: Coautora
- DOI: <https://vc.bridgew.edu/jiws/vol20/iss6/6>
- Incluida: parcialmente en la tesis. La inclusión de material de esta fuente en la tesis se especifica en una nota a pie de página en cada uno de los capítulos en los que se produce dicha inclusión.
- Capítulos en los que se incluye: primer y segundo capítulo.
- Declaración: Todo material de esta fuente incluido en la tesis está señalado por medios tipográficos y una referencia explícita.

Soriano Ruiz, Laura; Anichiarico González, Angélica María y Silveira Martins, Samuel. "construcción de paz transformadora e inclusiva de la mujer en el post acuerdo a través de técnicas creativas, artísticas y vivenciales" en *La construcción de la paz*. coord. López Santamaría, Ramsés, Anichiarico González, Angélica María y Tapia, Ricardo. Universidad Autónoma del Estado de Morelos, México y la Corporación Universitaria Autónoma del cauca, Colombia, 2020. p.176-210.

- Rol: Coautora
- ISBN: 978-958-8614-42-7
- Incluida: parcialmente en la tesis. La inclusión de material de esta fuente en la tesis se especifica en una nota a pie de página en cada uno de los capítulos en los que se produce dicha inclusión.
- Capítulos en los que se incluye: tercer capítulo.
- Declaración: Todo material de esta fuente incluido en la tesis está señalado por medios tipográficos y una referencia explícita.

## Contenido

---

Abreviaturas .....	10
Índice de Tablas y Gráficos.....	11
Aclaraciones Metodológicas .....	12
Introducción .....	15
Capítulo I. Violencia sexual de mujeres en conflictos armados .....	25
1.1. Hacia una conceptualización de la violencia sexual en conflictos armados ....	27
1.1.1. Concepciones según el contexto .....	34
1.1.1.1. De la violación como evento ineludible en la guerra a la mujer como arma de guerra .....	36
1.1.1.2. Violencia sexual como parte de estrategias en la guerra .....	39
1.1.1.3. Violaciones sexuales fuera de la estrategia .....	42
1.1.2. Concepciones feministas sobre la violencia sexual en conflictos armados..	44
1.1.2.1. Movimiento feminista anti-violación .....	52
1.1.2.2. Influencia del movimiento anti-violación en escenarios de conflicto armado	56
1.1.2.3. La idea de la Eficiencia como principio para comprender la violencia sexual desde el feminismo.....	58
1.2. Aspectos legales: tipificación internacional de la violencia sexual en los conflictos armados .....	62
1.2.1. Marco Jurídico: Derecho Internacional Humanitario, Derecho Penal Internacional y Derecho Internacional de los Derechos Humanos .....	64
1.2.2. Marco Jurisprudencial Internacional: Jurisprudencia del Tribunal de la Antigua Yugoslavia, Ruanda y Corte Penal Internacional .....	71
1.2.2.1. Descripción Jurídica de argumentos.....	72
1.2.2.2. Críticas del feminismo a la interpretación judicial en los procesos de VS.	80
1.2.3. Eficiencia de marco normativo y jurisprudencial de la violencia sexual en los conflictos armados.....	90
1.2.3.1. Normatividad y Tribunales Penales Internacionales desde la mirada de las víctimas sobrevivientes .....	95
1.3. Aspecto político: Procesos de Justicia Transicional y Violencia Sexual.....	102
1.3.1. Generalidades de los procesos de Justicia Transicional con perspectiva de género	106
1.3.2. Experiencias, relatos, testimonios y narraciones de las mujeres en los procesos de Justicia Transicional.....	111

1.3.3. Avances y Metas por alcanzar de los procesos de JT relativos a la violencia sexual .....	118
Capítulo II. Reparación de mujeres víctimas del conflicto armado colombiano: un estudio de caso .....	126
2.1. Contextualización de la violencia sexual en mujeres colombianas .....	130
2.1.2. Estudio de caso a partir de la contextualización.....	141
2.1.2.1. Datos estadísticos .....	142
2.1.2.1.3. Roles de las mujeres de la muestra asumidos por causa de la Violencia Sexual en el conflicto armado .....	154
2.1.2.1.4. Victimarios.....	163
2.2. Normatividad y jurisprudencia colombiana sobre procesos penales de Violencia Sexual .....	174
2.2.1. La perspectiva de género como pilar fundamental en Colombia para los procesos penales de Violencia Sexual .....	184
2.2.2. Normatividad del derecho penal y procesal penal relativo sobre Violencia Sexual en el conflicto armado .....	188
2.2.2.1. Ley 600 del 2000.....	196
2.2.2.2. Ley 906 de 2004.....	200
2.2.1. Normatividad nacional sobre reparación de víctimas del conflicto armado .....	202
2.2.1.1. Reparación en el proceso penal.....	203
2.2.1.2. Reparación por vía administrativa .....	215
2.2.1.2.1. Reparación judicial ante lo contencioso administrativo .....	216
2.2.1.2.2. Reparación en los Proceso de Justicia Transicional.....	221
2.3. Eficiencia de la reparación penal en los casos de estudio .....	231
Capítulo III. Estrategia complementaria a la reparación penal de mujeres víctimas sobrevivientes del conflicto armado colombiano .....	236
3.1. Epistemología feminista como base para la estrategia .....	237
3.1.1. Breve recorrido por las distintas corrientes epistemológicas feministas....	242
3.1.1.1. Empirismo Feminista o Feminist Empirism .....	245
3.1.1.2. El Punto de Vista Feminista o Feminist Standpoint.....	248
3.1.1.3. Feminismo Posmoderno o Postmodernism Feminist .....	251
3.1.1.4. Feminismo Latinoamericano .....	255
3.1.2. Violencia sexual en conflictos armados y epistemología feminista.....	261
3.1. Justificación de la Estrategia .....	262
3.2. Necesidades e intereses de las mujeres con la reparación.....	265



3.3. Objetivos de la Estrategia.....	267
3.4. Hacia una ruta complementaria de reparación penal por delitos de violencia sexual en el conflicto armado colombiano .....	268
3.4.1. Reconocimiento de procesos de reparación gestionados de mujeres para las mujeres .....	269
3.4.2. Transitando por las experiencias de las mujeres .....	271
3.4.3. Lo que la VS dejó en las mujeres.....	273
3.4.4. De mujeres para mujeres: ejercicios y actividades .....	277
3.4.5. Materializando mis proyectos .....	280
3.4.5.1. Financiación por proyectos de proyección social .....	281
3.5. Fortalezas y Debilidades .....	283
3.6. Evaluación y seguimiento .....	286
3.6. Resultados Esperados.....	287
Conclusiones .....	289
Bibliografía .....	293
Anexos .....	326

## Abreviaturas

---

Abreviatura	Significado
VS	Violencia Sexual
DIH	Derecho Internacional Humanitario
DPI	Derecho Penal Internacional
DIDH	Derecho Internacional de los Derechos Humanos
CPI	Corte Penal Internacional
ONU	Organización de las Naciones Unidas
PP	Procesos Penales
CNMH	Centro Nacional de Memoria Histórica
JT	Justicia Transicional
RUV	Registro Único de Víctimas

## Índice de Tablas y Gráficos

---

Tabla 1. Edad de Mujeres de Estudio de Violencia Sexual en el conflicto armado .....	143
Tabla 2. Nivel educativo de las mujeres víctimas de la Violencia Sexual.....	152
Tabla 3. Presunto Grupo Agresor señalado por la Víctima Sobreviviente .....	171
Tabla 4 Correlación entre edad y omisión de denuncia ..;	<b>Error! Marcador no definido.</b>
Tabla 5 Medidas de reparación recibidas por las mujeres .....	235

---

Gráfico 1 . Identificación con grupo poblacional vulnerable .....	147
Gráfico 2. Rol de desplazada.....	160
Gráfico 3. Embarazos producto de la violación .....	161
Gráfico 4. Madre Cabeza de Familia .....	162
Gráfico 5. Reconocimiento de Agresor y/o agresores de Violencia Sexual .....	164
Gráfico 6. Presuntos Grupos Victimarios .....	165
Gráfico 7. Estrategia de Violencia Sexual .....	172
Gráfico 8 . Ley procesal de casos .....	190
Gráfico 9. Número de Entrevistas realizadas por Policía Judicial.....	195
Gráfico 10. Percepción de Impunidad en las mujeres.....	232
Gráfico 11 Percepción de proceso penal como reparación .....	233
Gráfico 12 Satisfacción de las víctimas sobrevivientes con el proceso penal.....	235
Gráfico 13 Personas a cargo de las Mujeres.....	275
Gráfico 14 Pertenencia Étnica de mujeres de la Fundación.....	276
Gráfico 15 Actividad Artística Reparadora.....	279
Gráfico 16 Percepción sobre los procesos de reparación.....	280

## Aclaraciones Metodológicas

La investigación en esta Tesis Doctoral analiza cuál es la estrategia adecuada desde una perspectiva feminista para que las mujeres víctimas de violencia sexual en el conflicto armado colombiano sean reparadas de forma integral por los daños que la VS dejó en sus vidas y las de sus comunidades teniendo en cuenta sus necesidades e interés.

Por ende, para desarrollarla se exploraron metodologías de la investigación que incursionaran en la VS con un enfoque feminista para comprender y responder a los desafíos derivados de la investigación cualitativa y cuantitativa sobre la materia<sup>1</sup>. Para ello se siguieron las recomendaciones de Carrol y Heise quienes exponen una guía práctica para investigar temas relacionados con la VS con una perspectiva feminista donde el cuidado en la información recolectada a través de entrevistas es vital para evitar la revictimización de las mujeres que hagan parte del estudio<sup>2</sup>.

El método empleado para lograr el objetivo propuesto en la investigación se enmarca en el estudio de casos, descrito como “una estrategia investigativa, que utiliza como herramientas fundamentales para su abordaje la descripción, la interpretación y la evaluación y toma al caso como unidad de investigación que puede ser estudiado en sí mismo o en relación con otro”<sup>3</sup>. En ese sentido, la captura de experiencias vividas de las mujeres con este enfoque puede ayudar a generar descripciones de lo vivido en el conflicto armado y los procesos judiciales a que dieron lugar en Colombia.

Por ello, la unidad de investigación fue delimitada a la violencia sexual de mujeres en escenarios de conflicto armado, haciendo énfasis en el contexto colombiano y el principal sujeto de observación y análisis fue la mujer, entendida en todas sus identidades de género y orientaciones sexuales posibles.

---

<sup>1</sup> Herrmann, Judith. "Experiences, challenges, and lessons learned-Interviewing Rwandan survivors of sexual violence". *Griffith Journal of Law & Human Dignity*, núm. 5 (2017): 166-188.

<sup>2</sup> Ellsberg, Mary, and Lori Heise. *Researching Violence Against Women: A Practical Guide for Researchers and Activists*. Washington DC: World Health Organization, Path, 2005.

<sup>3</sup> Peña, Wilmar. “El estudio de caso como recurso metodológico apropiado a la investigación en ciencias sociales”. *Revista educación y desarrollo social* 3, núm. 2 (2009):180-195. Al respecto puede verse también, Gomm, Roger, Maetyn Hammersley y Foster Peter. *Case Study Method*, Londres: Sage, 2000; Martínez Carazo, Piedad Cristina. "El método de estudio de caso. Estrategia metodológica de la investigación científica". *Revista científica Pensamiento y Gestión*, núm. 20 (2006): 165-193.

Tomando en consideración el procedimiento metodológico estructurado por Martínez Carazo y en la misma línea de O'Rourke<sup>4</sup>, para la presente investigación se llevó el siguiente esquema metodológico: en primer lugar, se hizo la identificación del problema, se indagó sobre la presunta carencia de reparación en los procesos penales de las mujeres víctimas de delitos de violencia sexual con ocasión del conflicto armado a nivel internacional y local.

Al querer realizar un estudio de caso y revisar procesos judiciales, se determinó la ventana de observación 2016 a 2019, su área de influencia; Colombia, la región de estudio se delimitó al departamento del Cauca, y se determinó el control que tenía el investigador sobre el objeto de estudio (limitado debido a la reserva judicial de los procesos sobre violencia sexual). Por ello, se elaboró un diseño estructural con los objetivos de la investigación, el problema de investigación y una proposición inicial. Todo esto con el fin de tener una organización predeterminada para la realización de la investigación.

En ese orden a través de una revisión de literatura se realizó un análisis deductivo de información cualitativa, haciendo una recolección de fuentes de datos sobre la violencia sexual en los conflictos armados, una estructuración y organización de esos datos, una codificación de estos para compararlos con la literatura nacional e internacional, lo cual permitió establecer una conceptualización y explicación del problema. Esto permitió, además, realizar un análisis documental de legislación y jurisprudencia para identificar los aspectos legales referentes al objeto de estudio.

Ahora bien, teniendo bases teóricas, se procedió a realizar el estudio de caso en Colombia haciendo la revisión de 70 procesos penales locales de violencia sexual en conflicto armado, adelantados en la Fiscalía Quinta Especializada de Popayán, Cauca, Colombia. Se obtuvieron datos a través de revisión de procesos y se utilizaron diarios de campo para la anotación de observaciones. Además, se analizaron las entrevistas semiestructuradas de víctimas sobrevivientes de violencia sexual que reposaban en los expedientes judiciales con el fin de indagar cuál es el tratamiento que se les da a los

---

<sup>4</sup> Martínez Carazo, Piedad Cristina. "El método de estudio de caso. Estrategia metodológica de la investigación científica", 166 y ss; O'Rourke, Catherine. "International law and domestic gender justice: why case studies matter". *Transitional Justice Institute Research Paper*, (2011): 11-41. [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=1804928](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1804928).

procesos judiciales de delitos de violencia sexual contra mujeres en el caso colombiano, y el estado de estos.

En ese sentido, después en la fase de transcripción de los datos se pasó a la fase de análisis global con la utilización de software SPSS 24.0, para análisis de resultados. Con la utilización de dicho software se realizó una constante comparación de la literatura con los datos obtenidos para la codificación de estos. Todo lo anterior, para realizar un análisis profundo donde se comparó de manera sustantiva los resultados con los conceptos de la literatura.

Posteriormente, se indagó por procesos alternos de reparación llevados a cabo en organizaciones sociales como la organización Hombres Nuevos y Mujeres Nuevas, ubicada en la zona de estudio y con un proceso de reparación basado en el arte, el cual resulta interesante y novedoso para las víctimas sobrevivientes. A una muestra de 20 mujeres se les preguntó cuál ha sido su proceso de reparación y de qué tipo, cuáles medidas creían necesarias para su proceso y si estaban satisfechas con el proceso penal como medida de reparación.

Por último, se plantea una estrategia complementaria de reparación para mujeres víctimas sobrevivientes de VS en el conflicto armado colombiano, considerando como base epistemológica, la feminista, por sus lineamientos enmarcados en la interseccionalidad y la evaluación constante de la importancia del contexto en el desarrollo de sus prácticas de lucha. Esto, con el fin de que la estrategia pueda ser considerado viable para hacer posible la reparación de mujeres de forma eficiente, en complemento con el proceso judicial penal que se encarga, entre muchas cosas más, en dar con el paradero de los posibles victimarios e imponerles la respectiva sanción judicial.

## Introducción

---

Esta tesis doctoral analiza la violencia sexual de las mujeres en los conflictos armados, específicamente el que acontece en Colombia, encontrando como punto de reflexión, la necesidad de contar con estrategias de reparación desde una mirada feminista que complementen las medidas que se toman en los procesos penales locales de VS, que se centren en las víctimas sobrevivientes y logren encontrar un equilibrio entre lo pretendido por la institucionalidad con su deber de proteger, investigar y castigar este tipo de delitos, y lo que requieren las mujeres para superar los obstáculos que se presentan cuando se es víctima sobreviviente de violencia sexual.

Al rastrear el problema a partir del arraigo de la cosificación y los estereotipos impuestos a las mujeres antes, durante y después de un conflicto armado, se aprecia a lo largo de estas estas páginas, cómo la violencia sexual se encuentra inmersa en la estructura patriarcal (antes del conflicto), siendo el contexto bélico el que la agrava (durante) y perpetuando esta tipología de violencia (después)<sup>5</sup>.

En ese camino, la reducción de las posibilidades de las mujeres para ejercer como personas reconocidas como sujetos de derechos, causa además de los daños físicos, psicológicos y psíquicos que genera la agresión, desmejora en su vida individual y colectiva por el estigma social, la falta de oportunidades en el ámbito privado y público, y la carente participación en espacios políticos y económicos que impiden a las mujeres ser reparadas, sacar adelante sus planes de vida e influir en las decisiones que se toman en diversos ámbitos<sup>6</sup>.

En ese entendido, la violencia sexual contra las mujeres en conflictos armados, definida por la comunidad internacional como aquella materializada en conductas como “la violación, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, el embarazo forzado, la

---

<sup>5</sup> Sánchez Lucumí, Claudia Lorena y Stephanie Oliveros Ortiz. "La reparación integral a las víctimas mujeres: Una aproximación a la aplicación del enfoque diferencial de género en el contexto del conflicto armado colombiano". *Revista Universitas Estudiantes*, núm. 11 (2014): 162 y ss.

<sup>6</sup> Banwell, Stacy. Rape and sexual violence in the Democratic Republic of Congo: A case study of gender-based violence. "*Journal of Gender Studies*" núm. 1, Vol. 23 (2014): 45-58.

esterilización forzada y el genocidio, entre otras conductas”<sup>7</sup>, enmarca una visión unidimensional netamente legalista que resulta insuficiente cuando se trata de la satisfacción de los derechos de las víctimas<sup>8</sup>.

La Justicia Penal Ordinaria y Especial local y la Justicia Penal Internacional, tomada como la salida con más aceptación social para castigar a los autores de estos delitos y evitar la impunidad, han sido objeto de crítica al centrar su atención en el victimario y proveer mecanismos de reparación poco eficientes y satisfactorios para las víctimas sobrevivientes. Dentro de la tesis se mencionarán nuevos modelos como los de la justicia transicional, implementados con alternativas transitorias para dar paso a escenarios libres de violencia y tomar la verdad, la justicia y la reparación como pilares fundamentales, con la salvedad de que algunos de estos procesos aún están en ejecución y sin terminar.

Por ende, atendiendo a realidades y a procesos de resolución ágil, se observa que Colombia presenta una de las tasas más altas de violencia sexual contra mujeres en este contexto, con “875.437 víctimas directas reportadas entre el año 2010 hasta el 2015; presentándose anualmente, en promedio, 145.906 mujeres víctimas directas de algún tipo de violencia sexual, 12.158 cada mes, 400 cada día y 16 cada hora”.<sup>9</sup>

Asimismo, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia, evidencia en sus informes anuales, la tendencia de las mujeres como principales víctimas de violencia sexual en este contexto, en tanto que, de 10.000 a 20.000 exámenes médicos legales anuales que realizaron, aproximadamente el 80% correspondían a víctimas mujeres<sup>10</sup>. Las cifras actuales vislumbran que el número de mujeres reportadas como víctimas del conflicto armado en lo corrido del año 2020, es de 4.481.788 de las cuales

---

<sup>7</sup> El Estatuto de Roma en sus artículos 7 y 8 establece las conductas consideradas como crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad. Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, de 17 de julio de 1998, (ONU A/CONF.183/9), [https://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome\\_statute\(s\).pdf](https://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf)

<sup>8</sup> Swaine, Aisling. *Conflict-related violence against women: transforming transition*. United Kingdom: Cambridge University Press, 2018, 110 y ss.

<sup>9</sup> Sánchez Gómez, Olga, et al. *Encuesta de prevalencia de violencia sexual en contra de las mujeres en el contexto del conflicto armado colombiano (2010-2015)*. Bogotá: OXFAM, 2017, 5.

<sup>10</sup> Las cifras se pueden consultar en el siguiente dominio web:

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Sistema de Información de Clínica y Odontología Forense – SICLICO, “Análisis comparativo enero a octubre 2014 -2015 de los hechos de violencia contra mujeres en Colombia”, acceso el 25 de septiembre de 2020, <https://www.medicinalegal.gov.co/documents/20143/86545/D%C3%ADA+Internacional+de+la+Eliminaci%C3%B3n+de+la+Violencia+contra+la+Mujer.pdf/577d507c-1fa3-764d-050e-0da5c6eecef4>



28.377 mujeres han sido víctimas de violencia sexual en este contexto, siendo reparadas solo una cuarta parte<sup>11</sup>.

Sin desconocer que la violencia sexual también la padecen hombres, niños, adolescentes y otros grupos poblacionales, este panorama alienta a los y las investigadoras a encontrar alternativas para abordar esta problemática teniendo en cuenta las diferencias y contextos en la que se presenta esta forma de violencia. Esta tesis en particular centra su atención en la violencia sexual de las mujeres por ser ellas las víctimas más frecuentes en contextos bélicos, con mayores probabilidades de seguir siendo víctimas de los mismos delitos fuera del conflicto y aquellas que a pesar de su esfuerzo siguen limitadas en distintos espacios en la esfera privada y pública. Todo lo anterior, se plantea con el fin de idear una estrategia complementario para que se repare, se prevenga y no se repitan estas situaciones para esta tipología de violencia.

Esta tesis doctoral es escrita desde la voz de las mujeres que se identifican cómo víctimas sobrevivientes de la VS sin desconocer que cada una de las mujeres se identifica de distintas maneras, según su vivencia, creencias, etc. Por ello, en el primer capítulo se realiza un análisis global de la violencia sexual en los conflictos armados haciendo un estudio sobre las distintas concepciones que se tienen al respecto, con el fin de establecer el marco conceptual y contextual del fenómeno estudiado.

En un primer momento, se describe cómo se realizan conceptualizaciones teniendo en cuenta el contexto. En esa línea se abordan figuras como la mujer y la violencia ejercida contra ella. Denominaciones como “mujer como arma de guerra” y “mujer como objeto estratégico”, trazan la relación entre la interpretación del contexto con la conceptualización de la corporalidad, ya que la mujer es tratada como un objeto, ya sea para lograr las metas de los grupos enfrentados, o como aquella que es violada por razones de género carentes de relación directa con el conflicto.

Dado este panorama, se encuentra que las feministas al observar lo que sucede en estos contextos, y en general con la violencia sexual contra las mujeres, refieren sus concepciones a partir de sus teorías y su práctica activista. Es allí donde se mira la influencia que tienen ciertas iniciativas feministas a lo largo de la historia, como la

---

<sup>11</sup> La búsqueda se realizó discriminando los datos por hecho victimizante y por género en el siguiente documento: Unidad para la atención y reparación de víctimas. “Registro Único de Víctimas”. Acceso el 20 de noviembre de 2020. <https://www.unidadvictimas.gov.co/es/reportes>

norteamericana, que llevan a aplicar medidas de visibilización, protección, prevención y denuncia de los distintos eventos que se presentan con actos de violencia sexual. Estas experiencias son tomadas como referencias para resaltar lo positivo que puede ser un enfoque distinto, cuando de violencia sexual contra las mujeres se trata, centrando el eje no en el victimario sino en la víctima sobreviviente.

Se resalta la importancia de la eficiencia cuando se aborda la VS ya que se parte de la hipótesis que el proceso penal local e internacional no es el apropiado para la reparación de mujeres que han sufrido violencia sexual en los conflictos armados, porque su enfoque carece de una perspectiva feminista, lo cual hace que sus metas y la evaluación de estas estén basadas en indicadores que evalúan si una norma sirve o no para lo que fue creada y si la institución cumple con los fines para la prevención, investigación, sanción y reparación de la VS, y no en indicadores contruidos por y para las víctimas sobrevivientes que visualicen, desde sus contextos, que la judicialización de sus agresores no es la única forma de generar en la víctima sobreviviente, una reparación que aporte a sus procesos individuales y colectivos.

En ese sentido, cuando se estructura el concepto de violencia sexual dentro del sistema jurídico penal -como sistema que más aceptación tiene para evitar la impunidad de estos actos-, se observa que está contruido, entre otras razones, para castigar ciertos actos, siendo ese castigo acorde con unos fines de la pena. Esto lleva a reflexionar acerca del sistema penal que crea esa conceptualización, pensando en el castigo del victimario y no en lo que para la víctima puede llegar a ser benéfico para su propio proceso de reparación. Por ende, se dará claridad en lo que se entenderá por eficiencia en el sistema penal y cómo las feministas son las principales detractoras de la conceptualización a partir del castigo. En ese orden, la tesis comienza dando luces de la crítica sobre la construcción de los conceptos de violencia sexual por no estar pensados desde y para la víctima sobreviviente de violencia sexual.

Complementario a esto, se encuentra que los aspectos legales son los que prevalecen con respecto a los sociales. Por ello, los sistemas de justicia penal se centran en la tipificación de la violencia sexual en los conflictos armados en el marco jurídico internacional que abarca tratados internacionales en el Derecho Internacional Humanitario (DIH), Derecho Penal Internacional (DPI) y Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH). Esto va acompañado con el marco jurisprudencial

internacional, específicamente el del DPI, que recrea los casos más emblemáticos y permite que altos tribunales de justicia se pronuncien sobre la interpretación de los tratados y estatutos que hacen parte del ordenamiento jurídico a aplicar. Tribunales como el de la Antigua Yugoslavia, el de Ruanda y la Corte Penal Internacional, establecen los lineamientos básicos de interpretación de la gama de delitos de violencia sexual.

Sin embargo, al existir un ordenamiento jurídico claro para castigar a los victimarios con un marco normativo y jurisprudencial de la violencia sexual en los conflictos armados, las víctimas sobrevivientes son renuentes en su descontento con el proceso judicial penal, al no tener una reparación dentro de este sistema particular que goce de inmediatez y sea construida a partir de sus propias necesidades e intereses.

Distintas críticas sobre el proceso relucen en la doctrina e informes no oficiales como la revictimización de las víctimas sobrevivientes durante el proceso, la carencia de perspectiva de género durante el proceso, entre otras. No obstante, una de ellas está encaminada a la falta de cooperación internacional de justicias locales con los tribunales internacionales, entre otras razones, llevan a los procesos penales internacionales sobre VS a ser demorados y en muchos casos archivados, por la falta de ejecución de sus medidas. Esto genera que se comience a pensar en alternativas que ayuden realmente a las mujeres víctimas sobrevivientes a sanar, superar o a seguir, a pesar del hecho victimizante.

Es allí donde se plantea en esta tesis doctoral que los procesos judiciales penales, al no ser eficientes cuando se abordan actos de violencia sexual de mujeres en los conflictos armados, prolongan los daños de las mujeres víctimas sobrevivientes y generan impunidad –en sentido lato-. El efecto principal al no cumplirse con los estándares internacionales de investigar, prevenir y castigar las graves violaciones a los derechos consagrados en los tratados internacionales y demás preceptos legales sobre la materia, es que las víctimas sobrevivientes de los procesos quedan sin una posibilidad judicial penal para exigir si quiera una medida de reparación.

Factores como la falta de identificación de los victimarios, la precaria recolección de material probatorio, la ausencia de la víctima sobreviviente en el proceso por miedo, entre muchos otros, han dificultado que los procesos lleguen a su etapa final, permiten aseverar que la reparación por esta vía (reparación judicial penal), es altamente ineficiente.

Para comprobar esta hipótesis, la revisión de indicadores oficiales de eficacia y efectividad sobre normatividad y sentencias internacionales evidenció que muy pocos casos de violencia sexual han podido culminar con una sentencia condenatoria y en otros, los tribunales contemplan los delitos de VS como conexos a los crímenes de lesa humanidad, de guerra o genocidio, teniendo como consecuencia que solo se consideren como agravantes de otros delitos. Esto genera como resultado que, por vía judicial internacional, la reparación se vuelva inoperante al ser precedida obligatoriamente de un fallo judicial penal donde el victimario no ha sido condenado. Lo anterior tiene como consecuencia el desconocimiento de la necesidad de la inmediatez de la reparación y de la posibilidad real de sentirse reparadas.

Al observar esta realidad, comienzan a aparecer alternativas que son tomadas por los países inmersos en conflictos armados a través de sus gobiernos, los cuales estudian posibilidades para salir de situaciones bélicas. Es así como Colombia opta por los procesos de justicia transicional que entran en el juego político y convierten la reparación en uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de lo que sería considerado la transición para alcanzar la paz y dejar de lado la guerra, como medio para lograr los fines de los grupos enfrentados.

Los procesos de justicia transicional como complemento o en sustitución al proceso tradicional de juzgamiento, intentan en sus prerrogativas, labrar un camino planteando mecanismos alternativos a los tradicionales como lo son: las comisiones de la verdad, las medidas de reparación, los componentes de justicia, las medidas de democratización, y las de desarme, desmovilización y reinserción; que apunten a que la sociedad se transforme y se reconcilie<sup>12</sup>.

Examinadas diversas experiencias comparadas, países como Timor Oriental, Nepal, El Salvador, Sudáfrica, República Democrática del Congo o Colombia, entre otros, han optado por recurrir a procesos de justicia transicional como el camino para lograr la paz, dando bosquejos en su articulación de políticas públicas que incluyan medidas de reparación a las víctimas de una forma integral con enfoque de género<sup>13</sup>. Sin

---

<sup>12</sup> Dorado Porras, Javier. "Justicia transicional, persecución penal y amnistías". *Derechos y Libertades: revista de filosofía del derecho y derechos humanos*, núm. 28 (2013): 81-113, 82. doi: 10.1400/216182.

<sup>13</sup> Al respecto puede consultarse: Buckley Zistel, Susanne. "Truth commissions, human rights and gender: Normative changes in transitional moments". en *Peacebuilding in Crisis*. Editado por Tobias Debiel, Thomas Held y Ulrich Schneckener, 137-154. New York: Routledge, 2016; O'Rourke, Catherine. "Transitional justice and gender". en *Research Handbook on Transitional Justice*. Editado por Cheryl

embargo, las dinámicas de los conflictos por elementos políticos, sociales, económicos y territoriales comenzaron a ser abordados de forma distinta por las pretensiones de cada país en particular; lo cual exigió en la investigación la observación de diferencias entre los procesos de justicia transicional africanos, los países centroamericanos, los de países del este, o los latinoamericanos, entre otros.

Esto llevó a la selección del análisis de procesos de Justicia Transicional con perspectivas de género para abordar la violencia sexual, siendo Colombia uno de los países que crea una comisión especial de género para que le haga seguimiento a las medidas pactadas en el Acuerdo de Paz firmado en el 2016 con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo FARC-EP.

Colombia, dentro de su último proceso de justicia transicional concretado en el año 2016, incluyó a las mujeres con diversas características y posturas para tomar decisiones con respecto a los enfoques que debían tomarse en cuenta para que la participación de las mujeres fuera decisiva en la redacción del texto denominado “Acuerdo para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”<sup>14</sup>. Sin embargo, por procesos de selección de los casos, dejan por fuera muchos de los procesos de VS y esto genera una percepción de impunidad en las víctimas sobrevivientes de este tipo de violencia.

Por ende, al observar que las mujeres latinoamericanas, en especial las colombianas están categorizadas social, económica y políticamente como mujeres, negras, afrodescendientes, indígenas, madres cabeza de familia, pobres, líderes sociales, entre otras, se estudió cuál de las corrientes epistemológicas abordaba estas categorías de análisis para plantear una estrategia complementaria de reparación judicial penal que se ajuste a sus necesidades y su contexto, siendo la corriente feminista aquella que contemplaba el enfoque de género con teorías como la diferencial y la interseccional.

Es por ello por lo que, en el segundo capítulo, teniendo claridad de las concepciones fundamentales del tema y su eficiencia -al descartar el proceso penal

---

Lawther, Luke Moffett y Dov Jacobs, 117-141. Reino Unido: Edward Elgar Publishing, 2017; McCauley, Heather L, Rebecca Campbell, Nicole T. Buchanan and Carrie A. Moylan. "Advancing theory, methods, and dissemination in sexual violence research to build a more equitable future: an intersectional, community-engaged approach". *Violence against women*, núm. 16, vol. 25, (2019): 1906-1931.

<sup>14</sup> Acuerdo de paz Acuerdo para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, de 24 de noviembre de 2016, (EVA – Acuerdo final de 2016), [https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma\\_pdf.php?i=79893](https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=79893)

internacional cuando de reparación de delitos de violencia sexual en conflictos armados se trata-, se pretende determinar si en procesos penales locales como el colombiano, se tienen similares deficiencias y causan los mismos efectos en sus procesos, como a nivel internacional.

Para lograr lo anterior, se hizo seguimiento a 70 procesos penales locales de víctimas mujeres del conflicto armado colombiano, desde el año 2015 a 2019, para estudiar la efectividad del proceso y su eventual reparación, la cual es catalogada en esta tesis doctoral como ineficiente, ya que los procesos objeto de estudio no han pasado siquiera de la etapa de investigación preliminar. Este resultado incidió en la búsqueda de una alternativa viable que permita que se dé una reparación hacia las mujeres víctimas sobrevivientes en contextos como el del conflicto armado colombiano.

El principal obstáculo del estudio fue la reserva legal que tiene este tipo de procesos y consiste en la confidencialidad absoluta de todo el expediente y su material probatorio. Para ello se obtuvo un permiso especial del Director de la Fiscalía Seccional del Cauca con el fin de hacer seguimiento a los procesos penales de una de las Fiscalías Especializadas más efectivas de esta entidad en abordar estos delitos, la cual se encuentra ubicada en la ciudad de Popayán, departamento del Cauca, Colombia.

Al ser concedido el permiso, se analizó el proceso penal local y las entrevistas a las víctimas realizadas por Policía Judicial a cargo de la Fiscalía General de la Nación. Con el fin de comprender la VS contra las mujeres en el conflicto armado colombiano, identificando los grupos de perpetradores, los delitos denunciados más frecuentes, la información sociodemográfica de las víctimas sobrevivientes como la edad, la etnia y el estrato, con el fin de verificar si el sistema penal tenía en cuenta a las víctimas sobrevivientes en la construcción del contexto de VS.

Para lograr lo anterior, en la fase de análisis de frecuencias se utilizó el software SPSS 24.0, tomando como categorías axiales: el rol de la mujer, la reparación y la satisfacción. Tras identificar el número de denuncias formuladas ante Fiscalías Especializadas por parte de mujeres víctimas de violencia sexual, el año de denuncia, la etapa procesal en la que se encuentra el caso, el número de medidas de reparación recibidas por vía judicial y por vía administrativa y el número de entrevistas a las víctimas tomadas por diferentes órganos judiciales y estatales, se logró categorizar la muestra de estudio e identificar qué requerían las víctimas para ser reparadas. Dentro de estos

procesos penales, reposan evidencias de que las víctimas sobrevivientes acudieron paralelamente a la vía administrativa para lograr una reparación. Sin embargo, se advierte que en la presente tesis no se realizó seguimiento a las solicitudes de reparación por vía administrativa elevadas ante la Unidad de Víctimas, encontradas en la muestra objeto de estudio, toda vez que estas están sometidas a reserva sumarial por disposición de dicha Unidad.

Al observar que durante cuatro años ninguno de los procesos penales logró culminar y tras reflexionar sobre los indicadores que se utilizan para saber si una medida resulta efectiva o no en lo que respecta a la reparación de las víctimas sobrevivientes, se inició el proceso de búsqueda de una vía que les permita ser reparadas eficaz y eficientemente.

En esa tarea, se exploraron experiencias complementarias como las guiadas por organizaciones no gubernamentales, dentro de la que se encuentra una llamada Hombres Nuevos y Mujeres Nuevas, ubicada en Popayán, Cauca, suroccidente de Colombia. Al realizar cuestionarios sobre reparación a las mujeres víctimas sobrevivientes del conflicto armado de esta organización, se encontró que muchas de ellas no habían recibido ningún tipo de reparación por el proceso penal, tampoco ninguna por vía administrativa y por ello, buscaban alternativas inmediatas para comenzar sus propios procesos de reparación.

Por lo anterior, en el tercer capítulo se propone una estrategia complementaria al de la justicia penal sobre reparación desde una mirada feminista, que satisfaga los intereses de las víctimas sobrevivientes y que contribuya en el camino de cumplimiento de los deberes estatales. En la investigación se logra demostrar a través de las voces de las víctimas sobrevivientes que los procesos penales de juzgamiento de violencia sexual contra las mujeres no causan un efecto reparador ni restaurativo en las víctimas sobrevivientes porque no llegan a culminar, no generan satisfacción en las mismas y no garantizan su no repetición. Tomando como ejemplo las medidas de asistencia y ayuda del movimiento antiviolación que nace con las feministas, se pudo observar cómo al considerar a la mujer como el sujeto central del sistema, se logra que los procesos de reparación se estructuren desde su propia visión, contexto y experiencias, trayendo como consecuencia, una reparación desde y para ellas.

Este complemento a la reparación para las mujeres víctimas sobrevivientes de violencia sexual establecerá la idea de que los procesos autogestionados o con libertad en

su actuar, que emergen de las mismas mujeres, serían un camino para que los mecanismos judiciales penales cumplan con sus objetivos con menores desgastes para las víctimas sobrevivientes.



## **Capítulo I. Violencia sexual de mujeres en conflictos armados**

Partiendo de la generalización conceptual que existe sobre la violencia sexual (en adelante VS), que permite comprenderla como uno o varios actos sin consentimiento que afectan la integridad sexual del individuo que lo sufre, se destaca el padecimiento con mayor severidad que tienen las mujeres en escenarios bélicos. La literatura científica reconoce varias causas sobre la predilección que tienen los agresores por las mujeres para cometer este tipo de actos que vuelven a la violencia sexual una tendencia según los intereses de las partes en conflicto. Es así como se observa en diversos análisis de casos sobre violaciones, cómo las mujeres se vuelven armas de guerra, objetos para cumplir con las múltiples estrategias de guerra o simplemente son escogidas por los victimarios por causas ajenas al conflicto.

Sin embargo, son los estudios y movimientos feministas los que han advertido cómo la construcción social de la llamada “feminidad” que caracteriza a las mujeres como sujetos pasivos, vulnerables y reprimidos, se deriva de una estructura opresora que en un escenario de conflicto las convierte en blancos potenciales para ser víctimas de violencia sexual<sup>15</sup>.

Esta aseveración ubica a la corporalidad como eje central para explicar el por qué se presenta este fenómeno y para qué se emplea, siendo enfáticos en que la utilización de mujeres como cuerpos sexuados forma parte de estrategias debidamente planificadas y discutidas en las esferas internas de los grupos armados para lograr desestabilizar al oponente no solo en su parte estructural sino partiendo desde su moral.

la reducción de las posibilidades de las mujeres para ser reconocidas como personas con la potestad de ejercer sus derechos son más amplias cuando dentro del conflicto son piezas estratégicas sin voz ni voto para decidir sobre sus cuerpos. Esto causa daños físicos, psicológicos y psíquicos que desmejoran de forma individual y colectiva la

---

<sup>15</sup> Al respecto puede consultarse: Baaz, Maria Eriksson, y Maria Stern. “Curious erasures: the sexual in wartime sexual violence”. *International Feminist Journal of Politics*, núm. 3, vol. 20 (2018): 295-314; Bedia Cobo, Rosa. “El cuerpo de las mujeres y la sobrecarga de sexualidad”. *Investigaciones feministas*, vol. 6, (2015): 7-19; López Cárdenas, Carlos Mauricio, Canchari Canchari, Rocio Yudith y Sanchez de Rojas, Emilio. *De género y guerra: nuevos enfoques en los conflictos armados actuales*. 1.ª ed. Bogotá: Universidad del Rosario, 2017.

vida de las víctimas de estos delitos<sup>16</sup>. Por lo tanto, al rastrear el problema a partir del arraigo de la cosificación y los estereotipos impuestos a las mujeres antes, durante y después del conflicto, se aprecia cómo la violencia sexual se encuentra inmersa en la estructura patriarcal (antes), siendo el contexto bélico el que la agrava (durante) y perpetuando esta tipología de violencia (después)<sup>17</sup>.

Una evaluación de la situación de continuidad descrita evidencia que la violencia sexual ocupa un lugar determinante para explicar el por qué las mujeres son consideradas como arma de guerra; sin embargo, aún persiste el desconocimiento de causas contextuales. En ese sentido, Segato afirma que “las dimensiones contextuales de la guerra se han transformado, confiriendo a la escena bélica una nueva estructura y asignando al cuerpo femenino o feminizado un papel nuevo que lo transfiere de una posición marginal a una posición central”<sup>18</sup>. Así pues, son los conflictos armados y sus diferentes mutaciones los que han propiciado el cambio en los enfoques de estudio de la violencia sexual haciendo más acertadas las políticas y propuestas de soluciones para las víctimas, como por ejemplo las reparaciones.

Por todo lo descrito, a lo largo de este capítulo se dará claridad en primer lugar, sobre la conceptualización de la violencia sexual en los escenarios de conflicto, identificando los principales actos que constituyen la violencia sexual no solo como un delito sino como un fenómeno social. En este apartado se hará énfasis también en las concepciones de la violencia sexual según el contexto ya que se defenderá cómo las características del conflicto y sus dinámicas de guerra necesitan replantear los enfoques de estudio para lograr ser efectivos en términos de mitigación del problema. En segundo lugar, se dará una descripción de los aspectos legales que regulan la violencia sexual en distintos subsistemas del Derecho Internacional como lo son el Derecho Internacional Humanitario (DIH), el Derecho Penal Internacional (DPI) y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH). Esto con el fin de visualizar cómo a pesar de tener un

---

<sup>16</sup> Banwell, Stacy. Rape and sexual violence in the Democratic Republic of Congo: A case study of gender-based violence, 45-58.

<sup>17</sup> Sánchez Lucumí, Claudia Lorena y Stephanie Oliveros Ortiz, "La reparación integral a las víctimas mujeres: una aproximación a la aplicación del enfoque diferencial de género en el contexto del conflicto armado interno colombiano", 163 y ss.

<sup>18</sup> Segato, Rita Laura. "Las nuevas formas de la guerra y el cuerpo de las mujeres". *Sociedade e Estado*, núm. 2, Vol. 29, (2014): 341-371, 343.

cuerpo normativo internacional para prevenir, investigar y sancionar los delitos de violencia sexual, su aplicación se torna ineficiente.

En tercer lugar, se revisarán los aportes feministas sobre la violencia sexual en conflictos armados, donde el movimiento social y político antiviolación dio el primer paso para considerar la violencia sexual como tema principal en las agendas activistas. Se abordará cómo este movimiento ha repercutido en Latinoamérica, logrando la aplicación de nuevos enfoques para abordar la violencia sexual como lo es el enfoque de género en la legislación de países de la región.

En cuarto lugar, se analizarán escenarios políticos donde la violencia sexual también ha sido abordada desde perspectivas de género que instan a considerar a las mujeres como sujetos de derechos y políticos en pleno ejercicio. Sin embargo, se quedan en el escenario escrito sin tener herramientas que lo lleven a la materialización en realidades propias de las mujeres que han sufrido por comisión de actos de VS.

## **1.1. Hacia una conceptualización de la violencia sexual en conflictos armados**

Uno de los componentes dentro escenarios de violencia en los conflictos armados involucra a las mujeres las cuales son víctimas frecuentes de estos actos de VS al considerarse sus cuerpos como armas de guerra<sup>19</sup>. En ese entendido, espacios con diversas modalidades de intimidación, entre muchos otros, puede enmarcarse en lo que se conoce en el ámbito jurídico como VS. Algunas conductas descritas por tratados internacionales como el Estatuto de Roma, describen como “violaciones, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de gravedad comparable”<sup>20</sup>, pueden llegar a materializarse dentro de estos escenarios generando unos

---

<sup>19</sup> Al respecto de las mujeres como arma de guerra puede consultarse: Sierra Acero, Aura María, y Linares Ardila, Karen Lorena. *Ya nos cansamos de callar: VS contra la mujer como arma de guerra del paramilitarismo en la región de los Montes de María*. Universidad Pedagógica Nacional, 2014.

<sup>20</sup> Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, de 17 de julio de 1998, (ONU A/CONF.183/9), [https://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome\\_statute\(s\).pdf](https://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf) Art. 7, literal g. Al respecto varios autores han retomado la conformación de esta tipología refiriéndose a su clasificación como delito de Lesa Humanidad. Puede consultarse: Ambos, Kai, y Oscar Julián Guerrero. *El Estatuto de Roma: de la Corte Penal Internacional*. 1.ª ed. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 1999; Collantes, Jorge Luis. "La Corte Penal Internacional. El impacto del Estatuto de Roma en la jurisdicción sobre crímenes

perjuicios para las mujeres que directamente se ven afectadas o sus familias según las circunstancias.

Son estos escenarios los que permiten constatar cómo la violencia sexual hasta el siglo XIX es entendida como una combinación de impulsos biológicos para la liberación sexual de los hombres del estrés innato y el caos experimentado durante y después del combate dentro de los conflictos armados<sup>21</sup>. Sin embargo, autoras como Brownmiller sitúan la violencia sexual como un proceso consciente de intimidación mediante el cual todos los hombres mantienen a todas las mujeres en un estado de temor<sup>22</sup>.

Los conflictos armados y las zonas de conflicto -los primeros definidos como aquellos escenarios donde el uso de la fuerza o violencia armada se prolonga en el tiempo, en el cual las partes tienen una estructura que indica un nivel de organización, y sus efectos tienen un nivel de hostilidad que afecta a sus nacionales y a la comunidad internacional<sup>23</sup>, y las segundas entendidas como “situaciones de conflicto armado masivo o de violencia intergrupala letal, donde ha habido o no una declaración formal de guerra y donde los actores estatales desempeñan o no un papel de liderazgo en el conflicto”<sup>24</sup>-se

---

internacionales”. *Revista electrónica de Ciencia Penal y Criminología*, núm. 4 (2002); Odio Benito, Elizabeth. "Los derechos humanos de las mujeres, la justicia penal internacional y una perspectiva de género". Ponencia presentada en la novena Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, México, D.F., 10 al 12 de junio de 2004; Tantaleán Odar, Christian Fernando. "Análisis histórico del sistema de administración de justicia en el Perú y su debilidad al afrontar casos de violación sexual de mujeres en conflicto armado interno". *Nous*, núm. ° 9, vol. 7 (2016): 53-67; Villellas, Ana, Pamela Urrutia, Royo, Josep Maria y Villellas, María. "Violencia sexual en conflictos armados". *Quaderns de Construcció de Pau*, núm. 27 (2016): 2-16; Jara Gómez, Ana María. "Terrorismo sexual y garantías de los derechos humanos en áreas de conflicto y post conflicto". *Revista de Ciencias Sociales*, núm. 159 (2018): 93-109; Torrecuadrada García-Lozano, Soledad. "Los avances de la jurisprudencia internacional contra la impunidad de las violaciones en los conflictos armados". *Estudios internacionales*, núm. 190 (2018): 63-84.

<sup>21</sup> Mullins, Christopher W. "We Are Going to Rape You and Taste Tutsi Women" Rape during the 1994 Rwandan Genocide. *The British Journal of Criminology*, núm. 6, vol. 49 (2009): 719-735, 719.

<sup>22</sup> Brownmiller, Susan. *Against our will: Men, women, and rape*. 1 edición, New York: Ballantine Books, 1993.

<sup>23</sup> La Haye, Eve. *War crimes in internal armed conflicts*. Cambridge: Cambridge University Press, 2008, 7.

<sup>24</sup> Heineman, Elizabeth D, ed. *Sexual violence in conflict zones: From the ancient world to the era of human rights*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2011, 2. Al respecto se argumenta que: "la violencia sexual se determina como un medio para mandar un mensaje al enemigo, es decir, el cuerpo de las víctimas se convierte en un transmisor en el cual el mensaje debe impregnar a la población de terror y miedo". Linares Ardila, Karen Lorena, y Sterra Acero, Aura María. "Mujeres transgresoras: formación política y organizativa frente a la violencia sexual contra las mujeres en los Montes de María". *Ciencia Política*, núm. 18, vol. 9 (2014): 157-180, 161. Pueden ser consultadas para profundizar otras autoras como: Alexiévich, Svetlana. *La guerra no tiene rostro de mujer*. Debate, 2015; Villa Gómez, Juan David, Toro, Cabanza Restrepo, Laura, Goetz Toro, Camila y Estrada, Análida. "Los dolores que quedan son las libertades que faltan. Construcción política y social del cuerpo de las mujeres en el conflicto armado". *Revista de Psicología Universidad de Antioquía* 8, núm.2, vol.8 (2016), 147-172; Herrera Sánchez, Sonia. "Sin trinchera: La violencia sexual contra las mujeres como arma de guerra". *Sal Terrae*, núm. 105, (2017): 405-

convirtieron en contextos donde el cuerpo de las mujeres es considerado “como territorios a conquistar por los contendientes, donde los motivos por los que las mujeres están en el punto de mira son diversos: sembrar el terror en las comunidades, facilitando imponer el control militar; obligar a la gente a huir de los hogares y así ayudar a conseguir territorio; vengarse de los adversarios; acumular trofeos de guerra y explotarlas como esclavas sexuales”<sup>25</sup>.

Autores como Vigarello, muestran que solo desde el siglo XVII se comienza a percibir vestigios de una conceptualización de la violencia sexual como violación definida como la máxima representación del “mal”, donde se concibe como “práctica que transgrede los límites de la moral de las personas que la sufren, asociadas a delitos contra las buenas costumbres, fornicación, adulterio, sodomía y bestialidad”<sup>26</sup>. En ese caso, al realizar en su línea de tiempo un análisis de la historia de los juicios y de los procedimientos judiciales precisa que la definición de violencia sexual “entremezcla de forma compleja el cuerpo, la mirada, la moral y la violencia”, que cambian de una época a otra, ya que “no se tienen los mismos criterios ni los mismos grados focalizados sobre la condición de los implicados, su prestigio y su vulnerabilidad”<sup>27</sup>.

Sin embargo, lo que no cambia, es la tendencia de victimización de las mujeres consideradas como seres frágiles y sus cuerpos concebidos como meros objetos por la conservación de referentes tradicionales. Todo con el fin de “mantener determinados suplicios, para dejar espacio al ejercicio del terror jurídico, la de mantener una desigualdad entre el hombre y la mujer para proteger a la familia”<sup>28</sup>. Esta problemática expuesta denotó que al existir un sistema que “justifica la dominación sobre la base de una supuesta inferioridad biológica de las mujeres, donde el padre es quien ejerce la jefatura del hogar y establece el orden social dentro de la familia”<sup>29</sup>, comienza a establecer

---

418; Segato, Rita Laura. "Las nuevas formas de la guerra y el cuerpo de las mujeres". *Sociedade e Estado*, núm. 2, Vol. 29, (2014): 341-371, 343; Torres Falcón, Marta. "Entre el silencio y la impunidad: violencia sexual en escenarios de conflicto". *Revista de estudios de género. La ventana*, núm. 41, vol.5 (2015): 73-112; Segato, Rita Laura. *La guerra contra las mujeres*. 1.ª ed. Madrid: Traficantes de sueños, 2016.

<sup>25</sup> Amnistía Internacional, “*Los efectos de las armas en la vida de las mujeres*”, Amnistía Internacional, 2004, 10, <https://www.amnesty.org/es/documents/ACT30/001/2005/es/>

<sup>26</sup> Vigarello, Georges. *Historia de la violación: siglos XVI-XX*. Madrid: Catedra, 1999, 52.

<sup>27</sup> Vigarello, Georges. *Historia de la violación: siglos XVI-XX*, 10.

<sup>28</sup> Vigarello, Georges. *Historia de la violación: siglos XVI-XX*, 178.

<sup>29</sup> Facio, Alda, y Fries, Lorena. "Feminismo, género y patriarcado". *Academia Revista sobre enseñanza del Derecho de Buenos Aires*, núm 6 (2005): 259-294.

parámetros para concebir la violencia sexual como algo más que una simple concepción del mal relatado por Vigarello.

Autoras como Falcón argumentan además que “la vulnerabilidad, la sensación de inseguridad, el hecho mismo, el impacto, las posibilidades de denuncia y por supuesto de castigo al perpetrador (o perpetradores) varían sensiblemente según el sitio en el que ocurra el episodio”<sup>30</sup>; no obstante, en contextos europeos como el descrito por Vigarello y latinoamericanos como el descrito por Falcón, tienden a visibilizar a las mujeres como los objetivos principales de la violencia sexual<sup>31</sup>.

En esa línea, la mirada social de lo corpóreo de sujetos considerados vulnerables conlleva a la estructuración de conductas morales que solidifican las clases sociales universales; lo que trae como consecuencia la categorización de los sujetos que son considerados víctimas de un tipo de violencia como lo es la violencia sexual. Esto en escenarios de conflicto se agrava, tal como lo afirma Falcón, al argumentar que además de ser oprimidas antes del conflicto que les tocó vivir, se sigue perpetuando la dominación ya que “los pueblos conquistadores hicieron de los hombres fuerza de trabajo y de las mujeres objetos de placer y fuerza de trabajo”<sup>32</sup>.

Así, conductas descritas como la de forzar a la mujer a tener relaciones sexuales que impliquen penetración del hombre o los hombres, se vuelven frecuentes cuando existe una cadena vertical de poder que implica la consideración del cuerpo de la mujer como un objeto para lograr generar un daño directo o colateral hacia figuras consagradas como el padre, el esposo, la familia y en el caso de escenarios bélicos, los grupos armados, el Estado o los jefes de las distintas estructuras enfrentadas. En ese entendido, los sujetos a proteger son aquellos que socialmente están posicionados en cierto escalafón que pueden llegar a verse perjudicados por actos considerados atentatorios contra su honra y su moral y no las mujeres que han sido las víctimas directas de actos de VS.

---

<sup>30</sup> Torres Falcón, Marta. “Entre el silencio y la impunidad: violencia sexual en escenarios de conflicto”, 79.

<sup>31</sup> Esta tendencia también es evidenciada en Norteamérica, África y países asiáticos. Al respecto puede consultarse: Leatherman, Janie. “*Sexual violence and armed conflict*”. En *Politics & Gender*. Editado por Hudson, Valerie 548–550. MA: Polity Press. 2011, MacKinnon, Catharine A. “Rape, genocide, and women’s human rights”. En *Genocide and Human Rights*, editado por Mark Lattimer, 133–144. New York: Routledge, 2017; Sharratt, Sara. *Gender, shame and sexual violence: The voices of witnesses and court members at war crimes tribunals*. New York: Routledge, 2016; Smith, Andrea. *Conquest: sexual violence and American Indian genocide*. Carolina del Norte: Duke University Press, 2015; Soh, C. Sarah. *The comfort women: Sexual violence and postcolonial memory in Korea and Japan*. Chicago: University of Chicago Press, 2008; Wood, Elisabeth Jean. “Variation in sexual violence during war.” *Politics & Society*, núm.3, vol. 34 (2006): 307–342.

<sup>32</sup> Torres Falcón, Marta. “Entre el silencio y la impunidad: violencia sexual en escenarios de conflicto”, 87

Con respecto a esto, investigadoras como Lucumí y Oliveros aducen que “el papel ingenuo e inocente de la mujer dentro del conflicto armado encuadra con la idea de feminidad que se ha concebido a lo largo de la historia, la cual guarda relación con el papel protector, dador de vida, pero además con la debilidad de la mujer para realizar actividades que demanden fuerza física”<sup>33</sup>. Asimismo, autoras como Wood exponen la existencia renuente del debate clásico que sitúa a la mujer como instrumento de guerra para debilitar al considerado enemigo, obtener tierras y bienes muebles, satisfacer deseos sexuales y cobrar deudas<sup>34</sup>.

Es ahí cuando se plantea dentro de la conceptualización de la violencia sexual el ideal de “feminidad” con la castidad y la virginidad como uno de los tantos factores detonantes para la violencia sexual, debido a que su efectividad se produce al considerarla como acto de humillación y destrucción, al 'ensuciar' a las mujeres y sus familias, afectando incluso hasta sus relaciones interpersonales futuras<sup>35</sup>.

Sumado a ello, los distintos parámetros ideológicos de cada época también ayudan a configurar el concepto de violencia sexual. Autoras como Recio argumentan que “a veces sirven como justificadores de discursos sobre prácticas extremas de violencia, que no excusan el dolor que éstas han supuesto en sus víctimas”<sup>36</sup>. Es así como relata que, en los escritos literarios, manifestaciones artísticas, mandatos científicos de las ciencias naturales; se infravaloriza a la mujer hasta en la denominación tardía de las partes de su cuerpo relacionadas con su sexo, tomándola como aquel objeto para dañar la honra. Esto lleva a concebir la violencia sexual como un acto con repercusiones solo para aquellos concebidos como sujetos de derechos en pleno ejercicio de éstos, invisibilizando el daño ocasionado a las mujeres (que no eran concebidas como sujetos).

Es a partir de los siglos XVIII y XIX que a través de los aparatos judiciales se comienza a concebir como delito aquellos actos de penetración de las mujeres sin consentimiento, apareciendo también delitos conexos como el secuestro o el ultraje

---

<sup>33</sup> Sánchez Lucumí, Claudia Lorena y Stephanie Oliveros Ortiz. "La reparación integral a las víctimas mujeres: Una aproximación a la aplicación del enfoque diferencial de género en el contexto del conflicto armado colombiano", 72-173.

<sup>34</sup> Wood, Elisabeth Jean. "Armed groups and sexual violence: When is wartime rape rare?". *Politics & Society*, núm. 1, vol. 37. (2009): 131-161, 136.

<sup>35</sup> Wood, Elisabeth Jean. "Armed groups and sexual violence: When is wartime rape rare?", 21.

<sup>36</sup> Tardón Recio, Bárbara. "La violencia sexual: desarrollos feministas, mitos y respuestas normativas globales". Tesis doctoral, Instituto Universitario de Estudios de la Mujer, 2017:40, <https://repositorio.uam.es/handle/10486/680682>.

“dando prioridad a los daños de la víctima sobre el perjuicio causado a sus propietarios”<sup>37</sup>. Sin embargo, hasta finales del siglo XIX seguían considerándose como agresiones a sujetos diversos a las mujeres afectadas. Este hecho llevó a que la violencia sexual en los conflictos diera un giro cuando las mujeres comenzaron a incluir en sus agendas activistas la lucha por cambiar el tratamiento de la violencia sexual en los sistemas legales y políticos, logrando avances sustanciales en la inclusión como sujetos pasivos de las conductas descritas en los códigos penales generando a su vez, adelantos en el campo de la responsabilidad judicial y administrativa.

Pese a lo anterior, la conceptualización seguía siendo incompleta al considerar solo la violación como caso de la violencia sexual. Esta es definida como “la penetración del ano o la vagina con cualquier objeto o parte del cuerpo o de cualquier parte del cuerpo de la víctima o el cuerpo del autor con un órgano, por la fuerza o por amenaza de fuerza o coacción, o aprovechando un entorno coercitivo, o contra una persona incapaz de dar un consentimiento genuino”<sup>38</sup>; siendo solo a partir del siglo XXI extendida de forma más amplia, al ser concebida como una categoría que incluye la violación al igual “que la

---

<sup>37</sup> Vigarello, Georges. *Historia de la violación: siglos XVI-XX*, 386.

<sup>38</sup> Wood, Elisabeth Jean. "Variation in sexual violence during war", 307-342. También puede consultarse: Koos, Carlo. "Sexual violence in armed conflicts: research progress and remaining gaps." *Third World Quarterly*, núm, 9, vol. 38 (2017): 1935-1951.



tortura sexual<sup>39</sup>, la mutilación<sup>40</sup>, la esclavitud sexual<sup>41</sup>, la prostitución forzada<sup>42</sup>, la esterilización forzada<sup>43</sup> y el embarazo forzado<sup>44</sup>. Dada esa cobertura mucho más amplia, la violencia sexual incluye en todos sus actos la falta del consentimiento por parte de la

<sup>39</sup> En cuanto a la tortura sexual los Doctores Inge Lunde y Ortmann Jørgen realizaron un estudio de casos con 283 víctimas de tortura donde identificaron como actos de tortura sexual aquellos cuando se obliga a la víctima a tener contacto sexual con otras víctimas o sus torturadores, o reciben instrucciones de desnudarse o mirar como lo hacen sus compañeros de tortura, o son obligados a mirar como abusan sexualmente de otros torturados, o padecen violencia de formada discriminada en sus partes íntimas de forma instantánea pero que su prolongación perdura en el tiempo. Estos autores en su muestra establecen que son más las mujeres que los hombres los que padecen este tipo de delito. Lunde, I, and J Ortmann. "Prevalence and sequelae of sexual torture". *Lancet*, núm 8710, vol. 336, (1990): 289-91, doi:10.1016/0140-6736(90)91814-q. Al respecto hay una línea de estudios que pueden consultarse: Grisales Rodríguez, Natalia. "Cuerpo, sexualidad y violencia simbólica en la tortura sexual". *Revista de Estudios Sociales*, núm. 54 (2015): 81-92; Palacios, Margarita, y Posocco, Silvia. "War and the politics of sexual violence". En *Introducing the New Sexuality Studies*, editado por Seidman, Steven, Fischer, Nancy y Meeks, Chet, 620-628. Routledge, 2016; Moore, Melinda W., y John R. Barner. "Sexual minorities in conflict zones: A review of the literature" *Aggression and violent behavior*, Vol. 35 (2017): 33-37; Akinsulure Smith, Adeyinka M., and Tracy Chu. "Exploring female genital cutting among survivors of torture." *Journal of immigrant and minority health*, núm.3 Vol. 19, (2017): 769-773.

<sup>40</sup> Debido a la categoría que describe la violencia sexual cuando la mutilación está "asociada a la feminidad" se presentan cortes o daños muy graves en órganos genitales como lo son las vaginas de las mujeres o sus anos. También los daños físicos a "sus senos, nalgas, rostro, entre otros" constituyen lo que es mutilación". López, de Ávila, Ana María, y Barreto Lima, Martonio Mont'Alverne. "Género y Justicia Transicional: la Violencia Contra la Mujer en el Marco de los Conflictos Armados". *Verdade, Justiça e Reparação na America Latina* (2015): 11.

<sup>41</sup> La esclavitud sexual es definida por Bou Franch como aquella que indica "ejercer algún atributo del derecho de propiedad sobre una persona coartando su derecho a la libertad, donde la víctima es sometida a padecer actos sexuales por parte del victimario". Bou- Bou-Franch, Valentín. "El crimen internacional de esclavitud sexual y la práctica de los matrimonios forzados". *Anuario Español de Derecho Internacional*, núm. 31 (2015): 65 y ss, 75.

<sup>42</sup> La prostitución forzada es entendida como "la acción o conjunto de acciones que involucran la obtención por imposición de servicios sexuales o el acceso a través de violación u otras formas de violencia sexual a cambio de las cuales la víctima o generalmente quien la controla recibe remuneración pecunaria". Vivas Barrera, Tania Giovanna, y Pérez Salazar, Bernardo. "Sobre la situación de graves violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario en contra de las mujeres en el conflicto armado colombiano". En *Derechos humanos, paz y posconflicto en Colombia*, Editado por Chávez Hernández, Eduardo et.al: 94 y ss. Bogotá: Universidad Católica de Colombia, 2016.

<sup>43</sup> La esterilización forzada es considerada como una de las vulneraciones a los derechos reproductivos de la mujer debido a que su metodología es invasiva e injustificada. En el caso del Perú, las indígenas fueron sometidas a procesos de esterilización sin que mediara su consentimiento. Puede consultarse al respecto: Patel, Priti. "Forced sterilization of women as discrimination". *Public health reviews*, núm.1, Vol. 38 (2017): 15; Apoorva, Jadhav y Haynes Vala, Emily. "Informed choice and female sterilization in South Asia and Latin America." *Journal of biosocial science*, núm.6, vol. 50 (2018): 823-839.

<sup>44</sup> El embarazo forzado según Copelón al analizar el caso del conflicto armado serbio lo define desde una mirada feminista como "un asalto a la autodeterminación reproductiva de las mujeres; expresa el deseo de marcar la violación y el violador en el cuerpo de la mujer y en la vida de la mujer". Copelon, Rhonda. "Surfacing gender: Re-engraving crimes against women in humanitarian law". *Hastings Women's LJ*, vol.5 (1994): 243. También puede consultarse: Gómez Jara, Ana María. "Human Rights Violations of Vulnerable Groups in Conflict Situations". *Current and Future Developments in Law: The Rights of Minorities: Cultural Groups, Migrants, Displaced Persons and Sexual Identity*. Bentham Science Publishers, vol.2, 2017; Cohen, Dara Kay, Amelia Hoover Green, and Elisabeth Jean Wood. *Wartime Sexual Violence: Misconceptions, Implications, and Ways Forward*. Washington, DC: United States Institute of Peace, 2013. <http://www.tinyurl.com/y32l8y9t>

víctima. Ya en los conflictos armados, las categorías de la violencia sexual varían como se verá a continuación, según el contexto.

### 1.1.1. Concepciones según el contexto

Las líneas contemporáneas de conceptualización de la violencia sexual refieren que hay que considerar diversas causas complementarias a la idea de feminidad para lograr condensar lo que se debe entender por este tipo de violencia<sup>45</sup>. En ese entendido, líneas principales de estudio indican, en primer lugar, que la VS es un fenómeno existente en los conflictos armados; en segundo lugar, ocasionalmente es una estrategia fundamental contra la población civil o el grupo enemigo que tiene como propósito percibir ganancias de guerra para la adquisición de recursos y el poder<sup>46</sup>; y, por último, existen casos aislados que dependen solamente de la voluntad del agresor.

La violencia sexual puede cumplir múltiples funciones en diferentes contextos y en diferentes momentos. Factores detonantes del conflicto tales como la ausencia de inclusión política, ideologías religiosas, raciales o políticas, aspectos geográficos como la naturaleza del territorio, factores institucionales, de presencia estatal, factores estructurales, violencia basada en género; llevan a visibilizar la existencia de relaciones de poder opresivas dentro de estos escenarios que propician la configuración de actos de violencia sexual<sup>47</sup>.

---

<sup>45</sup> En esta línea se encuentra: Wood, Elisabeth Jean. "Armed groups and sexual violence: When is wartime rape rare?", 131-161; Leatherman, Janie. "*Sexual violence and armed conflict*", 548-550; Davies, Sara E., y True, Jacqui. "Reframing conflict-related sexual and gender-based violence: Bringing gender analysis back in". *Security Dialogue*, núm. 6, Vol.46 (2015): 495-512, Boesten, Jelke. "Of exceptions and continuities: theory and methodology in research on conflict-related sexual violence". *International Feminist Journal of Politics*, núm.4, Vol.16 (2017): 506-519.

<sup>46</sup> Davies, Sara E., y True, Jacqui. "Reframing conflict-related sexual and gender-based violence: Bringing gender analysis back in", 497.

<sup>47</sup> Al respecto puede consultarse: Henry, Nicola. "Witness to rape: The limits and potential of international war crimes trials for victims of wartime sexual violence". *International Journal of Transitional Justice*, núm.1. vol.3 (2009): 114-134; Kirby, Paul. "How is rape a weapon of war? Feminist International Relations, modes of critical explanation and the study of wartime sexual violence." *European Journal of International Relations* núm 4. vol. 19. (2013): 797-821; Swaine, Aisling. "Beyond strategic rape and between the public and private: Violence against women in armed conflict." *Hum. Rts. Q.* vol, 37 (2015): 755; Spangaro, Jo, et al. "Mechanisms underpinning interventions to reduce sexual violence in armed conflict: A realist-informed systematic review". *Conflict and health*, núm, 9, vol.1 (2015): 19; Fajardo, Arturo, y Valoyes, Valoyes. *Violencia sexual como crimen internacional perpetrado por las FARC*. Colombia: Editorial Planeta Colombiana S. A, 2015; Ríos, Jerónimo y Brocate, Roberto. "Violencia sexual

Al respecto, Leatherman afirma que “las mujeres y niñas se convirtieron en objetivos de la violencia sexual, porque la violencia sobre ellas es construida socialmente como un principio por el cual los hombres pueden restablecer su pérdida de hegemonía”, al estar inmersos en guerras que “destruyen las instituciones políticas, sociales y económicas, de las cuales dependen las personas para conseguir empleo, estatus y prestigio en la sociedad”<sup>48</sup>. Explica Leatherman, para exponer de dónde nace la violencia sexual, que contextos como la guerra, traen como consecuencia, que al tratar de mantener o generar un cambio en su posición de poder, se llegue a la hipermasculinidad entendida como aquella que se “centra en las excesivas formas de fortaleza y despliega violencia para mantener o reafirmar su dominio y control en las áreas limitadas disponibles bajo circunstancias extremas”<sup>49</sup>. En consecuencia, para perpetuar ese dominio sobre lo que puede ser dominado, los actos de violencia sexual pueden llegar a ser frecuentes como una forma de reivindicación de la masculinidad<sup>50</sup>.

En ese entendido, “el ocultamiento de la violencia sexual, tanto individual como social, buscaría proteger este honor masculino, puesto que el reconocimiento público de la violencia sexual conlleva reconocer que han fracasado en su tarea de protectores”<sup>51</sup>. Estas motivaciones, que convierten a individuos que hacen parte de los grupos enfrentados en el conflicto, en violadores, y los hombres que no pudieron proteger a sus mujeres, en incapaces, convierten la violencia sexual en un modo efectivo de conseguir objetivos para sí mismos y para sus grupos, aprovechando las diferencias de género que se incrementan dentro de estos escenarios.

Davies, por su parte, refiere al respecto que la violencia sexual se ha venido estudiando en situaciones de conflicto, considerando categorías como el género de forma aislada, omitiéndola como factor de riesgo que repercute en las dinámicas de guerra. Destaca, por ejemplo, los estudios que ilustran las líneas contemporáneas que defienden el conflicto y la estrategia como indicadores causales de la VS, criticando la falta de

---

como crimen de lesa humanidad: los casos de Guatemala y Perú”. *Revista CIDOB d’Afers Internacionals*, vol. 117 (2017): 79-100.

<sup>48</sup> Leatherman, Janie. “*Sexual violence and armed conflict*”, 34.

<sup>49</sup> Leatherman, Janie. “*Sexual violence and armed conflict*”, 34.

<sup>50</sup> Al respecto puede consultarse: Baaz, María Eriksson, y Stern, María. “Why do soldiers rape? Masculinity, violence, and sexuality in the armed forces in the Congo (DRC)”. *International studies quarterly* núm. 2, vol.53 (2009): 495-518.

<sup>51</sup> Villellas Ariño, María. “Violencia sexual en conflictos armados”. *Quaderns de Construcció de Pau*, núm.15 (2010): 1-17, 9. [https://escolapau.uab.cat/img/qcp/violencia\\_sexual\\_guerra.pdf](https://escolapau.uab.cat/img/qcp/violencia_sexual_guerra.pdf)

enfoque de género, ya que argumenta que la eficacia de las estrategias de los grupos armados se debe a que la violencia sexual sirve para lograr una cohesión del grupo por el fortalecimiento de las relaciones de poder desiguales entre los géneros en ese grupo y la sociedad<sup>52</sup>.

Es a partir de los años 90, donde estudios como los descritos comienzan a ser visibles, destacando el papel de la mujer como un arma de guerra al resaltar su rol como instrumento bélico estratégico<sup>53</sup>.

#### **1.1.1.1. De la violación como evento ineludible en la guerra a la mujer como arma de guerra**

Aceptar la violencia sexual como algo implícito del conflicto es una tesis respaldada por aquellos autores que centran su debate en la impunidad de delitos contra la humanidad en estos escenarios, al argumentar que el silencio de las víctimas, las falencias probatorias y la falta de garantías para la prevención de la violencia sexual que llevan a la impunidad de estos delitos, son los que la convierten en una práctica efectiva e infalible cuando se quiere lograr atacar al enemigo<sup>54</sup>. La dinámica del conflicto armado requiere la planeación de directrices específicas para la obtención de la victoria de una de las partes en conflicto, siendo utilizada como “instrumento de terror colectivo e individual presente en un elevado número de contextos afectados por la violencia”<sup>55</sup>. Así, al contextualizar la violación dentro del rango de estructuras sociales y políticas que dan forma a la guerra y al conflicto, la convierten en un resultado casi inevitable de la violencia promulgada por una parte contra otra<sup>56</sup>.

Al respecto, Eboe habla acerca de “la teoría de la violencia sexual como práctica inevitable en los conflictos armados”<sup>57</sup>, afirmando que su validez radica en el beneficio

---

<sup>52</sup> Davies, Sara E., y True, Jacqui. “Reframing conflict-related sexual and gender-based violence: Bringing gender analysis back in”, 497.

<sup>53</sup> Skjelsbaek, Inger. “Sexual violence and war: Mapping out a complex relationship”. *European journal of international relations* núm. 2, vol.7 (2001): 211-237.

<sup>54</sup> Al respecto puede verse: Stark, Lindsay, y Wessells, Mike. “Sexual violence as a weapon of war”. *Jama*, núm.7, vol.308 (2012): 677-678; Crawford, Kerry F. *Wartime sexual violence: From silence to condemnation of a weapon of war*. Georgetown University Press, 2017; Wood, Elisabeth Jean. “Rape as a Practice of War: Toward a Typology of Political Violence”. *Politics & Society*, núm 4, vol. 46 (2018): 513-537.

<sup>55</sup> Villellas Ariño, María. “Violencia sexual en conflictos armados, 10.

<sup>56</sup> Buss, Doris E. “Rethinking ‘rape as a weapon of war’”. *Feminist legal studies*, núm.2, vol.17 (2009): 160.

<sup>57</sup> Eboe-Osuji, Chike. *International law and sexual violence in armed conflicts*. M. Nijhoff Publishers, 2012.

sexual del guerrero por ostentar una condición de soldado dentro de la estructura del conflicto, el cual conlleva a determinar a las mujeres como uno de los botines de guerra, por ser posesiones valiosas para el enemigo enfrentado, desatando a su vez, no solamente caos entre los miembros de cada grupo, sino daño a la población de la cual es parte la mujer violentada.

En ese campo de ideas, Bülent y Bagge dicen que la violencia sexual es tomada como parte inevitable de la guerra debido a la concepción simbólica que se tiene sobre ella; equivalente a una marca de soberanía estampada directamente en el cuerpo, con el objetivo de mantener o tomar un territorio<sup>58</sup>. Estas características denotan que la VS se convierte en una constante en los conflictos armados, siendo las mujeres el botín de guerra que más satisfacción genera entre los combatientes, por las creencias implantadas a través de construcciones sociales ligadas a la feminidad, el poder, el territorio y la belleza. En estas construcciones, los militares estatales y los grupos rebeldes o las milicias son los perpetradores más comunes; los protagonistas a la hora de la comisión del delito, siendo en algunos casos, parte de las estrategias territoriales de grupo.

Algunos autores con sus investigaciones de campo advierten “que, si bien hay una incidencia muy alta de violencia sexual durante los conflictos armados, no todos los soldados violan. De hecho, no hay evidencia que sugiera que la mayoría lo haga”<sup>59</sup>. Esto es apoyado por Wood, cuyos estudios logran demostrar mediante una comparación de conflictos armados que, en casos como el conflicto de El Salvador, había ausencia de violencia sexual por parte de los insurgentes al igual que grupos los armados en Kwazulu Natal, Sudáfrica<sup>60</sup>. Así mismo, estudios como los de Cohen y Nordås lograron determinar que entre 129 conflictos activos y los 625 actores armados que participaron en las hostilidades entre el año 1989 hasta el 2009, 76 países presentaron como delito de alta incidencia los de violencia sexual, concluyendo que “las violaciones sexuales son comunes, pero no ubicuas”<sup>61</sup>.

<sup>58</sup> Diken, Bülent, and Carsten Bagge Laustsen. "Becoming abject: Rape as a weapon of war." *Body & Society*, núm.1, vol.11 (2005): 111-128.

<sup>59</sup> Eboe-Osuji, Chile. *International law and sexual violence in armed conflicts*, 95.

<sup>60</sup> Wood, Elisabeth Jean. "Armed groups and sexual violence: When is wartime rape rare, 132.

<sup>61</sup> Cohen, Dara Kay, and Ragnhild Nordas. "Sexual violence in armed conflict: Introducing the SVAC dataset, 1989–2009". *Journal of Peace Research*, núm 3, vol.51(2014): 418-428..

Estas demostraciones llevaron a preguntarse si el patrón de frecuencia tenía como base a las mujeres o a la violencia sexual como categoría de análisis. Debido a las evidencias y al análisis de frecuencias, se pasa de argumentar que la violencia sexual es algo inevitable en los conflictos a centrarse en la mujer como sujeto principal de ataque de la violencia sexual en espacios bélicos.

La idea de que existe un “doble control sobre el cuerpo de las mujeres”, uno social y uno netamente impuesto por el enemigo, permiten plantear tácticas de no impunidad cuando este fenómeno social se desencadene contra las mujeres. Es así como Farwell argumenta que “la aceptación de la violación como un aspecto inevitable de los conflictos armados puede llegar entre otras cosas, a condonarlo y por lo tanto a establecerse como una estrategia abierta que utiliza la violación como arma de guerra”<sup>62</sup>.

Contextos bélicos como el de Sudan, Rwanda, Bosnia, República Democrática del Congo, o Colombia, entre otros, presentan ante el mundo altos índices de violencia sexual, especialmente contra las mujeres. Es así como las ideas defendidas por Villegas sobre la corporalidad de la mujer evidencian que el contexto patriarcal de los conflictos armados conlleva a perseguir como objetivos: “1) sometimiento de la víctima mediante el terror que provocan los abusos sexuales 2) y transmitir un mensaje de humillación y poder al enemigo”<sup>63</sup>. En ese entendido, la violencia sexual debe entenderse a partir de “la consideración del cuerpo de las mujeres como una propiedad social y no individual de cada mujer”<sup>64</sup>. De acuerdo con esto, la VS es un arma de guerra, y no simplemente un subproducto ya que aterroriza a la población y la obliga a huir de sus territorios, permitiendo que los combatientes ocupen y obtengan el control de un área previamente habitada por la población civil<sup>65</sup>.

Ejemplos como los de Yugoslavia y Ruanda presentan paradigmas donde “un nuevo tipo de accionar bélico propició que la agresión sexual pasara a ocupar una posición central como arma de guerra productora de crueldad y letalidad, dentro de una forma de daño que es simultáneamente material y moral”<sup>66</sup>. Todo lo argumentado sirve para resaltar

---

<sup>62</sup> Farwell, Nancy. “War rape: New conceptualizations and responses”. *Affilia*, núm. 4, vol.19 (2004): 401

<sup>63</sup> Villellas Ariño, María. “Violencia sexual en conflictos armados”, 7 y ss.

<sup>64</sup> Villellas Ariño, María. “Violencia sexual en conflictos armados”, 7.

<sup>65</sup> Carlsen, Erika. “Rape and war in the Democratic Republic of the Congo”. *Peace Review*, núm. 4, vol. (2009): 474-483.

<sup>66</sup> Segato, Rita Laura. “Las nuevas formas de la guerra y el cuerpo de las mujeres”, 341.

que, los autores y autoras citadas logran demostrar que la violencia sexual no es algo implícito de los conflictos armados, pero lo que sí es un patrón de violencia es que son las mujeres las víctimas más frecuentes en todos los conflictos en los que hay casos de violencia sexual.

Este patrón permite analizar cómo los cuerpos de las mujeres cuando son considerados armas de guerra, mantienen un estatus de “instrumentos para hacer daño”, lo cual impide que sean consideradas como sujetos de derecho con capacidad de transformación de su entorno. En ese sentido, a la luz de este estudio, la aceptación de teorías que conciben la violación como evento ineludible en la guerra o la mujer como arma de guerra, solo reproduce un efecto negativo que permite que se desdibuje la figura de sujeto de derechos al estar ligada a patrones de violencia y estigmatización por el hecho de ser mujer.

Lo anterior lleva a pensar que la categorización de las mujeres como instrumentos bélicos implica que el estatus de sujeto de derecho sea ignorado convirtiendo a las mujeres que viven en territorios de conflicto armado en potenciales víctimas por el hecho de ser mujeres. En ese caso, se considera que la VS según el contexto, vislumbra problemas que han sido abordados con enfoques clásicos que no son suficientes para plantear soluciones para las víctimas de VS.

#### **1.1.1.2. Violencia sexual como parte de estrategias en la guerra**

Las estrategias en la guerra consistentes en la planeación de directrices generales o específicas para alcanzar ventajas en el campo de batalla, recompensar a las tropas, lograr control territorial, entre otras, utilizan la violencia sexual para que sus ofensivas sean más efectivas y letales contra sus oponentes.

En ese camino, los componentes que se emplean para trazarlas determinan las modalidades de ataque, la población a la cual va dirigida, el periodo en el que se empleará, la región determinada en la que se actuará y la frecuencia con que se repetirán los actos de violencia sexual según los objetivos trazados y el contexto escogido<sup>67</sup>.

---

<sup>67</sup> Al respecto puede consultarse: Davies, Sara E., y True, Jacqui. “Reframing conflict-related sexual and gender-based violence: Bringing gender analysis back in”, 507.

Las evaluaciones de distintas estrategias de los grupos armados en escenarios bélicos llevan a considerar que las dinámicas de guerra y los contextos en que se desarrollan conforman situaciones en las que los actos que agreden la integridad sexual de las personas se vuelven parte del sistema del conflicto, siendo las mujeres víctimas habituales.

Al respecto, Segato afirma que, basados en una pedagogía de la crueldad, se ha deshumanizado al militar como parte de la estrategia de reproducción del sistema, donde las mujeres están ligadas a la teoría de la territorialidad a través de sus cuerpos<sup>68</sup>. En ese entendido, la autora concibe la violencia sexual como estrategia fundamental de los grupos armados la cual se materializa mediante el saqueo, lo que permite la adquisición de recursos, tierra y poder<sup>69</sup>.

Así, el reclutamiento -entendido como la aceptación del llamado voluntario o coercitivo de un grupo armado para recibir, entre otras cosas, adoctrinamiento el cual implica la aceptación tácita de VS por parte de todos protagonistas de los ilícitos- o códigos morales dentro de los grupos armados, entre otras razones, llevan consigo la misión de enseñar o direccionar al personal que hace parte del grupo a cumplir con los ideales de camaradería o compañerismo, que, en el caso de actos de violencia sexual, son consentidos, omitidos y apoyados como parte de la dinámica del conflicto.

Del mismo modo, en Colombia se logró demostrar cómo el grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia AUC, grupo rebelde que ayudó a las fuerzas militares en operaciones bélicas contra otros grupos armados ilegales, estableció patrones estratégicos de violencia sexual para, en primer lugar “reforzar la concepción de la mujer como una extensión del hombre” y en segundo lugar con “la vejación y el castigo al cuerpo de las mujeres como forma de exterminio y desarraigo de comunidades”<sup>70</sup>. En este caso, la forma de materializar la estrategia consistió en actos de estigmatización de las

---

<sup>68</sup> Segato, Rita Laura. “Las nuevas formas de la guerra y el cuerpo de las mujeres”, 345.

<sup>69</sup> Segato, Rita Laura. “Las nuevas formas de la guerra y el cuerpo de las mujeres”, 447 y ss.

<sup>70</sup> Montañez, Anyi Viviana Castelblanco, and Angélica María Rodríguez Garzón. "El uso de la violencia sexual por parte de los paramilitares en el Caribe Colombiano. Estrategias de expansión y consolidación de la " sociedad del buen orden". " *Ciudad paz-andó* 5.2 (2012): 40.



mujeres a través de “la consolidación de zonas autónomas bajo el mando de un cabecilla paramilitar adscrito a un mando superior que conocía el accionar de sus subalternos”<sup>71</sup>.

Pero esto no solo sucede en casos de grupos armados que se encuentran en la ilegalidad sino también con los grupos estatales. Casos como el de Sudán, demuestran como por razones étnicas soldados Dinkas violaron a las mujeres de la etnia Nuer, como estrategia de cohesión del grupo por razones étnicas, religiosas, políticas y de género<sup>72</sup>.

Casos como los mencionados, permiten el análisis de la estrategia de cohesión del grupo como forma eficaz gracias a las relaciones desiguales de poder entre los géneros en ese grupo y la sociedad<sup>73</sup>. Davies, por ejemplo, relata que las mujeres se ven afectadas por las normas de género construidas social y culturalmente, y por la distribución que se da dentro del grupo armado. Es de esa forma que mujeres que pertenecen a estos grupos declaran cómo sufren la violencia sexual por parte de los enemigos y hasta de sus propios miembros de grupo.

Esto se presenta porque los rasgos de feminidad no desaparecen en los campos de batalla y las mujeres son consideradas dentro de la estructura delictiva seres vulnerables propensos a sufrir violaciones, tocamientos sin consentimiento, actos que impliquen tortura, entre otros. Estas estrategias están dirigidas a quebrantar, entre otras cosas, la moral de los grupos contrarios organizados que ostentan rangos con poder de mando dentro de sus grupos.

En ese entendido, la violación es una eficaz estrategia de guerra, particularmente de limpieza étnica y de control territorial, una atrocidad que se presenta en conjunto con otras tipificadas como delitos sistemáticos y generalizados. Sin embargo, Wood advierte que existe variación de conflictos donde las cadenas de mando en cabeza de los líderes ya sean militares o subversivos pueden tomar decisiones explícitas para prohibir o para promover la violencia sexual de diferentes formas, contra grupos particulares, así como

---

<sup>71</sup> Montañez, Anyi Viviana Castelblanco, and Angélica María Rodríguez Garzón. "El uso de la violencia sexual por parte de los paramilitares en el Caribe Colombiano. Estrategias de expansión y consolidación de la" sociedad del buen orden". *Ciudad paz-ando* 5.2 (2012): 37-52.

<sup>72</sup> Davies, Sara E., y True, Jacqui. "Reframing conflict-related sexual and gender-based violence: Bringing gender analysis back in", 501.

<sup>73</sup> Davies, Sara E., y True, Jacqui. "Reframing conflict-related sexual and gender-based violence: Bringing gender analysis back in", 507.

pueden decidir tolerar su ocurrencia sin una decisión explícita o formal a sus tropas<sup>74</sup>. Es en esos casos donde la violencia sexual sale de las órbitas estratégicas para pasar a ser examinado como patrón fuera de la planificación, fuera de la estrategia.

### **1.1.1.3. Violaciones sexuales fuera de la estrategia**

El oportunismo en los conflictos armados proviene de la concepción de la violencia sexual como “un delito de oportunidad” que se comete frecuentemente por hombres armados, complaciendo sus deseos sexuales bajo la salvaguarda de pertenecer a un grupo armado<sup>75</sup>. Los actos que transgreden a las mujeres en su integridad física son perpetrados por voluntad del victimario, en ocasión de oportunidades cuando existe proximidad con la población civil. Autores como Eboe, explican “la teoría del oportunismo en los conflictos armados” como aquella donde la posición de poder individual se aprovecha para perseguir intereses particulares que repercuten en sujetos que se encuentran en una posición neutra<sup>76</sup>. Esta afecta con mayor frecuencia a la población civil debido a la proximidad de los sujetos con sus núcleos vivenciales.

La retribución económica es una de las principales causas de la violencia sexual generalizada durante el conflicto armado debido a “la relación entre la violencia sexual contra las mujeres y la asignación de recursos”<sup>77</sup>. Carlsen, logra establecer que en casos como el presentado en República Democrática del Congo, los combatientes son sometidos a condiciones económicas precarias que incitan al saqueo durante las redadas y las operaciones posteriores al combate, aprovechando las relaciones de poder desiguales entre mujeres y hombres. Si bien son integrantes de las fuerzas militares del país, su sueldo como servidores no les alcanza siquiera para tener un buen servicio médico. Al respecto, expone este autor que “las mujeres y niñas fueron sometidas a tratos inhumanos

<sup>74</sup> Wood, Elisabeth Jean. "Variation in sexual violence during war", 137.

<sup>75</sup> Eboe-Osuji, Chile. *International law and sexual violence in armed conflicts*, 81. Al respecto Noah Harari argumenta que los individuos sienten atracciones por otros individuos de manera natural pero la racionalización de los sentimientos nos hace actuar acorde a la cooperación en grupo. Esto hace que la violencia sexual no se convierta en algo planeado por el individuo sino algo producto de la causalidad química. En ese sentido dice que “los sentimientos de atracción sexual surgen cuando otros algoritmos bioquímicos calculan que un individuo cercano ofrece una posibilidad elevada de apareamiento exitoso, de vinculación social o de otro objetivo aislado”. Harari, Yuval Noah. *Sapiens. De animales a dioses: Una breve historia de la humanidad*. Debate, 2014: 140.

<sup>76</sup> Eboe-Osuji, Chile. *International law and sexual violence in armed conflicts*, 82.

<sup>77</sup> Carlsen, Erika. “Rape and war in the Democratic Republic of the Congo”, 474-483.

y degradantes como cortes en los senos, clítoris y labios vaginales con machetes y cuchillas de afeitar, por cosas materiales”<sup>78</sup>. Igualmente, en el mismo caso, García expone que “muchas mujeres han optado por no volver a sus aldeas, por la vergüenza y el miedo al repudio de sus comunidades ya que con el acto o los actos de violencia sexual se producen una pérdida de vínculos sociales que les genera exclusión, pérdida de tierras y empleo”<sup>79</sup>.

Cuando la estructura operacional de los grupos armados supera la capacidad de los jefes de manejar su propio escuadrón de combate, la limitación de los ataques de violencia sexual de los individuos que se encuentran en los bajos mandos de las estructuras, se ve menguada. Es cuando falla lo que Hoover denomina “el control del comandante”, que consiste en construir una fuerza de combate capaz de lograr una forma de violencia eficaz y mordaz y mantener el control sobre el nivel, la forma y la orientación de la violencia<sup>80</sup>.

Se observa que cuando existen grupos pequeños con cierta autonomía en el mando, se rompe la jerarquía para hacer cumplir las decisiones al no tener contacto constante con la tropa ni fomentar los lazos de superioridad y camaradería del grupo armado. Al respecto, Wood aduce que el resultado de que fluya poca información sobre las prácticas de la unidad hacia los superiores jerárquicos limita las oportunidades de castigar las infracciones cometidas por los subordinados<sup>81</sup>.

Los individuos encuentran la violencia sexual como un instrumento utilizado para lograr otros objetivos tangenciales, como toma de tierras o recursos para sí mismos<sup>82</sup>. Del mismo modo, los victimarios pueden actuar impulsados por motivos que emergen de agravios interpersonales preexistentes. En ese escenario, los actos de violencia sexual no son aleatorios sino premeditados, con el propósito de infligir daño a las mujeres por disputas sobre cuestiones netamente personales.

---

<sup>78</sup> Carlsen, Erika. “Rape and war in the Democratic Republic of the Congo”, 474-483.

<sup>79</sup> García, Mingo, Elisa. “Cuando los cuerpos hablan. La corporalidad en las narraciones sobre la violencia sexual en las guerras de la República Democrática del Congo”. *Disparidades. Revista de Antropología*, núm 1, vol. 70 (2015): 165.

<sup>80</sup> Hoover Green, Amelia. “The commander’s dilemma: Creating and controlling armed group violence” *Journal of Peace Research*, núm.5, vol.53 (2016): 619-632.

<sup>81</sup> Wood, Elisabeth Jean. “Variation in sexual violence during war”, 139.

<sup>82</sup> Wood, Elisabeth Jean. “Variation in sexual violence during war”, 140.

Contrario a este pensamiento, MacKinnon argumenta que, al mantener dominio masculino, la violación no es ni aleatoria ni individual, sino más bien sistemática y basada en grupos, ya que está determinada por la distribución del poder en la sociedad<sup>83</sup>. En ese caso, las motivaciones personales o los objetivos tangenciales son desestimados, al ser los ideales de las estructuras que oprimen a las mujeres los que constriñen a los individuos para que cometan actos de violencia sexual.

Lo argumentado por la autora, permite reflexionar acerca de las causas y sus efectos, no solo para identificar y caracterizar cada una de ellas con el ánimo de erradicarlas o por lo menos mitigarlas, sino para comprender su origen. Esto ayudaría a crear herramientas que no solo nos muestren que existe el problema sino cómo se puede solucionar sin el riesgo de que vuelva a repetirse.

Por lo tanto, si bien los estudios referidos en este acápite apuntan a identificar situaciones aleatorias que producen VS, no ofrecen alternativas claras para prevenir la violencia sexual en los conflictos. Esto conlleva a reconocer que la variedad de contextos incita a descartar las teorías generalizadoras que ponen al descubierto las mismas causas, los mismos efectos y las mismas soluciones para la violencia sexual. Por ende, son los contextos los que llevan a las investigadoras a considerar nuevos enfoques para abordar la VS en los conflictos armados debido a que la realidad dentro del fenómeno demuestra variedad de estrategias, motivaciones y concepciones, que ocasionan el repensar de las políticas efectivas para ofrecer a sus víctimas así como la transformación social.

### **1.1.2. Concepciones feministas sobre la violencia sexual en conflictos armados**

Queriendo dar soluciones a las problemáticas que se despliegan de la VS y el espíritu de erradicación de este fenómeno que afecta principalmente a las mujeres, se destacan las concepciones que han construido los movimientos feministas para resaltar la importancia de una mirada distinta que cree y transforme la situación de las mujeres en los conflictos armados. Es así como estos propósitos se presentan a lo largo de la historia, tal

---

<sup>83</sup> Mackinnon, Catherine A. "The ICTR's Legacy on Sexual Violence". *New Eng. J. Int'l & Comp. L.*, núm. 2, vol. 14. (2008): 211-220.

como lo argumenta Posada cuando dice que “la lucha pacifista de las mujeres se retrotrae ya a la Primera Guerra Mundial, se reafirma previamente a la Segunda Gran Guerra y se ha mantenido después de ésta hasta la actualidad”<sup>84</sup>.

La relación existente entre el género y el conflicto armado fue uno de los puntos estudiados por el feminismo al notar que los trabajos clásicos sobre la materia centraban su atención en las estrategias militares como causa de la VS destacando cómo los victimarios cometían, a través de planes orquestados, actos contra la integridad física y psíquica de la mujer<sup>85</sup>. Estos estudios olvidaban que VS no es un subproducto de la guerra sino un elemento central de la estructura, con tendencia violenta, que convierte a las mujeres en sujetos propensos a sufrirla.

Autoras como McNickle argumentan que, desde la perspectiva feminista, la violencia sexual es un resultado directo de la socialización de roles diferenciales de nuestra cultura y la estratificación sexual<sup>86</sup>. Así explica cómo las nociones tradicionales sobre los roles sexuales se consideran la base de las actitudes estereotipadas sobre la violación. En esa misma línea, Mackinnon argumenta cómo la influencia de la sexualidad en las jerarquías de poder consolidadas en la sociedad legitima el uso de la fuerza y la violencia que vuelven permisivas y normalizadas conductas como el acoso sexual, la violación y la pornografía<sup>87</sup>.

En todo caso, las diferentes diversificaciones dentro del feminismo, si bien no contemplan una única fórmula o enfoque para abordar la violencia sexual dentro del conflicto armado, permiten apreciar, en el desarrollo histórico de este movimiento, cómo este tema ha pasado de ser un simple ítem tangencial a uno principal en el que se emplean estrategias sociales y políticas para propender hacia su erradicación.

En este sentido, movimientos feministas han logrado no solo cambios sociales sino también legislativos en pro de que los sistemas legales y las políticas públicas

---

<sup>84</sup> Posada Kubissa, Luisa. “Feminismo y guerra. A propósito de Judith Butler”. *ISEGORÍA. Revista de Filosofía Moral y Política*, núm. 56, enero-junio, 2017:129.

<sup>85</sup> Baaz, María Eriksson y Stern, Maria. *Sexual violence as a weapon of war?: Perceptions, prescriptions, problems in the Congo and beyond*. Zed Books Ltd., 2013.

<sup>86</sup> McNickle Rose, Vicki, “Rape as a social problem: A byproduct of the feminist movement”. *Social Problems*, núm.1, vol. 25 (1977): 75-89.

<sup>87</sup> Mackinnon, Catherine A. “Sexuality, pornography, and method: Pleasure under Patriarchy”. *Ethics*, núm.2, vol. 99 (1989): 314-346.

incluyan a las mujeres en la reestructuración de los sistemas opresivos estatales teniendo como uno de sus efectos la reparación.

En ese camino, el feminismo ha venido enriqueciendo el debate acerca de por qué la violencia sexual se ha abordado desde perspectivas jurídicas, sociológicas, antropológicas, entre muchas otras; estudiando siempre las mismas categorías como la estrategia, el territorio, la pena, la prevención, la culpabilidad, etc., sin tomar en consideración aquellas que lo abordan desde diversas categorías analíticas como el género y/o las vivencias de las mismas víctimas con una mirada feminista<sup>88</sup>. Estos estudios clásicos, “crean la falsa impresión de que las mujeres se han limitado a ser víctimas, que nunca han protestado con éxito, y que no pueden ser agentes sociales eficaces a favor de sí mismas o de otros”<sup>89</sup>, y giran en torno a la concepción de la víctima como un sujeto potencialmente violable y silenciado<sup>90</sup>.

Es así como el feminismo -entendido como “la teoría y práctica política articulada por mujeres que tras analizar la realidad en la que viven toman conciencia de las discriminaciones que sufre (sic) por la única razón de ser mujeres y deciden organizarse para acabar con ellas”<sup>91</sup>- ha señalado la necesidad de tomar como eje principal de investigación a las mujeres -como sujetos políticos- y sus testimonios de violencia sexual, sin tergiversarlos, ni silenciarlos<sup>92</sup>.

Esto va en concordancia con la idea de que el concepto de género y su relación con el rol de la mujer en escenarios bélicos “parte desde una construcción de ideas y aspectos que socialmente determinan opiniones, roles y funciones sobre los cuerpos, es decir, determina masculinidades y feminidades sobre cuerpos que se diferencian sexualmente para establecer trabajos o funciones que políticamente determinan espacios y lugares públicos o privados para los géneros”<sup>93</sup>. El sexo y la construcción social que hay alrededor de él, encaminaron a las feministas a relacionar el patriarcado -entendido como una forma de organización política que distribuía el poder de manera desigual entre

---

<sup>88</sup> Valcárcel, Amelia. *Feminismo en el mundo global*. Cátedra, 2013.

<sup>89</sup> Harding, Sandra. *Ciencia y feminismo*. Morata, 1996, 4

<sup>90</sup> Robson, Kathryn. “The subject of rape: Feminist discourses on rape and violability in contemporary France”. *French Cultural Studies*, núm 1, vol. 26 (2015): 45-55.

<sup>91</sup> Varela, Nuria. *Feminismo para principiantes*. Ediciones Books, 2014, 14.

<sup>92</sup> Robson, Kathryn. “The subject of rape: Feminist discourses on rape and violability in contemporary France”, 45 y ss.

<sup>93</sup> Hernández Acosta, Cindy Lorena. “Violencia basada en el género y guerra: mujeres, violencia sexual, desplazamiento forzado y restitución de tierras en el departamento del Magdalena entre 1999 a 2012”. *Criterios*, núm.2, vol. 8 (2015), 213.

hombres y mujeres en detrimento de éstas”<sup>94</sup>- con la violencia contra las mujeres, en especial la VS, al existir una jerarquía de sujetos masculinizados debido al control que tienen sobre “los recursos de la sociedad y sobre las mujeres”.<sup>95</sup>

Autoras como CONTRERAS & CABALLERO argumentan que en las guerras se puede observar cómo el contexto hostil “facilita relaciones desiguales de poder entre los géneros, en donde la mujer se encuentra en situación de desventaja por haber internalizado las sensaciones de debilidad y vulnerabilidad propias del constructo social de la feminidad, pues al tiempo que los valores de la masculinidad son dominantes, fortalecen las representaciones masculinas en las que subyace el recurso a la violencia para destacarse, imponerse y subyugar”<sup>96</sup>.

Asimismo, Segato afirma que la violencia, al tener como componente el patriarcado, tiende a dañar con severidad a las mujeres debido a que “resulta del mandato moral y moralizador de reducir y aprisionar la mujer en su posición subordinada, *por todos los medios posibles*, recurriendo a la violencia sexual, psicológica y física, o manteniendo la violencia estructural del orden social y económico”<sup>97</sup>.

Con la violencia estructural, categorías de análisis como el género toman fuerza al observar la caracterización de las mujeres a través de roles sociales rígidos carentes de posibilidades efectivas de trascender en la esfera pública. Esto se debe a que “el género se conceptualizó como el conjunto de ideas, representaciones, prácticas y prescripciones

---

<sup>94</sup>Para profundizar en la relación del patriarcado y la violencia sexual se puede consultar: Amorós, Celia. *Violencia contra las mujeres y pactos patriarcales*. Editorial Pablo Iglesias, 1990; Pain, Rachel. Space, sexual violence and social control: Integrating geographical and feminist analyses of women's fear of crime. *Progress in human geography*, núm. 4, vol.15, (1991): 415-431; Millet, Kate. “Theory of sexual politics”. *Radical feminism: A documentary reader*, (2000): 122-62; Castro, Roberto y Riquer, Florinda. “La investigación sobre violencia contra las mujeres en América Latina: entre el empirismo ciego y la teoría sin datos”. *Cadernos de saúde pública*, núm.1, vol.19 (2003): 135-146; Puleo, Alicia. El patriarcado: ¿una organización social superada. *Temas para el debate*, (2005): 133, 39-42; Fiscó, Sonia. “Atroces realidades: la violencia sexual contra la mujer en el conflicto armado colombiano”. *Papel político*, vol. 17 (2005): 119-159; Sánchez Gómez, Olga Amparo. *Las violencias contra las mujeres en una sociedad en guerra*. Ruta pacífica de Mujeres, 2008, <https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/51481/rutapacificadelasmujerescolombianas.pdf?sequence=1&isAllowed=y>; Segato, Rita Laura. El sexo y la norma: frente estatal, patriarcado, desposesión, colonidad. *Estudios Feministas*, (2014): 593-616.

<sup>95</sup> Sagot, Montserrat. “Estrategias para enfrentar la violencia contra las mujeres: reflexiones feministas desde América Latina”. *Athenea Digital. Revista de pensamiento e investigación social*. Vol. 14 (2008): 215-228.

<sup>96</sup> Afanador Contreras, María Isabel y Caballero Badillo, María Claudia. “La violencia sexual contra las mujeres. Un enfoque desde la criminología, la victimología y el derecho”. *Reflexión Política*; núm 27. vol. 14 (2012): 122-133, 124

<sup>97</sup> Segato, Rita Laura. *Las estructuras elementales de la violencia: contrato y status en la etiología de la violencia*. Universidade de Brasília, Departamento de Antropología, núm, 334. 2003: 13.

sociales que una cultura desarrolla desde la diferencia anatómica entre mujeres y hombres, para simbolizar y construir socialmente lo que es “propio” de los hombres (lo masculino) y “propio” de las mujeres (lo femenino)”<sup>98</sup>, siendo las mujeres acreedoras de comportamientos que las hacen vulnerables. Lo anterior genera crítica hacia las concepciones sobre la violencia sexual cuando es interpretada como una cuestión privada y sin relevancia para los sistemas legales y sociales, al ser la mujer un mero instrumento para la guerra.

En ese sentido, una de las tantas cosas previstas por el feminismo con respecto a la VS es su permanencia en el tiempo tanto en la esfera privada como en escenarios de conflicto. Segato al respecto ofrece una reflexión al exponer cómo los conflictos armados pasaron de ser una excepción a ser parte de la normalidad internacional, los cuales cada vez se vuelven más violentos contra las mujeres<sup>99</sup>. Esto, dentro de las estructuras de grupos enfrentados en el conflicto, tiende a pervivir por la multiplicidad de opresiones que padecen las mujeres por el contexto, por sus condiciones sociodemográficas, sus modos vivenciales de subsistir, entre otras razones.

Así, al existir múltiples casos de acoso y violencia sexual en diferentes escenarios, se mantiene la subordinación sexual de la mujer por razón del género ya que “en la medida en que las mujeres no son iguales a los hombres y que la desigualdad está sexualizada, las mujeres seguirán siendo compradas y vendidas, y la ley no hará nada”<sup>100</sup>. En ese sentido, el foco del problema es la violencia sexual dado que “su eficacia como instrumento de terror colectivo e individual de manera simultánea explica en parte su presencia en un elevado número de contextos afectados por la violencia armada y política”<sup>101</sup>. Así podría entenderse que “el género surge como la forma coagulada de la sexualización de la desigualdad entre hombres y mujeres”<sup>102</sup>.

Lo argumentado permite concebir la violencia sexual como una cuestión de género que permitió a las feministas no solo considerar nuevas categorías de análisis para

---

<sup>98</sup> Lamas, Marta. “Género, diferencias de sexo y diferencia sexual”. *Debate feminista*, vol. 20 (1999): 84-106, 96 y ss.

<sup>99</sup> La autora argumenta al respecto que “El proyecto de la guerra es hoy, para sus administradores, un proyecto a largo plazo, sin victorias ni derrotas conclusivas. Casi podría decirse que el plan es que se transformen, en muchas regiones del mundo, en una forma de existencia”. Segato, Rita Laura. “Las nuevas formas de la guerra y el cuerpo de las mujeres”, 341.

<sup>100</sup> Mackinnon, Catherine. A. (1995). *Hacia una teoría feminista del Estado*. Trad. Eugenia Martin, Ediciones Cátedra, vol. 27, 1995.

<sup>101</sup> Villellas Ariño, María. “Violencia sexual en conflictos armados”, 1-17.

<sup>102</sup> Mackinnon, Catherine. A. (1995). *Hacia una teoría feminista del Estado*, 10.



dar solución al problema de la VS sino sugerir y desarrollar una nueva forma de conocimiento por y para las mujeres.

A partir de los años 60 del pasado siglo, “las investigadoras de la ola de estudios sobre la mujer a menudo insistieron en que la investigación feminista tiene que encaminarse a resolver los problemas concretos enfrentados por las mujeres”<sup>103</sup>. Posteriormente, la tendencia hasta los años 70 estuvo encaminada a observar los fenómenos sociales a través de diferentes líneas epistemológicas tradicionales, siguiendo enfoques metodológicos que reproducían, como un conocimiento verdadero, solo el emergente de un observador objetivo incapaz de dejar permeabilizar su resultado con aspectos nacidos desde la subjetividad, la contextualización y las creencias que hacían parte de un entorno social, distinguiendo entre perspectivas de hombres y mujeres. Tal como lo afirma CHRISTIANSEN, “en el marco de esa epistemología clásica, la separación entre el observador y lo observado se da por sentada: lo social queda convertido en un objeto de estudio cuyo modo de comportamiento se concibe como siendo independiente del acto de observación”<sup>104</sup>.

Situadas en ese panorama, las investigaciones sobre violencia sexual fueron por mucho tiempo un tema solo de mujeres y explorado por los hombres. Dicha violencia es analizada desde corrientes epistemológicas como el positivismo y el constructivismo en la obra de Connelly, quien manifiesta que “era frecuente que los etnógrafos sólo entrevistaran a los hombres en las sociedades en las cuales hacían trabajo de campo, y a partir de esos datos construían sus monografías, que desde los setenta fueron criticadas por su androcentrismo”<sup>105</sup>.

De esta reflexión, surge la Epistemología Feminista, debido a que “nunca se les había dado a las mujeres una voz de autoridad al establecer su propia condición o la de los demás o al afirmar cómo deberían cambiarse tales condiciones”<sup>106</sup>. Así, tal como expresa Graf, “la epistemología feminista aborda de qué manera categorías como el género influye en las concepciones del conocimiento, en la persona que conoce y en las

---

<sup>103</sup> Goldsmithli Connelly, Mary. “Estudios de la mujer: debates metodológicos y epistemológicos”. *Sociológica México*, vol. 33 (2015): 25-44.

<sup>104</sup> Christiansen Luján, María. “If you want to know what the water is like, don't ask the fish second-order epistemology in the study of violence”. *Eidos*, vol. 26 (2017): 121-148, 125.

<sup>105</sup> Goldsmithli Connelly, Mary. “Estudios de la mujer: debates metodológicos y epistemológicos”, 32.

<sup>106</sup> Harding, Sandra. “¿Existe un método feminista”. Trad. Gloria Elena Bernal, *Debates en torno a una metodología feminista*, (1998): 1-11, 3.

prácticas de investigar, preguntar y justificar. Identifica las concepciones dominantes y las prácticas de atribución, adquisición y justificación del conocimiento que sistemáticamente ponen en desventaja a las mujeres porque se les excluye de la investigación, se les niega que tengan autoridad epistémica, se denigran los estilos y modos cognitivos femeninos de conocimiento, se producen teorías de las mujeres que las representan como inferiores o desviadas con respecto al modelo masculino, se producen teorías de fenómenos sociales que invisibilizan las actividades y los intereses de las mujeres o a las relaciones desiguales de poder genéricas, y se produce conocimiento científico y tecnológico que refuerza y reproduce jerarquías de género”<sup>107</sup>.

En ese entendido, la epistemología feminista parte de que si se examinan los fenómenos sociales desde una posición androcéntrica se denota que las suposiciones y valores emergen del grupo de hombres que los vive, socializa y aplica. Esto genera que este grupo dominante sea “epistémicamente limitado”<sup>108</sup> con respecto a otros grupos por razones de discriminación; por lo tanto, diversos puntos de vista que emergen de otros grupos y/o colectivos permiten comprobar hipótesis e investigar temas desde otros ángulos que enriquecen la solución de problemas sociales y generan conocimiento científico.

Desde esta episteme, el feminismo prevé, a diferencia de otras teorías, como género y la VS reconocen a las mujeres con diversas características sociodemográficas – de clase, raza o cultura- y visualiza la problemática alrededor del silencio de la VS en conflictos armados. En algunos contextos, los testimonios de las mujeres víctimas ni siquiera llegan a ser conocidos por falta de garantías de protección, por carencia de reconocimiento de su condición étnica o racial, por falta de credibilidad social y judicial o simplemente por miedo a la repetición del acto de VS, entre otros.

Como existe diversidad de motivos y causas por las cuales las mujeres son silenciadas, los trabajos feministas exaltan la contrariedad que produce el homogenizar y conceptualizar de forma rígida a la mujer como una mujer universal. Esto debido a que cada mujer es diferente y se encuentra en condiciones distintas antes, durante y después del hecho victimizante. En ese entendido, HARDING nos enseña que “lo masculino y lo

---

<sup>107</sup> Graf, Norma Blazquez. “Epistemología feminista: temas centrales”. *Género e Sexualidade*, vol.1 (2010): 11 y ss.

<sup>108</sup> Alcoff, Linda y Potter, Elizabeth. *Feminist epistemologies*. Routledge, 2013, 3.

femenino son siempre categorías que se producen y aplican dentro de una clase, una raza y una cultura particulares, en el sentido de que las experiencias, deseos e intereses de mujeres y de hombres difieren en cada clase, raza y cultura. Pero, de la misma manera, clase, raza y cultura son siempre categorías dentro del género, puesto que las experiencias, deseos e intereses de mujeres y hombres difieren precisamente de acuerdo con su clase, raza y cultura”<sup>109</sup>.

Lo anterior, da paso a concebir la diversidad de situaciones y características como válidas ya que el feminismo reconoce que no existe una sola "experiencia de la mujer" cuando de VS se trata<sup>110</sup>. Las mujeres tienen una percepción de la VS que puede diferir de las de otras, sin llegar a ser excluyentes en su manera de afrontarla. Mientras que unas lo conciben como actos que atentan solo contra sus comunidades, otras los ven como ataques directos contra ellas y sus familias, otras como delitos que deben ser castigados con severidad y otras se centran en el daño que causó y luchan por su reparación.

Tal como lo ve SHIVA, “las mujeres han comenzado una lucha que desafía las categorías principales del patriarcado occidental: los conceptos de naturaleza y mujer, y los de ciencia y desarrollo. Están desafiando el supuesto universalismo de la ideología patriarcal no con otra tendencia universalista sino con la diversidad; y están desafiando el concepto dominante de poder como violencia con el concepto alternativo de la no violencia como poder”<sup>111</sup>.

Esa lucha emprendida por las feministas y los movimientos de mujeres se ha venido visibilizando debido a su activismo social y legal traducido en el progreso normativo que de una u otra manera han propiciado.

En el ámbito internacional fueron uno de los grupos más insistentes en que se establecieran como crímenes internacionales los relacionados con la violencia sexual en escenarios de conflicto. Esto permitió que “las feministas traspasaran el ámbito privado e ingresaran a la agenda pública de los organismos internacionales, lo cual se ha traducido

---

<sup>109</sup> Harding, Sandra. “¿Existe un método feminista”, 13.

<sup>110</sup> Vigarello, Georges. *Historia de la violación: siglos XVI-XX*, 50.

<sup>111</sup> Shiva, Vandana. “Abrazar la vida. Mujer, ecología y desarrollo”. *Cuadernos inacabados*, vol. 18 (1995):1-4.

en los convenios suscritos por los estados con miras al reconocimiento y respeto de los derechos de las mujeres en el contexto de la no discriminación y la equidad de género”<sup>112</sup>.

Asimismo, han conquistado las plataformas digitales y se han sumergido en la era del activismo digital creando campañas como "no significa que no", “no más violencia contra la mujer” o “fin de la violencia sexual”, “violación es violencia, no sexo”, etc., ayudando, en primer lugar, a visibilizar la existencia del problema y, en segundo lugar, a organizar a las personas para que trabajen en conjunto para crear estrategias contra la VS no solo en este tipo de escenarios sino en cualquier contexto<sup>113</sup>.

Sin embargo, cabe resaltar uno de los movimientos feministas con más auge sobre el tema, el movimiento feminista anti-violación, que con su contribución en el campo social, judicial y legislativo logra visualizar la importancia de miradas feministas en las soluciones para prevenir, sancionar, y reparar a las víctimas de violencia sexual.

#### **1.1.2.1. Movimiento feminista anti-violación**

Este movimiento emergente en los Estados Unidos en la década de los 70 convierte la lucha por la eliminación de la violencia sexual en uno de los objetivos principales del feminismo. A través de movilizaciones sociales de mujeres americanas, afrodescendientes y latinas, lograron cambios visibles en el sistema judicial, legislativo y social que ayudaron a establecer lineamientos preventivos, de reparación y de castigo de la VS.

Las activistas feministas comienzan a movilizarse para obtener atención integral recurriendo al activismo político como estrategia para lograr cambios judiciales y legislativos a favor de las víctimas de violencia sexual<sup>114</sup>. Tal como lo argumenta

---

<sup>112</sup> Afanador Contreras, María Isabel y Caballero Badillo, María Claudia. “La violencia sexual contra las mujeres. Un enfoque desde la criminología, la victimología y el derecho”, 123.

<sup>113</sup> Sin embargo, existen estudios en contra de algunas campañas en redes. Un ejemplo es la crítica que hace Philadelphoff Puren a la campaña del “no es no” ya que considera que interpretar el no como una única palabra para expresar el sometimiento en la VS, anula otras formas de exteriorización del consentimiento. Además, aduce que lo que intenta es refutar una propuesta patriarcal insidiosa y duradera debido a la noción de que las mujeres dicen "no" cuando quieren decir "sí" cuando se trata de su deseo. En ese sentido esta autora pone en contraposición la VS y el romance. Philadelphoff Puren, Nina. “The mark of refusal: Sexual violence and the politics of recontextualization”. *Feminist theory*, núm 3., vol.5 (2004): 243-256, 245.

<sup>114</sup> Gornick C, Janet, C., y Meyer, David S. “Changing political opportunity: The anti-rape movement and public policy”. *Journal of Policy History*, núm.10, vol. 4 (1998): 367-368.

GORNICK & MEYER, los movimientos de los años sesenta demostraron la eficacia de la protesta como táctica y el movimiento social como forma, permitiendo que sus logros lo convirtieran en uno de los colectivos con más éxito en esta década.

Sus principales activistas fundaron instituciones y grupos como “el Task Force NOW, United Organization Against Rape (WUAR), Women's Crisis Center y The Commission on Assaults against Women”, que lograron articularse para luchar por la eliminación de la VS <sup>115</sup>. Sus metas se perfilaron para 1) proporcionar servicios directos a las mujeres que habían sido violadas y (en la mayoría de las comunidades) para abogar por ellas mientras negociaban las instituciones locales de salud y justicia penal; (2) enseñar a las mujeres cómo evitar y resistir la violación y ayudarlas a hacerlo; y (3) para alentar (o forzar) a las instituciones locales —hospitales, departamentos de policía y oficinas de fiscales— a que sean más receptivas a las mujeres<sup>116</sup>.

El trabajo de las feministas impulsó las reformas institucionales sobre servicios de salud para las mujeres, haciendo énfasis en el trato del personal sanitario y administrativo. Incursionando de forma reiterada en la política como medio para erradicar el problema, insistieron en la necesidad de la creación de protocolos para el buen trato por parte de funcionarios estatales en distintas dependencias debido a que con regularidad revictimizaban a las víctimas de VS. Este llamado a las autoridades fue escuchado y puesto en marcha en algunos de los estados del suroccidente de Colombia, reforzando la atención prioritaria del personal que tiene el primer contacto con la víctima de violencia sexual.

Asimismo, propusieron como medida de transformación social la metamorfosis de las percepciones sociales acerca de la mujer violada con el fin de generar conciencia y solidaridad con la víctima de VS. Parten de que la VS es entendida como un problema secundario y de carácter privado que ha ocupado las agendas sociales de forma tangencial y no de forma prioritaria. En ese caso, al pasar a la esfera pública se puede visibilizar la necesidad de consolidar solidaridad con las mujeres para intentar eliminar la VS en cualquier contexto. El respaldo hacia los hombres que cometían actos de violencia sexual se manifestaba con frecuencia al justificar su accionar arremetiendo contra las mujeres por su percepción de insinuadoras o por su modo de vida inmoral.

---

<sup>115</sup> McNickle Rose, Vicki, “Rape as a social problem: A byproduct of the feminist movement”, 77 y ss.

<sup>116</sup> McNickle Rose, Vicki, “Rape as a social problem: A byproduct of the feminist movement”, 77 y ss.

Debido a ese escenario, las feministas convocaron varias reuniones donde las víctimas contaban sus relatos. Así, “las organizaciones feministas locales inicialmente dedicaron una gran cantidad de atención a la creación de conciencia y comunidad a nivel de base”<sup>117</sup>, lo que generó un efecto de sensibilización social que se transmitió de voz a voz y también a través de medios de comunicación. El mensaje trasferido permitía dar a conocer otro foco de la VS protagonizada por la mujer que era condenada socialmente por ser la responsable y culpable de ser violada. Esto conllevó a que la rama judicial se uniera a la dinámica de cambio al percatarse de los sesgos de género que había en los procedimientos de delitos sexuales. Los jueces y los jurados a menudo tomaban la decisión de declarar inocente al victimario en los casos donde la víctima contaba con mala reputación o su oficio era la prostitución.

Lo anterior, facilitó el desarrollo paralelo de reformas legislativas donde la presión impulsada por el movimiento feminista anti-violación<sup>118</sup> resaltó la estandarización del derecho penal debido a que las leyes sobre el tema no habían cambiado desde la época colonial. El argumento se centró en la necesidad de reformas al código penal para ampliar la gama de los delitos considerados como delitos sexuales, incluyendo no solo la violación sino también los que no requerían penetración como los tocamientos y agresiones físicas corporales en partes íntimas de la víctima<sup>119</sup>.

Además, se limitó el requisito probatorio, el cual enunciaba que se debía contar con el testimonio de un testigo de los hechos distinto al de la víctima para proferir un fallo condenatorio. Sin embargo, se propuso como reforma la inversión de la carga de la prueba cuando se tratara de delitos sexuales, quitándole a la mujer la tarea de demostrar que fue violada e imponiéndosela al victimario quien tendría que demostrar que él no violó a la mujer, siendo rechazada por el órgano legislativo. Esto si bien no prosperó en aquella

---

<sup>117</sup> McNickle Rose, Vicki, “Rape as a social problem: A byproduct of the feminist movement”, 77 y ss.

<sup>118</sup> En 1973, se presentó un proyecto de ley en el Congreso Estadounidense para establecer un Centro Nacional de Prevención y Control de Violaciones dentro de los Institutos Nacionales de Salud Mental el cual fue aprobado y abierto en el año 1976. Esto es narrado por Gornick C, Janet, C., y, Meyer, David S. “Changing political opportunity: The anti-rape movement and public policy”, 369 y ss.

<sup>119</sup> En sus esfuerzos de reforma, se enfocaron en la necesidad de cuatro cambios legales básicos: (1) ampliar la definición de violación para incluir un rango de comportamiento sexual hostil; (2) limitar la necesidad de que las víctimas demuestren una resistencia física vigorosa para garantizar condenas; (3) eliminar los requisitos de corroboración que anteriormente requerían el testimonio de testigos; y (4) agregar las leyes sobre el escudo que restringieron el uso por el acusado de la conducta sexual pasada de la víctima como evidencia. Gornick C, Janet, C., y, Meyer, David S. “Changing political opportunity: The anti-rape movement and public policy”, 367-368.

línea de tiempo, sentó un precedente debido a que fueron las feministas las que impulsaron la lucha social y política para sacar del anonimato problemas sociales alrededor de un tema que también era político, legislativo y judicial<sup>120</sup>.

No obstante, su novedad dentro de su accionar fue la materialización de su propuesta de eliminación de la VS a través de la creación de una institución denominada “Centros de Crisis de violación” para atender a las víctimas<sup>121</sup>. Sus estrategias de acción se centraron en la implementación de un sistema de llamadas de emergencia como primer paso para dar a conocer el hecho de violencia y evitar que volviera a repetirse; la atención psicosocial y la asesoría legal para animar a la víctima a denunciar. Las feministas, lograron movilizar a más de 400 personas para trabajar como voluntarias en estos centros aplicando una política educativa ideada para capacitar al personal que tendría contacto con las víctimas ya sea en espacios de interacción física o telemática.

Tal como lo argumenta Gornick y Meyer, “los primeros centros de crisis por violación compartieron tres elementos: (1) se organizaron como colectivos, con decisiones no jerárquicas y mínimas divisiones formales de trabajo; (2) prestaron servicios directamente, principalmente servicios de línea telefónica directa, asesoría cara a cara y visas de defensa de víctimas con respecto a las principales instituciones de salud y justicia penal; y (3) se comprometieron en una variedad de tareas destinadas a cambiar el mundo que los rodea, incluidos programas de educación pública, esfuerzos de cabildeo dirigidos al cambio institucional y reforma estatutaria, y manifestaciones y protestas masivas”<sup>122</sup>.

Estos centros de crisis comenzaron como proyectos autofinanciados por las voluntarias y poco a poco formaron parte de las políticas públicas estatales con rubros

---

<sup>120</sup> Al respecto Gornick y Meyer argumentan que las vidas personales de las mujeres víctimas de VS estaban sujetas al escrutinio público, de tal manera que muchas mujeres sintieron que fueron interrogadas más agresivamente por la policía y los fiscales, y con más sospecha, que los presuntos violadores. Finalmente, las tasas de condena por violación fueron muy bajas. La notoria mala respuesta del sistema de justicia penal maltrató a las mujeres que denunciaron violaciones y desalentó a otras mujeres a recurrir a las autoridades. Gornick C, Janet, C., y Meyer, David S. “Changing political opportunity: The anti-rape movement and public policy”, 367.

<sup>121</sup> Estos centros surgieron para socializar, visibilizar y atender los casos de violencia sexual de las mujeres. El primer centro que se consolidó fue el “DC Rape Crisis Center” en la ciudad de Washington el cual estaba diseñado para dar atención primaria a las víctimas vía telefónica. Al respecto puede consultarse: Matthews, Nancy A. *Confronting rape: The feminist anti-rape movement and the state*. Routledge, 2005; McMahon, Sheila M. *History of the Anti-Rape Movement. Handbook of Sexual Assault and Sexual Assault Prevention*. Springer, Cham, 2019: 47-53.

<sup>122</sup> Gornick C, Janet, C., y Meyer, David S. “Changing political opportunity: The anti-rape movement and public policy”, 369.

nacionales. Sin embargo, al ser financiados con recursos públicos se impusieron directrices gubernamentales incompatibles con el trabajo de voluntariado y solidario. Esto generó que la esencia social se desdibujara llegando al punto de cerrar varios centros por no creer que fueran necesarios. Además, las estructuras jerárquicas estatales se impusieron en los centros a tal punto de remplazar a los voluntarios por personal estrictamente profesional. Esto conllevó a que la gente se dispersara y abandonara poco a poco la lucha por la erradicación de la VS a través de la movilización social y el trabajo comunitario. No obstante, el movimiento feminista dio una muestra de unidad comunitaria para erradicar uno de los problemas globales mundiales como lo es el de la VS.

#### **1.1.2.2. Influencia del movimiento anti-violación en escenarios de conflicto armado**

Este movimiento feminista contra la VS demostró resultados efectivos en reformas institucionales, legislativas y judiciales permitiendo transformar la percepción de la violencia sexual como algo secundario y normalizado, ya que logró que se concibiera a la VS como un fenómeno transversal que puede tener ocurrencia en la esfera privada y pública.

En ese sentido, la lucha de los movimientos sociales tomando como espejo el éxito del movimiento feminista anti-violación estadounidense se centra, primero, en visibilizar qué sucede con las mujeres en los conflictos armados y, segundo, en buscar estrategias efectivas para eliminar las prácticas que vulneraban sus derechos y repararlas. Esto hace que a nivel mundial las agendas de acción feministas incluyan diversas propuestas para que las mujeres sean las protagonistas en la reconstrucción social de comunidades inmersas en conflictos armados y en la construcción de escenarios de paz. En ese sentido, investigadoras como LUISA POSADA resaltan cómo los logros alcanzados por este colectivo político y social llevaron a que “la investigación sobre la guerra y las relaciones de poder esté atravesada por la categoría de género”<sup>123</sup>.

En ese entendido, la autora resalta que diversos análisis de conflictos como el de Ruanda, los Balcanes, República Democrática del Congo, Bosnia, Mozambique, Sierra Leona, Guatemala, o Colombia entre otros -que tienen dentro de sus reportes oficiales y

---

<sup>123</sup> Posada Kubissa, Luisa. “Feminismo y guerra. A propósito de Judith Butler, 129 y ss.



no oficiales presencia de VS- tienen características similares que permiten establecer la relación permanente entre el género y el conflicto armado. Entre ellas destaca el patriarcado como estructura presente en estos escenarios, el carácter masivo de los ataques contra las mujeres, y la esfera pública como escenario de comisión de los actos de violencia sexual.

Sin embargo, su exclusión como sujeto político de acción sigue siendo frecuente y rechazado por propender por una deconstrucción de los roles de las mujeres en la sociedad y en la guerra, aspirando a una transformación de la estructura social y política que las reconozca como constructoras de paz. Es el caso, por ejemplo, de movimientos locales como PRUFEMES en Ruanda, que luchan por los derechos de las mujeres y su reconocimiento como actrices políticas de paz a través de proyectos de intervención social contra la violencia sexual<sup>124</sup>.

De forma similar, en República Democrática del Congo, son los movimientos feministas los que están trabajando de la mano con el gobierno para erradicar la violencia sexual. En ese caso el colectivo feminista, marco permanente de concertación de mujeres congoleñas, tiene como uno de sus objetivos principales el ayudar a reducir la propagación del VIH / SIDA y erradicar el fenómeno de la violencia sexual en ese país. También la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad-RDC, realiza proyectos sociales donde ayuda con asesorías legales a las mujeres que son víctimas de VS para que sus casos no se archiven o queden sin resolver por cualquier motivo. Activistas sociales destacadas a nivel mundial, como Caddy Adzuba, son reconocidas por utilizar los medios de comunicación para visibilizar la violencia sexual como un tema principal en las agendas estatales con el fin de que se tomen medidas para la prevención, castigo, erradicación y reparación de mujeres congoleñas<sup>125</sup>.

---

<sup>124</sup> Este movimiento tiene un proyecto en curso denominado “la lucha contra la violencia sexual y el género para reducir las infecciones de VIH de la población ruandesa”. Puede consultarse su página web en Profemmes, “Proyecto De Lucha Contra La VSG y el VIH”, 2019, <https://profemmes.org/>

<sup>125</sup> Además, tienen como propósito involucrar efectivamente a las mujeres congoleñas en el proceso de paz y democratización; promover el trabajo sinérgico de las mujeres en los sectores económico, político, social y cultural; integrar el enfoque de género como temas transversales en la toma de decisiones, fortalecer la solidaridad y la unidad de las mujeres congoleñas entre ellas, las de África y el mundo a través de la creación de redes, hacer efectiva la paridad y participar en la transformación social y el desarrollo de la nación congoleña. Para profundizar en esta organización de mujeres puede consultarse su página web principal: CAFCO, 2005, <http://www.cafco-cd.org/>.

Asimismo, en contextos latinoamericanos, se encuentran organizaciones de mujeres y feministas en la lucha por la erradicación de la violencia sexual que invitan a los gobiernos de turno a implementar la perspectiva género en sus políticas estatales para propiciar la inclusión de las mujeres en los procesos para salir de los conflictos armados. Es el caso de Colombia, Guatemala, El Salvador y Honduras en los cuales se ha mantenido la idea feminista de apostar por las reivindicaciones de igualdad advirtiendo que “si se acepta la asociación de lo masculino con la guerra y la mistificación de la paz como lo femenino, se hace imposible la transformación de las relaciones de género y, en definitiva, la superación misma del patriarcado.”<sup>126</sup>

### **1.1.2.3. La idea de la Eficiencia como principio para comprender la violencia sexual desde el feminismo**

En el compendio de ideas, enfoques y presupuestos de colectivos feministas, el activismo y su organización predispuesta para lograr cambios sociales, jurídicos y políticos para lucha contra la VS en los conflictos armados, se enfrenta a estructuras como la del proceso penal judicial que están pensados con fines distintos a los pretendidos por este movimiento. El proceso judicial, con una visión puesta en el victimario, apunta a concebir los actos de VS sexual contra las mujeres en el conflicto como crímenes que no quedarán en la impunidad porque serán investigados y sus responsables sancionados con el rigor máximo de los parámetros establecidos en las leyes.

Sin embargo, para observar si se cumple con la meta establecida, el éxito de aplicación normativa es medido con indicadores de eficacia y efectividad que apuntan a establecer si la norma que castiga los delitos de VS cumplió con el objetivo establecido por el legislador en el momento de crearla<sup>127</sup>. Es por ello por lo que en los informes

---

<sup>126</sup> Colectiva Antimilitarista La tulpa. “Mujeres y antimilitarismo”, 18 de mayo 2020, <https://wri-irg.org/es/story/2020/mujeres-y-antimilitarismo>.

<sup>127</sup> Aunque el número de autores que intentan definir estos conceptos es voluminoso, algunos de ellos comparten que la eficacia y la efectividad de la normatividad se complementan. El primer concepto es referente al carácter de cumplimiento de los objetivos por parte de los sujetos para los que fue creada una norma y el segundo es orientado al resultado que se espera de la normatividad y así establecer el éxito de las medidas que se emplearon para que se diera ese cumplimiento. Puede consultarse al respecto: Greppi, Andrea. “Eficacia.” *Eunomía. Revista en Cultura de la Legalidad*, (2014): 150-159; Pfeffer Urquiaga, Emilio. “Eficacia de las normas constitucionales frente a la reforma procesal penal”. *Revista de Derecho Público*, núm.64 (2002): 48-68; Fernández Blanco, Carolina. “Normas sociales y problemas de eficacia y

oficiales aparecen conjuntamente tasas, números y porcentajes que intentan demostrar que las autoridades competentes para llevar a cabo distintas investigaciones están cumpliendo con sus obligaciones establecidas en las leyes.

El problema radica en que los indicadores están centrados en normas estructuradas en un sistema patriarcal que permea lo jurídico y no pone el foco principal en la mujer que es víctima sobreviviente como el sujeto con el que inicia y termina la acción judicial. Lo argumentado comienza a tener sentido cuando se observan indicadores de medición de VS en el conflicto centrados en determinar cuántos procesos han terminado en condenas y no en indicadores pensados desde sistemas igualitarios donde el foco sea la mujer. Por ejemplo, podrían estructurarse en mediciones sobre cuánto duro el proceso judicial, qué costos tuvieron que asumir las mujeres para que su proceso no quedara en la impunidad, cuántas mujeres han sido reparadas por vía judicial, cuántas han quedado satisfechas con la reparación y que tasa de mujeres han superado los umbrales de pobreza que este hecho victimizante les dejó como consecuencia, entre muchas otras.

Esto encuentra una explicación en los relatos de las víctimas sobrevivientes cuando entran a convencer a los estamentos jurídicos de que la VS en los conflictos armados es real y no un invento. Para eso les toca recurrir a cifras oficiales y no oficiales, a indicadores de eficacia que demuestren, por ejemplo, el número de mujeres que sufren de VS en los conflictos armados, cuáles son los principales victimarios, cuántos de ellos han sido plenamente identificados y sancionados, entre otras; para después pasar a lo que realmente se quiere proponer en materia de eliminación de la VS en los conflictos armados.

Dado este panorama de incredulidad, entra en juego un término jurídico extrapolado del sector económico y de la administración que tiene relevancia en el análisis que se quiere dar a conocer, el cual apunta a concebir estrategias que ayuden a cumplir con los objetivos de la norma con el mínimo “costo posible” conocido como eficiencia<sup>128</sup>. Autoras como Mokate al explicar en qué consiste, arroja una definición al lector, con énfasis en el significado de costo, diciendo que “un costo representa el desgaste o el sacrificio de un recurso, tangible o intangible. Por lo tanto, podría referirse al uso

---

efectividad de las normas jurídicas”. *DOXA, Cuadernos de Filosofía del Derecho*, núm.42 (2019): 259-283.

<sup>128</sup> Mokate, Karen. *Eficacia, eficiencia, equidad y sostenibilidad: qué queremos decir?*. Departamento de Integración y Programas Regionales, Instituto Interamericano para el Desarrollo Social, Banco Interamericano de Desarrollo, 2001: 5.

(sacrificio) de tiempo, al desgaste o deterioro de un recurso ambiental (aunque éste no sea negociable) o al deterioro o sacrificio de otro “bien” no tangible como el capital social, la solidaridad o la confianza, entre otros”.<sup>129</sup> Partiendo de esta definición explica que la utilidad de la eficiencia se visualiza en “la optimización de la relación de los medios con los fines”, la cual se alcanza eligiendo las opciones más convenientes para lograr los objetivos propuestos con un menor desgaste en el ejercicio de derechos y tiempo.<sup>130</sup>

Por otra parte, la eficiencia, desde el concepto utilitarista que busca la funcionalidad del sistema penal, es entendida como aquella que “se logra cuando la norma consigue su finalidad de proteger un bien jurídico determinado”<sup>131</sup>. Esto implica identificar si la VS atenta contra las normas del DIH y demás relativas a los conflictos armados en el área penal y establecer cuáles son los preceptos y principios que se protegen en ámbitos internacionales y locales. Para ello, la tesis defendida por OSSANDON Y SILVA sobre “la valoración sobre la eficiencia de las normas penales” ayuda a tener claridad en lo que debe observarse como preceptos donde “es fundamental delimitar cuáles son, en concreto, los objetivos o beneficios que con ellas se pretenden alcanzar, las finalidades a las que legítimamente puede aspirar el ordenamiento penal”<sup>132</sup>.

Advierte, además, que para tener claridad hay un debate sobre conceptos similares relacionados pero distintos que convergen como lo son la eficacia, efectividad y eficiencia. Aunque el debate profundo de las diferencias de conceptos no se dará en esta tesis, para su comprensión resulta pertinente la descripción que hace Jeammaud, al referir que la eficacia será aquella que determine el nivel de cumplimiento de las normas, la efectividad la que establezca el éxito de ese cumplimiento y la eficiencia estará enmarcada en el rendimiento “óptimo” de los recursos empleados para lograr esos objetivos propuestos en la norma<sup>133</sup>.

---

<sup>129</sup> Mokate, Karen. *Eficacia, eficiencia, equidad y sostenibilidad: qué queremos decir?*, 5 y ss

<sup>130</sup> Gardais, Ondarza, Gabriela. El control de legalidad y la eficiencia y eficacia como principios jurídicos fiscalizables. *Revista de Derecho de la Universidad Católica de Valparaíso*, vol. XXIII (2002): 323- 341, <http://rdpucv.cl/index.php/rderecho/article/viewFile/511/479>

<sup>131</sup> Al respecto puede consultarse: Sánchez Silva, Jesús María. "Eficiencia y Derecho penal." *Anuario de derecho penal y ciencias penales*, Núm.,1 Vol. 49 (1996): 93-128; Ossandon Widow, María Magdalena. "Eficiencia del Derecho penal. El caso de los delitos contra el medio ambiente." *Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso*, vol. 24 (2010): 379 - 394.

<sup>132</sup> Ossandon Widow, María Magdalena. "Eficiencia del Derecho penal. El caso de los delitos contra el medio ambiente.", 379 - 394.

<sup>133</sup> Jeammaud, Antoine, “Legislación y realidad de la negociación. Apuntes para el análisis de sus relaciones”. En *La negociación colectiva en América Latina*, editado por Ojeda Avilés, Antonio y Ermida Uriarte, Oscar. Madrid: Trotta, (1993): 15 y ss.

En ese sentido, la eficacia de las normas sobre VS estarían centradas en la evaluación del cumplimiento de los objetivos del sistema penal consistentes en la investigación y castigo a los victimarios, su efectividad en establecer si su cumplimiento llegó a ser exitoso midiendo los mecanismos empleados para establecer el total de procesos penales que terminaron investigándose, y cuántas personas fueron sancionadas por cometer actos de VS. Pero, en cuanto a la eficiencia, enmarcada en determinar si se logró el mínimo gasto para lograr el objetivo, se puede observar a través de los relatos de las mujeres que el proceso produce un desgaste que no se calcula ya que para que se logre una reparación por vía judicial el proceso se demora mucho tiempo en culminar y tiene además, otro tipo de costes para las mujeres.

Por lo expuesto, haciendo contraste de lo referido en esta tesis, es una constante que los movimientos feministas adviertan que el sistema penal permite establecer canales para evitar -al menos en algunos casos- que los victimarios sigan cometiendo actos de este tipo, pero son insuficientes para hacerse cargo de las secuelas que tiene la VS en las mujeres que la padecen<sup>134</sup>. Para justificar este argumento, se observa que los objetivos del sistema penal no están orientados a la reparación de víctimas sobrevivientes.

En el ámbito penal internacional, el Estatuto de Roma prevé la participación de las víctimas en el proceso para esclarecer lo sucedido de los hechos<sup>135</sup>. Sin embargo, su principal objetivo es investigar y sancionar a aquellos que infrinjan contra bienes jurídicos universales como lo son la paz y la seguridad mundial. Es al finalizar el proceso penal que se otorga una reparación por los daños causados.

Esto implica considerar el tiempo que conlleva un proceso penal con todas sus etapas y tiempos procesales, los recursos económicos que asumen las mujeres para que el sistema judicial logre cumplir con su objetivo de perseguir y juzgar los delitos consagrados en el ordenamiento jurídico penal internacional o local, el desgaste psicológico y emocional que implica recordar detalles de la VS y el conflicto armado en el que las mujeres estuvieron inmersas ya sea por hacer parte del conflicto o ser parte de población civil, entre otras.

---

<sup>134</sup> Algunos de estas feministas están organizadas en colectivos que sacan regularmente publicaciones de sus investigaciones sobre violencia sexual en el conflicto como es el caso del colectivo actoras de cambio en Guatemala. Puede consultarse su página web en el siguiente enlace <https://www.actorasdecambio.org.gt/>

<sup>135</sup> Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, de 17 de julio de 1998, (ONU A/CONF.183/9), [https://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome\\_statute\(s\).pdf](https://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf)

Al considerar lo anterior, como se explicó en acápite anteriores, el movimiento anti-violación es un ejemplo de estrategias desde el feminismo que centran su atención en la víctima y que puede ser considerado positivo como experiencia para abordar la VS. La perspectiva del abordaje focalizó los objetivos en construir unos canales claros de ayuda para las mujeres víctimas sobrevivientes y así hacer que la justicia y los estados pudieran contar con sus voces para la construcción de sus propios procesos de reparación. Basados en la confianza de los relatos de las mujeres para recrear el contexto y así centrarse en el proceso individual y colectivo de reparación lograron darle a las víctimas sobrevivientes una nueva visión de sus propios caminos para no ser definidas por siempre por los actos de VS que las victimizaron.

Sin embargo, no se emplea para referirse a este proceso la frase “fue un proceso exitoso” porque en cuanto el Estado comenzó a articularse a estas dinámicas para mantener las iniciativas, impuso sus propios enfoques institucionales que llevaron a que los objetivos estuvieran acordes con las políticas judiciales preexistentes, centradas en el victimario, en la desigualdad judicial y volviendo a medir a través de indicadores de eficacia la VS.

Es por ello por lo que autoras como Fulchiron indican, sobre este punto, que las víctimas sobrevivientes encuentran puntos alternativos a los judiciales conformando redes y apoyos externos que terminan por favorecer a las mujeres en sus procesos al ofrecer caminos para contrarrestar los daños por este hecho victimizante que infortunadamente tuvo que padecer en el conflicto <sup>136</sup>.

## **1.2. Aspectos legales: tipificación internacional de la violencia sexual en los conflictos armados**

El afán por controlar situaciones de violencia en la sociedad llevó a que los sistemas legales se ocuparan de la VS, en un principio, de forma muy ocasional, plasmando los delitos sexuales como “delitos contra el honor y la dignidad de la

---

<sup>136</sup> Fulchiron, Amandine. “La violencia sexual como genocidio. Memoria de las mujeres mayas sobrevivientes de violación sexual durante el conflicto armado en Guatemala”. *Revista mexicana de ciencia política y social*, núm. 228, vol.61 (2016): 391-422, [http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0185-19182016000300391&lng=es&nrm=iso](http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-19182016000300391&lng=es&nrm=iso).

víctima”<sup>137</sup>. Diversos códigos penales nacionales contemplaron por mucho tiempo, la violencia sexual como un “delito moral específico asociado con delitos contra las buenas costumbres, fornicación, adulterio, sodomía y bestialidad”<sup>138</sup>.

Dentro del Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Penal Internacional los instrumentos que captaron los delitos de VS fueron la Convención II de La Haya de 1899 relativa a las leyes y usos de la guerra terrestre y reglamento sobre las leyes y costumbres de la guerra terrestre, los Cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales, los Estatutos del Tribunal Militar Penal Internacional de Núremberg, del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TIPY), del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad y el Estatuto de Roma.

En complemento, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos contiene dentro de sus directrices postulados para prevenir y garantizar que no se vulneren los derechos humanos de las mujeres y niñas con actos de violencia sexual. Es así como la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes y su Convención Interamericana sobre la misma temática, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y su protocolo facultativo, la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, distintos tribunales regionales, nacionales e internacionales, la Declaración sobre la protección de la mujer y el niño en estados de emergencia o de conflicto armado y la Declaración de Compromiso para poner fin a la Violencia Sexual en los Conflictos, establecen el marco de protección internacional de las mujeres contra la VS.

Lo que ocurrió con las mujeres en la antigua Yugoslavia, Ruanda y República Democrática del Congo<sup>139</sup>, llevó a la comunidad internacional a pronunciarse a través de

---

<sup>137</sup> Ambos, Kai. *Violencia sexual en conflictos armados y derecho penal internacional*. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, núm. 45, 2012.

<sup>138</sup> Vigarello, Georges. *Historia de la violación: siglos XVI-XX*, 50.

<sup>139</sup> Elisa García Mingo expone que en la República democrática del Congo los actos de violencia sexual como “la violación, el secuestro y abuso sexual en cautiverio, el embarazo forzado y la esclavitud sexual” fueron frecuentes en este contexto bélico, exponiendo a través de relatos como existió relación entre la explotación y comercio ilícito de los minerales del subsuelo congoleño con la violencia sexual. García, Mingo, Elisa. “Cuando los cuerpos hablan. La corporalidad en las narraciones sobre la violencia sexual en las guerras de la República Democrática del Congo”. *Disparidades. Revista de Antropología*, núm 1, vol. 70 (2015): 161-186. Al respecto puede consultarse: Kabunda, Mbuyi. “Causas y efectos de la conflictividad en la República Democrática del Congo y los Grandes Lagos”. *Papeles de relaciones ecosociales y cambio social*, núm. 110 (2010): 133-144; Vallterra Meger, Sara. “Toward a feminist political economy of wartime sexual violence: The case of the Democratic Republic of Congo”. *International Feminist Journal of*

mecanismos legales, donde se incluyó la VS como delito planteando la integridad sexual como uno de los bienes jurídicos de las mujeres e individuos que pudieran padecer directamente los daños ocasionados con estos actos.

La premisa de que “la imagen de la mujer en una sociedad arcaica dominada por hombres conduce a la desatención de las verdaderas víctimas de la violencia sexual y a su victimización secundaria<sup>140</sup>”, captó esfuerzos de movimientos sociales de mujeres, feministas, de organizaciones de defensa de derechos humanos, aparatos estatales, de organizaciones no gubernamentales, entre otros, para que la violencia sexual pasara de ser de revisión internacional ocasional y un delito solo contra el honor, a ser un delito con atención permanente que atenta, incluso, contra la paz y la seguridad mundial.

Esta priorización ayudó a que las mujeres fueran reconocidas como sujetos pasivos y víctimas de esta conducta. Dado este panorama jurídico general, en este apartado se analizará cómo a pesar de existir, en primer lugar, un conjunto de normas internacionales que tipifican los diversos actos de violencia sexual y, en segundo lugar, un cúmulo de sentencias judiciales de Altas Cortes Internacionales sobre el asunto, los sistemas jurídicos son ineficientes debido al desgaste que trae para las víctimas sobrevivientes el someterse a un proceso penal. Esto mismo ocurre en sistemas locales de justicia que utilizan indicadores de la CPI como referentes para no generar impunidad en los casos de VS.

En ese orden de ideas, la teoría expuesta por Ambos acerca de las investigaciones temáticas focalizadas de la Corte Penal Internacional (CPI), ayudará a finalizar con el argumento estableciendo la importancia de aplicar nuevos enfoques para lograr eficiencia y así lograr que las mujeres puedan sobreponerse al conflicto armado, teniendo como prioridad a las mujeres víctimas sobrevivientes de violencia sexual como parte central para transitar hacia contextos carentes de violencia.

### **1.2.1. Marco Jurídico: Derecho Internacional Humanitario, Derecho Penal Internacional y Derecho Internacional de los Derechos Humanos**

---

*Politics*, núm.3, vol.17 (2015): 416-434; Cervera, María. “La fragilidad de la república democrática del Congo: problemas y soluciones a la posesión de recursos minerales”. *Revista electrónica de estudios internacionales (REEI)*, vol. 31 (2016): 8.

<sup>140</sup> Ambos, Kai. *Violencia sexual en conflictos armados y derecho penal internacional*, 15.



La comunidad internacional, al establecer las reglas básicas dentro de contextos bélicos internacionales y no internacionales, en su intento de establecer parámetros para humanizar la guerra contempló dentro de la categoría de civiles a las mujeres y niñas que no participaban en las hostilidades como sujetos de especial protección. Con el Derecho Internacional Humanitario (DIH) comienza la regulación internacional sobre la violencia sexual que prohibía ciertas conductas que violaban los derechos de las mujeres y niñas en conflictos armados sin establecer de forma concreta un derecho a la reparación. En tal sentido, argumenta Salomón que “el tratamiento jurídico de la violencia sexual ha ido cambiando notablemente a través de la historia, desde su negación y naturalización, su posterior regulación en las normas del DIH y su actual juzgamiento como crímenes internacionales por parte de tribunales ad hoc y la CPI”<sup>141</sup>.

La primera consagración de VS se puede deducir del “reglamento relativo a las leyes y costumbres de la guerra terrestre” el cual consagra en su artículo 46, cómo “el honor y los derechos de la familia, la vida de los individuos y la propiedad privada, así como las creencias religiosas y la práctica de los cultos, deben ser respetados”<sup>142</sup>. Partiendo de este lineamiento jurídico se consideraba la VS como aquella constituida por actos que afectaban el honor, al considerar a la mujer un instrumento de daño colectivo a células sociales fundamentales como es la familia, liderada por un hombre en la mayoría de los casos.

Sin embargo, la interpretación va más allá si se toma como referencia lo dicho por Vigarello con respecto al daño, al reconocer cómo las figuras masculinas que están en la cúspide de estructuras sociales eran las que judicialmente podrían reclamar los perjuicios de la violación de manera individual o colectiva.

Siguiendo esta línea histórica, con los hechos acontecidos en las dos guerras mundiales, los convenios de Ginebra de 1949 entraron a regular lo respectivo a la protección de todas las personas que no participan en las hostilidades en su integridad corporal<sup>143</sup>. Esto se puede apreciar en “el IV Convenio de Ginebra relativo a la protección

---

<sup>141</sup> Salmón, Elizabeth. *Introducción al Derecho Internacional Humanitario*. Comité Internacional de la Cruz Roja, 2004: 102.

<sup>142</sup> Comité Internacional de la Cruz Roja. *Reglamento relativo a las leyes y costumbres de la guerra terrestre, 18 de octubre de 1907, tomado de Derecho Internacional relativo a la conducción de las hostilidades*, CICR, 1996, <https://www.icrc.org/es/doc/resources/documents/misc/treaty-1907-regulations-laws-customs-war-on-land-5tdm39.htm>

<sup>143</sup> Salmón, Elizabeth. *Introducción al Derecho Internacional Humanitario*, 102-103.

debida a las personas civiles en tiempo de guerra” en su Título III, sección I, artículo 27, el cual condensa lo respectivo al trato que deben recibir las personas protegidas por ese instrumento internacional. Este artículo consagra que “las mujeres serán especialmente protegidas contra todo atentado a su honor y, en particular, contra la violación, la prostitución forzada y todo atentado a su pudor”<sup>144</sup>. Las reglas mínimas de guerra dentro de los campos de batalla contemplaban en estos contextos la realidad de los conflictos evidenciando que los actos de violencia eran cometidos preferencialmente hacia las mujeres por poseer socialmente una característica ya mencionada llamada honor.

Asimismo, “el protocolo I adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales, 1977”<sup>145</sup>, contempla la misma norma en su artículo 76, estableciendo en una misma categoría a los niños y a las mujeres, por ser sujetos vulnerables. Este artículo, referente a “las medidas en favor de las mujeres y de los niños” está acorde con la Sección III del mismo protocolo que cobija las garantías fundamentales de las que goza una persona que ha caído en poder de una parte contraria en el conflicto. Prohíbe “los atentados contra la dignidad personal, en especial los tratos humillantes y degradantes, la prostitución forzada y cualquier forma de atentado al pudor”<sup>146</sup>. De igual manera, “el protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional” establece en su artículo 4, literal e, la misma prohibición relativa a la VS.

El problema que se visualizó fue la exclusión de las mujeres como sujetos con capacidad para tomar decisiones para contrarrestar la guerra, siendo además víctimas de la equiparación de dos sujetos que presentan caracterizaciones diferentes: las mujeres y los niños. En los conflictos armados, esta agrupación de sujetos que necesitaban mayor

---

<sup>144</sup>Comité Internacional de la Cruz Roja, *IV Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra*, CICR, 1949, <https://www.icrc.org/es/doc/resources/documents/treaty/treaty-gc-4-5tdkyk.htm>

<sup>145</sup> Comité Internacional de la Cruz Roja, *Protocolo I adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales*, CICR, 1977. <https://www.icrc.org/es/document/protocolo-i-adicional-convenios-ginebra-1949-proteccion-victimas-conflictos-armados-internacionales-1977>

<sup>146</sup> Comité Internacional de la Cruz Roja, *Protocolo I adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales*, art.76.

atención se volvió constante al establecer como indicador de categorización en la legislación, la dependencia y la vulnerabilidad antagónica de la autonomía<sup>147</sup>.

En ese sentido, los hombres con ciertas características (blancos, heterosexuales, terratenientes, guerreros) eran los llamados autónomos mientras que “las mujeres, las personas de las clases obreras, las personas no blancas, las personas con discapacidades, las personas pertenecientes a grupos LGTBI o las niñas y niños, entre otros, fueron excluidos de la vida política, de la titularidad de derechos y de la toma de decisiones tanto en el ámbito público como en el personal, sometidos en gran medida y como consecuencia, a relaciones de opresión y dominación”<sup>148</sup>.

Esto tuvo como consecuencia que dentro de la aplicación de los convenios mencionados, se desconociera a la mujer como pleno sujeto de derechos, estando supeditadas a características sociales como el honor, el pudor o asociadas a un hombre que las representara. Adicional a eso, teniendo en cuenta que los tratados mencionados contenían medidas de justicia retributiva, la condena se convirtió en una forma de reparación informal consistente en la satisfacción de la medida para la víctima. Los hombres cuyas esposas, hijas, nietas y demás mujeres a su cargo, concebían la condena como una victoria judicial al tener la certeza de que su victimario recibiría una condena por estos hechos.

No obstante, por la cláusula de amnistía general consagrada en el protocolo II, se permite solamente las amnistías para las actividades regulares del conflicto que no son constitutivas de crímenes internacionales, dando posibilidad de que algunos delitos sean investigados, lo cual tiene como consecuencia que se deje de la condena como probable. Este protocolo en su artículo 6, literal 5, al enunciar que “las autoridades en el poder procurarán conceder la amnistía más amplia posible a las personas que hayan tomado parte en el conflicto armado o que se encuentren privadas de libertad, internadas o detenidas por motivos relacionados con el conflicto armado”<sup>149</sup> reducía las posibilidades de que una víctima de violencia sexual recibiera una reparación en estos términos.

---

<sup>147</sup> Al respecto puede consultarse: Albertson Fineman, Martha. The vulnerable subject: Anchoring equality in the human condition. *Journal of Comparative Law*, núm 4 (2013):16 y ss.

<sup>148</sup> Lazo, A. Autonomía, Dependencia y vulnerabilidad. Tesis de Maestría, UC3M, 2016.

<sup>149</sup> Comité Internacional de la Cruz Roja. *Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional*, CICR, 1977, <https://www.icrc.org/es/doc/resources/documents/misc/protocolo-ii.htm>

Esta consagración, después del segundo informe de Joinet ante la ONU generó el rechazo de la comunidad internacional al promover como efecto negativo, situaciones de perdón y olvido absoluto por generar impunidad al garantizar la repetición del delito internacional y obstaculizar las reconciliaciones sociales que se requieren para alcanzar los derechos a la paz y la seguridad<sup>150</sup>.

Adicional a esta cláusula de amnistía estaba la interpretación de los tribunales internacionales acerca del sujeto de protección del proceso judicial penal. El infractor de la conducta descrita en los instrumentos internacionales era protegido ya que la carga que tiene que soportar un hombre con las medidas de restricción de su libertad era mucho mayor que la carga de una víctima, en el caso particular, de violencia sexual.

Los instrumentos descritos, dejaban por fuera de los estamentos judiciales a las mujeres como sujetos con voz y voto dentro de la esfera del proceso penal. Infortunadamente para las mujeres la intención de enjuiciar a los victimarios fue concebida en los instrumentos internacionales para establecer reglas humanitarias en la guerra y para ponerle límites a los actos, herramientas y mecanismos utilizados en los campos de batalla; no fueron creados para restaurar o propender por el bienestar de la víctima o la reparación de ellas.

La víctima de violencia sexual solo hasta el año 2000 tuvo alguna participación en los procesos penales internacionales<sup>151</sup>. No obstante, el reconocimiento posterior de los delitos sexuales en el Estatuto de Roma enmarca el inicio del ejercicio de condensación normativa en el derecho internacional con inclusión de este tema específico. AMBOS, por su parte, relata cómo “la Comisión Preparatoria competente (“Preparatory Committee”) reconoció su criminalización autónoma como delito sexual”, tipificando los actos de VS en dos grupos, uno explícito y otro implícito. El primero, contempla la VS como delitos de lesa humanidad y de guerra y, el segundo, “protege la integridad física y el derecho a la reproducción”<sup>152</sup>. En ese orden resalta cómo con este instrumento internacional protegen bienes jurídicos colectivos e individuales

---

<sup>150</sup> Dorado Porras, Javier. "Justicia transicional, persecución penal y amnistías". *Derechos y Libertades: revista de filosofía del derecho y derechos humanos*, 82 y ss.

<sup>151</sup> A la víctima solo se permite intervenir con representación legal dentro de los distintos procesos penal en etapas probatorias.

<sup>152</sup> Ambos, Kai. *Violencia sexual en conflictos armados y derecho penal internacional*, 9.

representados en “la seguridad y la paz internacional”, y “la integridad física/psíquica, el honor y la autodeterminación personal (sexual) de la víctima”<sup>153</sup>.

El Estatuto de Roma establece como actos de violencia sexual la “violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada y cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable”<sup>154</sup>, sin realizar ninguna aclaración expresa sobre los mismos<sup>155</sup>. No obstante, es con posterioridad que se emite un documento interpretativo dominado “elementos de los crímenes” que ayudan a establecer las diversas situaciones en las cuales se pueden presentar estos actos y en qué consisten cada uno de ellos.<sup>156</sup>

Ahora bien, es el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) el que ha tomado la VS contra las mujeres como un problema que necesita priorización para erradicarse. A través de sus prácticas y su ánimo de proteger los derechos humanos utilizando un cuerpo normativo que surge para poner límites a los diversos sistemas, individuos y colectivos opresivos y discriminatorios, presenta un panorama que requiere un cambio en la consideración a las mujeres víctimas de violencia sexual en los conflictos armados no solo en el sistema penal internacional sino en los demás estamentos de justicia.

En ese entendido, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de 1978, permite rebatir la concepción de autonomía como antagónica de la vulnerabilidad estableciendo el principio de igualdad como eje fundamental para que los Estados transversalicen en sus corporaciones legislativas, administrativas y judiciales la igualdad como pilar para transformar “los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación

---

<sup>153</sup> Ambos, Kai. *Violencia sexual en conflictos armados y derecho penal internacional*, 11.

<sup>154</sup> Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, de 17 de julio de 1998, (ONU A/CONF.183/9), [https://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome\\_statute\(s\).pdf](https://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf)

<sup>155</sup> Estos delitos ya fueron descritos en el acápite de esta tesis acerca de la conceptualización de la violencia sexual en el conflicto armado.

<sup>156</sup> Por ejemplo, en el documento de Elementos de los crímenes contenidos en el Estatuto de Roma, el delito de violación contempla 4 elementos para considerar que se cometió. En primer lugar, el autor de la conducta debe “invadir el cuerpo de una persona” mediante la penetración, en cualquier parte del cuerpo de la víctima ya sea con su órgano sexual, otra parte del cuerpo o uno o varios objetos. En segundo lugar, debe existir constreñimiento en la víctima viciando así su consentimiento. En tercer lugar, establece un elemento del tipo “la conducta se haya cometido como parte de un ataque generalizado o sistemático dirigido contra una población civil”. En cuarto lugar, describe otro elemento del tipo que indica dolo y conocimiento del hecho cometido. Corte Penal Internacional, *Los Elementos de los Crímenes*, de 32 de mayo de 2010, (ONU, PCNICC/2000/1/Add.2), <https://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/a851490e-6514-4e91-bd45-ad9a216cf47e/283786/elementsofcrimesspaweb.pdf>

de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres”<sup>157</sup>.

En la recomendación general 19 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la mujer, creado por esta convención, se contempla que “Las guerras, los conflictos armados y la ocupación de territorios conducen frecuentemente a un aumento de la prostitución, la trata de mujeres y los actos de agresión sexual contra la mujer que requiere la adopción de medidas especiales protectoras y punitivas”<sup>158</sup>. Para ello, establece como derecho fundamental de sus directrices “el derecho a la protección en condiciones de igualdad con arreglo a normas humanitarias en tiempo de conflicto armado internacional o interno”<sup>159</sup>.

En ese camino, la ONU con su iniciativa de firmar “La Declaración y Plataforma de Acción de Beijing” resalta la necesidad de alcanzar la paz desde la igualdad para alcanzar el desarrollo de los diversos países que conforman la comunidad internacional. En ese entendido, en lo respectivo a la VS se manifiesta que “las mujeres deben participar en la toma de decisiones relacionadas con la resolución de los conflictos, y reconocer que las mujeres han impulsado de forma determinante las iniciativas a favor de la paz”<sup>160</sup>.

No obstante, relativo a las reparaciones de las mujeres víctimas de violencia sexual es el Consejo Económico y Social de la ONU el que en su documento de “Conclusiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer sobre las esferas de especial preocupación determinadas en la Plataforma de Acción de Beijing”, sugieren la creación de servicios de salud que traten los daños físicos y psicológicos de las mujeres víctimas en los conflictos armados<sup>161</sup>. Seguida a estas iniciativas, la

---

<sup>157</sup> Asamblea General de Naciones Unidas, *Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer*, (resolución 34/180), 18 de diciembre de 1979, <https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cedaw.aspx>

<sup>158</sup> Comité sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), *Recomendación General N° 19 sobre La violencia contra la mujer*, 29 de enero de 1992, [http://archive.ipu.org/splz-e/cuenca10/cedaw\\_19.pdf](http://archive.ipu.org/splz-e/cuenca10/cedaw_19.pdf)

<sup>159</sup> Comité sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW). *Recomendación General N° 19 sobre La violencia contra la mujer*, parr. 3 y ss.

<sup>160</sup> Organización de Naciones Unidas, ONUmujeres. *La Plataforma de Acción de Beijing cumple 20 años*, Entidad de las Naciones Unidas para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, 2020, <https://beijing20.unwomen.org/es/in-focus/armed-conflict>

<sup>161</sup> Organización de Naciones Unidas, Consejo Económico y Social. *Conclusiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer sobre las esferas de especial preocupación determinadas en la Plataforma de Acción de Beijing*, (ST/ESA/327), División para el Adelanto de la Mujer,

resolución 1325 de la ONU relata cómo las diversas esferas del conflicto armado conllevan a que los Estados procuren la participación de las mujeres en la consecución de la paz y los invita a promover planes para prevenir la violencia sexual en estos escenarios<sup>162</sup>.

Por último, se quiere destacar cómo sistemas regionales de protección de los derechos humanos se suman con sus convenciones, tratados y resoluciones a la erradicación de la violencia sexual en los conflictos armados. La Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer de 1994 conserva la tendencia de insistir en la lucha contra la violencia sexual contra las mujeres.

### **1.2.2. Marco Jurisprudencial Internacional: Jurisprudencia del Tribunal de la Antigua Yugoslavia, Ruanda y Corte Penal Internacional**

La carencia de pronunciamientos acerca de los delitos de violencia sexual hacía inexistente una línea jurisprudencial que definiera las principales categorías de los delitos con la connotación de violencia sexual. Es por ello por lo que los tribunales internacionales de la Antigua Yugoslavia, Ruanda y la actual Corte Penal Internacional definieron las bases para considerar la violencia sexual como crimen internacional que por las circunstancias contextuales podría presentar matices distintos para efectuar su juzgamiento.

Aunque otros tribunales internacionales que hacen parte de las distintas ramas del derecho internacional han fallado al respecto, se destacan estos tres por la pertinencia que tienen en el caso de estudio particular que se analizará en el siguiente capítulo. Colombia toma en cuenta en su jurisprudencia local los pronunciamientos sobre VS que sirven de base para interpretar los elementos de los crímenes relacionados con la VS.

Así pues, los principales fallos de las altas cortes internacionales tomaron protagonismo en los múltiples casos de violencia sexual en los conflictos armados por sus

---

1999, <https://www.un.org/womenwatch/daw/csw/agreedconclusions/Spanish%20AC%20PDF/43%20Spanish.pdf>

<sup>162</sup>Organización de Naciones Unidas, Consejo de Seguridad. “*Recomendaciones para la comprensión de los efectos de los conflictos armados en las mujeres y las niñas*”, (S/RES/1325/2000), <https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2006/1759.pdf?file=fileadmin/Documentos/BDL/2006/1759>

pronunciamientos interpretativos de los tratados internacionales sobre la materia. Queriendo dar freno a la renuente aceptación de estos actos asociados a las dinámicas del contexto y de las estrategias de los grupos que intervenían, tuvieron en cuenta que a pesar de que la meta de los grupos en los conflictos era salir vencedores, determinadas acciones -tipificadas como crímenes internacionales- quedaban prohibidas para la consecución de este objetivo<sup>163</sup>. Esto implicaba que los actos como los asesinatos, las torturas, las desapariciones forzadas y los genocidios fueran investigados por órganos colegiados especializados donde las investigaciones y castigos de los máximos responsables serían la forma para evitar la impunidad.

Esta necesidad de justicia internacional llevó a que se constituyeran órganos internacionales como los mencionados que darían un mensaje claro a toda la comunidad global de prohibición y castigo. Todo con el fin de que los responsables de estos delitos que atentaban contra los pilares globales fundamentales como lo son la seguridad y la paz, tuvieran una condena<sup>164</sup>. En ese ejercicio, si bien el objetivo principal era juzgar a los victimarios que causaron la violación masiva de derechos de las personas de la comunidad internacional que estuvieran consagradas de forma textual en los estatutos de los tribunales, los delitos sexuales eran concebidos en grandes categorías generales como actos propios de la guerra, concibiendo los hechos como generalizados o sistemáticos o como producto de un ataque grave contra la humanidad.

### 1.2.2.1. Descripción Jurídica de argumentos

En primer lugar, haciendo una descripción dogmática, la línea jurisprudencial del Tribunal Internacional de Ruanda presenta el caso Akayesu como el primer caso en el que la violencia sexual es analizada en conflictos armados y relacionada con el crimen

---

<sup>163</sup> Al respecto puede consultarse: López Mora, Fernando. "Crímenes de guerra, impunidad y mundialización de la justicia penal internacional en el mundo contemporáneo." En *Reflexiones sobre los derechos humanos*, editado por Rodríguez Jiménez, José Luis y Higuera del Parado, Cristina, 183-194. Ommpress Política, 2017.

<sup>164</sup> Al respecto puede consultarse: Bassiouni, Mahmoud. Cherif. "El Derecho penal internacional: Historia, objetivo y contenido." *Anuario de derecho penal y ciencias penales*, núm.1, vol.35 (1982): 5-42; Ambos, Kai. *La parte general del derecho penal internacional. Bases para una elaboración dogmática*, Trad. Ezequiel Malarino, KONRAD-ADENAUER-STIFTUNG E.V., vol.21, 2005; Olasolo, Héctor. "Los fines del derecho internacional penal". *International Law*, vol. 29 (2016): 93-146.



internacional de Genocidio<sup>165</sup>. En esta sentencia se conceptualiza la violencia sexual como “cualquier acto de naturaleza sexual que se cometa en condiciones coercitivas”, tipificándola como crimen de lesa humanidad.<sup>166</sup> En este caso, la Sala estableció que “los actos de violación y violencia sexual, así como también otros actos de daño corporal y mental graves cometidos contra las Tutsi, reflejaba la determinación de hacer sufrir a las mujeres Tutsi y de mutilarlas aún antes de matarlas, con el propósito de destruir al grupo Tutsi y, durante el proceso, causar mucho sufrimiento contra sus miembros”<sup>167</sup>.

Esto ejemplifica, dan cabida para resaltar que las categorías raciales y étnicas se convierten en razones para que las mujeres se vuelvan blancos de violencia sexual. Este es el caso de la etnia tutsi, en Ruanda, contra la que se implementó una estrategia genocida, consistente en la humillación del pueblo mediante la comisión de actos que atentaban contra la integridad de sus mujeres, sus familias y toda su comunidad, con el fin de acabar con este grupo racial; El tribunal dió cabida para que las víctimas sobrevivientes dieran a conocer sus experiencias de violencia y Mullins, por su parte, logra recopilar algunas, donde relata cómo desnudaban a las madres en las calles, perforaban los genitales con artefactos afilados, las mutilaban y a la gran mayoría las mataban a golpes<sup>168</sup>.

Asimismo, en la sentencia contra Mikaeli Muhimana se estableció la responsabilidad del autor del ilícito al probarse que violó a Musaki Kajongi, una mujer Tutsi, en el sótano de un hospital y posteriormente la abrió con un machete de los senos

---

<sup>165</sup> Al respecto puede consultarse: Amann, Diane Marie. “Prosecutor v. Akayesu. Case ICTR-96-4-T”. *The American Journal of International Law*, núm. 1, vol. 93 (1999): 195-199; Chenault, Suzanne. “And since Akayesu. The Development of ICTR Jurisprudence on Gender Crimes: A Comparison of Akayesu and Muhimana”. *New Eng. J. Int'l & Comp. L.*, vol. 14 (2007): 221; Short, Jonathan MH. “Sexual Violence as Genocide: The Developing Law of the International Criminal Tribunals and the International Criminal Court”. *Mich. J. Race & L.*, vol. 8 (2002): 503 y ss; Green, Lizabeth L. “Gender Hate Propaganda and Sexual Violence in the Rwandan Genocide: An Argument for Intersectionality in International Law”. *Colum. Hum. Rts. L. Rev.* vol. 33 (2001): 733 y ss; Mullins, Christopher W. “We Are Going to Rape You and Taste Tutsi Women” Rape during the 1994 Rwandan Genocide, 719 y ss.

<sup>166</sup> Es aquella definida como la sentencia que define la línea jurisprudencial. En este caso es Tribunal Penal Internacional de Ruanda. Fiscal contra Jean Paul Akayesu, Caso ICTR-96-4, del 1 de junio del 2001. <https://unictr.irmct.org/en/cases/ictr-96-4>

<sup>167</sup> Al respecto Cejil hace un resumen preciso de lo que la sala refirió con respecto a la violencia sexual en su informe del caso de Jean Paul Akayesu. Cejil. *Violencia de Género*, 23 de junio de 2020, [https://www.cejil.org/sites/default/files/legacy\\_files/IV.%20Tribunal%20Penal%20Internacional%20para%20Ruanda\\_1.pdf](https://www.cejil.org/sites/default/files/legacy_files/IV.%20Tribunal%20Penal%20Internacional%20para%20Ruanda_1.pdf)

<sup>168</sup> Mullins, Christopher W. “We Are Going to Rape You and Taste Tutsi Women. Rape during the 1994 Rwandan Genocide”, 719 y ss.

a la vagina<sup>169</sup>. Igualmente, en la sentencia contra Laurent Semanza, éste es condenado a 35 años de prisión en Ruanda debido a que incitó a hombres hutus a ejercer violencia sexual contra mujeres Tutsi.

Al respecto, ese Tribunal argumenta que uno de los elementos para tener en cuenta es que las mujeres en los casos de juzgamiento eran sometidas por la fuerza y golpeadas hasta quitarles la vida. Esto lo evidenció en las pruebas tenidas en cuenta por el alto órgano colegiado, donde los testimonios de las víctimas y de los victimarios demostraban las intenciones de someter y luego acabar con la vida de las personas a las que violaban utilizando mecanismos violentos. Al respecto, el TIPR, en la sentencia Gacumbitsi, escucha a las víctimas y valora las intenciones de los victimarios en testimonios que revelan cómo “los palos debían insertarse en sus genitales si se resistía”. Es allí donde el Tribunal hace énfasis en este tipo de delitos como delitos de lesa humanidad donde es vital probar el nexo entre el acto y el ataque generalizado y sistemático<sup>170</sup>.

Sin embargo, en otros casos, el Tribunal considera que cometer delitos relacionados con la violencia sexual son simples agravantes. Así, en el caso Kayishema y Col. y Ruzindana, si bien vislumbra una posible imputación por violación, el victimario es condenado por otros cargos y no por los de violencia sexual al ser considerado un delito conexo<sup>171</sup>. Caso similar se presentó en el caso Karemera et. al. donde el Tribunal consideró los hechos por violencia sexual como agravantes porque los acusados ya habían sido condenados por otros crímenes<sup>172</sup>.

De igual manera, en la sentencia de Niyitegeka se refuerza esta línea de definición e interpretación absolviendo a los presuntos victimarios de delitos sexuales por este delito

---

<sup>169</sup> Tribunal Penal Internacional de Ruanda. Fiscal contra Mujimana, Caso ICTR-95-IB-T, 1995: par.551 y ss., <https://www.womenslinkworldwide.org/observatorio/base-de-datos/fiscal-v-mikaeli-muhimana-caso-no-ictr-95-1b-t>

<sup>170</sup> Tribunal Penal Internacional de Ruanda. Fiscal contra Sylvestre Gacumbitsi, Case No. ICTR-2001-64-A, 7 de julio de 2006, <https://unictr.irmct.org/sites/unictr.org/files/case-documents/ictr-01-64/appeals-chamber-judgements/en/060707.pdf>

<sup>171</sup> Tribunal Penal Internacional de Ruanda. Fiscal contra Clément Kayishema y Obed Ruzindana, Case No. ICTR-95-1, 1 de junio de 2001, <https://unictr.irmct.org/sites/unictr.org/files/case-documents/ictr-95-1/appeals-chamber-judgements/en/010601.pdf>

<sup>172</sup> Tribunal Penal Internacional de Ruanda. Édouard Karemera y Matthieu Ngirumpatse, Case No. ICTR-98-44-A, 29 de septiembre de 2014, <https://unictr.irmct.org/sites/unictr.org/files/case-documents/ictr-98-44/appeals-chamber-judgements/en/140929.pdf>

y condenándolos por delitos de lesa humanidad<sup>173</sup>. Además, en la sentencia Kajelijeli donde hay una condena por 45 años de prisión por genocidio, solo se procesó por este crimen y no por violencia sexual<sup>174</sup>. Solo en casos como los de Musema, se anularon los cargos en segunda instancia por parte del Tribunal debido al hallazgo de un error judicial en la valoración de los testimonios de las víctimas. Pero no se apartó de lo que se consideraba un delito sexual.

Por su parte el Tribunal Penal Internacional de la Antigua Yugoslavia (TPIY), sostiene en sus diversas sentencias la tipificación de los delitos sexuales como una forma de tortura<sup>175</sup>. Este delito según el artículo 5 de su Estatuto establece como delito de lesa humanidad la violación, otorgando competencia al TPIY para conocer estos casos siempre y cuando “hayan sido cometidos contra la población civil durante un conflicto armado interno o internacional”<sup>176</sup>.

La sentencia Mucic et.al. analiza en el caso de Delic, cómo con coerción se castigaba a las mujeres por su incapacidad para proporcionar información utilizando la intimidación y la violación<sup>177</sup>. Además, en la sentencia Delalic -más conocida como Celebici- este tribunal estimó que para que haya delito de violación se debe corroborar que el victimario utilizó partes de su cuerpo o cosas para penetrar cualquier parte íntima de la mujer, utilizando cualquier estrategia para ello como “la intimidación, la fuerza o la coerción”<sup>178</sup>.

---

<sup>173</sup> Tribunal Penal Internacional de Ruanda. Fiscal contra Eliézer Niyitegeka, Case No. ICTR-96-14-T, 16 de mayo de 2003, <https://unictr.irmct.org/sites/unictr.org/files/case-documents/ict-96-14/trial-judgements/en/030516.pdf>

<sup>174</sup> Tribunal Penal Internacional de Ruanda. Fiscal contra Juvénal Kajelijeli, Case No. ICTR-98-44A-A, 23 de mayo de 2005, <https://unictr.irmct.org/sites/unictr.org/files/case-documents/ict-98-44a/appeals-chamber-judgements/en/050523.pdf>

<sup>175</sup> Gray, Harriet, Stern, Maria y Chris Dolan. “Torture and sexual violence in war and conflict: The unmaking and remaking of subjects of violence”. *Review of International Studies*, (2019): 1-20, <https://www.icty.org/en/cases>

<sup>176</sup> Este argumento es reiterado en sentencias del Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia como Momčilo Krajišnik y Vasiljević. Además, puede consultarse el Estatuto del Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia, <https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/InternationalTribunalForTheFormerYugoslavia.aspx>.

<sup>177</sup> Al respecto puede consultarse también: Odio Benito, Elizabeth. “De la violación y otras graves agresiones a la integridad sexual como crímenes sancionados por el derecho internacional humanitario (crímenes de guerra)”. *Órgano Informativo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México*, (2001): 98-112.

<sup>178</sup> Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia. Fiscal contra Mucic y col, Caso IT-96-21, del 20 February 2001, <https://www.icty.org/en/case/mucic>

persona"<sup>179</sup>. Y en casos como el expresado en la sentencia Zelenovic, las mujeres fueron consideradas como objetos sexuales siendo arrestadas, separadas de sus hijos como castigo por no revelar el paradero de sus esposos, y violadas si mentían.

También este Tribunal expresa novedad al referirse al consentimiento de la víctima en este tipo de delitos. En su sentencia Kunarac y Col. establece que la falta de consentimiento y el conocimiento e intención del acusado son claves básicas para categorizar un delito de violencia sexual. Igualmente, establece que el delito de violación es aquel que se da por penetración sexual por leve que sea, de la vagina o ano de la víctima por el pene del perpetrador o la boca de la víctima por el pene perpetrador, donde tal penetración sexual ocurre sin el consentimiento de la víctima. El consentimiento para este propósito debe ser otorgado voluntariamente como resultado del libre albedrío de la víctima evaluando en el contexto, las circunstancias de comisión.

En la sentencia Furundzija, la sala determina que se está frente a una violación si existe penetración sexual por la vagina, por el ano o se utilizan objetos distintos para llevarla a cabo, así como el sexo oral siempre que exista coerción o fuerza por parte del victimario<sup>180</sup>. En este caso, el tribunal hace una aclaración sobre el consentimiento de las víctimas manifestando que la fuerza no siempre implica violencia, pero en el caso de un conflicto armado, las circunstancias vician el consentimiento teniendo como efecto que no haya una relación sexual consentida. En este caso particular, el acusado fue condenado por cometer crímenes contra musulmanas bosnias que fueron interrogadas y violadas.

Sin embargo, para la investigación resulta pertinente destacar que este Tribunal presenta una novedad en esta sentencia ya que consideró otros delitos diferentes a la violación dentro de la categoría de delitos de violencia sexual. Para dar su argumentación el TPIY relaciona por primera vez el género con el derecho consuetudinario argumentando que conductas como la esclavitud sexual hacen parte de los delitos de lesa humanidad y, por ende, se asocian a los delitos de violencia sexual<sup>181</sup>.

---

<sup>179</sup> Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia. Fiscal contra Mucić y col, Caso IT-96-21, del 20 February 2001, <https://www.icty.org/en/case/mucic>

<sup>180</sup> Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia. Fiscal contra Furundžija , Caso IT-95-17 / 1, del 10 diciembre de 1998, <https://www.icty.org/case/furundzija>

<sup>181</sup> Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia. Fiscal contra Furundžija, 67.

Esto cobra importancia ya que el género como construcción social que define ciertos roles sociales para mujeres y para hombres no había sido tomado en cuenta para tipificar un delito con estas características sino como somero y circunstancial. En esa línea, para interpretar los tratados internacionales sobre la guerra se estableció la relación del delito sexual con la violencia dentro del conflicto, pero no se desconoció la sinergia entre los patrones sociales de dominación con el contexto bélico donde se presentaban. Lo negativo, fue que solo fue una consideración que no tomó fuerza en su momento sino con posterioridad ya que fue ejemplo para construcción de otros instrumentos internacionales como el Estatuto de Roma donde se consideró el delito de embarazo forzado<sup>182</sup>.

Ahora bien, un problema que se presentaba en estos fallos consistía en considerar los delitos sexuales como causales de agravación y no como delitos autónomos que merecían una pena por ser conductas principales de castigo. Es el caso, por ejemplo, de la sentencia Bralo, donde la condena por crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad se agravó por contener el delito de tortura, tratos crueles inhumanos y degradantes en los que se encontraba el delito de violación<sup>183</sup>.

Posteriormente, por el alto índice de conflictos armados a nivel mundial y en aras de la protección de la paz y la seguridad global se crea la Corte Penal Internacional con el Estatuto de Roma, el cual contiene los delitos de VS como crímenes de guerra o como delitos de lesa humanidad. El Estatuto de Roma establece como delitos sexuales “la tortura sexual, la mutilación, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, la esterilización forzada y el embarazo forzado, y demás actos de igual naturaleza”<sup>184</sup>.

Sin embargo, AMBOS argumenta que estos ilícitos en su mayoría quedaron consagrados en el papel, pero sin darle prioridad al género exceptuando el de embarazo forzado donde el sujeto pasivo siempre será una mujer<sup>185</sup>. Esta afirmación trae como reflexión la obviedad de las construcciones sociales que se dan en relación con ser

---

<sup>182</sup> Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia. Fiscal contra Furundžija , 98 y ss.

<sup>183</sup> En este caso el crimen de violencia sexual que cometió fue la violación de mujeres, la humillación y mutilación de las mismas (les mordieron los pezones y los victimarios les eyacularon en el cuerpo). Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia. Fiscal contra Bralo, IT-95-17-S, del 7 diciembre de 2005: parr. 39 <https://www.icty.org/en/case/bralo>

<sup>184</sup> Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia. Fiscal contra Bralo, parr. 92.

<sup>185</sup> Ambos, Kai. *Violencia sexual en conflictos armados y derecho penal internacional*, 11.

mujeres, las cuales se convierten en causal principal para convertirse en víctimas directas de la violencia sexual.

Ahora bien, el espectro de elementos de la violencia sexual es expandido en comparación con los tribunales analizados en los párrafos anteriores al considerar el factor de “contexto” como prioritario para establecer un crimen internacional (en conflicto armado internacional o no internacional), la configuración del tipo penal de acuerdo a los bienes jurídicos tutelados (paz y seguridad), si el delito cometido es considerado con características de lesa humanidad producto de “un ataque generalizado y sistemático” o como un crimen de guerra o genocidio, la intención del autor y el consentimiento de la víctima.

El tribunal hace una serie de interpretaciones del Estatuto de Roma que da los lineamientos generales de los delitos sexuales, y del documento que compila “los elementos constitutivos de los crímenes”<sup>186</sup> que tiene descripciones específicas para cada una de las conductas.

No obstante, la punición de estos delitos se ha convertido para algunos sectores sociales en algo irrisorio y poco trascendental<sup>187</sup>. AMBOS, por su parte, al referirse a lo consagrado en el Estatuto de Roma, percibe que existe una “concepción subyacente sobre la igualdad y los derechos de género que influye en la punición de la violencia sexual”<sup>188</sup>. Por ende, las penas para estos delitos no están influenciadas por discriminaciones de género comprobadas en las sociedades inmersas en los conflictos.

Es por eso que la neutralidad de la CPI puede reflejarse en sus sentencias al establecer que la violencia sexual está constituida por actos que atentan contra la dignidad de las personas que la padecen considerando como agravantes de los delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio, las intenciones de los agresores de violar a las mujeres por el simple hecho de serlo. Esta línea la siguen sentencias como la de Jean

---

<sup>186</sup> Corte Penal Internacional, *Los Elementos de los Crímenes*, de 32 de mayo de 2010, (ONU, PCNICC/2000/1/Add.2), <https://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/a851490e-6514-4e91-bd45-ad9a216cf47e/283786/elementsofcrimesspaweb.pdf>

<sup>187</sup> Al respecto puede consultarse: Copello, Patricia Laurenzo. "Violencia de género y derecho penal de excepción: entre el discurso de la resistencia y el victimismo punitivo." *Cuadernos de Derecho judicial*, vol. 9 (2007): 33-74.

<sup>188</sup> Copello, Patricia Laurenzo. “Violencia de género y derecho penal de excepción: entre el discurso de la resistencia y el victimismo punitivo”, 15.

Pierre Bemba<sup>189</sup>, la de Omar Hassan Ahmad Al Bashir<sup>190</sup> Al-Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud<sup>191</sup>, Katanga et. al<sup>192</sup>, Kony y col.<sup>193</sup>, Harun y Kushayb<sup>194</sup>, donde se corroboran actos de violencia sexual como tortura, esclavitud sexual, violación, entre otros.

Una vez probados estos hechos, la Corte puede ordenar una reparación a las víctimas ya que crea el fondo fiduciario para las víctimas de crímenes internacionales el cual funciona con el propósito “de apoyar e implementar programas capaces de lidiar con los daños resultantes de los crímenes de la CPI”<sup>195</sup>. Es el caso, por ejemplo, de República Centroafricana donde se financiaron dos proyectos para ayudar a la rehabilitación de las víctimas de violencia sexual y programas de ayuda psicosocial<sup>196</sup>.

Sin embargo, a pesar de tener tratados, convenciones, resoluciones y directrices sobre la VS en los conflictos armados, ésta no disminuye en estos contextos. Si bien Wood referencia la dependencia de las dinámicas de VS con las particularidades de cada conflicto, la percepción tiende al aumento. Las mujeres con este respaldo jurídico y con la confluencia de diversos fenómenos como la era digital y las nuevas tecnologías de la comunicación, dan a conocer lo sucedido desde su experiencia individual y colectiva. Esto permite que en los conflictos en cada territorio se puedan apreciar cómo la VS se presenta en ellos, así tengan ocurrencia a miles de kilómetros del otro.

---

<sup>189</sup> Corte Penal Internacional. Fiscal contra Jean Pierre Bemba Gombo, Caso ICC-01/05-01/08, del 21 de junio del 2016, <https://www.icc-cpi.int/CaseInformationSheets/bembaEng.pdf>

<sup>190</sup> Corte Penal Internacional. Fiscal contra Omar Hassan Ahmad Al Bashir, Caso ICC-02/05-01/09, del 4 de marzo de 2009, <https://www.icc-cpi.int/CaseInformationSheets/albashirEng.pdf>

<sup>191</sup> Corte Penal Internacional. Fiscal contra Al-Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud, Caso ICC-01/12-01/18, de 30 septiembre de 2019, <https://www.icc-cpi.int/CaseInformationSheets/al-hassanEng.pdf>

<sup>192</sup> Corte Penal Internacional. Fiscal contra Germain Katanga, Caso ICC-01/04-01/07, de 7 de marzo de 2014, <https://www.icc-cpi.int/drc/katanga>

<sup>193</sup> Corte Penal Internacional. Fiscal contra Kony y col, Caso ICC-02/04-01/05, de 8 de julio de 2015 <https://www.icc-cpi.int/uganda/kony>

<sup>194</sup> Corte Penal Internacional. Fiscal contra Harun y Ali Kushayb, Case ICC-02/05-01/07-2, de 27 de abril de 2017, <https://www.icc-cpi.int/Pages/cases.aspx?k=Kushayb>

<sup>195</sup> Fondo Fiduciario en Beneficio de las Víctimas, *La CPI prevé una justicia restauradora y retributiva*, 20 de enero de 2020, <http://www.coalitionfortheicc.org/es/explora/fondo-fiduciario-en-beneficio-de-las-victimas>

<sup>196</sup> Con respecto a estos proyectos los cuales abordan temáticas como “Asistencia psicosocial de víctimas de violencia sexual en Bunia y 8 lugares cercanos” y “Asistencia psicosocial de víctimas de violencia sexual en Bunia y 8 lugares cercanos”, establecen montos financiados por este fondo los cuales oscilan los 800.000 dolares por proyecto. Puede consultarlos en: Fondo de Verdad para las Víctimas, *Proyectos*, 20 de noviembre 2020, <https://www.trustfundforvictims.org/node/32>

Es por ello que argumentos como los de Wood, cobran relevancia al analizar cada conflicto con sus particularidades, dinámicas y contextos, que dan apertura a nuevas soluciones para que los victimarios sean juzgados y con ello se contribuya a la reparación de las víctimas sobrevivientes.

#### **1.2.2.2. Críticas del feminismo a la interpretación judicial en los procesos de VS**

La responsabilidad individual, la tipificación de la VS en distintos conflictos armados, la amplia gama de legislación internacional y local sobre la materia, la participación de la víctima en los procesos penales y la reparación hacia las víctimas, trazaron lo que las feministas han considerado avances en materia de VS<sup>197</sup>. Tener un base jurídica y doctrinal que tomara en consideración que la VS en estos contextos bélicos debía ser reconocida, estudiada y definida en términos de equilibrio entre los objetivos del derecho penal internacional de investigar y castigar a los victimarios de estos delitos y los derechos reconocidos a las víctimas en diversas áreas del derecho internacional, establecieron un avance en el reconocimiento de las mujeres como agentes políticos, sujetos de transformación y en pleno ejercicio de sus derechos.

Sin embargo, dentro de las mismas corrientes feministas al reconocerse los avances también se ofrece un análisis crítico de los procesos penales de VS, dando a conocer propuestas para que los Tribunales Internacionales tengan argumentaciones acordes con las experiencias de VS de las mujeres y poder así mejorar las prácticas procesales. Esto con el fin de que los procesos puedan terminar con mayor eficiencia,

---

<sup>197</sup> Al respecto hay varios estudios que relatan avances y críticas a los Tribunales Internacionales con respecto a los delitos relacionados con el género. Entre estos pueden consultarse: Guzman, Margaret. "Giving priority to sex crime prosecutions: The philosophical foundations of a feminist agenda." *International Criminal Law Review*, Núm.3, vol.11 (2011): 515-528; Charlesworth, Hilary, Chinkin, Christine, y Wright, Shelley. "Feminist approaches to international law." *The American Journal of International Law*, núm, 4, vol. 85 (1991): 613-645; Rodríguez Saavedra, Ángela. "Similitudes y diferencias de los Tribunales Ad-Hoc para Ruanda y la ex -Yugoslavia desde una perspectiva feminista". *UNIVERSITAS. Revista de Filosofía, Derecho y Política*, vol. 28 (2018): 2-18; Halley, Janet, et al. "From the international to the local in feminist legal responses to rape, prostitution/sex work, and sex trafficking: Four studies in contemporary governance feminism". *Harv. JL & Gender*, vol. 29 (2006): 335; Mertus, Julie. "Shouting from the bottom of the well the impact of international trials for wartime rape on women's agency." *International Feminist Journal of Politics*, núm. 1, vol 6(2004): 110-128.



significando el menor costo en la vida de las mujeres que siguen siendo marcadas por el hecho victimizante que se suscitó con los actos de VS en el conflicto armado.

La primera crítica que se presenta es la relacionada con el enfoque que los Tribunales Internacionales debieron tener al momento de ser instaurados, representada en la principal categoría analítica y contextual: el género. Por su parte Green, Copelon, Cotter y Stephens, al referirse al Tribunal Internacional de la Antigua Yugoslavia, enfatizan que el enfoque de género desde el feminismo significaría desarrollar estándares y procedimientos que evaluaran de manera justa en los procesos penales los actos de VS cometidos por los victimarios, eliminando los estereotipos sexistas y los presupuestos discriminatorios hacia las mujeres que sufrieron de forma directa por estos actos<sup>198</sup>.

Ellas argumentan en su análisis que proteger a las víctimas y testigos contra los exámenes incendiarios y hostigadores típicos de los enjuiciamientos por violencia sexual fue algo residual y no prioritario para el Tribunal, en parte por el enfoque puramente penalista<sup>199</sup>. Esto evidenció una necesidad dentro de los procesos de VS consistente en la capacitación de todo el personal que interviene en los procesos penales en enfoque de género y medidas de sensibilización cuando se trata de VS en los conflictos armados.

Las personas competentes de los Tribunales, al realizar las entrevistas a las víctimas en algunos casos, carecían de experiencia o conocimientos previos para trabajar con víctimas sobrevivientes de delitos sexuales<sup>200</sup>. Determinar las necesidades de la víctima sobreviviente es uno de los retos de este enfoque ya que la persona que se está entrevistando no debe simplemente captar la información que necesita el Fiscal para llevar un caso a juicio ante un Juez sino establecer un ambiente de confianza y comprensión donde la víctima sobreviviente sea informada de sus derechos, lo que se hará con su testimonio dentro del proceso, del retiro en cualquier momento de su entrevista si así lo desea, y se le deberá informar de los términos procesales.

---

<sup>198</sup> Green, Jennifer, et al. "Affecting the rules for the prosecution of rape and other gender-based violence before the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia: A feminist proposal and critique". *Hastings Women's LJ*, Vol 5 (1994): 171.

<sup>199</sup> Green, Jennifer, et al. "Affecting the rules for the prosecution of rape and other gender-based violence before the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia: A feminist proposal and critique", 171.

<sup>200</sup> O'Reilly, María. "Peace and justice through a feminist lens: Gender justice and the women's court for the former Yugoslavia". *Journal of Intervention and Statebuilding*, núm.3, vol.3 (2016): 419-445.

Una crítica a estos procesos es el silencio sobre la permisión de escoger el funcionario judicial para ser entrevistada, ya que la víctima sobreviviente está supeditada a lo que le indiquen o le ordenen las personas que dirigen el proceso<sup>201</sup>. Esto puede encontrar mayor comprensión en casos prácticos donde las mujeres son violadas por un grupo de hombres y su aprehensión hacía ellos es tal, que enfrentarse a contar su experiencia en el Tribunal cuando las figuras son en número dispares, genera desconfianza y desistimiento de la acción por parte de la víctima sobreviviente.

Al respecto, Green, Copelon, Cotter y Stephens argumentan que, si el Tribunal decidiera que, en un caso particular, el proceso requiere la divulgación de la identidad de una víctima sobreviviente o testigo, la víctima o testigo debe conservar el derecho a retirar su participación en el caso y mantener la confidencialidad, incluso si tal decisión es perjudicial para el caso de la Fiscalía<sup>202</sup>. Así mismo proponen los medios que podrían evitar la revictimización por este motivo indicando que deberían permitirse deposiciones grabadas en video para evitar que la víctima sobreviviente testifique en público contra su voluntad en presencia de su presunto agresor. Además, también serviría para que las personas encargadas de las entrevistas no tengan que tomar más de una entrevista a la víctima sobreviviente.

Por otro lado, para aportar al debate, las autoras exponen una propuesta donde argumentan que procesalmente este enfoque debe ir más allá de considerar si las víctimas son hombres o mujeres, teniendo presente que los derechos de las mujeres serán respetados sin desequilibrar al acusado en sus derechos<sup>203</sup>. Es por ello, que realizan la comparación de los fallos del Tribunal de la antigua Yugoslavia y la del Tribunal Internacional de Ruanda, estableciendo que deberían admitir todas las pruebas pertinentes y luego evaluar su peso para no desestimar los testimonios de las víctimas a priori, por falta probatoria que resulte de exámenes físicos para probar los hechos objeto de

---

<sup>201</sup> Al respecto puede consultarse: Copelon, Rhonda. "Gender crimes as war crimes: Integrating crimes against women into international criminal law". *McGill LJ*, vol. 46 (2000): 217; Lawson, Tamara F. "A shift towards gender equality in prosecutions: Realizing legitimate enforcement of crimes committed against women in municipal and international criminal law". *S. Ill. ULJ*, vol. 33 (2008): 181.

<sup>202</sup> Green, Jennifer, et al. "Affecting the rules for the prosecution of rape and other gender-based violence before the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia: A feminist proposal and critique", 172 y ss.

<sup>203</sup> Green, Jennifer, et al. "Affecting the rules for the prosecution of rape and other gender-based violence before the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia: A feminist proposal and critique", 172 y ss.

controversia. Esta apreciación se logró al analizar cómo el género y el sexo fueron interpretados como algo igual resaltando cómo dan prelación a las características biológicas que denotan el sexo en la configuración de los delitos de VS.

Esto para las feministas constituyó un problema debido a que el elemento contextual y la interpretación sobre el género basado en la construcción social que determina comportamientos, roles y estilos de vida que permean la vida de las personas que conviven en las diversas sociedades, son superfluamente analizadas en los fallos<sup>204</sup>. Esto no solo tiene consecuencias en la parte estrictamente penal sino en la posterior tasación de los perjuicios a las víctimas sobrevivientes porque no se tiene en cuenta que por este constructo social se establecieron roles estereotipados con respecto a la sexualidad y corporalidad de las mujeres que fueron violadas por categorías como estas<sup>205</sup>.

No obstante, la crítica de otras feministas como Iglesias expone que la interpretación del género no debe hacerse de forma aislada sino en conjunto con otras categorías de opresión que se interrelacionan en contextos como los conflictos armados<sup>206</sup>. En esa línea argumenta que debe desecharse “la definición esencialista del género” que justifica la violencia por el hecho de ser mujeres porque esto conlleva a que los Estados y sus sistemas de justicia se desentiendan de su responsabilidad de prevenir, atender, investigar, castigar y reparar a las víctimas sobrevivientes de VS. Además de esto, sostiene que los sistemas de opresión que interactúan deben ser tenidos en cuenta en los análisis debido a que los jueces y lo que ella llama “feminismo punitivo” caen en el abismo de desestimar la experiencia de las mujeres víctimas sobrevivientes de VS para solo observar el delito que se comente<sup>207</sup>.

En ese entendido, cuando las mujeres están inmersas en sociedades con disímiles culturas, identidades de género y orientaciones sexuales diversas, corrientes religiosas establecidas, posiciones políticas diferentes, etc., el análisis de género debe implicar

---

<sup>204</sup> Moshan, Brook Sari. “Women, war, and words: the gender component in the permanent international criminal court’s definition of crimes against humanity.” *Fordham Int’l LJ*, vol. 22 (1998): 154.

<sup>205</sup> Oosterveld, Valerie. “The definition of gender in the Rome Statute of the International Criminal Court: A step forward or back for international criminal justice”. *Harv. Hum Rts. J.*, vol. 18 (2005): 55.

<sup>206</sup> Skulj Iglesias, Agustina. “Estado penal y populismo punitivo Reflexiones feministas sobre el devenir punitivista del feminismo”. *Viento sur: Por una izquierda alternativa*, vol. 168 (2020): 77-85.

<sup>207</sup> Skulj Iglesias, Agustina. “Estado penal y populismo punitivo Reflexiones feministas sobre el devenir punitivista del feminismo”, 76 y ss.

indagar por el género y las distintas categorías y construcciones que se tejen para que la VS perviva en los conflictos armados.

Es allí donde las feministas coinciden en relatar su preocupación cuando los distintos Tribunales, entre los que están la Corte Penal Internacional, carecen de una interpretación más allá del sexo que defina el enfoque de género<sup>208</sup>. Oosterveld por su parte, al realizar un análisis de la definición del género en el Estatuto de Roma revela su desasosiego con respecto a cuatro motivos principales enmarcados en: 1) la combinación de género y sexo; 2) las limitaciones del elemento contextual relacionado con la construcción social 3) la exclusión de orientación sexual de la definición de género; y 4) la limitación que existe para establecer una definición apropiada con respecto al género<sup>209</sup>. Esta autora, para referirse a estos puntos relata que la palabra género aparece varias en el Estatuto de Roma, destacando por ejemplo las relativas a la definición de los crímenes de lesa humanidad, la protección de las víctimas y testigos, y su participación en los procedimientos ante la CPI<sup>210</sup>.

Sin embargo, pese a que está estipulada en varias partes de instrumento legal, sostiene -apoyada en varias autoras feministas- que esta Corte tiende a no distinguir entre género y sexo, centrando su interpretación en las distinciones físicas y biológicas entre hombres y mujeres. Esto trae como consecuencia, entre muchas otras, que se deje poco espacio para el análisis de la construcción de roles sexuales y de género que hacen parte de los motivos por los cuales las mujeres son las víctimas más frecuentes de VS sexual en los conflictos armados.

---

<sup>208</sup> Dentro de esta línea argumentativa encontramos: Oosterveld, Valerie. "The definition of gender in the Rome Statute of the International Criminal Court: A step forward or back for international criminal justice", 55; Restrepo Rodríguez, Diana, y Paz Francés, Lecumberri. "Rasgos comunes entre el poder punitivo y el poder patriarcal". *Revista Colombiana de Sociología*, núm.1, vol. 39(2016): 9-11; Snider, Lauren. "Feminism, punishment and the potential of empowerment". *Can. JL & Soc*, vol. 9 (1994): 75; Daly, Kathleen, y Stubbs, Julie. "Feminist engagement with restorative justice". *Theoretical Criminology* núm.1, vol.10 (2006): 9-28, Sácouto, Susana. "Victim participation at the International Criminal Court and the Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia: A feminist project". *Mich. J. Gender & L.* núm.18 (2011): 297, Bedont, Barbara, y Hall Martinez, Katherine. "Ending impunity for gender crimes under the International Criminal Court". *Brown J. World Aff.* núm.6 (1999): 65.

<sup>209</sup> Oosterveld, Valerie. "The definition of gender in the Rome Statute of the International Criminal Court: A step forward or back for international criminal justice", 56 y ss.

<sup>210</sup> Oosterveld, Valerie. "The definition of gender in the Rome Statute of the International Criminal Court: A step forward or back for international criminal justice", 56 y ss.

En ese caso, la CPI simplemente consideraría si una víctima o un testigo es hombre o mujer, en lugar de considerar también la construcción social vinculada con la feminidad y la masculinidad en una sociedad determinada, que confluye con otros factores que hacen que la VS pueda cometerse en estos contextos bélicos<sup>211</sup>. Sumado a eso, se estaría ante un retroceso con respecto a la ampliación de la VS como actos más allá de la violación. Si la interpretación es netamente relativa al sexo, el análisis cultural de otros tipos de violencia sexual como los que cobijan actos de violencia sexual como la desnudez forzada asociadas a construcciones sociales como la virginidad femenina no tendrían en realidad posibilidad de ser objeto de interpretación por esta Corte.

Ahora bien, esta autora termina su intervención estableciendo las críticas que otros feminismos o corrientes establecen relacionadas con la heteronormatividad, donde las experiencias de mujeres trans y de otras orientaciones de género y sexuales no cuentan dentro de lo considerado género<sup>212</sup>. En ese entendido, autoras como Charlesworth, Chinkin y Wright, describen como los Tribunales Penales Internacionales y demás órganos de justicia internacional tienden a destacar en sus fallos cierto tipo de experiencias de mujeres cayendo en la homogeneidad de lo que se considera la vida de una mujer víctima sobreviviente de la VS<sup>213</sup>. Esto dificulta la comprensión adecuada de los efectos de la VS en las mujeres, debido a que cada experiencia es única y está relacionada no solo en lo que diga su documento de certificación de nacimiento relativo a su sexo, sino a una construcción que lleva a la exploración de su contexto.

Lo relatado, lleva también a considerar una de las ventajas de tener un cuerpo normativo relativo a juzgar a los responsables de la VS en los conflictos armados, como algo netamente legalista que se queda en el papel. La materialización de las medidas para que los procesos avancen es una preocupación constante cuando el tema probatorio se vuelve un factor contrario para el juzgamiento de los victimarios de VS en contextos bélicos.

Uno de estos se evidencia en los problemas de interpretación sobre el

---

<sup>211</sup> Oosterveld, Valerie. "The definition of gender in the Rome Statute of the International Criminal Court: A step forward or back for international criminal justice", 56 y ss.

<sup>212</sup> Oosterveld, Valerie. "The definition of gender in the Rome Statute of the International Criminal Court: A step forward or back for international criminal justice", 57 y ss.

<sup>213</sup> Charlesworth, Hilary, Chinkin, Christine, y Wright, Shelley. "Feminist approaches to international law", 613-645.

consentimiento en los delitos de VS, siendo una de las críticas más fuertes del feminismo. Visseur, por ejemplo, considera que al no existir un escalafón normativo que determine cuál norma es la que se debe aplicar con respecto a la falta de consentimiento, cada órgano de justicia falla de acuerdo con criterios establecidos en un sistema machista y patriarcal<sup>214</sup>.

Lo que sí puede ver es que, todas estas normas comienzan a considerar que la VS no solo se enmarca en una única forma de comisión, sino que amplían la gama de esta para no dejar por fuera conductas que tienen esta connotación. Para tal efecto, la autora refiere que es allí donde la reparación por vía penal cobra sentido, por considerar dentro de los procesos muchas conductas como VS<sup>215</sup>.

No obstante, como cada Tribunal le da una interpretación a lo que esto significa, para la autora la falta de criterios objetivos denotan un repliegue con respeto a los derechos de la mujer ya que se indaga de manera abrupta sobre la autonomía sexual en contextos de VS. Aduce que la generalización y la conceptualización cerrada de lo que es expresar consentimiento en un acto de VS, induce al error de interpretación cuando lo que se quiere es esclarecer quién y por qué cometió un acto de VS en un determinado contexto<sup>216</sup>. Esto hace que las mujeres se abstengan de denunciar e ir a juicio a declarar porque no se puede probar en el proceso que la mujer gritó o manifestó explícitamente, así conociera al sujeto, que no quería mantener contacto sexual con el victimario.

Destaca, además, como varios Tribunales penales acertaron en desestimar estas apreciaciones porque el contexto en conflictos armados ya aduce una posición de superioridad y de opresión, que puede estar permeada por la fuerza o la coerción. Sin embargo, denota que no debe per se considerarse esto un retroceso de la capacidad de decisión que tienen las mujeres sobre su sexualidad ni corporalidad ya que irían en detrimento para el ejercicio de su derecho humano al acceso a la justicia penal en

---

<sup>214</sup> Visseur Sellers, Patricia. *The prosecution of sexual violence in conflict: the importance of human rights as means of interpretation*, 15 y ss.

<sup>215</sup> Visseur Sellers, Patricia. *The prosecution of sexual violence in conflict: the importance of human rights as means of interpretation*, 15 y ss.

<sup>216</sup> Visseur Sellers, Patricia. *The prosecution of sexual violence in conflict: the importance of human rights as means of interpretation*, 15 y ss.

condiciones de igualdad<sup>217</sup>.

Examinando las fortalezas y debilidades de estos sistemas observando el enjuiciamiento efectivo de los delitos de VS, Green, Copelon, Cotter y Stephens, vuelven a dar su opinión con respecto a aspectos netamente procesales que pueden llegar a revictimizar a las mujeres que acceden al sistema penal con sus denuncias<sup>218</sup>. Describen cómo los esfuerzos para probar los cargos contra el acusado se vuelven insostenibles porque no se admiten pruebas distintas del testimonio directo de víctimas sobrevivientes o testigos de las presuntas atrocidades. Esto trae como consecuencia que experimenten incertidumbre por lo que pueda pasar durante y después de que relaten su experiencia, miedo de no ser creíbles sus relatos y de que su seguridad o la de sus familias se vea afectada por lo dicho ante las autoridades judiciales.

Además, las mujeres se someten a varios interrogatorios por los mismos hechos para establecer si existen incongruencias entre sus distintas intervenciones. Adicionalmente, los Tribunales en algunas ocasiones no quedan cerca de sus lugares de residencia lo que implica, primero, la necesidad de dejar su hogar y su comunidad, tener gastos económicos extras para costear el transporte, a la persona que se quede a cargo del cuidado de sus hijos, entre otros, lo que incrementa la carga de las mujeres que hacen parte de los procesos judiciales.

En esa línea probatoria, contar con un enfoque de género plantea, además, que las víctimas no sean confrontadas con sus victimarios si no lo desean. Si bien es cierto que la verdad judicial también puede establecer canales de confrontación entre relatos de las partes enfrentadas en el litigio penal, los ejercicios deberán en todo caso, ser consensuados con la víctima sobreviviente debido a que sus derechos deben ser respetados dentro del proceso y procedimientos que dicte el mismo de forma prioritaria.

En el caso de la reparación, las autoras referidas, presentan unos ítems desde sus propuestas a través del feminismo para que dentro de los procesos también se preste atención a los traumas, daños y demás problemas que se ocasionaron por los actos de VS

---

<sup>217</sup> Visser Sellers, Patricia. *The prosecution of sexual violence in conflict: the importance of human rights as means of interpretation*, 17 y ss.

<sup>218</sup> Green, Jennifer, et al. "Affecting the rules for the prosecution of rape and other gender-based violence before the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia: A feminist proposal and critique, 173 y ss.

en el conflicto armado. Esta propuesta está encaminada a que se dé apoyo a las víctimas sobrevivientes y testigos dentro de los procesos judiciales, para permitir que su testimonio acelere su recuperación en lugar de ser una fuente de revictimización. Esto incluye proteger el derecho a dar su testimonio y a testificar de forma libre y voluntaria permitiendo que quien quiera hacerlo de forma anónima pueda hacerlo en la medida compatible con los derechos del imputado<sup>219</sup>.

Por lo cual se vuelve uno de los pilares de su propuesta que la atención y el enfoque en la víctima tenga también lugar durante la etapa del proceso y no solo de forma posterior, ya que esto serviría para ayudarles a reconstruir sus vidas durante y después del juicio a través de atención médica, psicológica y de otro tipo de acuerdo con el caso en particular.

Todos los Tribunales Penales en el DPI tienen apartados dentro de sus principales tratados, estatutos, convenios y normas de procedimiento que aducen que una vez termine el proceso penal las víctimas sobrevivientes tendrán una reparación por los hechos probados dentro del proceso ya sea porque su financiación sea de un fondo fiduciario construido con las donaciones de los estados, o porque sus victimarios se hagan cargo, o los estados en forma subsidiaria lo asuman<sup>220</sup>.

Sin embargo, la homogenización de las reparaciones tendientes a dar indemnizaciones monetarias no alcanza siquiera a dimensionar lo necesario para que una mujer que ha sido víctima sobreviviente de VS logre superar y reincorporarse a actividades libres de desigualdad y violencia. Engle, por su parte, argumenta al respecto que al declarar las diferencias de género a través de la universalización de los daños experimentados por las mujeres probablemente se dé lugar a la proliferación de normas legales y entendimientos populares que afianzan aún más la dinámica de poder que a

---

<sup>219</sup> Green, Jennifer, et al. "Affecting the rules for the prosecution of rape and other gender-based violence before the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia: A feminist proposal and critique, 173 y ss.

<sup>220</sup> Al respecto puede consultarse: Pérez León Acevedo, Juan Pablo. "Las reparaciones en el derecho internacional de los derechos humanos, derecho internacional humanitario y derecho penal internacional". *Am. U. Int'l L. Rev.* Núm. 23 (2007): 7; López Martín, Ana Gemma. "Primera Sentencia de la Corte Penal Internacional sobre reparación a las víctimas: caso The Prosecutor c. Thomas Lubanga Dyilo, 7 de agosto de 2012". *Revista Española de Derecho Internacional* núm. 2, vol. 65(2013): 209-226; Paz Morales, Natalia. "Ausencia de una perspectiva de género en la Corte Penal Internacional: una mirada al caso Fiscalía vs. Lubanga Dyilo". *Anuario Iberoamericano de Derecho Internacional Penal* núm.1, vol. 4. (2016): 4.



menudo se busca combatir. Expresa que la generalidad de experiencias ha hecho que las personas entiendan que la violación es necesariamente un destino peor que la muerte; pero no son capaces de comprender que las mujeres pueden tener vidas emocionales y sexuales "saludables" y "normales", incluso después de una violación. Es por eso por lo que critica las narrativas legales porque son excesivamente limitadas y supeditadas a las estrategias de la Fiscalía para probar la comisión de un delito de VS. Termina diciendo que espera “convencer a las activistas legales de que consideren la necesidad de la admisibilidad de relatos matizados de sexo y guerra y de disuadirlos de asumir que la supresión de tales historias es necesaria a un sistema de justicia”.

En ese sentido, Charlesworth, Chinkin y Wright afirman que la mayoría de las feministas estarían de acuerdo que la diversidad de voces no solo es valiosa, sino esencial, y que la búsqueda de una sola voz es poco probable que capture la realidad de la experiencia de las mujeres o la desigualdad de género que sufren<sup>221</sup>. Su real inquietud con las voces de las mujeres es identificar una experiencia distintiva de las mujeres que no se excluya en los procesos penales internacionales. Adicional a esto mencionan que la participación de mujeres en altos Tribunales es irrisoria y solo en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer está conformado por mujeres en su totalidad.

Para el feminismo liberal, por ejemplo, este es un punto importante de crítica hacia los Tribunales Internacionales del DPI debido a que la igualdad en los aparatos de justicia es solo un paso para alcanzar los objetivos trazados por el movimiento, para llevar enfoques basados en prerrogativas fuera de la opresión y de la discriminación<sup>222</sup>. La estructura del orden jurídico internacional refleja una perspectiva masculina y asegura su dominio continuo, por ende, la jurisprudencia asume que las normas del derecho internacional están dirigidas a individuos que son de aplicación universal y neutrales. Sin embargo, no se reconoce que tales principios pueden afectar de manera diferente a hombres y mujeres; por consiguiente, las experiencias de las mujeres sobre el funcionamiento de estas leyes tienden a ser silenciadas o distorsionadas.

---

<sup>221</sup> Charlesworth, Hilary, Chinkin, Christine, y Wright, Shelley. “Feminist approaches to international law.”, 613-645.

<sup>222</sup> Facio, Alda. “Las mujeres y la Corte Penal Internacional”. En: *Aportes Andinos*. Programa Andino de Derechos Humanos, núm, 1. Ecuador: Universidad Andina Simón Bolívar, 2002: 1-7, 4.

### 1.2.3. Eficiencia de marco normativo y jurisprudencial de la violencia sexual en los conflictos armados

El establecimiento de indicadores para medir si toda la legislación internacional, regional y local, así como la jurisprudencia, está siendo cumplida con el fin de eliminar la violencia sexual contra las mujeres en los conflictos armados, se torna difícil al no existir cifras, tasas y tendencias homogéneas que den cuenta de la real magnitud del problema de la VS en los conflictos armados<sup>223</sup>.

En primer lugar, la falta de definición de los bienes jurídicos que se pretenden proteger evita que la normatividad pueda cumplir con los objetivos del DPI. Autores como AMBOS, con su idea de las investigaciones temáticas focalizadas de la Corte Penal Internacional, argumentan que, en el caso de delitos de violencia sexual, el “bien jurídico” se encuentra difuso por las distintas concepciones de lo que se debe proteger cuando se habla de VS<sup>224</sup>. En el ordenamiento jurídico internacional se protege el bien jurídico internacional de la seguridad y la paz, y en contextos locales el bien jurídico protegido es la integridad sexual, física y psíquica, la moral y el honor, la autodeterminación sexual entre otras categorías definidas<sup>225</sup>. En ese entendido, la finalidad propuesta para ser protegida va más allá del concepto individual de la víctima que resulta ser un mero poseedor de un derecho y no ser un sujeto real para ser protegido.

Es allí donde PRIETO llama la atención al enunciar que la contrariedad de lo que se protege es “política y moral” y no como se piensa “de naturaleza jurídica”<sup>226</sup>. Dada la conceptualización de eficiencia en términos de costo para la víctima sobreviviente con el proceso penal, para medir si se ha cumplido con esta premisa, se tendrían que considerar diversas formas de medición y construcción de indicadores que muestren cómo la norma ha sido aplicada para lograr los objetivos implicando un costo mínimo para las víctimas sobrevivientes. En consecuencia, se tiene un eje de evaluación de eficiencia que resulta inalcanzable para los operadores que intentan establecer resultados en estos términos

<sup>223</sup> Al respecto puede consultarse: Sánchez, Jesús María Silva. “Eficiencia y Derecho penal.”, 93-128; Ossandon Widow, María Magdalena. “Eficiencia del Derecho penal. El caso de los delitos contra el medio ambiente”, 379 - 394.

<sup>224</sup> Ambos, Kai. “Violencia sexual en conflictos armados y derecho penal internacional.”: 5 y ss.

<sup>225</sup> Ambos, Kai. “Violencia sexual en conflictos armados y derecho penal internacional.”: 5 y ss.

<sup>226</sup> Sanchís, Luis Prieto. “Una perspectiva normativa sobre el bien jurídico”. *Nuevo Foro Penal*, vol. 65 (2003): 46-91.

porque el enfoque siempre ha estado encaminado a observar los alcances de la norma en países de la comunidad internacional y su jurisprudencia está siendo referida en otros Tribunales de la misma naturaleza.

Por ese motivo, los indicadores de violencia sexual, entendidos como “orientadores de las políticas para permitir la medición y supervisión del progreso y fomentar la reunión periódica y sistemática de datos”<sup>227</sup>, se han limitado a establecer si la finalidad se cumple o no por el número de países que han ratificado los convenios y tratados sobre violencia sexual en los conflictos y relacionados, sentencias judiciales condenatorias en los casos de violencia sexual o el número de registros de declaraciones oficiales y no oficiales sobre estos sucesos, los reportes de los departamentos de medicina legal en los diversos países que aportan estadísticas disgregadas por casos reportados con lesiones físicas con relación a la violencia sexual, o por la puesta en marcha de programas, políticas y acciones para que se cumpla con los fines, entre otros.

Sin embargo, aunque los indicadores han ayudado a que la visibilización de la violencia sexual en los conflictos armados haya llegado a ser tomada en cuenta en agendas estatales para eliminarla, los indicadores de eficiencia conllevan a analizar tres consecuencias que invitan a reevaluar los términos de consideración de ésta. En primer lugar, está el desconocimiento del número de las víctimas que no se atreven a denunciar a nivel local, regional o internacional, o a reportar ante algún ente medidor de eficiencia de la norma. En segundo lugar, se encuentran los problemas procesales y probatorios para poder condenar a los actores de delitos relacionados con violencia sexual que generan impunidad, lo cual genera que el resultado del indicador ya sea predecible y, por último, se tiene la falta unificada de seguimiento a los fallos o medidas de reparación que garanticen la no repetición y la satisfacción de las víctimas.

Estos tres problemas se exacerban cuando las cifras discrepan según la fuente que las exponen, siendo creíbles sólo aquellas fuentes oficiales que a veces no cobijan el total de la población víctima de estos delitos. Sin embargo, hay organizaciones sociales, no gubernamentales y colectivos que realizan los ejercicios para determinar, en datos cuantitativos, la realidad de la VS en los conflictos que no cuentan con el respaldo

---

<sup>227</sup> Ertürk, Yakin, *Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer sus causas y consecuencias*. Consejo de Derechos Humanos, (A/HRC/7/6, 29), 29 de enero de 2008: 1-34, 6.

suficiente para ser consideradas significativas en el abordaje de los problemas que rodean la violencia sexual.

En ese orden de ideas, la labor de la comunidad internacional, los Estados y los aparatos de justicia para establecer las cifras y los indicadores de efectividad, resulta difícil por la inexistencia de articulación de resultados de efectividad de las diversas organizaciones y aparatos judiciales. Es así como la CPI refleja unas cifras de VS que no coinciden con las de organizaciones internacionales no gubernamentales y a su vez no concuerdan con las arrojadas por Estados que han ratificado tratados o acuerdos para prevenir, investigar, castigar y reparar a las víctimas de VS<sup>228</sup>.

En ese entendido, “la valoración sobre la eficiencia de las normas penales” defendida por Ossandon y Silva merece una adhesión referente a la necesidad de una cohesión entre los actores que se dedican a difundir los resultados de los avances contra la VS en los conflictos armados<sup>229</sup>. Siguiendo esta lógica, si bien hay organizaciones no gubernamentales y comunitarias que presentan estudios con indicadores de eficacia, estos resultan insuficientes por el silenciamiento de la VS como problema social, político, y económico en escenarios de conflictos armados<sup>230</sup>.

En el ámbito internacional, los indicadores frecuentes son los de eficacia que apuntan a establecer el número de tratados que prohíben la VS sexual en los conflictos y en otros escenarios, y demuestran que el principal obstáculo es la carencia de cooperación de los Estados y sus sistemas internos de justicia con los tribunales internacionales que conciben la VS sexual como crimen internacional.

---

<sup>228</sup> Al respecto puede consultarse: Jones, Annika. “Non-cooperation and the Efficiency of the International Criminal Court”. *Cooperation and the International Criminal Court* (2016): 185-209; Ambach, Philipp. “Performance Indicators for International (ised) Criminal Courts–Potential for Increase of an Institution’s Legacy or ‘Just’a Means of Budgetary Control?”. *International Criminal Law Review*, núm 3, vol. 18 (2018): 426-460; Bunting, Annie. “Spaces of international gender justice: a reply to Baldez and DeLaet”. *Global Discourse*, núm. 3, vol. 8 (2018): 438-440.

<sup>229</sup> Ossandon Widow, María Magdalena. “Eficiencia del Derecho penal. El caso de los delitos contra el medio ambiente”, 379 - 394.

<sup>230</sup> Para comprender los indicadores de eficiencia el Relator Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias (REVMC), quien desde el año 1994 presenta sus informes a la Comisión de Derechos Humanos en concordancia con la resolución 1994/45, establece que serán aquellos que “orientar las políticas, permitir la medición y supervisión del progreso y fomentar la reunión periódica y sistemática de datos”. Ertürk, Yakin, “Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer sus causas y consecuencias”, Consejo de Derechos Humanos (A/HRC/7/6, 29), 29 de enero de 2008: 1-34. También se pueden consultar, Organización de Naciones Unidas, “Violencia sexual relacionada con los conflictos”, Consejo de Derechos Humanos, (S/2014/181), 13 de marzo del 2004: 1-37, <https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2014/9586.pdf>

Es así como Portilla y Hernández argumentan que “la cooperación con los Tribunales no se ha llevado a cabo por todos los Estados tanto en el terreno legislativo como en el cumplimiento de las órdenes de los Tribunales”<sup>231</sup>. Esto conlleva a que las órdenes de captura los victimarios, la recolección de material probatorio y la colaboración en las demás actividades de los procesos se entorpezcan y en algunos casos resultaran inexistentes.

Sumado a esto, las autoras establecen como indicadores el número de procesos efectivos ante el TIPY y TPIR estableciendo una media entre 108 y 90 procesados y acusados por diversos delitos en los que media la VS en conflictos armados<sup>232</sup>. Llama la atención el costo beneficio que para la comunidad internacional acarrear los sistemas de justicia al considerarse que es mucho más elevado el costo de los procesos que el beneficio para la sociedad en términos de reparación y construcción de tejido social, ya que los procesos penales resultan insuficientes si se traza éste como objetivo.

Además, existe lo que para Portilla y Hernández se llama la “fragmentación geográfico-jurisdiccional” de los tribunales, donde la ubicación de las dependencias de los tribunales debilita la congruencia de criterios, la comunicación de los planes estratégicos para adelantar las investigaciones generando “una sobrecarga de las actividades, entorpece la comunicación y la coordinación”<sup>233</sup>.

En ese sentido, los procesos judiciales que pretenden evitar la impunidad y castigar la VS, dependen de la voluntad de los Estados involucrados o aquellos que tengan alguna posibilidad de colaborar con las actividades de la CPI. Sumado a eso, el tiempo de operación de los tribunales como el TPIY y TPIR es muy corto para poder avanzar en los distintos procesos que son de su competencia.

Sin embargo, lo que realmente preocupa es que los aparatos de justicia no logran alcanzar los indicadores de efectividad debido al tiempo de vida de los organismos internacionales. En este caso, el TIPY y TPIR en un principio tenían vigencia por un año, prorrogables por el tiempo en que se reestableciera el orden en los territorios objeto de conflicto. Esto provocó que los tribunales tuvieran que pensar en trasladar los expedientes

---

<sup>231</sup> Portilla Gómez, Juan Manuel y Hernández Rojas, Andrea Paula. “La evolución y efectividad de los tribunales penales ad-hoc”. *Anuario Mexicano de Derecho Internacional* (2008): 207-244.

<sup>232</sup> Portilla Gómez, Juan Manuel y Hernández Rojas, Andrea Paula. “La evolución y efectividad de los tribunales penales ad-hoc”, 208 y ss.

<sup>233</sup> Portilla Gómez, Juan Manuel y Hernández Rojas, Andrea Paula. “La evolución y efectividad de los tribunales penales ad-hoc”, 208 y ss.

y archivos para que la justicia nacional y sus dependencias asumieran los casos inconclusos cuando su tiempo de funcionamiento terminó.

Lo anterior, se convirtió en un obstáculo para la efectividad por la falta de canales de apropiación del conocimiento judicial debido a que los jueces y demás personal que trabajaba con los procesos, tendría que encapsular el conocimiento adquirido y transmitirlo en poco tiempo a los organismos locales para seguir adelante con los procesos. Para evitar esto el aparato judicial tendría que contar con personal altamente calificado y con la misma visión de justicia de los tribunales internacionales, algo que en muchos casos no ocurrió.

Al respecto, AMBOS refiere que “el empleo de un equipo altamente especializado dentro de una fiscalía puede incrementar la eficiencia de toda la institución en el sentido de un efecto reflejo”<sup>234</sup>. Esto implica que las herramientas que ayudan a la efectividad del proceso para juzgar casos de violencia sexual deberían ser aplicadas en todas las instancias judiciales junto con las interpretaciones de los jueces en casos similares donde se ha obtenido sentencia condenatoria, con el fin de que los procesos avancen y las víctimas sean reparadas.

Por ello, la presente investigación ayuda a ver con claridad cómo la diversidad de indicadores de efectividad judicial genera una falsa idea de cumplimiento de los estándares de justicia internacionales al ser cada instancia judicial, administrativa o independiente, la que crea sus propias categorías para evaluar.

Si se utilizara este efecto reflejo del que hablaba AMBOS, el foco central de los indicadores serían las víctimas de violencia sexual, lo que traería como consecuencia un aporte a la reconciliación de toda una comunidad en conflicto que tomaría como eje central, no el cumplimiento de normas, sino indicadores como la reparación, el nivel de reconciliación entre la sociedad y la satisfacción de medidas que ayuden a reconstruir nuevos sistemas democráticos e igualitarios. En ese entendido, las víctimas mujeres de violencia sexual serían los sujetos principales de decisión y de acción. Así, la efectividad de los procesos orientados a restablecer sus vidas y las de su comunidad, podría

---

<sup>234</sup> Ambos, Kai. “Violencia sexual en conflictos armados y derecho penal internacional.”: 45. Al respecto se puede consultar: Rosende Villar, Cecilia. “Efectos directos y reflejos de la sentencia”. *Revista chilena de derecho* núm. 28 (2001): 489; Amaya Villarreal, Álvaro Francisco. “Efecto Reflejo: La práctica judicial en relación con el derecho a la verdad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. *International Law: Revista Colombiana de Derecho Internacional*, núm 10, vol. (2007):131-157.

convertirse en una plataforma de acción distinta a las que se presentan actualmente para abordar los temas que aquí se discuten.

### **1.2.3.1. Normatividad y Tribunales Penales Internacionales desde la mirada de las víctimas sobrevivientes**

En la gama de múltiples intervenciones de las víctimas sobrevivientes ante los Tribunales Internacionales, a los que acudieron para que los victimarios fueran sancionados por los actos de VS, sus voces han sido retransmitidas a través de estudios interdisciplinarios que se convierten en el medio para que sus narrativas sean visibilizadas.

Damascène por su parte, al relatar lo sucedido en Ruanda, comenta como los procesos judiciales penales internacionales lograron esclarecer que las autoridades ruandesas “más allá de realizar ellas mismas las violaciones, incitaron a la población a cometerlas”<sup>235</sup>. Sin embargo, advierte de una falencia que hizo que las víctimas sobrevivientes desconfiaran sobre el proceso penal que se llevaba a cabo, debido a que los juicios sucedieron a puerta cerrada y no de forma pública. Esto llevó a que la participación de testigos y víctimas sobrevivientes se limitara a la toma de testimonios sin explicaciones previas sobre lo que harían con sus relatos<sup>236</sup>.

Esto ocasionó que la incertidumbre de lo que sucedía realmente en los procesos o cómo terminarían fuera determinante para que algunas de las mujeres dejaran de acudir a las autoridades penales para contar lo sucedido en el genocidio Ruandés. Es en estos procesos que las víctimas sobrevivientes manifiestan falta de claridad sobre los términos, derechos y participación. Las narrativas permiten observar cómo ellas pensaron que los procesos no estaban siendo llevados para esclarecer lo sucedido, endilgar responsabilidades y establecer sanciones. Por el contrario, su percepción tiende a mirar

---

<sup>235</sup> Acosta Jiménez, María Alejandra. et.al. *Primer Encuentro de Memorias de la Escuela Intercambio de experiencias sobre Reparación Integral a Víctimas 2011-2015 de Reparaciones internacional*. Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, 2015: 1-98, 78, <https://www.unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/documentosbiblioteca/memoriaseri1.pdf>

<sup>236</sup> Acosta Jiménez, María Alejandra. et.al. *Primer Encuentro de Memorias de la Escuela Intercambio de experiencias sobre Reparación Integral a Víctimas 2011-2015 de Reparaciones internacional*, 78.

que los procesos penales están hechos para que jueces y fiscales logaran un buen desempeño en sus trabajos.

Esto lo vislumbra, por ejemplo, Nowrojee, en su estudio, donde les preguntó a las víctimas sobrevivientes como se sentían con el proceso judicial penal, a lo que respondieron en su gran mayoría que cuando los funcionarios necesitaban sus declaraciones las trataban de una forma, pero cuando no les servían dentro de los procesos las desechaban<sup>237</sup>.

Lo anterior tiene como consecuencia que las víctimas sobrevivientes no vieran el procedimiento como un proceso donde sus derechos fueran protegidos y sus daños pudieran ser reparados sino como algo ajeno a ellas. Estas percepciones tienen repercusión en la colaboración en los procesos penales debido a que las víctimas sobrevivientes, si bien reconocen que los procesos han ayudado a esclarecer la verdad de los motivos de lo sucedido entre otras cosas, no se sienten parte importante del proceso<sup>238</sup>.

Los Tribunales Penales Internacionales según las víctimas sobrevivientes no siempre han presenciado una reunión de explicación de cómo va su proceso ni de los resultados del juicio en un lenguaje entendible para las víctimas sobrevivientes. Brouwer y Ruwebana dan una justificación a su argumento con un testimonio de esta situación en estos términos “El testigo de Akayesu que había testificado dijo: "Nuestro tribunal no nos da nada, ni siquiera un agradecimiento"<sup>239</sup>.

Dando un análisis a lo descrito, el reconocimiento y satisfacción de derecho de las víctimas de conocer cuáles son las etapas del proceso y lo que ocurre en el mismo, solo se llevan a cabo en ciertos casos cuando debería ser lo general. La falta de información clara, precisa y concisa sobre su proceso ayuda a generar desconfianza en el sistema judicial, el cual es el encargado de llevar a cabo labores de investigación y juzgamiento de los victimarios de crímenes considerados graves a nivel internacional. Además, se desconocen los sistemas de comunicación y de lenguaje autóctonos de cada comunidad haciendo que la información no llegue a las víctimas sobrevivientes. Esto genera también

---

<sup>237</sup> Nowrojee, Binaifer. *Your Justice is Too Slow: Will the ICTR fail Rwanda's rape victims?*, núm. 10. UNRISD Occasional Paper, 2005.

<sup>238</sup> Acosta Jiménez, María Alejandra. et.al. *Primer Encuentro de Memorias de la Escuela Intercambio de experiencias sobre Reparación Integral a Víctimas 2011-2015 de Reparaciones internacional*, 79 y ss.

<sup>239</sup> De Brouwer, Anne Marie, y Ruwebana, Etienne. “The legacy of the Gacaca courts in Rwanda: Survivors views”. *International Criminal Law Review*, núm. 5, vol. 13 (2013): 937-976.



una barrera entre la justicia y las víctimas sobrevivientes que esperan con sus procesos no solo que el victimario reciba una sanción por lo que cometieron, sino que también ofrezca perdón y repare el daño que causó.

Sumado a lo anterior, el estudio llevado a cabo por de Brouwer y Ruwebana, muestra más claramente que 28 víctimas sobrevivientes Tutsi en Ruanda coinciden en que la percepción que tienen de los tribunales fue insatisfactoria en tanto el número de casos que llegaron a ser conocidos por esta jurisdicción fueron muy reducidos en comparación con los responsables que existían<sup>240</sup>. Relatan además cómo las mujeres sintieron más satisfacción con los procesos llevados a cabo ante los tribunales Gacaca<sup>241</sup> – Tribunal especial creado en el marco de la justicia transicional-, ya que lograron que los autores mediatos pidieran perdón en muchos de los casos confesados. Para la mayoría de las víctimas sobrevivientes entrevistadas, descubrir la verdad es de vital importancia debido a que esto contribuye a sus procesos propios de reparación y de paso contribuye a los procesos de reconciliación trazados por los Estados en sus políticas de construcción social paz.

Ahora bien, también muchas de ellas narran su miedo al comenzar el proceso y ser llamadas a declarar por el temor a represalias, por su seguridad y el de sus familias. Las escasas posibilidades de participación en el Tribunal para las víctimas, la distancia de la Corte y la poca divulgación de lo que sucedía en el proceso penal por parte del Tribunal sobre sus juicios y el resultado de estos, generó desconfianza en algunas de las víctimas sobrevivientes.

No obstante, Nowrojee afirma que la excepción a lo afirmado se puede apreciar después del primer juicio de Jean Paul Akayesu, donde la Fiscalía regresó a Taba y celebró una reunión pública en el ayuntamiento para explicar la sentencia<sup>242</sup>. Esto contribuyó claramente a una sensación de logro y empoderamiento expresado por una de las testigos de violación, que sintió que había hecho una contribución. Pone uno de los

---

<sup>240</sup> De Brouwer, Anne Marie, y Ruwebana, Etienne. “The legacy of the Gacaca courts in Rwanda: Survivors views”, 937-976.

<sup>241</sup> Al respecto puede consultarse: Roig, Capella I. “Jurisdicciones gacaca: Una solución local al genocidio ruandés.” *REDI* núm 56 (2004): 765; Mendoza, Karen, Domínguez, Giselt y Rosero González, Tatiana Andrea. “Justicia sobre la hierba. Tribunales Gacaca, lecciones de reconciliación para Colombia”. *Estudios Políticos*, núm. 51 (2017): 218-239.

<sup>242</sup> Nowrojee, Binaifer. *Your Justice is Too Slow: Will the ICTR fail Rwanda's rape victims?*, 15.

relatos de las víctimas como justificación de su argumento en estos términos “Todavía estoy lista para testificar nuevamente para contarle al mundo lo que sucedió. Es importante para el mundo saber. Miles fueron violadas y no se atreven a decirlo. Dimos valor a otras que no han hablado. Nos atrevimos a hablar, a decir lo que pasó”<sup>243</sup>.

Otras víctimas sobrevivientes relatan que después de conocer más a fondo lo que hacía el tribunal y sus etapas procesales encontraron razones para confiar en el proceso ya que lograban tener detalles de lo que desconocían. Sin embargo, Nowrojee relata como la verdad judicial al estar supeditada a los victimarios y su disposición de colaboración con la justicia, no siempre jugaba a favor de las víctimas sobrevivientes<sup>244</sup>. Describe como una víctima sobreviviente expresa su inconformidad porque su victimario solo aceptó la responsabilidad de ciertos crímenes, pero no aceptó la violencia sexual ejercida contra una de sus hermanas. Esto hace que la verdad judicial sea vista como parcializada y dependiente de la voluntad del tercero.

Además, la falta de percepción del género en los casos de violencia sexual más allá del sexo de las víctimas y de los victimarios forjó en las víctimas sobrevivientes una percepción de impunidad. Al ser catalogados los hombres como victimarios y a las mujeres siempre como víctimas, se desestimaron en muchos casos las acusaciones hacia las mujeres que contribuyeron con su participación para que otras mujeres fueran violadas<sup>245</sup>. Esto fue puesto en evidencia en testimonios expuestos en los siguientes términos: “Marie Therese testificó contra una mujer diciendo que ella la había entregado a sus violadores y quería verla en juicio por ayudar a los perpetradores a violarla. Sin embargo, los jueces no continuaron con su caso porque una mujer no puede abusar sexualmente de otra mujer”<sup>246</sup>.

Lo anterior relatado da indicios de la interpretación de la perspectiva de género y los delitos descritos en el ordenamiento jurídico penal de cada tribunal donde se adecuaban los argumentos solo a características biológicas, descartando otros elementos

<sup>243</sup> Nowrojee, Binaifer. *Your Justice is Too Slow: Will the ICTR fail Rwanda's rape victims?*, 16 y ss.

<sup>244</sup> Nowrojee, Binaifer. *Your Justice is Too Slow: Will the ICTR fail Rwanda's rape victims?*, 16 y ss.

<sup>245</sup> Sin embargo, el TIPY procesó a Biljana Plavsic, ex presidente de la República Srpska, por colaborar con aquellos autores mediatos de violaciones masivas en este conflicto armado particular. Puede consultarse: Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia. Fiscal contra Plavšić, Caso IT-00-39 y 40/1, 27 de febrero de, <https://www.icty.org/en/case/plavsic>

<sup>246</sup> Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia. Fiscal contra Plavšić, Caso IT-00-39 y 40/1, 27 de febrero de, <https://www.icty.org/en/case/plavsic>

para comprender, por ejemplo, en el conflicto ruandés, por qué las mujeres hutus se vieron obligadas a participar en los actos de VS a otras mujeres.

Es por ello que se afirma que la interpretación del género más allá de su relación con el sexo podría haber ayudado a esclarecer muchos más puntos de violencia estructural y sistemática contra las mujeres en estos contextos. En ese sentido, algunas víctimas sobrevivientes estaban insatisfechas con los jueces, al sentir que éstos y demás funcionarios judiciales no estaban debidamente capacitados para tratar con casos de VS y su opinión estaba sesgada.

Otro factor relacionado con el género que fue expuesto por las víctimas sobrevivientes fue la falta de adecuación de espacios para generar privacidad al momento de contar sus experiencias de VS. Por ejemplo, en el caso ruandés, se desconocieron los derechos de las víctimas sobrevivientes ya que en algunas ocasiones si bien los interrogatorios eran a puerta cerrada, las personas en la calle podían escucharlos y las demás personas dentro de la institución también. Esto hacía que quedaran expuestas ante sus comunidades que tendían a establecer un manto invisible de señalamiento por haber sido violadas, propiciando situaciones de discriminación hacia las mujeres que habían testificado o dado a conocer los hechos objeto de investigación<sup>247</sup>.

En cuanto a las sentencias, algunas de las sobrevivientes del genocidio también expresan estar satisfechas con las sentencias dictadas a los condenados, mientras que otras sintieron que las sentencias dictadas a los perpetradores no reflejan la gravedad de los crímenes que cometieron contra ellas. Asimismo, muchas de ellas muestran más satisfacción con sus sentencias cuando el victimario había pedido perdón, confesado la verdad y había resultado condenado por sus crímenes<sup>248</sup>.

Adicionalmente, la percepción de las víctimas de una justicia lenta generalizada en sus propios relatos, permite analizar cómo muchas de ellas no pudieron ver terminar los procesos en condenas a los victimarios o los mismos no fueron condenados porque

---

<sup>247</sup> Puede consultarse al respecto: Nowrojee, Binaifer. *Your Justice is Too Slow: Will the ICTR fail Rwanda's rape victims?*, 15 y ss.

<sup>248</sup> Al respecto puede consultarse: Campbell, Kirsten. "The gender of transitional justice: Law, sexual violence and the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia". *The International Journal of Transitional Justice*, núm.3, vol. 1 (2007): 411-432; Henry, Nicola. "Witness to rape: The limits and potential of international war crimes trials for victims of wartime sexual violence", 114-134.

por su avanzada edad murieron o escaparon antes de la terminación de los procesos. Esto impidió que las víctimas sobrevivientes conocieran la verdad sobre los motivos y razones por las cuales fueron ellas el blanco de VS.

Skjelsbaek, en su investigación sobre narrativas de lo ocurrido en Bosnia y Herzegovina, arroja que las víctimas sobrevivientes quedaron inconformes con los veredictos de quienes cometieron delitos sexuales, con penas 10 a 15 años de prisión, que se usarían por los victimarios para completar sus estudios u otra actividades beneficiosas para ellos, mientras ellas, que fueron torturadas, tienen que vivir con lo que vivieron<sup>249</sup>. Sus narrativas y experiencias fueron utilizadas como pruebas en los juicios para determinar las causas y motivos que llevaron a los victimarios a cometer los ilícitos reiterados contra las mujeres.

Sus voces se convirtieron en el medio para dar a conocer lo sucedido siendo una preocupación la revictimización a través de la reiteración de los relatos en los procesos penales llevados ante estos Tribunales<sup>250</sup>. Contar una y otra vez sus historias resultaba para algunas de ellas revivir los sucesos que causaron daños en sus vidas y recordarlos cada vez que las llamaban a testificar representaba recordar el miedo, la tristeza, la angustia, o dolor, entre otros.

Es allí donde tiene cabida el análisis sobre la ponderación entre las ganancias sociales e individuales con el proceso judicial al evitarse la impunidad y los daños que ocasiona la participación de las víctimas sobrevivientes en los estrados judiciales. Se puede percibir que a los perjuicios psicológicos y psíquicos que tienen los hechos de VS en las mujeres, se suman los ocasionados por la narrativa reiterada de lo acontecido dentro del proceso judicial siendo omitido dentro de las indemnizaciones finales en los procesos. Esto da pie para observar lo que las sentencias significaron en los procesos de reparación judicial ya que argumentan, por ejemplo, en el caso de Ruanda, como les

---

<sup>249</sup> Skjelsbaek, Inger. "Victim and survivor: Narrated social identities of women who experienced rape during the war in Bosnia-Herzegovina." *Feminism & Psychology* 16.4 (2006): 373-403.

<sup>250</sup> Brouwer, Anne Marie. "What the international criminal court has achieved and can achieve for victims/survivors of sexual violence". *International Review of Victimology*, núm.2, vol. 16 (2009): 183-209.

dieron indemnizaciones monetarias solo por los perjuicios ocasionados por la VS en el conflicto armado y no de manera integral<sup>251</sup>.

Adicional a esto, estas indemnizaciones no resultaron suficientes para eliminar ciertas condiciones de desmejoramiento en sus vidas por los hechos victimizantes. Muchas de las víctimas sobrevivientes perdieron sus lugares de habitación, sus familias, sus trabajos, sus oportunidades de estudiar, quedando en condiciones de pobreza<sup>252</sup>. Lo que se esperaba de este proceso por parte de las víctimas sobrevivientes, era una reparación judicial acorde con las consecuencias sociales y económicas que se materializaron con la ola genocida en Ruanda. En ese sentido, ofrecer medidas de reparación que atendieran las necesidades de las personas que viven con el VIH producto de las violaciones masivas en los territorios en conflicto, apoyo psicológico a las madres de hijos producto de esas violaciones, entre otras, se obviaron por parte de los Tribunales al dictar las medidas de reparación<sup>253</sup>.

A pesar de que cada Tribunal estableció un fondo para reparación de víctimas, las decisiones y sentencias de los Tribunales Penales Internacionales, no llegaron a materializarse de forma rápida y en algunos casos nunca llegó. En primer lugar, porque los condenados no tenían los medios o no estaban dispuestos a compensar a sus víctimas, o porque las medidas procedimentales de los fondos de reparación exigían desplazamientos a las sedes de los Tribunales, cosa que no pudo llevarse a cabo en algunos casos porque las víctimas sobrevivientes no tenían como asumir los costos<sup>254</sup>.

Sumado a lo anterior, las víctimas sobrevivientes son numerosas, y el monto establecido en las sentencias para su indemnización fue estandarizado. Eso implica que el estudio de particularidades específicas dentro de sus contextos no fueran tenidas en cuenta para determinar los montos a recibir producto del daño ocasionado con la VS dentro del conflicto armado.

---

<sup>251</sup> Brouwer, Anne Marie. "What the international criminal court has achieved and can achieve for victims/survivors of sexual violence", 183-209.

<sup>252</sup> Van Schaak, Beth. "Obstacles on the road to gender justice: the international criminal tribunal for Rwanda as object lesson". *Am. UJ Gender Soc. Pol'y & L.*, núm.17 (2009): 361.

<sup>253</sup> Durbach, Andrea y Chappell, Louise. "Leaving behind the age of impunity: Victims of gender violence and the promise of reparations". *International Feminist Journal of Politics* núm.4, vol. 4 (2014): 543-562.

<sup>254</sup> Nowrojee, Binaifer. *Your Justice is Too Slow: Will the ICTR fail Rwanda's rape victims?*, 12 y ss.

Sin desconocer que con posterioridad la ONU y los Estados intentaron con sus resoluciones dar una visión de la reparación acorde al contexto de violencia vivido y sumarse a los intentos de crear medidas integrales para la reparación, la adaptación progresiva de las mismas no fue inmediata y avanza muy lento<sup>255</sup>. Así, las víctimas sobrevivientes al contar sus experiencias fuera de escenarios judiciales penales pudieron dar a conocer la percepción de los procesos que se llevaban en los Tribunales Internacionales las cuales son positivas con respecto a la oportunidad de contar lo relatado -aunque debe también tenerse en cuenta la revictimización generada por la necesidad de contar en varias ocasiones lo sucedido- pero insuficientes en términos de satisfacción con las investigaciones, la verdad judicial, las interpretaciones sobre el género y las medidas de reparación.

### 1.3. Aspecto político: Procesos de Justicia Transicional y Violencia Sexual

En busca de alternativas para superar los conflictos armados y afrontar las graves violaciones de Derechos Humanos que en ese contexto se llevan a cabo, los Estados han elegido el camino político trazado por la justicia transicional para lograr que sus países pasen de sistemas represivos a democráticos o puedan salir de la guerra y alcanzar la paz<sup>256</sup>. Esto incluye tener en consideración distintas medidas que aborden la justicia, la verdad y la reparación de las víctimas de las distintas violaciones a los Derechos Humanos en los que se incluyen las acontecidas por la VS contra las mujeres.

En ese sentido, resulta pertinente la descripción de esta alternativa a los procesos judiciales penales tradicionales para abordar la VS, teniendo en cuenta que aunque no es

---

<sup>255</sup> Rombouts, Heidy. "Women and reparations in Rwanda: A long path to travel". En *What happened to the women? Gender and reparations for human rights violations*, editado por Rubio Marín, Ruth, De Greiff, Pablo y Mayer Rieckh, Alexander, 194-245. 1 edición, Social Science Research Council, 2006.

<sup>256</sup> La justicia transicional representa una alternativa defendida por diversos autores que expresan que su enfoque en la víctima resulta acorde con los preceptos internacionales de protección de los derechos humanos. Puede consultarse: Arthur, Paige. "How transitions reshaped human rights: A conceptual history of transitional justice". *Human Rights Quarterly* Núm. 3 (2009): 321-367; Elster, Jon. *Closing the books: Transitional justice in historical perspective*. Cambridge University Press, 2004; Hayner, Priscilla. B. *Unspeakable Truths 2e: Transitional Justice and the Challenge of Truth Commissions*. Routledge, 2010; Lambourne, Wendy. "Transitional justice and peacebuilding after mass violence". *International Journal of Transitional Justice*, núm.1, vol.3 (2009): 28-48; Teitel, Ruti G. *Transitional justice*. Oxford University Press on Demand, 2000; Teitel, Ruti G. "Transitional justice genealogy". *Harvard Human Rights Journal*, vol. 16 (2003):69 y ss.

el tema central en esta tesis doctoral, ayuda a comprender por qué resultan sus medidas insuficiente cuando se toma en cuenta lo que realmente necesitan las víctimas sobrevivientes para ser reparadas.

Este proceso, como lo expresa el International Center for Transitional Justice, es entendido como “las formas en que países que dejan atrás periodos de conflicto y represión utilizan para enfrentarse a violaciones de derechos humanos masivas o sistemáticas, de tal magnitud y gravedad que el sistema judicial convencional no puede darles una respuesta adecuada”<sup>257</sup>.

Asimismo, la doctrina coincide en definirla como “una serie de prácticas, arreglos institucionales y técnicas de ingeniería social cuyo objetivo, dentro de los límites impuestos por el derecho internacional, es facilitar a las sociedades que han estado o están inmersas en conflictos violentos o regímenes dictatoriales, la transición hacia una situación de paz duradera, democracia y respeto de los derechos humanos”<sup>258</sup>.

Esta tipología de Justicia trazada dentro de un camino político por el cual los Estados han optado en diversos conflictos que se suscitan en el mundo, es tomada como una alternativa a los canales de justicia ordinaria para lograr a través de otras herramientas, ofrecer escenarios de verdad, justicia y reparación a las víctimas sobrevivientes de las violaciones masivas a los Derechos Humanos, redefiniendo los fines que se pretenden alcanzar. Es así como se observa que el fin de los procesos penales ordinarios se centra en la investigación y castigo a los victimarios y los de la justicia transicional, se enmarcan en transformar, en periodos limitados en el tiempo, escenarios de violencia en escenarios pacíficos utilizando herramientas que permitan esclarecer los hechos que dieron lugar a las violaciones de derechos y evitar que se repitan en el futuro, entre otros.

Sin embargo, las experiencias internacionales relatadas a través de informes oficiales y no oficiales, sentencias emitidas por órganos de justicia transicional, entre otras, dan a conocer distintas visiones de la inclusión de un enfoque de género con categorías que permitan encontrar soluciones efectivas por y para las mujeres cuando hay

---

<sup>257</sup> International Center for Transitional Justice, *¿Qué es la justicia transicional?*, consulta realizada el 18 de diciembre de 2018, <https://www.ictj.org/es/que-es-la-justicia-transicional>

<sup>258</sup> Barona, Ignacio Forcada. *Derecho internacional y justicia transicional: cuando el derecho se convierte en religión*. Civitas Thomson Reuters, 2011: 25 y ss.

daños ocasionados por VS<sup>259</sup>. Al ser reducida su participación en algunos procesos de construcción, planeación y ejecución de los mecanismos de justicia transicional como los planes de desarme, desmovilización y reinserción, las comisiones de la verdad, las medidas de justicia, las de reparación, las de reformas institucionales y las de democratización, se toma como tendencia que “librar guerras y negociar los acuerdos de paz son predominantemente asuntos masculinos”<sup>260</sup>.

En ese sentido, aunque las mujeres están presentes en procesos como los de República Democrática del Congo, Colombia, Liberia, Irlanda del Norte, entre otros, se limita su participación a la presencialidad y postulación de sus nombres como asistentes a los encuentros para lograr los acuerdos donde están expresas las medidas de justicia transicional para el contexto particular de conflicto. Esta limitación da cabida a reflexiones sobre la participación efectiva y pertinencia del enfoque de género para abordar la violencia sexual hacia las mujeres en los conflictos armados con el fin de encontrar salidas e identificar necesidades de las víctimas sobrevivientes para transformar escenarios violentos.

Sin embargo, el debate internacional sobre los procesos de justicia transicional se centra en la ponderación entre la justicia y la paz, el enfrentamiento entre jurisdicciones, la elección entre obligaciones de los Estados de luchar contra la impunidad y los Derechos de las víctimas y los procesos democráticos y políticos que conlleva optar por procesos alternos o complementarios a los existentes sobre la materia; olvidando el debate de la VS como parte de las violaciones masivas a los Derechos Humanos de las mujeres por ocasión a los conflictos armados.

---

<sup>259</sup>Esta línea de pensamiento es expresada entre muchas por: Ní Aoláin, Fionnuala. “Women, security, and the patriarchy of internationalized transitional justice”. *Human Rights Quarterly*. núm. 31 (2009): 1055 y ss; Buckley Zistel, Sussane. “Redressing Sexual Violence in Transitional Justice and the Labelling of Women as “Victims””. In *Victims of International Crimes: An Interdisciplinary Discourse*, editado por : Bonacker T., Safferling C., 91-100. Asser Press, The Hague, The Netherlands, 2013; Campbell, Kirsten. “The gender of transitional justice: Law, sexual violence and the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia”, 411-432; Albertson Fineman, Martha, y Zinsstag, Estelle. *Feminist perspectives on transitional justice*. Intersentia, Series on transitional justice, vol. 13, 2013; Henry, Nicola. “Witness to rape: The limits and potential of international war crimes trials for victims of wartime sexual violence”, 114-134.; Lemaitre, Julieta y Bergtora Sandvik, Kristin. “Beyond sexual violence in transitional justice: Political insecurity as a gendered harm”. *Feminist Legal Studies* núm. 3 y vol. 22(2014): 243-261; O'Rourke, Catherine. *Gender, politics in transitional justice*. Routledge, 2013.

<sup>260</sup> Bell, Christine, y O'Rourke, Catherine. “Does feminism need a theory of transitional justice? An introductory essay”. *The International Journal of Transitional Justice*, npum 1, vol.1 (2007): 23-44, 24.



A pesar de la existencia de resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU como la Resolución 1325 donde se insta a “tomar medidas especiales para proteger a las mujeres y las niñas de violencia, en particular violación y otras formas de abuso sexual, y todas las demás formas de violencia en situaciones de conflicto armado”<sup>261</sup>; los puntos de los acuerdos de paz toman de forma secundaria o superficial lo referente a la atención, protección y erradicación de la VS.

Las posiciones son divididas en la proposición de soluciones para que los espacios de justicia transicional aporten a la reconstrucción del tejido social de las víctimas sobrevivientes que sufrieron graves afectaciones por la vulneración de sus derechos en estos escenarios. Algunas de estas posturas celebran los avances de la justicia transicional en materia de género al encontrar acuerdos que introducen subcomisiones de seguimiento en la materia, o medidas destinadas a lograr una igualdad en los procesos que se ejecuten para lograr fines como la reconciliación nacional.

Otras se centran en el rechazo que produce una aparente participación en el diseño de las medidas de justicia transicional, pero ausencia de ellas en la ejecución de las medidas. Asimismo, se afirma, observando las experiencias, que el intento de introducir el enfoque de género en un sistema permeado por el patriarcado no ofrece una solución para el problema, sino que reduce las posibilidades de éxito para lograr avances sobre la materia; por lo cual proponen que las medidas deben estar enfocadas en la materialización de procesos distintos con resultados a corto plazo con una real participación desde la perspectiva de género<sup>262</sup>.

De acuerdo con esta última postura, grupos y organizaciones de mujeres comienzan a ser visibilizadas por sus propios procesos de verdad y reparación ya que los postulados iniciales de la justicia ordinaria penal y la justicia transicional no ofrecen solución mediata o inmediata a los problemas que deja la VS hacia las mujeres en los conflictos armados. Esto tiene sustento en las experiencias narradas por las mujeres víctimas sobrevivientes que experimentan descontento por los procesos que se fraguan

---

<sup>261</sup> Organización de Naciones Unidas, “*Violencia sexual relacionada con los conflictos*”, (S/RES/1325/2000), Consejo de Seguridad, 31 de octubre de 2000, <https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2006/1759.pdf>

<sup>262</sup> Bell, Christine, y O'Rourke, Catherine. “Does feminism need a theory of transitional justice? An introductory essay”, 23-44.

sin tener en cuenta lo requerido por ellas para reparar los daños que dejaron estas actuaciones por parte de los victimarios.

### **1.3.1. Generalidades de los procesos de Justicia Transicional con perspectiva de género**

Los procesos de justicia transicional en la década de los 90, cuando se plantearon como una alternativa política transitoria negociada entre distintos actores armados y los Estados, establecieron fines como la reconciliación, la paz, el cese a las hostilidades, los cambios democráticos a lugar, con un enfoque centrado en el respeto a los derechos humanos. Se estableció como generalidad que el reconocimiento de las violaciones masivas a estos derechos en estos escenarios violentos no podría quedar en la impunidad, incorporando otros elementos como la verdad y la reparación en tanto ejes integrales que harían parte de las medidas propuestas para lograr los fines deseados.

Bell y O'Rourke relatan al respecto, que los esfuerzos para agregar el enfoque de género a la justicia transicional fueron prominentes en relación al tratamiento legal de la violencia sexual en conflicto armado<sup>263</sup>. Para fundamentar lo afirmado, describen cómo en la década del 90, el foco principal de la movilización feminista transnacional se refería a la necesidad de poner fin a la impunidad de la violencia contra la mujer. Así es como esta manifestación colectiva tuvo un discurso para que se reconociera la VS contra las mujeres como un crimen en situaciones de conflicto armado.

En ese sentido, estos procesos comienzan, en primer lugar, por identificar los actos de VS como generalizados y sistemáticos dentro de los conflictos más representativos, con configuraciones diversas según el conflicto- por razones étnicas o raciales, como tortura, o delitos de lesa humanidad- que llevaron a que se crearan tribunales transitorios y especializados. Esto ayudó a reconocer, en primer lugar, que las mujeres eran mayoritariamente las víctimas de la VS por múltiples razones dentro de las que se encuentra la objetivación de sus cuerpos dentro de la guerra, el desconocimiento de su ejercicio de derechos, la humillación hacia los hombres de comunidades enteras por las concepciones culturales de la masculinidad, entre otros.

---

<sup>263</sup> Bell, Christine, y O'Rourke, Catherine. "Does feminism need a theory of transitional justice? An introductory essay", 23-44.

En segundo lugar, se comienzan a visibilizar los distintos roles de las mujeres en el conflicto armado lo cual hace que la participación en la fase de diseño de las medidas de justicia transicional se dé progresivamente. En ese caso, las mujeres pudieron tener una representación minoritaria para la construcción de acuerdos de paz que tuvieran en cuenta que las necesidades de las víctimas quedaran plasmadas en los documentos formales que daban validez a los procesos.

En tercer lugar, en algunos procesos, las medidas de verdad y de desarme y desmovilización tuvieron en cuenta el género para explorar la verdad de lo sucedido en el proceso. Se exponen, por ejemplo, casos latinoamericanos como el de Guatemala con su acuerdo de paz de 1996, donde se crea una “Comisión para el Esclarecimiento Histórico” que investiga y reconstruye la ruta de la violencia sexual en los sectores rurales. Sin embargo, aunque la intención en un principio era reconocer que el género era uno de los factores por los que la VS se convertía en un fenómeno generalizado y sistemático contra las mujeres, la visión masculina predominó en la construcción de verdad<sup>264</sup>. En ese caso, como lo afirma Contreras, Both, Guedes, & Dartnall, “los altos niveles de violación y asesinato de mujeres continúan siendo un problema en la era posconflicto en Guatemala, como legado de la guerra”<sup>265</sup>, por la resistencia de estructuras opresoras hacia las mujeres.

Asimismo, El Salvador visibilizó, a través de la comisión de la verdad creada por el acuerdo de paz de 1992, las prácticas de violencia sexual más frecuentes, caracterizando como una de ellas, los abortos forzados y las violaciones dentro del conflicto<sup>266</sup> (Luciano & Padilla, 2012). Sin embargo, en la fase de implementación de las medidas de justicia transicional, las mujeres fueron tenidas en cuenta como sujetos de recepción de las herramientas y no como sujetos de construcción y transformación de escenarios de violencia.

---

<sup>264</sup> Torres Falcón, Marta. “Entre el silencio y la impunidad: violencia sexual en escenarios de conflicto”, 77 y ss.

<sup>265</sup> Contreras, Juan Manuel, et al. “Violencia sexual en Latinoamérica y el Caribe: análisis de datos secundarios. Iniciativa de Investigación sobre la Violencia Sexual”. Sudafrica: Unidad de Investigación sobre Género y Salud, Consejo de Investigación Médica, 1 de marzo de 2010: 1-97,36, [https://clacaidigital.info/bitstream/handle/123456789/980/violencia\\_sexual\\_la\\_y\\_caribe\\_.pdf?sequence=5&isAllowed=y](https://clacaidigital.info/bitstream/handle/123456789/980/violencia_sexual_la_y_caribe_.pdf?sequence=5&isAllowed=y)

<sup>266</sup> Luciano, Diny, and Karen Padilla. *Violencia sexual en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: definiciones, datos recomendados e indicadores*. IPAS y UNFPA/LACRO, 2012, <http://derechosdelamujer.org/wp-content/uploads/2016/02/Violencia-sexual-en-El-Salvador-Guatemala-Honduras-y-Nicaragua-Analisis-de-datos-primarios-y-secundarios.pdf>

Para comprender lo que significa que los procesos de justicia transicional tengan una perspectiva de género donde asuman la VS contra las mujeres como un problema que exige prioridad e inmediatez para su erradicación, es necesario comprender que existen diversas interpretaciones de lo que significan estos procesos a través de lo que denomina Varela “las gafas violetas”<sup>267</sup>. En ese caso, Bell y O'Rourke hablan de la teoría de la justicia transicional como justicia ordinaria<sup>268</sup>, como justicia de liberación<sup>269</sup> y como justicia restaurativa<sup>270</sup>. La primera, denota cómo las medidas de justicia y la rendición de cuentas son esenciales para salir de un conflicto, siendo consideradas como imperfectas y transitorias al ser selectivas (solo altos mandos enjuiciados), partiendo de la premisa “algo de justicia es mejor que no tener ninguna”<sup>271</sup>.

Esto les ha permitido a las mujeres, según las autoras, definir y expresar su daño por las violaciones a sus derechos y presionar para que se sepa la verdad de lo sucedido sin olvidar que a los victimarios se los tiene que investigar y juzgar por estos crímenes. Casos como el de Guatemala, Perú, Argentina y Colombia, son caracterizados por tener movimientos de mujeres dedicados a llevar adelante la exteriorización de este objetivo, haciendo énfasis en los crímenes de violencia sexual <sup>272</sup>. Sin embargo, las cifras de los casos de crímenes de violencia sexual siguen quedando en la impunidad.

La segunda postura parte de la parcialidad de mecanismos de justicia transicional, justificada por la naturaleza peculiar del momento de transición y los objetivos finales liberales de la misma<sup>273</sup>. Así como lo afirma Kora, el enfoque está enmarcado de arriba hacia abajo, donde la justicia es parte de la estrategia liberal de consolidación de la paz<sup>274</sup>.

---

<sup>267</sup> Varela, Nuria. *Feminismo para principiantes*, 10 y ss.

<sup>268</sup> Al respecto puede consultarse también: Aukerman, Miriam J. (2002). Extraordinary evil, ordinary crime: A framework for understanding transitional justice. *Harvard. Human. Rights Journal.*, núm.39 y vol. 15(2002):39-98.

<sup>269</sup> Entre las principales defensoras de esta postura se encuentra Teitel, la cual puede ser consultada en: Teitel, Ruti G. *Transitional justice*. Oxford University Press on Demand, 2000; Teitel, Ruti G. “Transitional justice genealogy”. *Harvard Humun. Rigths Journal*, vol. 16 (2003):69 y ss.

<sup>270</sup> Además, puede consultarse a Además, puede consultarse: Park, Augustine. "Community-based restorative transitional justice in Sierra Leone." *Contemporary Justice Review* núm.1, vol.13 (2010): 95-119.

<sup>271</sup> Bell, Christine, y O'Rourke, Catherine. “Does feminism need a theory of transitional justice? An introductory essay”, 24 y ss.

<sup>272</sup> Figari Layús, Rosario, y Oettler, Anika. "El caso de las reparaciones a víctimas de violencia política sexualizada en Argentina, Guatemala, Perú y Colombia". *Violencia y desigualdad*, vol. 64 (2017):64-78.

<sup>273</sup> Figari Layús, Rosario, y Oettler, Anika. "El caso de las reparaciones a víctimas de violencia política sexualizada en Argentina, Guatemala, Perú y Colombia", 37.

<sup>274</sup> Andrieu, Kora. “Civilizing peacebuilding: Transitional justice, civil society and the liberal paradigm”. *Security Dialogue*, núm.5, vol.41 (2010): 537-558.

Así la concepción de la verdad es una forma clara y exclusiva de narración; y la concepción de la violencia es puramente política, no económica ni estructural. Teitel, por su parte, argumenta que las nociones convencionales del Estado de derecho y la responsabilidad individual se reconsideran en términos de un proyecto de liberalización, esto hace que ese periodo de transición donde se quiere una transformación de un país, se acepte la democracia liberal y el estado de derecho<sup>275</sup>. Así, por ejemplo, las medidas de reparación se apartan de su función convencional para desempeñar “roles funcionales y simbólicos” en la transformación política del Estado<sup>276</sup>. No obstante, “el liberalismo impuesto a nivel internacional como promoción del valor es contrario a las feministas aspiraciones antiimperialistas”, donde los sujetos de derechos siguen siendo reducidos a caracterizaciones rígidas sin posibilidad dar un rol participativo y real a las mujeres<sup>277</sup>.

La tercera, denota una concepción de justicia que rechaza una relación necesaria entre rendición de cuentas y procesos de derecho penal, pero considera que la justicia restaura relaciones y comunidades<sup>278</sup>. En ese caso, la reconciliación entre víctima y victimario se vuelve parte fundamental del proceso, centrando la atención en la figura de víctima para encaminar las medidas a repararla más que en propender por un castigo ejemplar al victimario por el hecho atroz cometido, y así lograr “el restablecimiento de la paz social”<sup>279</sup>. En ese caso, se aborda la posibilidad de pensar a la justicia restaurativa “más allá del discurso masculino del crimen y los juegos de palabras de castigo hacia una noción de relaciones reparadoras”<sup>280</sup>

Así se propone como primer paso “asegurar las reformas en procedimientos judiciales para garantizar que las víctimas de violencia sexual no resulten revictimizadas por el proceso legal adversarial”<sup>281</sup>. Como segundo paso, involucrar medidas reparadoras

---

<sup>275</sup> Teitel, Ruti G. “Transitional justice genealogy”, 68 y ss.

<sup>276</sup> Teitel, Ruti G. “Transitional justice genealogy”, 68 y ss.

<sup>277</sup> Bell, Christine, y O'Rourke, Catherine. “Does feminism need a theory of transitional justice? An introductory essay”, 23-44.

<sup>278</sup> Bell, Christine, y O'Rourke, Catherine. “Does feminism need a theory of transitional justice? An introductory essay”, 24.

<sup>279</sup> Uprimny, Rodrigo y Saffon, María Paula. “Capítulo 7 Justicia transicional y justicia restaurativa: tensiones y complementariedades”. En *Entre el perdón y el paredón: preguntas y dilemas de la justicia transicional*, compilado por Angélica Rettberg, 211-232, Bogotá: Universidad de los Andes, 2005.

<sup>280</sup> Uprimny, Rodrigo y Saffon, María Paula. “Capítulo 7 Justicia transicional y justicia restaurativa: tensiones y complementariedades”, 212 y ss.

<sup>281</sup> Bell, Christine, y O'Rourke, Catherine. “Does feminism need a theory of transitional justice? An introductory essay”, 23-44.

que permitan que las mujeres que fueron víctimas en un contexto bélico salgan de su estatus de víctima permanente y estigmatizada.

Las comisiones de la verdad se volvieron uno de los mecanismos de la justicia transicional que podría tomar matices de género con el fin de que las mujeres escucharan la verdad y supieran por qué fueron utilizadas como objetos sexualizados con posibilidad de recibir una reparación integral. Sin embargo, a pesar de la iniciativa para instaurar esta medida como una sólida salida, los opositores argumentaban que las comisiones de la verdad, al buscar objetivos como el de lograr la reconciliación nacional, normalizaron ciertas formas de violencia dejando por fuera otras configuradas en estos escenarios.

Además, casos como el de Sierra Leona, muestran que las comisiones de la verdad y los tribunales penales, al investigar graves violaciones de derechos humanos fueron contempladas como obstáculos a la reconciliación ya que "abrirían viejas heridas, generaban inestabilidad política e interfería con el cambio político"<sup>282</sup>. Otras experiencias como la de Timor-Oriental demostraron cómo los discursos son mucho más dinámicos, locales y menos abiertos a la narración de la transición al no tener en cuenta, entre otras cosas, diversos enfoques que no fueran institucionales<sup>283</sup>.

Esto llevó a que emergieran procesos no gubernamentales liderados por las comunidades afectadas, que tomaran en cuenta categorías de análisis como el género, desligándose de las premisas de enfoques tradicionales de justicia donde las mujeres eran y son aún, meros "peones de paz" o "peones de guerra"<sup>284</sup>. Este rol, concebido como una forma disfrazada de la objetivización de las mujeres que se presentaba en las comisiones de la verdad, evidenciaba la obstrucción de la efectiva participación de las mujeres para la consolidación de una transición que las reconozca como reales sujetos de derecho.

La anterior pudo determinarse al escuchar algunas experiencias de violencia sexual sistemática y de otros tipos, que no incluyeron sus vivencias en el marco estructural y en la toma de decisiones y soluciones dentro del proceso. Tal como expresa Aoláin, lo

---

<sup>282</sup> Leebaw, Brownwyn Anne. "The irreconcilable goals of transitional justice". *Human Rights Quarterly*, vol. 30 (2008): 95-118, 96.

<sup>283</sup> Kent, Lia. "Local memory practices in East Timor: Disrupting transitional justice narratives". *International Journal of Transitional Justice*, núm3, vol. 5. (2011): 434-455.

<sup>284</sup> Bell, Christine, y O'Rourke, Catherine. "Does feminism need a theory of transitional justice? An introductory essay", 23-44.

ideal sería que puedan llegar al reconocimiento de la presencia aumentada y reñida de las mujeres en el dominio de la justicia transicional y la articulación de una visión claramente feminista sobre los temas y políticas que dominan el campo<sup>285</sup>. Esto ha llevado a que las mujeres “aborden su exclusión buscando reformas de los estándares legales y de los mismos procesos de justicia transicional”<sup>286</sup>

Estos intentos de lucha están encaminados a establecer, en primer lugar, una mirada feminista que aporte herramientas y soluciones en pro de las mujeres que son sujetos pasivos de crímenes declarados internacionales como lo son los de violencia sexual. Para ello, se partiría del reconocimiento de las experiencias de las mujeres en la violencia sexual con el fin de estructurar acuerdos y políticas de ejecución, que caractericen de forma dinámica y abierta a las personas objeto de protección. En ese sentido, se articularían planes estratégicos que reparen el daño causado por la violencia sexual, que logren contribuir al proceso de justicia transicional.

Así los procesos de las mujeres llevados a cabo fuera de la institucionalidad, sostenidos con recursos propios, donde la influencia política estuviera determinada desde y para las víctimas sobrevivientes, podrían ser una alternativa distinta a la presentada por la justicia transicional que deberán ser articulados, con el fin de lograr que las normas de reparación de la violencia sexual hacia las mujeres en escenarios de conflicto cumplan con el real objetivo para el que fueron creadas.

### **1.3.2. Experiencias, relatos, testimonios y narraciones de las mujeres en los procesos de Justicia Transicional**

Para las mujeres, las medidas empleadas para la eliminación de la VS en los conflictos armados en distintos escenarios de JT en el mundo, representan un paso importante para sus vidas al ser considerados medios para dar a conocer lo que les ha ocurrido y así evitar que generaciones futuras experimenten VS en su vida<sup>287</sup>. El transmitir sus sentimientos y emociones sobre lo que padecieron se convierte en una de

---

<sup>285</sup> Ní Aoláin, Fionnuala. “Advancing feminist positioning in the field of transitional justice. *International Journal of Transitional Justice*, núm.6 y vol.2 (2012): 205-228.

<sup>286</sup> Bell, Christine, y O'Rourke, Catherine. “Does feminism need a theory of transitional justice? An introductory essay”, 23-44.

<sup>287</sup> Henry, Nicola. “Witness to rape: The limits and potential of international war crimes trials for victims of wartime sexual violence”, 114-134.

las formas de generar empatía con lo expresado logrando que otras personas aporten visiones y respuestas a problemas que se observan cuando la VS es abordada en estos contextos<sup>288</sup>.

El acercamiento de las mujeres a la JT y su participación volvió los procesos valiosos no solo para ellas sino para una sociedad que necesitaba cambios dentro de sus modelos de justicia. No obstante, dentro de algunos procesos los objetivos limitaban su participación siendo los lineamientos establecidos por los negociadores y obedecidos por las mujeres víctimas sobrevivientes. Esto trajo como consecuencia que muchas de ellas argumentaran sentirse poco involucradas en el proceso y aparentemente usada para fines con los que no se identificaban<sup>289</sup>. En otros casos, las medidas contemplaron la participación política de las mujeres en fases de diseño e implementación de las medidas de JT aportando a la consolidación de los intereses pactados como la reconciliación, la paz o sistemas democráticos en pro de los Derechos Humanos<sup>290</sup>.

Lo referido, relacionado con las mujeres víctimas sobrevivientes de VS, sirvió para que dentro de las agendas de JT se debatiera la importancia de crear espacios libres de VS contra las mujeres como principio fundamental de los acuerdos y directrices que hicieran parte de la transición. Lo que se puede apreciar a través de los relatos de las mujeres es cómo su lucha constante para ser tenidas en cuenta en estos espacios es permanente y colectiva<sup>291</sup>. Organizaciones de mujeres y demás grupos en pro de los derechos de las mujeres pudieron tomar vocería para dar a conocer la importancia de involucrar una perspectiva distinta para abordar este problema que no nacía del conflicto, sino que se había agravado en este contexto<sup>292</sup>.

---

<sup>288</sup> Henry, Nicola. "Witness to rape: The limits and potential of international war crimes trials for victims of wartime sexual violence", 114-134.

<sup>289</sup> Porter, Elisabeth. "Gendered narratives: Stories and silences in transitional justice". *Human Rights Review* núm.1, vol.17 (2016): 35-50.

<sup>290</sup> Alam, Mayesha. *Women and Transitional Justice: Progress and Persistent Challenges in Retributive and Restorative Processes*. Springer, 2014.

<sup>291</sup> Björkdahl, Annika y Mannergren Selimovic, Johanna. "Gendering agency in transitional justice". *Security Dialogue*, núm.46, vol.2 (2015): 165-182.

<sup>292</sup> En Colombia por ejemplo varios grupos de mujeres se reunieron para consolidar propuestas que serían expresados en la Habana, sede de negociación del proceso de paz que se consolidó con el Acuerdo de Paz de 2016. Para dar cuenta de este proceso con una perspectiva feminista puede consultarse: Céspedes Báez, Lina María y Prieto Ríos, Enrique. *Utopía u oportunidad fallida: análisis crítico del Acuerdo de Paz*. Editorial Universidad del Rosario, 2017.



Sin embargo, lo que se convirtió en una preocupación es que las autoridades judiciales, por prestar atención a la cantidad de relatos sobre violaciones, omitieron en sus investigaciones otros actos que también debían considerarse VS, lo cual llevó a posesionar este tipo de delito como el que siempre se cometía en escenarios de conflicto<sup>293</sup>. Ampliar la gama de delitos de VS en la JT es una reiterada crítica de las investigadoras que transmiten las voces de las mujeres<sup>294</sup>. Davis, por su parte, argumenta dentro de sus intervenciones públicas que una de las falencias de los procesos de JT es desconocer sujetos y nuevas formas de VS por ser casos no representativos<sup>295</sup>.

Es por ello que darles cabida a las voces de las mujeres en estos procesos sin silenciarlas, ni acallar sus relatos, se convierte en una meta que intenta que la transmisión de lo ocurrido en el conflicto armado, se realice a través de lo acontecido en sus cuerpos, en el reflejo de sus temores, sentimientos, entre otros, que no solo construyen memoria y verdad sino canales de reparación subjetiva<sup>296</sup>.

Los aparatos de justicia especializada creada con negociaciones políticas materializadas en acuerdos de paz hicieron posible que las víctimas sobrevivientes pudieran tener encuentros con otras mujeres que también habían tenido experiencias similares a las suyas<sup>297</sup>. El sentirse identificadas y acompañadas en vivencias similares alentó a muchas mujeres a contar sus experiencias para aportar a los procesos en consolidación, no solo para que su caso no quedara en la impunidad sino también para poder superar obstáculos personales que les dejó la VS<sup>298</sup>.

Sus descripciones de las violaciones, embarazos forzados, prostitución forzada, en distintos espacios de JT como eventos y audiencias, sirvió para sensibilizar no solo a

---

<sup>293</sup> Swaine, Aisling. "Beyond strategic rape and between the public and private: Violence against women in armed conflict", 755.

<sup>294</sup> Azkue, Irantzu Mendi. "Justicia transicional: dilemas y crítica feminista". *Cuadernos de Trabajo Hegoa*, núm. 59 (2012): 1-42.

<sup>295</sup> Youtube, "Davis, Laura: Gender Inclusive Transitional Justice. Peacemediation". 1:08, publicado el 16 de junio del 2014, <https://www.youtube.com/watch?v=3Dy6MZX0Hlg>

<sup>296</sup> Youtube, "Davis, Laura: Gender Inclusive Transitional Justice. Peacemediation". 1:08, publicado el 16 de junio del 2014, <https://www.youtube.com/watch?v=3Dy6MZX0Hlg>

<sup>297</sup> Porter, Elisabeth. "Gendered narratives: Stories and silences in transitional justice", 36 y ss.

<sup>298</sup> Al respecto puede consultarse: Baines, Erin K. "Today, I want to speak out the truth: Victim agency, responsibility, and transitional justice". *International Political Sociology*, núm.4, vol. 9 (2015): 316-332; Doak, Jonathan. "The therapeutic dimension of transitional justice: Emotional repair and victim satisfaction in international trials and truth commissions". *International Criminal Law Review*, núm.2, vol.2 (2011): 263-298.

las personas asistentes sino a todo aquel que tuvo con posterioridad acceso a ellas<sup>299</sup>. La digitalización de las experiencias fungió como estrategia de masificación de la información relativa a la VS en los conflictos armados utilizando videos, podcast y demás contenido multimedia donde las protagonistas eran las víctimas sobrevivientes<sup>300</sup>. Esto da un alcance internacional que facilita la visibilización de lo acontecido en estos escenarios, la consolidación de memoria de las víctimas sobrevivientes que contribuye a los procesos de las comisiones de la verdad sensibiliza a las personas generando empatía con las víctimas sobrevivientes, fortalece otros procesos de justicia transicional con la observación de las medidas, entre muchos otros.

No obstante, algunas de las víctimas sobrevivientes fueron críticas con las medidas de justicia empleadas para lograr la transición<sup>301</sup>. En primer lugar, el descontento se presenta en los tribunales de justicia transicional donde víctimas y victimarios participaron en audiencias libres, en un mismo espacio y lugar de encuentro. La carencia de acompañamiento para que estos encuentros no se tergiversaran, no generaran revictimización y demás para las mujeres y sus familias, generó en algunas víctimas frustración y dolor al escuchar que sus victimarios negaban la comisión de actos de VS contra ellas.

Esto fue lo que ocurrió, por ejemplo, con el proceso de paz condensado con la ley nacional 975 de 2005 de Colombia, la cual creó medidas de verdad, justicia y reparación, para victimarios paramilitares y víctimas de estos en Colombia<sup>302</sup>. Asimismo, fue evidenciado en otros procesos de JT como el llevado a cabo en Ruanda donde las víctimas escuchaban cómo aceptaban crímenes distintos a la VS que padecieron, omitiendo lo

---

<sup>299</sup> Salcedo López, Diana María. “Género, derechos de las víctimas y justicia transicional: Retos en Colombia”. *Revista de paz y conflictos*, núm.6 (2013): 124-151.

<sup>300</sup> Salcedo López, Diana María. “Género, derechos de las víctimas y justicia transicional: Retos en Colombia”, 141.

<sup>301</sup> Al respecto de críticas puede verse el ejemplo de Sierra Leona donde para la violencia sexual se excluyeron testimonios de las víctimas como pruebas en los juicios. Como referencia puede verse a Staggs Kelsall, Michelle y Stepakoff, Shanee. “When We Wanted to Talk About Rape: Silencing Sexual Violence at the Special Court for Sierra Leone”. *International Journal of Transitional Justice*, núm.3, vol.1 (2007): 355–374, <https://doi.org/10.1093/ijtj/ijm034>

<sup>302</sup> Aranguren Romero, Juan Pablo. *La gestión del testimonio y la administración de las víctimas: el escenario transicional en Colombia durante la Ley de Justicia y Paz*. Siglo del Hombre Editores, 2012.

ocurrido y en algunos casos y rechazando su participación en los actos perpetrados contra ellas<sup>303</sup>.

Lo relatado permite reflexionar en la carencia de medidas de sensibilización sobre la VS que la perspectiva de género aporta a los procesos. Es allí donde el relato de las mujeres ayuda a dar a conocer las inconformidades que presentan estos procesos y uno de los motivos por los cuales la participación voluntaria de algunas de las mujeres se reduce. El tratamiento inapropiado de la VS en escenarios transicionales constituye una de las razones por las cuales la JT genera desconfianza, insatisfacción y descontento<sup>304</sup>. Sumado a esto, les cuesta trabajo ver con claridad en qué les ayudan las medidas si el proceso de JT está sometido a la voluntad del victimario para el reconocimiento de delitos<sup>305</sup>.

Lo anterior se relaciona con los testimonios de las mujeres cuando se les pregunta acerca de la preparación e información sobre las consecuencias que la JT conlleva cuando hacen parte de los procesos y cuentan sus experiencias. La perspectiva de género en estos casos puede ayudar a que la información tenga en cuenta los efectos adversos que puede ocasionar la mala interpretación o la desinformación en cuanto medidas, beneficios y desventajas. Comprender que una mujer que ha sufrido VS necesita de herramientas para ejercer sus derechos en estos escenarios sin ser discriminadas o estigmatizadas por el hecho que las victimizó se vuelve una prioridad en los procesos. Sin embargo, esta perspectiva no fue incluida desde el inicio de la JT con los informes de Joinet sino que ha sido incorporada en resoluciones, leyes, decretos, directrices, entre otras, que involucran la perspectiva de género<sup>306</sup>.

---

<sup>303</sup> Corey, Allison, y Sandra F. Joireman. "Retributive justice: the Gacaca courts in Rwanda". *African Affairs*, núm 410, vol. 103 (2004): 73-89.

<sup>304</sup> Rimé, Bernard, et al. "The impact of Gacaca tribunals in Rwanda: Psychosocial effects of participation in a truth and reconciliation process after a genocide". *European Journal of Social Psychology*, núm.6, vol.41 (2011): 695-706.

<sup>305</sup> Rimé, Bernard, et al. "The impact of Gacaca tribunals in Rwanda: Psychosocial effects of participation in a truth and reconciliation process after a genocide", 698 y ss.

<sup>306</sup> Organización de Naciones Unidas, "Informe del Secretario General sobre la Independencia del poder judicial, la administración de justicia y la impunidad", Comisión de Derechos Humanos, (E/CN.4/1999/57), 13 de enero de 1999, <https://www.hchr.org.co/documentoseinformes/documentos/html/informes/onu/cddh/E-CN-4-1999-57.html>

Adicional a lo expuesto, las renuentes vulneraciones al derecho a la justicia de las víctimas sobrevivientes de estos procesos se vuelve más reiterativas por los criterios de selección y/o priorización de cada uno al igual que se presenta en la justicia penal internacional<sup>307</sup>. No todos los casos de VS llegan a ser investigados y juzgados por los organismos de justicia creado por este proceso, ya sea por el número de casos diversos sobre la materia que no cumplen con requisitos impuestos como la temporalidad de la comisión de los delitos o los niveles de gravedad de los delitos; o porque el victimario no quiere ser parte del proceso o no cumple con los requisitos para ser parte del mismo. Esta barrera impide que muchas mujeres que quieren contar su verdad y ser parte de los procesos se queden por fuera de las dinámicas desarrolladas en estas instancias.

Ser parte de los procesos de JT cuando la acogida a las medidas está siendo aceptada paulatinamente se convierte en manera de sobrellevar lo vivido y de descubrir en el proceso, la verdad de otras mujeres y la de los victimarios. La confrontación de estos testimonios o relatos ayuda a tener una visión más amplia del contexto vivido que puede terminar dando claridades sobre lo acontecido. En ese sentido, los centros de memoria histórica valoran los testimonios de cada uno de los participantes del conflicto porque así pueden reconstruir lo acontecido y ofrecer varias posturas a lo que será para un país su verdad del conflicto armado<sup>308</sup>.

En tercer lugar, los mecanismos de reparación otorgados por estas medidas se enfocan en dar visibilidad a las indemnizaciones como parte de lo que pueden ofrecer a las víctimas sobrevivientes. Lo problemático es que, al asignar montos económicos para reivindicar, no toman en cuenta que las mujeres han sido víctimas de múltiples delitos a la vez y las consecuencias se perpetúan en el tiempo, siendo la indemnización insuficiente para cerrar los círculos de violencia a los que son sometidas<sup>309</sup>.

Las reparaciones y los intentos de ser lo más justos posible con las víctimas sobrevivientes resultan inapropiados debido la homogenización del tratamiento aplicado

---

<sup>307</sup> Al respecto puede consultarse: López Díaz, Claudia. "Selection and prioritization of crimes as a research strategy of transitional justice". *Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas*, núm.117, vol. 42 (2012): 515-579.

<sup>308</sup> Brants, Chrisje, y Klep, Katrien. "Transitional justice: history-telling, collective memory and the victim-witness". *International Journal of Conflict and Violence (IJCV)*, núm1, vol. 7 (2013): 36-49.

<sup>309</sup> Moffett, Luke. *Transitional justice and reparations: Remedying the past?. Research handbook on transitional justice*. Edward Elgar Publishing, 2017.

a las múltiples víctimas de un conflicto armado<sup>310</sup>. Sin desconocer que los Estados, Organizaciones no gubernamentales y otros, han hecho un esfuerzo porque la integralidad sea tomada en cuenta en estos escenarios, resultan insuficientes y lentas en su ejecución. A pesar de tener un cuerpo normativo robusto para aplicar, la protección a las víctimas sobrevivientes de VS resulta insuficiente al no atenderse sus necesidades básicas de forma inmediata.

Es por ello por lo que se requiere que sus relatos, experiencia, narrativas, entre otras, sean escuchadas desde el diseño y la planeación de las medidas de JT con el fin de idear mecanismos de reparación que se ajusten a los contextos de violencia vividos, a los problemas sociales que se agravaron con la situación de conflicto y son escenarios de VS, a las creencias, cultura e idiosincrasias de las mujeres y la sociedad donde viven. Gracias a investigaciones de campo de organizaciones de mujeres que han generado procesos alternos para estudiar los problemas de la justicia transicional, se recogen diversas experiencias de las mujeres que aportan sus visiones para que estas funcionen de una manera más cercana a las realidades vividas en los territorios.

Estas investigaciones ponen en conocimiento que las víctimas sobrevivientes no deben ser tratadas como un simple medio para captar información del conflicto y llenar bases de datos con cifras sobre la violencia. En su lugar, la valoración de su testimonio y experiencia deberán en todo caso, ser la base de una construcción de contextos diversos que apunten a la construcción de una transición que forje caminos de transformación social libre de violencia.

Por ende, el llamado que hacen algunas de las voces de las mujeres es a evitar que los discursos se malinterpreten dando una percepción equivocada de sus sentimientos y experiencias con la VS. Algunas afirman que solo se atreven a hablar porque quieren obtener beneficios económicos. Estos argumentos fruto de la manipulación y descontextualización de los relatos, hace que la empatía hacia las víctimas sobrevivientes en algunos países no logre prosperar, trayendo como consecuencia la discriminación hacia las mujeres y su anulación como agentes políticos, toda vez, que sus aspiraciones pierden credibilidad por percepciones equivocadas.

---

<sup>310</sup> García Godos, Jemima. "Victim reparations in transitional justice-what is at stake and why". *Nordisk tidsskrift for menneskerettigheter*, núm.26 (2008): 111-130.

### 1.3.3. Avances y Metas por alcanzar de los procesos de JT relativos a la violencia sexual

Dentro de la amplia gama de textos e informes relativos a los avances y retrocesos de los procesos de Justicia Transicional, encontramos que se pueden apreciar puntos coincidentes en los distintos procesos, así sus contextos y sus comunidades tengan características particulares que las hacen incomparables por la especificidad de sus componentes<sup>311</sup>. Aunque esta Tesis Doctoral no se centra en este escenario específico, la descripción de estos puntos permite observar, tal como lo afirma Leentvaar y Taylor, cómo existen características generales de los procesos de JT que evidencian progresos para la eliminación de la violencia sexual contra las mujeres en los conflictos armados<sup>312</sup>.

Uno de estos es la inclusión de la perspectiva de género en los acuerdos o negociaciones de paz, que hacen posible la participación de las mujeres en los procesos de JT. Aunque en el mundo existen muchos procesos que así lo demuestran, algunos ejemplos latinoamericanos esbozan este punto, ya que se han llevado a cabo en contextos de países como Perú, Argentina, Guatemala y Colombia, que incluyeron mecanismos para la justicia, verdad y reparación de las víctimas sobrevivientes creando espacios para que las mujeres pudieran expresar su sentir con respecto a estas medidas<sup>313</sup>.

Aunque otras autoras lo ven como un avance que continúa perfeccionándose, haciendo una revisión a los procesos de JT de los años 90 hasta 2020, encontramos que anteriormente estos solo contaban con un enfoque de derechos humanos general, que

---

<sup>311</sup> Bassanezi, Irene Tosi. "Justicia Transicional y Género." En *Investigación joven con perspectiva de género*, editado por Marian Blanco, Rosa San Segundo, 32- 46. Instituto de Estudios de Género: Universidad Carlos III de Madrid. 2016; Salcedo López, Diana María. "Género, derechos de las víctimas y justicia transicional: Retos en Colombia", 124-151.

<sup>312</sup> Leentvaar, Karlijn, y Taylor, David. *Recurring Obstacles to Gender Sensitivity within Transitional Justice*. Utrecht: Impunity Watch, 2013.

<sup>313</sup> Sobre procesos de justicia transicional y la participación de mujeres puede consultarse: Azkue, Irantzu Mendia. "Justicia transicional: dilemas y crítica feminista", 3 y ss; Belén, Niño, María. "Aspectos novedosos de la participación política de las mujeres en el proceso de paz con las FARC-EP". *Cuadernos de estrategia*, núm.189 (2017): 209-220; Mantilla, Falcón, Julissa. "La Justicia Transicional y los Derechos de las Mujeres: Posibilidades y retos". *IUS ET VERITAS*, núm. 51 (2015): 208-223; Björkdahl, Annika y Mannergren Selimovic, Johanna. "Gendering agency in transitional justice", 165-182.; Alam, Mayesha. *Women and Transitional Justice: Progress and Persistent Challenges in Retributive and Restorative Processes*. Springer, 2014.

permitía tener en cuenta a las mujeres, niños y niñas como simples receptores de las medidas<sup>314</sup>. Pero con el sustento legal posterior a los 90, dentro del cual está la Resolución 1325 de 2000 expedida por la ONU, se insta a los Estados a tomar medidas con la intención de que las mujeres tengan más participación en esos procesos, que ayudarán a fomentar esa transición<sup>315</sup>.

Es por ello por lo que procesos de JT como el de Colombia, logrado con la firma del Acuerdo de Paz en 2016, contó con participación de una representación de mujeres en la fase de diseño del Acuerdo, donde se crea la Subcomisión de Género para darle seguimiento a los avances en esta materia<sup>316</sup>. Asimismo, la creación de las Comisiones de la Verdad ha ayudado a esclarecer cuáles fueron los actos de violencia sexual contra las mujeres, más frecuentes en cada conflicto<sup>317</sup>. En el caso latinoamericano, Guatemala, Perú y Colombia comienzan a visibilizar a través de sus reportes, cómo la violación no es el único acto cometido en el conflicto armado, sino otros tipos de violencia sexual recurrentes como las esterilizaciones forzadas, los abortos forzados, la prostitución y la desnudez, forzadas<sup>318</sup>.

La posibilidad de dar importancia a la verdad para el esclarecimiento de los hechos, motivos, causas y fines de la comisión de actos de violencia sexual en escenarios bélicos se convirtió en un avance para determinar qué medidas tomar para lograr los fines establecidos por las partes negociadoras de los acuerdos.

Es así como las comisiones de la verdad comienzan a ser consideradas un mecanismo de confianza para las víctimas sobrevivientes que prefieren contar lo sucedido en esta instancia dando fortaleza a otras que no han querido hacerlo y para poder contribuir, además, al cumplimiento de objetivos gubernamentales como lo son la

---

<sup>314</sup> Nabukeera Musoke, Harriet. "Transitional justice and gender in Uganda: Making peace, failing women during the peace negotiation process". *African Journal on Conflict Resolution*, núm.2, vol. 9. (2009):121-129.

<sup>315</sup> Organización de Naciones Unidas, "Violencia sexual relacionada con los conflictos", (S/RES/1325/2000), Consejo de Seguridad, 31 de octubre de 2000, <https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2006/1759.pdf>

<sup>316</sup> Céspedes Báez, Lina María y Prieto Ríos, Enrique. *Utopía u oportunidad fallida: análisis crítico del Acuerdo de Paz*, 310.

<sup>317</sup> Arvesú Juárez, Sandra Marcela. "Los silencios en la memoria. Narrativa de la violencia sexual en la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Perú". *Entre Diversidades*, 'núm. 6 (2016): 49-77.

<sup>318</sup> Arvesú Juárez, Sandra Marcela. "Los silencios en la memoria. Narrativa de la violencia sexual en la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Perú", 47 y ss.

reconciliación y la paz nacional<sup>319</sup>. No obstante, la crítica reiterada en algunos estudios sobre la materia se centra en el uso de la verdad, obtenida en estos escenarios transicionales<sup>320</sup>.

En ese entendido, en algunos procesos de JT, las comisiones de la verdad son mecanismos alternativos donde voluntariamente los victimarios y las víctimas sobrevivientes acuden para que se esclarezcan las violaciones de los derechos humanos a lugar, en el contexto específico y se forje una memoria histórica local y nacional. Esto implica que la verdad contada aquí no será tomada como medio probatorio en procesos judiciales de forma paralela<sup>321</sup>.

Lo anterior permite afirmar que el uso de la verdad en los procesos debe analizarse con detenimiento cuando de violencia sexual se trate, ya que con la confianza en los procesos de JT se llega a la colaboración de las partes para lograr investigar y dar una sanción a aquellos victimarios que cometieron estos actos<sup>322</sup>. Además, esto trae repercusiones en los procesos de reparación debido a que la verdad es tomada por las víctimas como una medida de satisfacción toda vez que el relato en algunos casos logra que los victimarios cuenten la verdad de lo que aconteció y pidan perdón a las víctimas.

Ahora bien, los negociadores de los acuerdos aparentemente moldean las medidas de JT de acuerdo con lo que sus contextos requieren, eligiendo los parámetros de verdad necesarios para la transición, lo cual genera la parcialidad de la verdad, ya que conducen a que los victimarios cuenten únicamente lo que necesiten para ser beneficiarios de las medidas de justicia<sup>323</sup>.

Lo referido es un problema, por ejemplo, cuando los victimarios son confrontados por las víctimas sobrevivientes con hechos recordados por estas, y los primeros no aceptan o no piden perdón público por la comisión de los actos de violencia sexual. Es

---

<sup>319</sup> Acosta Varón, Laura Sofía. “La Comisión de la Verdad de Perú y su línea de género como lección para Colombia”. En *Retos y posibilidades en tiempos de construcción de paz y posconflicto*, 51-80, Programa de investigación de política exterior colombiana. Colombia: 2020, 51.

<sup>320</sup> Orozco Abad, Iván, et al. “*Justicia y Paz: ¿verdad judicial o verdad Histórica?*”. Organización Internacional para las Migraciones (OIM-Misión Colombia), 2016, <https://es.calameo.com/read/000059089a21fb9f98a66>

<sup>321</sup> Orozco Abad, Iván, et al. “*Justicia y Paz: ¿verdad judicial o verdad Histórica?*”, 367.

<sup>322</sup> Orozco Abad, Iván, et al. “*Justicia y Paz: ¿verdad judicial o verdad Histórica?*”, 367.

<sup>323</sup> Staggs Kelsall, Michelle y Stepakoff, Shanee. “When We Wanted to Talk About Rape: Silencing Sexual Violence at the Special Court for Sierra Leone”, 355-374.



allí donde se fracturan los procesos, al no cumplir con el objetivo por el cual fueron propuestos en los acuerdos de paz que formalizaron los procesos de JT<sup>324</sup>.

Al comparar los procesos de JT de Guatemala, Burundí y Bosnia y Herzegovina, Leentvaar y Taylor en su investigación, concluyeron que las mujeres siguen padeciendo por los dificultades prácticas para acceder a las comisiones de la verdad u otros mecanismos de verdad ya que: 1) Existen barreras idiomáticas porque las mujeres solo hablan dialectos locales; 2) Carecen de un acompañamiento adecuado para ayudar a las víctimas sobrevivientes de violencia, ya sea psicológica o física; 3) Los procesos no contemplan en sus mecanismos las percepciones sociales sobre los roles de género, que impiden que las mujeres busquen atención por violaciones a sus derechos; 4) Persiste el miedo a la estigmatización o represalias de su comunidad o perpetradores; 5) Carecen de herramientas para eliminar la tendencia a culpar a la víctima de violencia sexual en lugar del perpetrador y 6) La protección de testigos es inadecuada<sup>325</sup>.

Esta gama de conclusiones lleva a la reflexión de las diferencias que existen entre las ventajas de los procesos judiciales y los procesos de JT, con respecto a las garantías que la verdad ofrece a cada una de ellas en escenarios donde sus Estados pretenden convertir sus territorios en democráticos o llegar a la paz, encontrando que la última contiene para las víctimas una garantía temporal que no ofrece la salida judicial. Tener una fecha de inicio y terminación de las medidas se convierte en un signo de confianza para las víctimas sobrevivientes que tienen una idea de cuánto tiempo puede durar este proceso que ofrece verdad basada en la confianza de las partes<sup>326</sup>. Sin embargo, se advierte que la temporalidad de las medidas también puede jugar en contra de los resultados que se quieren obtener, ya que lograr, por ejemplo, la reconciliación, puede durar décadas según la efectividad de los procesos que se pongan en marcha.

Otro aspecto donde existe una falencia es en el componente de justicia que parece ser especialmente difícil para las mujeres. El reducir las penas o el otorgar amnistías a los delitos se percibe como un signo de debilidad del sistema que pretende darles a los

---

<sup>324</sup> Staggs Kelsall, Michelle y Stepakoff, Shanee. "When We Wanted to Talk About Rape": Silencing Sexual Violence at the Special Court for Sierra Leone", 358.

<sup>325</sup> Leentvaar, Karlijn, y Taylor, David. *Recurring Obstacles to Gender Sensitivity within Transitional Justice*. Utrecht: Impunity Watch, 2013, 40 y ss.

<sup>326</sup> Tamarit Sumalla, Josep María. "Comisiones de la verdad y justicia penal en contextos de transición." *InDret: revista para el análisis del derecho*, núm. 1. (2010): 1-29.

victimarios más garantías que las que ofrecen a las víctimas sobrevivientes. La dupla impunidad y derechos de las víctimas parece presentar una figura antagónica que no logra ponderarse en los procesos de JT, razón por la cual existe una gama de autores que atacan los procesos por este motivo y otros que los defienden, aduciendo que la impunidad no debe ser entendida solo en términos de castigo a los victimarios<sup>327</sup>.

Sumado a eso, la falta de personal capacitado para abordar la violencia sexual contra las mujeres no se tuvo en cuenta en procesos como los de República Democrática del Congo, Bosnia y Herzegovina, Sierra Leona, entre otros. Muchas víctimas sobrevivientes informan que temen a la estigmatización y revictimización por parte funcionarios a cargo de las medidas de justicia. Leentvaar y Taylor describen cómo estos han mostrado poca consideración diciendo que “las declaraciones de sobrevivientes de violencia sexual a menudo reciben una respuesta grosera, por ejemplo, insinuando que las mujeres eran promiscuas y por tanto provocaban violencia sexual, o que más bien disfrutaron del episodio de violencia, trivializando el delito de violencia sexual”<sup>328</sup>.

Esto da cabida para repensar la forma de capacitar a los funcionarios en JT y VS. Dentro de esta gama de situaciones, la ambivalencia de avances y retrocesos necesariamente permite centrarse en la parte financiera, gastos y costos de la VS en los procesos de JT. Uno de los avances sobre la materia es la destinación específica de recursos de Fondos Estatales, de Cooperación Internacional, donaciones y entre otros para que este proceso funcione. No obstante, para que actividades como la capacitación de funcionarios operen, se necesita más que unos cuantos recursos para costear

---

<sup>327</sup> Entre muchos autores y autoras que relatan las razones del desacuerdo con el proceso de justicia transicional se pueden consultar: Roht Arriaza, Naomi, y Mariezcurrena, Javier. *Transitional justice in the twenty-first century: beyond truth versus justice*. Cambridge University Press, 2006; Fletcher, Laurel E. “A Wolf in Sheep's Clothing? Transitional Justice and the Effacement of State Accountability for International Crimes”. *Fordham Int'l LJ*, núm. 39 (2015): 447-552; Sharp, Dustin N. “What Would Satisfy Us? Taking Stock of Critical Approaches to Transitional Justice”. *International Journal of Transitional Justice*, núm.3 vol.3 (2019): 570-589.

Ahora bien, también existen aquellos que describen algunas razones por las cuales los procesos de justicia transicional pueden ser considerados alternativas viables para salir de los conflictos o lograr la democracia en sus Estados: Mallinder, Louise, y McEvoy, Kieran. “Rethinking amnesties: Atrocity, accountability and impunity in post-conflict societies”. *Contemporary Social Science*, núm1, vol.6(2011): 107-128; Porras, Javier Dorado. “Justicia transicional.”. *EUNOMÍA. Revista en Cultura de la Legalidad* (2015): 192-204; Anichiarico González, Angélica María. “Una visión de la terminación de los conflictos armados centrada en la justicia transicional”. *Universitas. Revista de Filosofía, Derecho y Política* (2016): 165-194.

<sup>328</sup> Leentvaar, Karlijn, y Taylor, David. *Recurring Obstacles to Gender Sensitivity within Transitional Justice*. Utrecht: Impunity Watch, 2013, 45 y ss.

capacitaciones o procesos educativos sobre el género ya que parecen no ser suficientes para lograr que el enfoque prospere<sup>329</sup>.

Esta afirmación tiene su sustento en que la estructura base del proceso debe tener esta perspectiva para que todas las medidas de forma transversal contemplen este enfoque y haya una congruencia en la puesta en marcha de estas. Se requiere de esta forma que la fase de diseño y planeación se pase a la ejecución efectiva de las medidas que sirvan para sensibilizar no solo al personal sino a toda la sociedad que interviene en el proceso<sup>330</sup>.

En ese sentido, los recursos destinados para las medidas de JT y la asignación dentro de las mismas para promover el enfoque de género en la transición se vuelve un tema secundario cuando la estructuración debe presentar un plan financiero que aborde las reparaciones de las múltiples víctimas sobrevivientes en general sin especificar si son o no víctimas de VS<sup>331</sup>. Por su parte, diversas autoras afirman que la falta de recursos suele plantearse como un impedimento para promover el género dentro de la JT<sup>332</sup>.

Esto parece estar relacionado según Leentvaar y Taylor con el hecho de que trabajar en temas relacionados con el género se considera un trabajo adicional o secundario<sup>333</sup>. Explican cómo los criterios de priorización de recursos evitan el avance en lo propuesto, y describen cómo se asignan tan pocos que solo permiten contratar un responsable para todo lo referido con el tema, lo cual lo hace insostenible en sociedades que apenas están sensibilizándose con la VS en los conflictos armados. Por ende, reiteran que los obstáculos sociales y de otro tipo son más preocupantes y relevantes para que la transición funcione<sup>334</sup>.

---

<sup>329</sup> Nesiah, Vasuki. "Discussion lines on gender and transitional justice: An introductory essay reflecting on the ICTJ Bellagio Workshop on Gender and Transitional Justice". *Colum. J. Gender & L.* núm. 15 (2006): 799-812.

<sup>330</sup> Al respecto puede consultarse: Nagy, Rosemary. "Transitional justice as global project: Critical reflections". *Third World Quarterly* núm.2, vol.29 (2008): 275-289; Gready, Paul y Robins, Simon. "From transitional to transformative justice: A new agenda for practice". *International Journal of Transitional Justice* 8.3 (2014): 339-361.

<sup>331</sup> Gready, Paul y Robins, Simon. "From transitional to transformative justice: A new agenda for practice", 345 y ss.

<sup>332</sup> Entre ellas puede consultarse: Campbell, Kirsten. "The gender of transitional justice: Law, sexual violence and the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia", 412 y ss ; Gready, Paul y Robins, Simon. "From transitional to transformative justice: A new agenda for practice", 339-361, O'Rourke, Catherine. *Gender politics in transitional justice*, 20 y ss.

<sup>333</sup> Leentvaar, Karlijn, y Taylor, David. *Recurring Obstacles to Gender Sensitivity within Transitional Justice*. Utrecht: Impunity Watch, 2013, 50 y ss.

<sup>334</sup> Leentvaar, Karlijn, y Taylor, David. *Recurring Obstacles to Gender Sensitivity within Transitional Justice*. Utrecht: Impunity Watch, 2013, 50 y ss.

Al plantear esto, se queda expuesta la brecha entre las herramientas con perspectiva de género y la práctica real de las medidas de JT. Esta brecha dificulta realizar cambios inmediatos en las percepciones de roles y estereotipos de género que enfrentan las víctimas sobrevivientes en la transición. Si para sus comunidades o círculos vivenciales sus cuerpos se encuentran marcados por la violencia impuesta, generando un estigma social con repercusiones en la vida individual y colectiva de las mujeres, de poco sirve que el funcionario ofrezca la mejor de las atenciones para los casos objeto de estudio. Por ende, se puede deducir que, si bien los recursos y las herramientas pueden corregir este déficit, la brecha entre lo deseado y la práctica a menudo tiene raíces más profundas.

Por otra parte, los mecanismos de reparación son una novedad en los distintos estamentos de JT. Con el concepto de integralidad, se propusieron medidas complementarias para lograr reparar lo mejor posible a las víctimas sobrevivientes de las vulneraciones de los Derechos Humanos en estos contextos<sup>335</sup>. Pero la práctica para su determinación expone la estandarización de los montos en las indemnizaciones en los procesos debido a los numerosos casos de víctimas sobrevivientes del mismo victimario<sup>336</sup>.

Poniendo un ejemplo, podría verse con mayor claridad cuando se habla de que una víctima sobreviviente sufrió por actos de VS, sus seres queridos fueron desaparecidos, fue desplazada de su hogar por represalias del victimario teniendo que buscar refugio en otra ciudad distinta a la que habitaba y ha tenido hijos producto de esa violación que se produjo. Al momento de evaluar cuál sería su monto de indemnización y las medidas complementarias que necesita para lograr ser reparada, puede apreciarse por ejemplo que su indemnización podría ser lo más alta que el sistema permita otorgar; sin embargo, no es solo una víctima en este caso, son cientos de víctimas por conflicto que no alcanzan a ser reparadas como se pretende o lo requieren.

También el acceso desigual a reparaciones y esquemas de compensación para mujeres víctimas aumenta su carga económica y su vulnerabilidad después de un

---

<sup>335</sup> Rubio Marín, Ruth, *The gender of reparations: unsettling sexual hierarchies while redressing human rights violations*. Cambridge University Press, 2009.

<sup>336</sup> Al respecto puede consultarse Schneider, Andrea Kupfer. "The Intersection of Dispute Systems Design and Transitional Justice". *Harv. Negot. L. Rev.* núm. 14 (2009): 289.

conflicto<sup>337</sup>. Esta falta de consideración se encuentra especialmente en el caso de viudas o mujeres cabeza de familia debido a que después de la VS tuvieron que asumir maternidades no deseadas, necesitando ellas tratamientos psicológicos para aceptación de su condición, y para sus hijos manutención, educación, vivienda, entre otras. Además, en algunas sociedades los montos de reparación no son reclamados por las mujeres sino por parientes hombres, quienes todavía son los llamados a administrar los recursos de sus familias y las mujeres que pertenecen a ella.

Todo lo anterior, permite repensar cómo se ofrece una reparación integral teniendo en cuenta las especificidades contextuales, vivenciales y de otra índole, para lograr que estas mujeres que ostentan el status de víctimas ante la ley puedan seguir con sus proyectos de vida o retomar los que tenían si así lo desean, ya que esta tarea todavía no se ha podido lograr en procesos de JT. Una de las causas puede ser entendida desde la imposición de los enfoques en la fase de diseño de las medidas de JT, donde uno de los elementos de caracterización es ser víctima sobreviviente de violaciones de los Derechos Humanos o víctima del conflicto armado, por ende, son encasilladas en un mismo conjunto para establecer montos estandarizados. Otra forma de estandarización se da por ejemplo por el tipo de delito que han sufrido las víctimas, así para aquella que padeció la muerte de un ser querido se le da un monto específico distinto a la que sufrió VS.

Por eso, una de las metas que aún no logran su transformación con una mirada de género son estas medidas debido a que cada experiencia de victimización presenta sus matices. Adicionalmente no se toma en cuenta lo que realmente la víctima requiere ya que el proceso está orientado en el lenguaje que las partes negociadoras creyeron convenientes sin contar con el de las víctimas sobrevivientes.

---

<sup>337</sup>Para tener una visión global del tema de referencia puede consultarse: Wühler, Norbert, y Niebergall, Heike. *Property restitution and compensation: Practices and Experiences of Claims Programmes*. Hammersmith Press, 2008.

## **Capítulo II. Reparación de mujeres víctimas del conflicto armado colombiano: un estudio de caso**

---

Una vez definida la VS, sus dinámicas, el contexto y la jurisprudencia internacional sobre el objeto principal, entra en la ecuación de análisis la categoría de reparación, entendida como “aquella que tiene lugar cuando se causa un daño por la comisión de un delito de VS en ocasión al conflicto armado por parte quien o quienes puedan ser considerados responsables”.<sup>338</sup>

La reparación, observada en los procesos penales en Colombia sobre VS de mujeres en el conflicto armado toma en consideración, al igual que en la esfera internacional, la connotación de integralidad, la cual debe contener medidas como la indemnización, la restitución, la rehabilitación personal, psicológica, física, la satisfacción y las medidas de no repetición.

En ese sentido, las particularidades del proceso de reparación de las víctimas sobrevivientes a las cuales se les ocasiona un daño en este contexto bélico exigen una serie de requisitos que permiten acceder a una reparación. Dentro de éstos, pueden apreciarse los relativos a la interposición de una denuncia, el ser reconocidas como parte del proceso judicial, el aporte de las evidencias que den a conocer los costos y gastos de la vulneración de los derechos de las víctimas, o la condena del victimario por el delito de VS, entre otros.

Así, si se cumplen los requisitos exigidos, la víctima sobreviviente podrá ser reparada, los victimarios declarados culpables del delito y el Estado puede ser llamado a responder por los daños como responsable solidario toda vez que, incumplió sus deberes y obligaciones de proteger y garantizar espacios libres de violencia. La anterior concepción, aplicada a los procesos penales colombianos después de los fallos condenatorios o antes por otras vías judiciales, se convierte en una herramienta complementaria en los procesos de reconstrucción del tejido social cuando se presentan

---

<sup>338</sup> Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-228/02, “Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 137 de la Ley 600 de 2000, “(p)or la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”, 3 de abril del 2002. Sala de Casación Penal, MP. Manuel José Cepeda Espinosa y Eduardo Montealegre Lynett. <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2002/C-228-02.htm>

actos de VS en conflictos armados. Colombia, un país ubicado en América del Sur, con más de 8 millones de víctimas de conflicto armado, de las cuales más del 50% son mujeres, contempla dentro de sus estrategias, la reparación como forma de contribuir a una paz estable y duradera<sup>339</sup>.

Este capítulo presenta los resultados de un estudio de caso sobre VS contra las mujeres en el conflicto armado colombiano a través de los procesos penales de setenta (70) víctimas sobrevivientes de estos actos, que presentaron una denuncia por estos hechos ante la jurisdicción penal colombiana, esperando, con el proceso, una reparación adecuada al daño sufrido evitando que el caso haga el tránsito a la impunidad. Esto toma en consideración que la reparación no consta solamente de indemnizaciones monetarias que pueden cubrir los daños ocasionados a las víctimas sobrevivientes, sino de pilares fundamentales como la verdad, justicia y reparación.

Siendo consecuentes con lo expresado en el capítulo anterior sobre las deficiencias de los procesos penales, este capítulo pretende dar argumentos sobre la necesidad de tener en cuenta la voz de la víctima sobreviviente en todas las etapas procesales y en su reparación.

Lo anterior se plantea con el fin de encontrar un camino alternativo y complementario que permita que la reparación sea diseñada desde y para las mujeres que cuentan con particularidades diversas. A pesar de la conciencia que se tiene sobre la importancia de la evolución del concepto y las formas de reparación en el ámbito internacional (y doméstico) con respecto a las mujeres víctimas sobrevivientes de VS, el estudio se centra en una época actual de desarrollo jurídico que permitirá mirar la reparación desde enfoques diversos como los expuestos por las feministas – étnico, diferencial, género- debido a que su aplicación está siendo cada día más frecuente cuando se quiere incluir a las mujeres en el diseño, proyección e implementación de procesos que logren objetivos.

Para abordarlo, tal como se expresó en el acápite de aclaraciones metodológicas, se realizó el análisis basado en el método de investigación estudio de caso donde se tomó

---

<sup>339</sup>Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Sistema de Información de Clínica y Odontología Forense – SICLICO, “Análisis comparativo enero a octubre 2014 -2015 de los hechos de violencia contra mujeres en Colombia”, acceso el 25 de septiembre de 2020, <https://www.medicinalegal.gov.co/documents/20143/86545/D%C3%ADA+Internacional+de+la+Eliminaci%C3%B3n+de+la+Violencia+contra+la+Mujer.pdf/577d507c-1fa3-764d-050e-0da5c6eecef4>

como componentes principales de análisis la VS, el contexto y la reparación. Esto permitió -como se verá en las páginas que aparecen a continuación-, interpretar los relatos de las mujeres que han sufrido directamente por actos de VS, construir el contexto a través de las voces de las víctimas sobrevivientes y, finalmente y sobre todo, observar la eficiencia de los procesos penales sobre VS y su reparación por vía judicial, ya que lo pretendido es dar a conocer una estrategia complementaria de reparación penal desde y para las mujeres víctimas sobrevivientes de VS.

De esta forma, se identifica esta alternativa de reparación para superar los obstáculos de efectividad que impiden que las mujeres víctimas sobrevivientes obtengan en su integralidad las medidas ofrecidas en la normatividad internacional y nacional, que contribuyan a los planes de vida colectivos e individuales de las mismas, entre otros fines.

Este diseño metodológico se llevó a cabo en etapas por un término de consolidación de cuatro años, teniendo una etapa de planteamiento del problema en la que se explora el contexto, circunstancias de modo, tiempo lugar, posibles actores y partícipes de la VS de mujeres en el conflicto armado colombiano, y una etapa de revisión de la normatividad vigente al momento de los hechos y la jurisprudencia nacional -hoy ya impregnada de conceptos de justicia internacional- relativa a los procesos judiciales y la reparación integral de la VS en Colombia.

A lo largo de los apartados se irán introduciendo los resultados obtenidos en el estudio. Así, se da a conocer el análisis de datos del estudio de caso, apoyado en los expedientes penales que dan a conocer el proceso judicial de VS de la muestra donde se espera se efectúe la reparación y se culmina con la etapa de análisis de la efectividad de la reparación judicial en estos procesos judiciales de mujeres víctimas o sobrevivientes de VS.

Cabe destacar que los principales obstáculos que supuso la investigación de los casos objeto de estudio fueron la reserva legal de los procesos amparados por la protección de los datos que pueda identificar a posibles o presuntos autores, o poner en riesgo a las mujeres víctimas sobrevivientes, testigos y demás personas que aparecen en el proceso; y el riesgo de revictimización de mujeres que aparecen como víctimas en los procesos penales. Es por ello por lo que la indagación tomó como fundamento las



entrevistas realizadas por los funcionarios judiciales, en la mayoría de los casos como única fuente de prueba, que se encuentran consignadas en los respectivos expedientes.

En ese orden, ampliando un poco el panorama que se expondrá, el primer apartado describe el contexto relativo a la VS de mujeres en el conflicto armado colombiano. Es así como se resalta la importancia de construir y analizar el contexto desde las voces de las mujeres víctimas sobrevivientes y se exponen los hallazgos encontrados en los procesos judiciales de VS de mujeres de la muestra donde hubo acceso a los expedientes en cabeza de la Fiscalía General de la Nación.

El segundo apartado tiene como protagonista el análisis de la normatividad nacional colombiana y la jurisprudencia relevante, relativa a los procesos penales de VS hacia las mujeres en el conflicto armado y sus medidas judiciales de reparación. Además, se exponen resultados de análisis correlacional donde categorías como la edad y la omisión de la denuncia juegan un papel importante para justificar su falta de efectividad.

Además, se llevó a cabo una revisión de instrumentos como la denuncia, informes de policía judicial y demás documentos que reposan en los expedientes físicos, usando como técnica de investigación los diarios de campo para anotar las observaciones que ayudaran a caracterizar a la población objeto de muestra mediante el análisis de frecuencias.

El tercer apartado da cuenta del análisis de los procesos penales de la VS y la reparación judicial por estos hechos en Colombia. En efecto, en este apartado se pudo describir cómo el sistema judicial está realizando las indagaciones preliminares del proceso, la etapa procesal en la que se encuentra cada caso y el tratamiento de reparación que está siendo aplicado judicialmente.

Por último, se realiza una comparación entre los conceptos de la literatura con los obtenidos en los instrumentos objeto de análisis, estableciendo las razones por las cuales la efectividad de estos procesos exige tomar alternativas diversas para que las víctimas sobrevivientes sean reparadas con otros procesos alternos a los que contempla el proceso penal.

## 2.1. Contextualización de la violencia sexual en mujeres colombianas

La intención de este apartado es mostrar la importancia de los relatos, experiencias o testimonios en la construcción del contexto de violencia, ya sea en instancias judiciales o fuera de ellas, con el fin de llevar a cabo la aplicación metodológica pretendida.

Para una mayor comprensión del problema que se intenta resolver, encontramos que a nivel mundial emergen contextos donde las dinámicas de VS contra las mujeres son constantes, como es el caso de Colombia. Este país latinoamericano con un recorrido de conflicto que supera la media década de enfrentamientos entre el Estado y diversos grupos al margen de la ley que surgen a lo largo de su historia cuenta con una amplia gama de casos de VS contra las mujeres<sup>340</sup>.

Autoras como Céspedes, al referirse a este conflicto armado particular argumenta que en Colombia existen “regímenes de VS” que van más allá de los fines de satisfacción de deseos sexuales de los actores armados<sup>341</sup>. En ese entendido, se relata el testimonio de una mujer que vivía en una zona de conflicto donde sus principales líderes habían sido asesinados por grupos armados. Ella expresa que la intención del victimario al violarla fue manifestada y consistía en generarle un dolor más allá del físico, algo más que el que sentiría por la muerte de los líderes de su región<sup>342</sup>.

Este testimonio, como muchos otros que reposan en instancias judiciales o gubernamentales, permite observar la importancia de la reconstrucción del contexto desde las voces de las víctimas sobrevivientes de VS y el estudio de sus efectos en las mujeres por las dinámicas de conflicto. Al respecto, los testimonios en este país se convirtieron en pieza clave para visibilizar la VS como un problema social y de salud pública que debía ser abordado como un objetivo principal en la agenda estatal.

---

<sup>340</sup> Puede consultarse: Fiscó, Sonia. “Atroces realidades: la violencia sexual contra la mujer en el conflicto armado colombiano”, 119-159; Galvis, María Clara. *Situación en Colombia de la VS contra las mujeres*. Corporación Humanas, Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género, 2009; Céspedes Báez, Lina María, Chaparro González, Nina y Estefan Vargas, Soraya. “Metodologías en el estudio de la VS en el marco del conflicto armado colombiano”. *Colombia internacional*, núm. 80 (2014): 19-56.

<sup>341</sup> Céspedes Báez, Lina-María. “La VS en contra de las mujeres como estrategia de despojo de tierras en el conflicto armado colombiano”. *Revista estudios socio-jurídicos*, núm.2, vol. 12 (2010): 273-304.

<sup>342</sup> Céspedes Báez, Lina-María. “La VS en contra de las mujeres como estrategia de despojo de tierras en el conflicto armado colombiano”, 275.

Este objetivo es desarrollado simultáneamente con medidas de la justicia transicional, que intentan reconstruir las líneas de acción de este fenómeno dando importancia a la participación de varios actores. Entre ellos, se encuentran las víctimas sobrevivientes que se enteran de lo que pasará, no solo con sus victimarios una vez culminan las etapas transitorias, sino que se proyectan hacia lo que sería un escenario libre de VS.

Estos procesos, por la situación prolongada de conflicto armado, se logran concretar por la mediación entre grupos al margen de la ley o ilegales con el gobierno de turno llegando a acuerdos que contienen beneficios hacia las personas que hacen parte de estas organizaciones y así se reincorporen a la vida civil. No obstante, las medidas implementadas hasta el momento como comisiones de la verdad, órganos de justicia especial, entre otros, crean espacios donde las víctimas sobrevivientes cuentan sus experiencias de violencia, que ayudan a reconstruir lo que sucedía con ellas y muchas mujeres más con la VS. Gracias a ellos, se pudieron visibilizar, por ejemplo, las dinámicas de la VS en Colombia discriminadas por grupo armado, las distintas estrategias puestas en marcha para lograr poner a las mujeres en indefensión, o las interpretaciones de los actos que cometieron contra ellas, entre muchos otros

Grupos armados como los paramilitares –grupo armado que con complicidad estatal llevaba a cabo sus ataques contra otras guerrillas generalmente por la lucha territorial- tenían estrategias para realizar violaciones masivas a mujeres y fueron dadas a conocer a través de las voces de las mujeres. El conocimiento de estos hechos pudo darse en primera instancia por el acuerdo materializado en una ley nacional; Ley 975 de 2005 modificada por la Ley 1592 de 2012 expedida por el Congreso de Colombia que establece garantías para que tanto víctimas como victimarios puedan relatar la verdad de lo que sucedió. Es aquí donde se resalta cómo los procesos de VS en el conflicto armado mostraron este fenómeno ya no como un imaginario sino como una realidad.

A pesar de que la verdad judicial ya recogía muchos testimonios que daban cuenta de lo que les sucedía a las mujeres en este contexto, este modelo de aplicación simultaneo de medidas ordinarias de justicia y justicia transicional, logra mostrar un panorama congruente y sistemático de VS contra las mujeres. Lo relatado en los procesos penales ordinarios pudo constatarse a través de los testimonios, dictámenes periciales médico-

legales, informes de estudios de contexto de los investigadores asignados a las dependencias judiciales, reportes de psicología y psiquiatría, entre otros, donde relucía cómo las prácticas comunes de los actores armados con múltiples fines tenían como blancos frecuentemente a las mujeres.

Las coincidencias entre los testimonios de víctimas y victimarios en estos espacios creados por las normas, comenzaron a trazar las dinámicas utilizadas por diversos grupos armados donde el papel de la mujer en el conflicto podía variar por las características locales del conflicto, de los intereses individuales y colectivos de las personas enfrentadas, las identidades de las mujeres y sus particularidades.

Lo acontecido en las salas de audiencia de JT en el marco de la denominada Ley de Justicia y Paz, donde su moderador, un juez de Justicia y Paz, constataba las versiones de los victimarios con las de las víctimas, logró participación para que se lograra, de cierta forma, reparar a las víctimas a través de varias medidas, incluida la verdad. Esta ley en particular, conocida a nivel nacional e internacional como Ley de Justicia y Paz fue el primer camino que se trazó para que se repensara la reparación en todos sus niveles, poniendo a la víctima como sujeto participante en la reconstrucción de lo sucedido<sup>343</sup>. La intención inicial de este proceso era hacer uso de la medida de reincorporación y reinserción de los grupos armados para contribuir “de manera efectiva a la consecución de la paz nacional”<sup>344</sup>.

En congruencia con lo que pasa en el sistema judicial, existe una interrelación de interpretaciones, donde confluyen las voces de las víctimas, la del o los victimarios, testigos, hechos reconocidos por el público a nivel general, entre otros, donde suele percibirse la preferencia de lo narrado por otras personas distintas a las mujeres por poseer mayor credibilidad ya sea porque su relato no cuenta con evidencia física demostrable, o la mujer es juzgada por su actuar y su vestimenta, entre otros factores

Lo anterior, da paso a que en estas páginas se tenga en consideración la voz de la víctima como algo principal y prioritario para efectos de la reconstrucción de lo sucedido

---

<sup>343</sup> La Fiscalía General de la Nación, hace una recopilación normativa de la regulación y jurisprudencia existente sobre el proceso de justicia y paz. Este documento está disponible en [https://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/2012/04/ley\\_975\\_de\\_2005.pdf](https://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/2012/04/ley_975_de_2005.pdf)

<sup>344</sup> Congreso de Colombia, Ley 975 de 2005, “Ley de verdad justicia y reparación”, Diario Oficial 45.980, 25 de julio de 2005. [https://www.cejil.org/sites/default/files/ley\\_975\\_de\\_2005\\_0.pdf](https://www.cejil.org/sites/default/files/ley_975_de_2005_0.pdf)

y así lograr una reparación que contemple ese carácter de integralidad del que se hablará más adelante.

El avance en materia penal y constitucional en Colombia sobre la VS contra mujeres en el conflicto armado, permite observar que son las mujeres los primeros sujetos de derecho que identifican las circunstancias de tiempo, modo y lugar de lo que les ocurre y señalan las estrategias para cometer estos ilícitos. Por ende, todos estos testimonios dan a conocer, de manera integradora, los elementos que convierten a la VS en ataques generalizados y sistemáticos, convirtiéndose en algunos casos en crímenes de lesa humanidad.

Al respecto, la Corte Constitucional menciona que en Colombia son frecuentes “los actos de VS perpetrados como parte integrante de operaciones violentas de mayor envergadura -tales como masacres, tomas, pillajes y destrucciones de poblados-, cometidos contra las mujeres, jóvenes, niñas y adultas de la localidad afectada, por parte de los integrantes de grupos armados al margen de la ley”<sup>345</sup>.

Como ejemplo está la masacre de “El Salado”, en la que los paramilitares torturaron, desplazaron, asesinaron y violaron a mujeres de la población civil por presuntamente pertenecer a otro grupo armado denominado Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP)<sup>346</sup>. Las experiencias de las mujeres violadas documentadas en varios informes sobre la VS por parte de varias ONG y organizaciones estatales, relatan cómo niñas y mujeres tuvieron que padecer

---

<sup>345</sup> Corte Constitucional de Colombia, Auto 092 del 2008, “tutela sobre mujer y desplazamiento forzado”, 22 de enero de 2004, MP. Manuel José Cepeda Espinosa. <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2004/t-025-04.htm>.

Al respecto las sentencias proferidas por jueces denominados “jueces de justicia y paz” describen las actividades realizadas para la comisión de actos de VS de los grupos al margen de la ley. Entre ellas se encuentra la sentencia que condena a los paramilitares José Rubén Peña Tobón, Wilmer Morelo Castro; José Manuel Hernández Calderas por VS y otros delitos. En ella, se realiza una descripción de las dinámicas de contexto de la VS. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, Rad. 1100160002532008-83194; 1100160002532007-83070, “Sentencia por Homicidio y otros”, 1 de diciembre de 2011, MP. Léster María González Romero. [https://www.ictj.org/sites/default/files/subsites/ictj/docs/Sentencias\\_Justicia-y-Paz/2011.PrimerInstancia.Pena-Morelo-y-Hdez\\_Arauca.pdf](https://www.ictj.org/sites/default/files/subsites/ictj/docs/Sentencias_Justicia-y-Paz/2011.PrimerInstancia.Pena-Morelo-y-Hdez_Arauca.pdf)

<sup>346</sup> Sierra Acero, Aura María, y Linares Ardila, Karen Lorena. *Ya nos cansamos de callar: VS contra la mujer como arma de guerra del paramilitarismo en la región de los Montes de María*. Universidad Pedagógica Nacional, 2014.

empalamientos, maltratos, penetraciones vaginales con miembro viril y otros objetos, tocamientos, entre otros<sup>347</sup>.

Este país y su contexto bélico, enmascara diversos fines para la comisión de la VS contra las mujeres que las convierten en objeto sexual, de humillación al oponente, con deberes sexuales y de cuidado, como medio para la consecución de fines de explotación sexual, como estrategia de represión y desplazamiento, entre otros. Al respecto, las víctimas desde sus distintas posturas logran ayudar al esclarecimiento del recorrido histórico de la masacre, al análisis de las figuras delictivas que tuvieron lugar, al replanteamiento de los mecanismos de reparación existentes y a la transformación de sus planes de vida individuales y colectivos.

Por su parte, el Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia (CNMH), creado como medida para contribuir en el tránsito a la paz a reconstruir el conflicto armado en el país, logra con esta información recaudada, hacer un análisis de la VS en este conflicto armado. En sus informes relata la importancia del ambiente particularmente bélico que se presenta en este país, resaltando cómo se vuelve indispensable la distinción entre “las violaciones estratégicas o cometidas en eventos estratégicos, de las oportunistas”<sup>348</sup>. En el caso de las primeras, los actos de VS están relacionados con los objetivos dentro de la estructura delictual que apuntan a lograr la ocupación de tierra para tener el poder dentro de una zona geográfica determinada o para lograr beneficios para todo el grupo o una parte de él<sup>349</sup>.

Es así como se observa en los relatos de los victimarios las intenciones grupales o individuales de cometer actos de VS contra las mujeres. Uno de ellos es expresado por los relatos que condensa el CNMH, que advierte que estos victimarios actúan con el fin de obtener un beneficio diferente al que busca el grupo ilegal/legal al que pertenecen, siendo una característica general, el uso de la fuerza, el poder, las armas y la difusión de

---

<sup>347</sup> Al respecto puede consultarse: Benenson, Peter. *Colombia, cuerpos marcados crímenes silenciados. VS contra las mujeres en el marco del conflicto armado*. Amnistía Internacional, 2004; Embajada Suiza en Colombia, y Fundación Semana. “La masacre de El Salado: esa guerra no era nuestra”. *Organización Internacional para las Migraciones (OIM-Misión Colombia)*, 2016.

<sup>348</sup> Grupo de Memoria Histórica. *Mujeres y Guerra., Víctimas y Resistentes en el Caribe Colombiano*. Editora Aguilar, Altea, Taurus, Alfaguara, S. A., 2011, 216. <http://centrodememoriahistorica.gov.co/wp-content/uploads/2020/01/Mujeres-y-Guerra.-V%C3%ADctimas-y-Resistentes-en-el-Caribe-Colombiano.pdf>.

<sup>349</sup> Al respecto puede consultarse: Afanador Contreras, María Isabel y Caballero Badillo, María Claudia. “La VS contra las mujeres. Un enfoque desde la criminología, la victimología y el derecho”, 122-133.

miedo a través de la VS. En ese sentido, se exalta cómo las mujeres relatan la situación de indefensión y la carencia de consentimiento para tener contacto sexual con los victimarios<sup>350</sup>.

En concordancia, la Corte Constitucional reitera como una de las manifestaciones de la VS, distinta a las establecidas por esa corporación como “acciones violentas de mayor alcance”, son las que se cometen deliberadamente por personas que pertenecen a cualquiera de los bandos enfrentados en conflicto, pero con fines de satisfacción individual de intereses<sup>351</sup>. Este tipo de VS suele cometerse cuando las mujeres colaboran, hablan, tienen relaciones sentimentales o de otra índole con miembros de otros grupos armados o estatales. Estos ejemplos no excluyen otros más que puedan ser cometidos por los victimarios por estas razones particulares.

Pero existe una dinámica particular en el conflicto armado colombiano referente al ingreso de niñas y mujeres a los grupos armados que presentan características machistas normalizadas que repercuten en la comisión de actos de VS. El ideal de igualdad y la obtención de mayores condiciones económicas individuales y colectivas que se venden a las mujeres para convencerlas del ingreso a las filas de los grupos armados conllevan a que las mujeres desconozcan en una gran proporción la falacia que se presenta en el discurso. Esto puede evidenciarse en los testimonios de las reinsertadas (mujeres que pertenecen a los grupos armados y dejan las armas para reincorporarse a la vida civil a través de programas ofertados por el Gobierno Nacional) que describen sus actividades diarias dentro de los grupos<sup>352</sup>. Tener relaciones sexuales con sus jefes sin consentimiento, por coerción, fuerza o simplemente por resignación, teniendo como consecuencia en muchos casos el embarazo forzado, así como el aborto forzado y la explotación sexual de las mismas, se convirtieron en prácticas reiterativas que son consideradas a nivel internacional y nacional como crímenes de lesa humanidad.

---

<sup>350</sup> Afanador Contreras, María Isabel y Caballero Badillo, María Claudia. “La VS contra las mujeres. Un enfoque desde la criminología, la victimología y el derecho”,130.

<sup>351</sup> Afanador Contreras, María Isabel y Caballero Badillo, María Claudia. “La VS contra las mujeres. Un enfoque desde la criminología, la victimología y el derecho”,130.

<sup>352</sup>Al respecto puede consultarse: Ibarra Melo, María Eugenia. *Mujeres e insurrección en Colombia: reconfiguración de la identidad femenina en la guerrilla*. Pontificia Universidad Javeriana, Departamento de Ciencia Jurídica y Política, Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, 2009; Hundek Pichón, Leticia Elena. “Mujeres reinsertadas”. *Advocatus*, núm 27 (2016): 65-82.

Adicional a lo anterior, la salud sexual y reproductiva comienza a verse como un problema real de salud pública al evidenciarse en los programas gubernamentales de reinserción la falta de conocimiento sobre derechos sexuales y reproductivos que se evidenciaron a través de las entrevistas a las víctimas de VS<sup>353</sup>. Si bien existen sistemas oficiales de información como el Instituto Colombiano de Medicina Legal y Forense, que emite los dictámenes sobre las lesiones que sufren las mujeres cuando son víctimas de VS, sus reportes se centran solo en el dato de las lesiones, y no profundizan en las causas de las mismas. Por ello, las organizaciones de mujeres y las organizaciones no gubernamentales contrastan esta información con la recaudada por las redes de investigación y apoyo que se forman entre ellas, dando un valor agregado para entender la VS desde las mujeres que la padecen.

En el mismo tenor, otra de las dinámicas de VS que se presenta en el país tiene que ver con distintas concepciones del género y sus estereotipos raciales, étnicos y culturales. En este sentido, las justificaciones de los victimarios radican en el comportamiento de las mujeres y su forma de vestir, hablar e interactuar en espacios públicos donde se ejerce dominio por parte de uno o varios grupos armados. Debido a esto, se generan encasillamientos conductuales donde las mujeres deben actuar de acuerdo con la feminidad, el decoro y los supuestos manuales morales y éticos de comportamiento tanto del grupo como de la sociedad.

En Colombia, por la diversidad étnica y racial existente, la VS tiene matices contextuales. Cuando las mujeres con identidades raciales y étnicas son identificadas por estereotipos de género y atributos sexuales se convierten en blancos de VS<sup>354</sup>. Es el caso por ejemplo de la Región Pacífica colombiana donde existe gran número de población afrodescendiente y negra, la cual ha sido permeada por los estereotipos de género consistentes en atributos físicos y conductuales que se malinterpretan y se normalizan<sup>355</sup>. Estos se establecen a través de percepciones sexuales y sociales que hacen ver a las

---

<sup>353</sup>Puede observarse el trabajo de: Uribe Sayago, María José. *El estatus de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en las FARC*. Tesis de licenciatura, Universidad San Francisco de Quito. Quito: USFQ, 2016.

<sup>354</sup>Meertens, Donny, Viveros, Mara, y Arango, Luz Gabriela. “Discriminación étnico-racial, desplazamiento y género en los procesos identitarios de la población negra en sectores populares de Bogotá”. *Pobreza, exclusión social y discriminación étnico-racial en América Latina y el Caribe* (2008): 181-214.

<sup>355</sup> Marcialles Montenegro, Carmen Ximena. “VS en el conflicto armado colombiano: racismo estructural y violencia basada en género”. *Revista Via Iuris*, núm.19 (2015): 69-90.



mujeres como objetos para la satisfacción sexual. Es así como se refieren a ellas con frases como “uy negrita como está de rica” o “ustedes sirven es para la cama” por sus características físicas marcadas: caderas anchas, senos grandes y voluptuosas<sup>356</sup>. Esto se refleja en informes de organizaciones de mujeres del Pacífico donde se evidencia cómo por ser negras fueron violadas, explotadas sexualmente y forzadas a prostituirse<sup>357</sup>.

Autoras como Céspedes, Chaparro y Vargas, muestran cómo para visibilizar la problemática de la VS contra mujeres en Colombia, las organizaciones de mujeres y la Mesa de Mujeres y Conflicto Armado en este país, reunieron testimonios y documentaron casos para contrastarlos con la normatividad que exigía la judicialización de la VS<sup>358</sup>. Así empezó a evidenciarse cómo el factor contexto tenía influencia en las dinámicas de la VS. Esto tiene relevancia cuando la VS es tomada como un fenómeno social y estructural que tiene efectos severos en las mujeres y sus comunidades, lo cual apunta a considerar el punto de partida para indagarlo, siendo uno de los caminos el estudio desde y para las mujeres donde se tome como un factor influenciado el contexto, sus vivencias, sus características, su cultura, entre otras.

También, las dinámicas de la VS se segregan por categorías políticas. Las mujeres que presentan liderazgos fuertes en comunidades azotadas por la violencia son víctimas de VS por esta condición<sup>359</sup>. Al respecto, aquellas defensoras de los derechos de la mujer han reportado a través de comunicados y documentos no oficiales cómo fueron coaccionadas y sometidas a actos de tortura y demás tratos inhumanos y degradantes por llevar a cabo liderazgos participativos, estructuración de políticas públicas, alentar a las mujeres a denunciar o por ayudar a su comunidad<sup>360</sup>. Sin embargo, la violencia no solo

---

<sup>356</sup> Meneses Copete, Yeison Arcadio "Representaciones sociales sobre afrodescendientes: la aventura cultural, la VS-género y luchas multidimensionales." *Memoria y sociedad*, núm.37, vol. 18 (2014):76-92.

<sup>357</sup> Marciales Montenegro, Carmen Ximena. “VS en el conflicto armado colombiano: racismo estructural y violencia basada en género”. *Revista Via Iuris*, núm.19 (2015): 69-90.

<sup>358</sup> Céspedes Báez, Lina María, Chaparro González, Nina y Estefán Vargas, Soraya. “Metodologías en el estudio de la VS en el marco del conflicto armado colombiano”, 19-56.

<sup>359</sup> Al respecto puede consultarse: Barreto Daza, Sandra Milena. *Riesgos de los liderazgos sociales de las mujeres en el contexto del conflicto armado colombiano: configuración de un problema de política pública*. Diss. Universidad del Rosario, 2017; Barreto Daza, Sandra Milena. “Los riesgos y el papel político de las lideresas sociales en la construcción de la paz territorial en Colombia”. *Ciudad Paz-Ando*, núm1, vol.11 (2018): 7-15.

<sup>360</sup> Barreto Daza, Sandra Milena. “Los riesgos y el papel político de las lideresas sociales en la construcción de la paz territorial en Colombia”8 y ss.

genera daños individuales y directos sino también colectivos e indirectos<sup>361</sup>. El núcleo familiar, de amistad, laboral y político comienza a verse perjudicado por la VS que se ejerce contra sus líderes.

Así, la presente investigación resulta pertinente al intentar comprender las distintas dinámicas de la VS con el fin de encontrar una alternativa para poder reparar los daños que este tipo de actos han dejado en las mujeres. Su voz y su perspectiva deben ser tenidas en cuenta para establecer sistemas que satisfagan los derechos de las víctimas y se evite la repetición de estos actos consagrados como delitos nacionales e internacionales.

Sin embargo, debido a que la gama de estudios es tan diversa, este fenómeno se ha querido evidenciar solo a través de fuentes oficiales de información donde los datos que exhiben se basan en indicadores de medición que presentan tasas o porcentajes, dando la idea de que la violencia contra las mujeres existe porque se puede cuantificar y mostrar con datos estadísticos, desconociendo que las voces de las mujeres no siempre son audibles por múltiples factores.

En ese entendido, se pretende hacer ver al lector que las mujeres siempre son expuestas como objetos de análisis y no como sujetos de construcción de sus propias rutas y contextos libres de VS. Al ser sujetos de conocimiento se evitaría ser definidas únicamente en los términos de victimización perpetua por el hecho infortunado que tuvieron que padecer. Los pares de términos víctima/sobreviviente, o empoderada/oprimida, entre otros, conllevan a reflexionar en la forma en que se ha venido reconstruyendo la verdad alrededor de la VS en este país, siendo las mujeres solo un foco de obtención de información y no de génesis de la verdad.

En los procesos judiciales en la rama penal se puede observar que cuando se está investigando un caso de VS en el conflicto, se realiza por parte de policía judicial- ente encargado de desarrollar indagaciones preliminares que den lugar al esclarecimiento de lo acontecido-, la reconstrucción del contexto donde se cometió el delito, estableciendo

---

<sup>361</sup> Correa Delgado, Juan Sebastian. “Desde las voces de las mujeres campesinas reconstruimos la historia y construimos paz: Memoria histórica con las lideresas de la ACVC”. *Emancipação*, núm 2, vol. 19 (2019): 1-14.

además el posible grupo armado que militaba en la zona en la fecha que refiera la víctima de ocurrencia de los hechos para así, identificar al victimario<sup>362</sup>.

Este mapa de los hechos es estructurado de tal manera para que el ente acusador pueda tener certeza de que los actos de VS contra las mujeres fueron cometidos en zona de conflicto armado donde habitaban grupos al margen de la ley plenamente identificados. En ese sentido, se concentra la atención en el reconocimiento del violador, siendo la víctima un sujeto más del proceso. Aunque para la construcción de los hechos que serán probados se toman en cuenta las entrevistas de la víctima para construir el contexto de violencia, si lo referido por la mujer no va acompañado por un informe de policía judicial que así lo corrobore, es probable que sea desestimado por no ser fidedigno<sup>363</sup>.

Lo referido anteriormente lleva a cuestionar el sistema de reconstrucción de contextos en los procesos penales de VS, ya que la credibilidad de la víctima no radica en su propia voz si no que ésta adquiere validez si es consignada por el funcionario de turno. Posturas criticadas justifican este proceder argumentando la falta de objetividad del testimonio de una víctima sobreviviente que ha sufrido por actos de VS, los cuales le han ocasionado daños psicológicos que impiden recordar exactamente qué le ocurrió, quién era su victimario y dónde sucedieron los hechos<sup>364</sup>.

Sin embargo, pararse desde esta postura puede llegar a tener efectos negativos para las víctimas sobrevivientes en el proces, por la revictimización que este argumento conlleva<sup>365</sup>. Las mujeres refieren que cuando son violadas o han sufrido por algún acto de VS, la acción de denunciar se convierte en un símbolo de valentía debido a las implicaciones que trae el acercarse a las autoridades para poner en conocimiento hechos

---

<sup>362</sup> Fiscalía General de la Nación. *Protocolo de investigación de violencia sexual. Guía de buenas prácticas y lineamientos para la investigación penal y judicialización de delitos de violencia sexual*. Fiscalía General de la Nación, <https://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/Protocolode-investigacio%CC%81n-de-violencia-sexual-cambios-aceptadosfinal.pdf> (2016).

<sup>363</sup> Wilches, Ivonne. "Lo que hemos aprendido sobre la atención a mujeres víctimas de violencia sexual en el conflicto armado colombiano." *Revista de estudios sociales*, núm. 36 (2010): 86-94.

<sup>364</sup> Wilches, Ivonne. "Lo que hemos aprendido sobre la atención a mujeres víctimas de violencia sexual en el conflicto armado colombiano", 86-94.

<sup>365</sup> Caicedo Delgado, Luz Piedad, et al. *Guía para llevar casos de violencia sexual: Propuestas de argumentación para enjuiciar crímenes de violencia sexual cometidos en el marco del conflicto armado colombiano*. Corporación Humanas, Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género, 2009.

como los relatos. El estigma social, la superación del miedo ya sea al victimario o la sociedad, entre otros, impiden que las víctimas denuncien<sup>366</sup>.

Por eso, cuando prosigue el proceso penal y los funcionarios judiciales no creen las versiones de las mujeres porque no son corroboradas por terceros, se produce una ruptura de la confianza que éstas y las demás personas de la sociedad han puesto en el proceso penal como vía de justicia y reparación. Esto trae como consecuencia un doble daño hacia las mujeres que han sido violadas en el contexto del conflicto armado y se atreven a denunciar, pues tienen que soportar las consecuencias de ser transgredidas en su sexualidad e integridad y resistir la incredulidad que el sistema judicial proyecta en sus decisiones.

En ese entendido, la credibilidad de la víctima de violencia sexual para el proceso judicial penal debería contar con unos criterios objetivos de verificación que carezcan de elementos revictimizantes. El contexto, reconstruido a través de los relatos, específicamente en el conflicto armado colombiano, da una visión realista y verídica no solo del hecho delictual sino también del daño que se causa y del fenómeno para lograr establecer sus causas y efectos, con el fin de encontrar soluciones efectivas para contrarrestar lo negativo y potenciar las salidas benéficas para las víctimas y la sociedad. En ese caso, se debe tener precaución al utilizar como argumento el relativo al daño psicológico y su capacidad de viciar el juicio de la víctima ya que no es veraz y debe evitarse su generalización<sup>367</sup>.

La temporalidad es otro factor que juega en contra del estudio del contexto ya que “cuando una víctima se decide a denunciar, los tiempos no son nuestros, ni de ella, son de procedimientos estrechamente rígidos: los tiempos dispuestos por el Estado son irrespetuosos y desestimulan insistentemente la denuncia, el decir, el contar”<sup>368</sup>. Este

---

<sup>366</sup> Al respecto Ivonne Wilches considera que el Estado y las instituciones que lo representan “Ven en el silencio una forma de ocultar la verdad; en el llanto excesivo, una forma de manipulación, y en las contradicciones, la confesión de la mentira”. Argumenta en su estudio que las palabras de una víctima de violencia sexual son valoradas de forma diferenciada por razones de sexo ya que “la credibilidad de los hombres y de sus palabras se da como un hecho, mientras que la de las mujeres pareciera siempre tener que comprobarse”. Wilches, Ivonne. “Lo que hemos aprendido sobre la atención a mujeres víctimas de violencia sexual en el conflicto armado colombiano”, 86.

<sup>367</sup> Al respecto puede consultarse: Echeburúa, Enrique, Paz, Corral, y Pedro Javier Amor. “Evaluación del daño psicológico en las víctimas de delitos violentos.” *Psicothema*, núm 1, vol. 14 (2002): 139-146.

<sup>368</sup> Echeburúa, Enrique, Paz, Corral, y Pedro Javier Amor. “Evaluación del daño psicológico en las víctimas de delitos violentos”, 139-146.

argumento permite contemplar todos aquellos casos de víctimas que guardaron silencio por mucho tiempo y decidieron denunciar muy posteriormente, ya que las pruebas médicas o periciales a lugar en el momento de comisión del ilícito -como muestras que pasan al laboratorio para ser examinadas o dictámenes que indiquen lesiones físicas, psíquicas o de otra índole- son inexistentes e irrecuperables. En ese caso, el ente encargado de investigación de dependencias a su cargo realiza un recuento histórico del conflicto para reconstruir el contexto del caso de VS de las mujeres que denuncian. Sin embargo, se observa que estos casos no prosperan porque los hechos no pueden ser corroborados de forma fidedigna y concluyente para emitir un fallo condenatorio y reparatorio.

### **2.1.2. Estudio de caso a partir de la contextualización**

Lo relatado por las víctimas sobrevivientes en instancias penales judiciales fue el punto de inicio de la construcción del contexto de estudio. La denuncia como mecanismo para comenzar el proceso consigna datos sociodemográficos producto de preguntas que reposan en los formatos oficiales captados a través de los funcionarios que recepcionaron a las mujeres víctimas sobrevivientes de VS. La conducción de las mujeres para que dieran respuestas que se ajustaran a los formatos, no permitía conocer cómo se identificaban o cómo vivían. Por ende, la atención se centró en la narración de los hechos en las denuncias y en las entrevistas posteriores a estas denuncias donde las mujeres dieron a conocer lo sucedido.

Las 70 mujeres relataron actos de penetración de miembro viril u otros objetos sin su consentimiento, lo cual es catalogado en Colombia como el delito de acceso carnal violento en persona protegida - denominado en la legislación internacional como violación-. Si bien, algunas de ellas relatan haber sufrido tocamientos sexuales o desnudez forzada, el delito más frecuente por el que fueron tramitadas sus denuncias correspondió únicamente al de violación. Por ende, el 91% de la muestra de estudio es catalogada preliminarmente como víctima de este delito ante el sistema penal colombiano.

---

### 2.1.2.1. Datos estadísticos

A partir de la revisión de las narraciones y entrevistas se pudo observar que la voz de la víctima es tenida en cuenta para la reconstrucción contextual de lo acontecido. Bajo este entendido, es en primera instancia -de forma indirecta-, la que direcciona la investigación para que los actores de los hechos de VS sean sancionados. Al poner en conocimiento el hecho victimizante a través de la denuncia, las mujeres dieron a conocer cuál es su edad, su nivel educativo, sus roles principales dentro y fuera del conflicto, la fecha de ocurrencia de los hechos, la fecha en la que entablaron la denuncia y en algunos casos, identificaron a sus victimarios o el grupo armado ilegal al que pertenecían.

No obstante, los datos analizados en este estudio evidenciaron que la visión netamente categórica de estas variables ha sido interpretada de tal forma que se utiliza para desinformar, encasillar, estigmatizar y discriminar a las mujeres víctimas de VS en el conflicto armado. Por ello, la indagación necesitó de una mirada feminista que pusiera a las mujeres como sujetos de construcción y transformación de contextos, y no como objetos analizables a través de datos estadísticos cuantificables.

#### 2.1.2.1.1. Edad

El análisis de variables como la edad permitió determinar que la VS contra las mujeres es una cuestión que va más allá de la etapa etaria en que la mujer se encuentre. El rango máximo y mínimo de edad de las mujeres víctimas de VS de este estudio oscila entre los 18 y los 67 años. En el caso de la mujer de 67 años, es su hija la que pone en conocimiento de los entes judiciales la VS, argumentando que su madre, quien era una persona con una condición de discapacidad, fue víctima de violación en el conflicto armado por parte de grupos armados ilegales, cuando su hija era apenas una niña<sup>369</sup>. Pero, por otro lado, está la mujer más joven del estudio que tiene 18 años al momento de denunciar, la cual argumenta cómo varios sujetos entraron a su casa y la violaron<sup>370</sup>.

---

<sup>369</sup> Entrevista realizada por policía judicial/Entrevista2/Caso10

<sup>370</sup> Entrevista realizada por policía judicial/Entrevista2/Caso63

Teniendo claridad de la edad máxima y mínima de los casos observados, se procedió a realizar el análisis de frecuencias utilizando el programa SPSS 24.0, con el fin de determinar cuál era la edad de las mujeres que denunciaban los hechos ante entes penales. Así, se logró establecer como lo muestra la Tabla 1, que la media de edad de las mujeres que ponen en conocimiento los hechos de VS en el conflicto es de 34,79 años.

**Tabla 1. Edad de Mujeres de Estudio de Violencia Sexual en el conflicto armado**

	N	Mínimo	Máximo	Media
Edad	70	18	67	34,79
N válido (según lista)	70			

Fuente: Información interpretada de los expedientes de procesos penales adelantados en la Fiscalía 5ª Especializada de la ciudad de Popayán, Colombia. Tabla de Elaboración Propia (2019).

Sin embargo, este rango de edad de las mujeres del estudio realizado denota que el grupo etario al que pertenecen las víctimas sobrevivientes no es una variable lineal que permita concluir que las mujeres de cierta edad son proclives a sufrir VS en el conflicto. Esto quiere decir que en el conflicto armado colombiano la mujer es violada, tenga 18 o 67 años. Lo anterior permite aseverar que en el contexto bélico objeto de estudio, las dinámicas de VS contra las mujeres son continuas en el tiempo, y que es precisamente por su condición de mujeres que éstas son propensas a padecer este tipo de violencia.

Distinta reflexión se hace si se considera el daño que puede ocasionar para la vida de personas que apenas están iniciando a construir sus planes de vida y los ven alterados o destruidos por causa del acto de VS, o para aquellos que observan la edad como factor a evaluar en la discriminación estructural. En el primer caso, se recurre a la subjetividad de la víctima sobreviviente, que dimensiona en primer plano el daño en su vida personal y colectiva, y por otro, los criterios de creación de sus planes de vida; en esta última situación, una mujer puede tener metas concretas que realmente se vieron obstaculizadas por los efectos de la VS o estar potencialmente comprometidas. En cualquiera de las situaciones descritas, no se podría determinar una generalidad y concluir que todas las mujeres de 18 años se ven afectadas en sus planes de vida y las mujeres de 50 años no.

Lo que sí puede ser conclusivo es que, independientemente de la edad, todas las mujeres cuando son víctimas de VS en el conflicto, tienen secuelas en sus vidas.

Estas reflexiones son necesarias porque al carecer de ellas, se caería en el error de ofrecer interpretaciones inexactas de los datos, lo cual lleva a que la percepción de las mujeres que son víctimas de VS se desdibuje, trayendo como consecuencia que se generen situaciones de discriminación en varias esferas. Cuando esto ocurre, aparece más visible lo que se conoce como discriminación estructural, ya que trae consigo “presencia de estereotipos sociales que asignan a las personas discriminadas roles de subordinación”<sup>371</sup>.

La edad, según el contexto social, pone a las mujeres en ciertos roles rígidos que permiten que otros individuos ejerzan presión sobre ellas y las dominen. En el constructo social, por ejemplo, la edad reproductiva de las mujeres hace que la presión para ellas incremente cuando están llegando a los 30 años, por la creencia social de ser la edad ideal para tener hijos y casarse<sup>372</sup>.

Adicional a esto, la edad puede llegar a ser un factor de discriminación al comparar la situación de distintas mujeres que han sufrido por actos de VS. Al respecto, comentarios como “a ella la violaron, pero ya es mayor y tiene hijos no pasa nada. En cambio, la jovencita no va a conseguir ahora marido”<sup>373</sup>, permiten evidenciar cómo alrededor de la edad reproductiva se tienden a construir percepciones negativas y diferenciadas entre diversas víctimas de VS.

Esto se pone en contexto gracias a las entrevistas analizadas que reposan en los expedientes, donde distintas mujeres relatan los actos de VS que padecieron. Dentro de los casos, está otro ejemplo donde asocian su edad a construcciones sociales que las llevan a ser blancos de violencia, como el que gira en torno a su virginidad; “como yo era aún

---

<sup>371</sup> Barranco, Avilés, María del Carmen y Churruca Murguruza, Cristina. *Vulnerabilidad y Protección de los Derechos Humanos*. El tiempo de los Derechos, 2010, Madrid: 30 <https://biblioteca.tirant.com/cloudLibrary/ebook/show/9788490533901>

<sup>372</sup> Fiske, Susan T. “Prejudices in cultural contexts: shared stereotypes (gender, age) versus variable stereotypes (race, ethnicity, religion)”. *Perspectives on psychological science* núm 5, vol. 12 (2017): 791-799.

<sup>373</sup> Wilches, Ivonne. “Lo que hemos aprendido sobre la atención a mujeres víctimas de violencia sexual en el conflicto armado colombiano”, 86-94.



virgen, me violó”<sup>374</sup>; “todas las vírgenes tenían que pasar por el comandante”<sup>375</sup>. Esto refleja, cómo en algunos casos, la edad de las mujeres determina patrones socioculturales que las hacen blanco de VS.

#### **2.1.2.1.2. Grupos diferenciados**

Esta variable constituye un factor de especificación para las políticas públicas estatales al definir quién recibe atención y reparación teniendo en cuenta las características de los sujetos de derechos de forma diferenciada<sup>376</sup>. Es allí donde sale a relucir la segunda categoría de análisis, al efectuarse una agrupación de las mujeres víctimas de VS en el conflicto armado, en dos o más grupos considerados en Colombia como vulnerables<sup>377</sup>.

Grupos como “víctimas de conflicto armado”, “Mujeres, niños, niñas y adolescentes”, “personas con discapacidad”, “personas que pertenezcan a etnias o con características raizales”, entre otros, se enmarcan en lo explicado por Barranco como “personas que en aspectos importantes se encuentran en una posición de inferioridad, precisamente debido a la cualidad que les identifica como miembros de ese grupo”<sup>378</sup>, indicando la necesidad de un cambio de paradigma de los derechos humanos.

Así, en el estudio objeto de la muestra se evidencia que las mujeres en sus entrevistas se identifican en su totalidad como víctimas del conflicto armado, ya que sufrieron no solo por actos de VS en este contexto sino por la pertenencia a algún grupo racial o étnico. Sin embargo, algunas de ellas refieren que la categoría “sobreviviente” genera mayor empatía con su proceso de reparación, debido a que son ellas quienes han tenido que seguir con su vida sin ayuda estatal<sup>379</sup>.

---

<sup>374</sup> Entrevista realizada por policía judicial/Entrevista2/Caso40

<sup>375</sup> Entrevista realizada por policía judicial/Entrevista2/Caso62

<sup>376</sup> Al respecto puede consultarse: Figueroa, Isabela, y Franco Novoa, Noriana Marcela. “El marco jurídico del enfoque diferencial en políticas públicas para mujeres indígenas en Colombia”. *Estudios Políticos* núm.57 (2020): 71-90.

<sup>377</sup> Al respecto: Quintero Lyons, Josefina, Navarro Monterroza, Angélica Matilde y Meza, Malka Irina. “La figura del estado de cosas inconstitucionales como mecanismo de protección de los derechos fundamentales de la población vulnerable en Colombia”. *Revista Mario Alario D'Filippo*, núm,1, vol.3 (2011): 69-80.

<sup>378</sup> Barranco, Avilés, María del Carmen y Churruca Murguruza, Cristina. *Vulnerabilidad y Protección de los Derechos Humanos*, 41.

<sup>379</sup> Entrevista realizada por policía judicial/Entrevista1/Caso3; Entrevista realizada por policía judicial/Entrevista1/Caso4; Entrevista realizada por policía judicial/Entrevista1/Caso5.

En ese entendido, en Colombia por mandato legal, se crean categorías institucionales para reconocer y otorgar medidas a la población que sufrió a raíz del conflicto armado: una de ellas es la de “víctima del conflicto armado”. Su rigidez les pone un rótulo a las personas para poder acceder a medidas de reparación.

Lo anterior, tiene su razón de ser al observar que se identifica la etiqueta “víctima” con debilidad, discriminación y subordinación. Las leyes ofrecen lineamientos generales que carecen de límites para que esto no ocurra. Al no dar claridad, las víctimas seguirán siendo víctimas a la luz de la ley por toda su vida al no tener determinado realmente cuándo termina esta condición y se transforma con los procesos de reparación. Algunos autores arguyen que quitar el rótulo de víctimas entraría a jugar en contra de las personas que se encuentran registradas como tales porque para el Estado y la sociedad debe haber reconciliación, pero no olvido de lo acontecido, y estas categorías ayudan a construir la memoria del conflicto armado<sup>380</sup>.

Sin embargo, otros aducen que, si bien se crearon estas categorías para reconocer que las mujeres fueron víctimas diferenciadas del conflicto, no pueden darse rótulos permanentes que impidan ningún proceso, como el de la reparación integral, lo cual implica, entre otras cosas, que la mujer que ha sufrido violencia sexual haga el tránsito personal y colectivo para reincorporarse a las dinámicas como sujeto de derecho sin un ambiente de vulnerabilidad y logre desarrollar sus planes de vida<sup>381</sup>.

Ahora bien, existe otra categoría dentro de lo descrito como “grupo vulnerable” que da, a las mujeres objeto de la muestra de estudio, categorías identitarias contextuales que resultan de importancia, al observar las necesidades de reparación de la VS. A esta categoría corresponde la pertenencia étnica o racial que tienen las mujeres afectadas con la VS en el conflicto armado colombiano, el cual cuenta con 105 grupos indígenas y 3 grupos poblacionales raciales definidos como población “Negra, Afrocolombiana, Raizal y Palenquera”<sup>382</sup>. Según cifras del Departamento Nacional de Estadística “el volumen de

<sup>380</sup> Palacio Hernández, Ricardo. “La condición de víctima en el marco del conflicto armado colombiano y el problema de la responsabilidad”. Prisma Social: revista de investigación social núm. 10 (2013): 459-485.

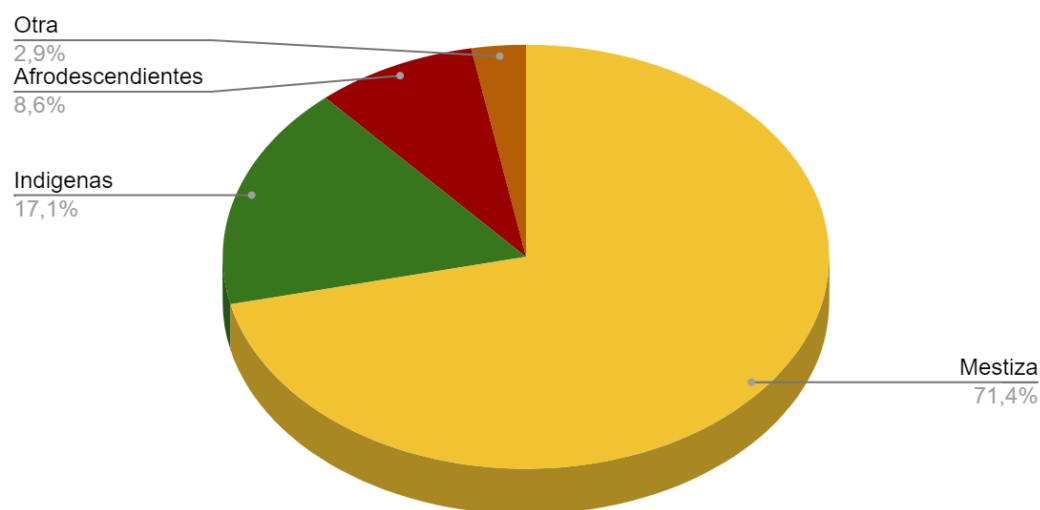
<sup>381</sup> Anichiarico González, Angélica María, Silveira Martins, Samuel, y Rengifo Omen, Yulieth Fernanda. “La toma de Almaguer: crítica al concepto institucional de víctima hacia la era del posconflicto.” *Estudios de Derecho* núm. 165, vol. 74. (2018).

<sup>382</sup> Al respecto se puede consultar: Organización Nacional Indígena de Colombia. *¿Cuáles son, cuantos y donde se ubican los pueblos indígenas de Colombia?* <https://www.onic.org.co/noticias/2-sin->

la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera en 2018 es de 4.671.160 personas, que corresponde al 9,34% de la población total nacional”<sup>383</sup>.

En la muestra de estudio, como se observa a continuación en el gráfico 1, las mujeres se identificaron como mestizas en un 71,4% -palabra que hace referencia a múltiples razas que se mezclan entre sí y por ello provienen de alguna de ellas-, como mujeres indígenas en un 17,1 % -pertenecientes a algún grupo identificado en Colombia como tal-, como afrodescendientes en un 8,6%, y el 2,9% de ellas adujo pertenecer a otras categorías.

**Gráfico 1 . Identificación con grupo poblacional vulnerable**



Fuente: Información interpretada de los expedientes de procesos penales adelantados en la Fiscalía 5ª Especializada de la ciudad de Popayán, Colombia. Tabla de elaboración propia (2019).

Esta información aportada por las víctimas resulta relevante al construir el contexto en el que se presentan estos actos contra las mujeres, ya que los procesos sociales para atender, investigar, sancionar y reparar a las víctimas discrepan en Colombia cuando las mujeres pertenecen a los grupos anteriormente descritos. Aunque en el país se tenga

categoría/1038-pueblos-indigenas; Ministerio de Educación. *Grupos Étnicos existentes en Colombia*. [https://www.mineduacion.gov.co/1759/w3-article-378980.html?\\_noredirect=1](https://www.mineduacion.gov.co/1759/w3-article-378980.html?_noredirect=1)

<sup>383</sup>Departamento de Administración Nacional de Estadística. <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/grupos-etnicos/informacion-tecnica>

la misma Constitución y rijan las mismas leyes nacionales y políticas públicas sobre el conflicto armado, existen culturas y costumbres propias alrededor de territorios que tienen especial protección para aquellas que, por su pertenencia étnica o raizal, hayan sufrido violencia sexual.

Por ejemplo, se encuentran indígenas que sufrieron por la VS contra sus mujeres y niñas, acabando con procesos culturales que se tejen en concepciones corporales y espirituales que nacen del territorio y de la idea de comunidad. Una violación a una de sus mujeres no solo tendrá implicaciones en la forma como se construye su identidad sino secuelas en una comunidad que considera funcionalmente a las mujeres como sujetos sagrados entregados a la maternidad y conservación de su colectividad.

Tal como lo argumenta Parrado, en su investigación sobre mujeres indígenas y violencia sexual, se comparte la interpretación de los testimonios de víctimas donde “en la concepción de cuerpo se entrelazan aspectos sociales, de género, matices étnicos, e incluso tintes religiosos que configuran la actitud frente a la corporalidad”<sup>384</sup>. Esto cobra sentido según la autora, al momento de cuestionar los sistemas de reparación de mujeres víctimas que desconocen realidades que sustentan lo que son dentro de sus comunidades y cómo se perciben a sí mismas cuando existe la violencia sexual como marca imborrable en sus cuerpos.

Así las cosas, el contexto se concibe más allá de los términos netamente territoriales convirtiéndose en un cúmulo de factores que hacen que las mujeres sean agentes activos de transformación de realidades sociales y colectivas, pero que por la comisión de actos de VS contra ellas, se desdibujaron ante sí mismas y su comunidad. Grupos armados ilegales, fuerzas armadas y otros agentes que participan de las hostilidades dentro y fuera de áreas de combate, se convirtieron en victimarios que establecieron estrategias de conflicto, arrasando con el tejido social de la comunidad, siendo las niñas, adolescentes y mujeres, las víctimas más frecuentes por esta tipología de violencia.

---

<sup>384</sup> Parrado Morales, Stefannia "Cuerpos Dolientes: Sobre el cuerpo, el testimonio y la reparación en mujeres indígenas víctimas de violencia sexual en el Conflicto Armado Colombiano." *Ciudad paz-andó*, núm. 1 y vol. 7 (2014): 36.

En ese entendido, “hay una ruptura de categorías y del sentido de las palabras - rupturas del lenguaje- que hacen necesarias nuevas formas de expresarse”<sup>385</sup>, por lo cual, sus procesos para reconstruir lo sucedido ocurre a través de manifestaciones simbólicas privadas hasta para algunos miembros de su comunidad. Los victimarios dentro de las jurisdicciones indígenas son juzgados por leyes, por lo cual, en algunos casos las mujeres buscan que se juzguen de manera convencional. Es por esto que las mujeres de la muestra expresaron su pertenencia étnica en las denuncias, no con el ánimo de ser reparadas por la justicia ordinaria penal, sino para que a través de sus voces se exprese el inconformismo por el juzgamiento de los victimarios.

En ese sentido, se puede apreciar en el estudio, que las mujeres que presentaron su denuncia y dieron su primer relato, no poseen una entrevista con policía judicial posterior a este momento. Esto explica que lo pretendido era poner en conocimiento de las autoridades que uno de sus miembros -refiriéndose a las personas que no pertenecen a su comunidad indígena-, había cometido actos de VS contra las mujeres indígenas.

Por otra parte, dado que el contexto se reconstruye teniendo en cuenta, entre muchos otros aspectos, las costumbres de la población que habita en ese espacio territorial demarcado, regiones como la pacífica en Colombia, cuenta con población afrodescendiente en su censo habitual, donde se establecen prácticas y hábitos para reparar los daños que deja la comisión de actos de VS. Las mujeres se reúnen con sus matronas en grupos para manifestar su dolor a través de cantos, relatos y llantos, lo cual permite hacer su proceso de apoyo y reparación de forma colectiva, con y para su comunidad. Esto tiene un significado en el contexto, debido a que los actos de violencia sexual se visibilizan a través de estos grupos de apoyo propios, que más que un recurso jurídico basado en el victimario, lo que busca es centrar todo su proceso en la víctima y en su propia voz.

En estos espacios, aquellas mujeres que han optado por la vía jurídica penal como una opción para evitar que el hecho quede en la impunidad, argumentan que algunos casos son cometidos contra ellas por razones raciales. Esto se puede apreciar en las entrevistas de algunas de las mujeres de la muestra de estudio, como es el caso de una mujer que le

---

<sup>385</sup> Parrado Morales, Stefannia “Cuerpos Dolientes: Sobre el cuerpo, el testimonio y la reparación en mujeres indígenas víctimas de violencia sexual en el Conflicto Armado Colombiano”, 39.

cuenta al policía judicial cómo la violaron porque “las negras son más sabrosas”<sup>386</sup>. Este relato, muestra cómo uno de los motivos por los cuales los victimarios escogían a ciertas mujeres para cometer actos de VS, estaba relacionado con sus características raciales.

Asimismo, tal como se argumentó al principio de este apartado, la frecuente percepción social de las mujeres afrodescendientes como mujeres alegres, con cuerpos voluptuosos y sexuados, contribuye a que se genere de forma indirecta, un contexto propicio para que las principales víctimas de violencia sexual fueran las mujeres con estas características. Aunque los actos sean cometidos en un conflicto armado con matices diversos, las afrodescendientes han construido su identidad que se hace visible mediante sus cuerpos, como comunidad dentro de unas condiciones de discriminación y marginalidad heredada que, a pesar de nuevas constituciones y políticas actuales enmarcadas en los Derechos Humanos, siguen latentes en sociedades como la del país.

En el mismo sentido, se encuentra un relato de una mujer que percibe cómo por estar en un territorio habitado mayoritariamente por población afrodescendiente, despierta cierta atracción de los miembros de un grupo armado ilegal, aduciendo: “yo como era blanca y acá es población de negros, era como más llamativa. Me violaron porque era blanca”<sup>387</sup> - haciendo alusión a que su color de piel era más claro que el de las mujeres de la región-. Lo relatado acentúa, cómo la raza constituye uno de los factores de identidad de las mujeres que se desdibuja con los actos de violencia sexual, cometidos con ocasión al conflicto armado.

#### **2.1.2.1.2. Nivel educativo y estrato socioeconómico**

Dentro del formato de noticia criminal, la Fiscalía General de la Nación deja consignado el nivel educativo de las víctimas, para caracterizarlas. Al momento de denunciar, éstas contaron con sus palabras lo acontecido para que fuera transcrito por un operador judicial, el cual les preguntó a qué estrato socioeconómico pertenecían y si contaban con algunos estudios<sup>388</sup>. Las mujeres respondieron dando a conocer que tienen

---

<sup>386</sup> Entrevista realizada por policía judicial/Entrevista1/Caso29

<sup>387</sup> Entrevista realizada por policía judicial/Entrevista1/Caso20

<sup>388</sup> En Colombia se toma como referencia para identificar el estrato socioeconómico de una persona, las condiciones de vivienda y entornos urbanos y rurales. Por lo cual los bajos estratos 1,2,3 son asignados

bajos niveles educativos y en unos casos ninguno. Asimismo, 49 mujeres de la muestra argumentaron pertenecer al estrato 1 y las 21 mujeres restantes al estrato 2<sup>389</sup>.

Tomando en consideración que “las características físicas son la base para asignar los estratos a los inmuebles residenciales del país”<sup>390</sup>, éstas han servido para dar referencia de los niveles de ingresos de las personas, ayudando a visibilizar sus niveles de pobreza<sup>391</sup>. Datos oficiales apuntan a que “en 2019, la pobreza multidimensional en el país fue 17,5%”, lo cual significa que carecen por lo menos de tres de los indicadores que definen las condiciones para la habitabilidad de los hogares en Colombia, como lo son: “condiciones educativas del hogar, condiciones de la niñez y juventud, trabajo, salud, vivienda y servicios públicos”<sup>392</sup>.

Informes como los elaborados por el Observatorio Colombiano de las Mujeres toman en consideración un indicador relativo al “Índice de feminidad de la pobreza”, donde muestra los contrastes comparativos monetarios entre hombres y mujeres, evidenciando como desde 2008 hasta 2018 el índice viene aumentando, generando una disparidad entre los dos sujetos en comparación<sup>393</sup>. Esto tiene relevancia en lo estudiado debido a que el nivel educativo y el estrato son categorías tomadas en cuenta para analizar la condición de las mujeres que son víctimas de VS por múltiples factores.

Entre estos factores, pueden observarse los relativos a los niveles económico y educativo, que impiden que la víctima transite a un estado libre de violencias por ser dependientes emocional y económicamente de los victimarios, o porque las caracterizaciones de las personas son estructuradas desde principios de desigualdad de

---

para aquellas que tienen bajos ingresos económicos y hacen parte de políticas subsidiadas de servicios domiciliarios básicos para la subsistencia. Al respecto puede consultarse: Dane. Estratificación socioeconómica para servicios públicos domiciliarios. Recuperado de <https://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-informacion/estratificacion-socioeconomica>

<sup>389</sup> Esto quiere decir que son de niveles socioeconómicos bajos con tendencia a estar cerca a niveles de pobreza.

<sup>390</sup> Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), <https://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-informacion/estratificacion-socioeconomica#preguntas-frecuentes>

<sup>391</sup> Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), <https://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-informacion/estratificacion-socioeconomica#preguntas-frecuentes>

<sup>392</sup> Observatorio Colombiano de las Mujeres. Autonomía económica. <http://www.observatoriomujeres.gov.co/es/EconomicAutonomy>

<sup>393</sup> Observatorio Colombiano de las Mujeres. Autonomía económica. <http://www.observatoriomujeres.gov.co/es/EconomicAutonomy>

oportunidades sociales, lo cual imposibilita la obtención de mejores condiciones para las víctimas, teniendo en cuenta que en el contexto de conflicto armado son las mujeres pobres las más propensas a ser desplazadas, despojadas de sus bienes, y obligadas a dejar sus trabajos por miedo a represalias de los victimarios. Esto se puede apreciar en relatos de las mujeres de la muestra de estudio, cuando dicen: “salí de mi casa solo con lo que tenía porque me iba a matar si decía que me había violado”<sup>394</sup> o “yo no tenía nada, salí corriendo de ahí solo con lo que tenía puesto”<sup>395</sup>.

Las mujeres, al salir de sus territorios y hogares por causa de la VS que sufrieron, se enfrentan a nuevas formas de violencia contra ellas ya no solo por el conflicto armado sino por las distintas formas de expresión de la desigualdad. Como no tuvieron en muchos de los casos de estudio oportunidades para estudiar, cuando se enfrentan a otro contexto fuera de lo conocido se enfrentan al desempleo y la falta de condiciones que mejoren su estatus de vida.

Respecto al nivel educativo, en la tabla 4 se muestra que el 35,7% de las mujeres de la muestra solo han cursado la primaria y el 27,1% no ha cursado ningún nivel de educación.

**Tabla 2. Nivel educativo de las mujeres víctimas de la Violencia Sexual**

Nivel Educativo	Ninguno	19	27,1%
	Primaria	25	35,7%
	Secundaria	3	4,3%
	Bachillerato	12	17,1%
	Técnico	4	5,7%
	Tecnólogo	3	4,3%
	Profesional	3	4,3%
	Posgrado	1	1,4%

Fuente: Información interpretada de los expedientes de procesos penales adelantados en la Fiscalía 5ª Especializada de la ciudad de Popayán, Colombia. Tabla de elaboración propia (2019).

<sup>394</sup> Entrevista realizada por policía judicial/Entrevista1/Caso12

<sup>395</sup> Entrevista realizada por policía judicial/Entrevista1/Caso34



Algunas de las víctimas no sabían leer ni escribir, sin embargo, ello no fue impedimento para ser conscientes de que los actos cometidos en su contra significaron rupturas en sus cuerpos y en sus vidas en general. Lo anterior, permite cuestionar la barrera que existe para que quede consignado dentro de los archivos del proceso, lo que la víctima está reconociendo como un acto y si el nivel educativo de las mujeres que padecieron por la VS, tiene relación con la construcción del contexto de violencia.

Cuando se da a conocer un acto de violencia sexual desde la voz de la víctima, las percepciones de lo sucedido, del territorio donde ocurrió, los detalles de lo que sintió cuando sufrió VS, convierten la denuncia en algo más que un simple relato de reconstrucción de hechos y contextos: constituye la cartografía integral de violencia que contiene además sentimientos y emociones expresadas en un lenguaje propio de cada mujer.

Sin embargo, este lenguaje es considerado por algunos funcionarios judiciales como exagerado y distorsivo de la realidad del conflicto armado, lo que dificulta la reconstrucción de contexto de VS a través de las voces de las víctimas. Policía judicial, ente encargado de ayudar a la Fiscalía General de la Nación en su labor de investigación y recolección de pruebas, realiza un informe que tiene por finalidad analizar el contexto para identificar plenamente a los victimarios y determinar los elementos de tipicidad del delito de VS en el conflicto. No obstante, estos informes al pretender ser objetivos y estar condicionados a fines relacionados con el futuro victimario, dejan en un segundo plano a la persona que sufrió los actos de VS y su reparación plena e inmediata.

Sumado a lo anterior, en algunos relatos se percibe que las víctimas de VS en el conflicto armado, cuentan con poca información de sus derechos y su salud sexual y reproductiva, haciendo que muchas de ellas no supieran siquiera, en un primer momento, que estaban siendo víctimas de VS. Esto ocurre, por ejemplo, con las mujeres que fueron reclutadas por grupos armados ilegales y reinsertadas a la sociedad en programas de justicia transicional de reincorporación de personal dedicado a la guerra. Estas mujeres relatan cómo les costó ser conscientes de que eran víctimas constantes de VS y que sus comandantes al violarlas cometían un delito. Para ellas, mantener relaciones sexuales sin consentimiento dentro de la estructura del grupo se normalizó convirtiéndose en una práctica común.

Por ende, romper con prácticas normalizadas se convierte en un desafío que involucra canales educativos que orienten a las mujeres para reconocer cuándo están siendo víctimas de violencia sexual, cuáles son sus derechos, a quién acudir cuando esté sucediendo y demás pasos de las rutas de atención y prevención sobre VS. Cuando la víctima cuenta con información acertada, la denuncia de estos actos de VS puede llegar a ser más frecuente ya que las víctimas conocen sus derechos y las consecuencias que genera poner en conocimiento de las autoridades jurídico-penales los hechos objeto de delito.

Además, reconocer las manifestaciones orales, escritas y de otra índole para transmitir conocimiento y captar las necesidades y daños sufridos por una víctima de VS, supone abrir tácitamente canales de comunicación diversos para que sus voces sean aquellas que dirijan los procesos no solo de juzgamiento sino también de reparación.

#### **2.1.2.1.3. Roles de las mujeres de la muestra asumidos por causa de la Violencia Sexual en el conflicto armado**

Dentro de las consecuencias que tienen que asumir forzosamente las mujeres por actos de violencia sexual, en la muestra de estudio se pueden apreciar tres roles: el de víctima y/o sobreviviente, el de desplazada, y el de madre cabeza de familia.

##### **Rol de víctima o sobreviviente**

Está ligado a una conceptualización jurídica y doctrinal que categoriza a todas aquellas personas que sufrieron por acciones u omisiones dentro del conflicto a las cuales se les vulneraron sus derechos constitucionales. Esta categoría es reconocida en Colombia como “víctima del conflicto armado”, donde se relacionan dos etiquetas dependientes: una consiste en la caracterización de la persona que sufre por la comisión de actos de VS, y la otra, relacionada con el contexto bélico donde se llevan a cabo actos u omisiones que llevaron a la violación de derechos de las personas.

Esta categoría es asumida por las mujeres cuando deciden acudir a estamentos administrativos o judiciales para poner en conocimiento la situación de violencia que han

padecido, lo cual se puede apreciar en cuestionarios respecto a preguntas como: ¿Usted se considera una víctima del conflicto?, cuya respuesta es “yo soy víctima porque me incluyeron en el registro único de víctimas”<sup>396</sup>, o “sí, en la denuncia lo pone”.<sup>397</sup> Es de notar que no es porque ellas se identifiquen con el término, por todo lo que han tenido que padecer, sino porque la norma o la política pública así lo establece.

En ese entendido, algunos autores defienden que la categoría víctima, cuando emana de la institucionalidad o del ordenamiento jurídico y no de la voz de la víctima, suele convertirse en una mera etiqueta para establecer beneficios o procedimientos y no para identificar situaciones de vulneración que se transmiten a través de diversas formas de narración que construyen memoria individual y colectiva<sup>398</sup>. Asimismo, otros autores dejan entrever cómo la categoría “víctima” es rígida, lo cual dificulta que la persona transite a otro estado una vez haya sido reparada<sup>399</sup>.

El debate toma fuerza en las reparaciones, cuando se analizan distinciones en la aplicación del término “víctima” por las implicaciones que tiene para las personas a las que se les han vulnerado sus derechos por ocasión de conflictos armados<sup>400</sup>. Guglielmucci por su parte, argumenta que existen “los usos en la vida cotidiana de las personas identificadas como víctimas o victimarios, ya sea por adscripción o auto-adscripción; y por otro lado, sobre los usos en el campo político-jurídico”<sup>401</sup>. Explica que alrededor se generan muchos interrogantes cuando hay dicotomías de sujetos que pueden llegar a autoconsiderarse víctimas que resultan envueltas en roles antagónicos dentro del conflicto. Es el caso, por ejemplo, de una mujer que es reinsertada de algún grupo armado pero que cuando era una niña fue víctima de reclutamiento forzado y padeció por la VS. Aquí se produce aparentemente un rol ambiguo porque se llega a considerar que esta

<sup>396</sup> Cuestionario realizado por la investigadora/Pregunta 10/Caso10

<sup>397</sup> Cuestionario realizado por la investigadora/Pregunta 10/Caso23

<sup>398</sup> Marín, Alán Arias. “Teoría crítica y derechos humanos: hacia un concepto crítico de víctima”. *Nómaditas. Critical Journal of Social and Juridical Sciences*, núm.4, vol. 36 (2012).

<sup>399</sup> Anichiarico González, Angélica María, Silveira Martins, Samuel, y Rengifo Omen, Yulieth Fernanda. “La toma de Almaguer: crítica al concepto institucional de víctima hacia la era del posconflicto”. *Estudios de Derecho*, núm. 165, vol. 74 (2018): 223-245, 223.

<sup>400</sup> Al respecto puede consultarse: Muñoz, Gustavo, y Orrego Jaramillo, Ana Bertilda. “Con las manos en alto” el concepto de víctima del conflicto armado: una aproximación desde la literatura.” *Nuevo derecho*, núm 18., vol.12 (2016): 2; Villegas Gallego, Adrián Humberto. “El método autobiográfico, para analizar críticamente el concepto de víctima y de tránsito hacia el reconocimiento de sujeto político”. <http://elmeccs.fahce.unlp.edu.ar/v-elmeccs/actas-2016/VillegasGallego.pdf>

<sup>401</sup> Guglielmucci, Ana. “El concepto de víctima en el campo de los derechos humanos: una reflexión crítica a partir de su aplicación en Argentina y Colombia.” *Revista de Estudios Sociales* 59 (2017): 83-97.

persona por los hechos que le ocurrieron a lo largo de su vida es una víctima del conflicto armado, pero al tiempo es considerada por las leyes colombianas cuando ya ha cumplido su mayoría de edad y se reinserta, una victimaria<sup>402</sup>.

Pero lo que se destaca, respecto a su interpretación es como “narrativas detalladas del sufrimiento individual y la victimización producen compasión y empatía que delinean la legitimación de diferentes aproximaciones a un mismo hecho violento”<sup>403</sup>, lo cual genera, si se pone el caso de las mujeres que han sufrido por la VS, un cierto estatus que empodera y lleva al liderazgo por ser portadoras primarias de la verdad en la VS en el conflicto armado. Es a través de sus voces que se reconstruye lo sucedido y se crean percepciones sociales tendientes a exponerlas como personas resilientes y valiosas, para los procesos de transformación de realidades.

Sin embargo, lo argumentado por esta autora discrepa de lo acontecido en el campo jurídico y político al observarse cómo se utiliza esta categoría como una etiqueta más para reproducir la desigualdad social y establecer grupos segregados y no incluyentes que pueden determinar si una persona va a ser o no beneficiaria de medidas de reparación, una vez comprueben los requisitos institucionales plasmados en la normatividad vigente<sup>404</sup>.

Algunas de las mujeres comienzan a identificarse más como “sobrevivientes” o en algunos casos como “víctimas sobrevivientes”, siendo una nueva forma de autodenominarse. Esta nueva categoría destaca su papel activo dentro de los diversos procesos en los que se vieron obligadas a estar, debido las transgresiones a su vida y derechos en este contexto. Investigaciones como las adelantadas por Mejía y Vargas sobre percepciones de los cuerpos de las mujeres víctimas de violencia sexual, indagan sobre la diferencia entre víctima y sobreviviente referenciando que “el término víctima puede

---

<sup>402</sup> Este debate se encuentra abierto en Colombia con la consideración constitucional referente a la consideración de las niñas y niños como víctimas del conflicto armado. Al respecto puede consultarse: Ortiz, Jairo Enrique González, and Deibys Carrasquilla Baza. "Niños, niñas y adolescentes, víctimas o victimarios del conflicto armado en Colombia?." *Justicia juris* 13.1 (2017): 56-62; Mesa, Juan David. "Hacia una nueva mirada de la reintegración de desmovilizados en Colombia: conceptos, enfoques y posibilidades." *Revista Cs* (2017): 105-133; Jaramillo Estrada, Olga Luz. *Mujer y reintegración*. Diss. Universidad Nacional de La Plata, 2017.

<sup>403</sup> Guglielmucci, Ana. "El concepto de víctima en el campo de los derechos humanos: una reflexión crítica a partir de su aplicación en Argentina y Colombia.", 86.

<sup>404</sup> Guglielmucci, Ana. "El concepto de víctima en el campo de los derechos humanos: una reflexión crítica a partir de su aplicación en Argentina y Colombia.", 83-97.

asociarse a una condición de pasividad, mientras que la expresión sobreviviente remite al conjunto de acciones que permiten a la persona violentada transformar su realidad mediante la concienciación de lo ocurrido, asumir una postura de resistencia y emprender el camino a su recuperación”<sup>405</sup>.

Boyle y Rogers por su parte, indagaron por las identidades y los discursos sobre la victimización sexual, recurriendo a la Teoría de la Identidad de Stryker, la cual aduce que las identidades emergen de la estructura social, se priorizan dentro del yo y se promulgan en la vida social<sup>406</sup>. En este estudio, los investigadores realizan cuestionarios donde los y las encuestadas que se identificaron como víctimas eran significativamente más propensos a experimentar emociones negativas, depresión, autoestima baja y angustia general. Sin embargo, resaltan que cuando la población se caracteriza por sus rasgos raciales, la etiqueta de sobreviviente alivia de cierta manera la carga que genera el hecho victimizante por comisión de actos de VS.

Al indagar por la relación entre el género, la raza y la VS, concuerdan con la doctrina en la existencia de ciertos conceptos identitarios que se encuentran interrelacionados, los cuales inciden en la vida individual y social de las personas que han sido víctimas o sobrevivientes de VS. En ese entendido, la etiqueta “sobreviviente”, si bien no nace por ocasión del conflicto armado, sí es tomada en consideración como etiqueta personal de las mujeres que han sufrido por la VS<sup>407</sup>.

Al hacer uso de estas etiquetas y centrarse en las características que “una víctima o sobreviviente” de VS tiene, se puede apreciar qué roles sociales comienzan a emerger, como los son, los caracterizados por el liderazgo y el empoderamiento autogestionado nutrido por redes de apoyo no institucional<sup>408</sup>. Estos hacen de la etiqueta una fortaleza para continuar con sus proyectos de vida y liderar iniciativas productivas propias y de las demás víctimas o sobrevivientes. Sin embargo, en el conflicto armado colombiano el ser

---

<sup>405</sup> Acevedo, Natalia Mejía, y Vargas Restrepo, Viviana Maritza. "El cuerpo como texto del dolor: cinco relatos de mujeres que han vivido violencia sexual en la ciudad de Medellín." *Ciencias Sociales y Educación*, núm. 11, vol. 6. (2017): 23-46.

<sup>406</sup> Acevedo, Natalia Mejía, y Vargas Restrepo, Viviana Maritza. "El cuerpo como texto del dolor: cinco relatos de mujeres que han vivido violencia sexual en la ciudad de Medellín." 23-46.

<sup>407</sup> En ese sentido se puede consultar a: Rico, Margarita Rosa Cadavid. "Mujer: blanco del conflicto armado en Colombia." *Analecta política* 4.7 (2014): 301-318 y Comins Mingol, Irene. "De víctimas a sobrevivientes: la fuerza poética y resiliente del cuidar". *Convergencia*, núm.67, vol. 22(2015): 35-54.

<sup>408</sup> Bustamante, Vizney Leonardo. "De víctimas a sobrevivientes: implicaciones para la construcción de paces en Colombia." *Antropología y Sociología: Virajes* núm 1, vol.19 (2017): 147-164.

víctima o sobreviviente de violencia sexual y lideresa, se vuelve peligroso para ellas y sus familias, por ser propensas a sufrir nuevos ataques contra su integridad física y sexual en el país<sup>409</sup>.

En el estudio que esta tesis visualiza, se presenta el caso de una mujer entrevistada por Policía Judicial, la cual relata que a su padre lo mataron por ser líder social y a ella la violaron para que no siguiera sus pasos<sup>410</sup>. Sin embargo, por las circunstancias de violencia ella siguió con el legado del liderazgo desde otro lugar, ya que por los acontecimientos tuvo que desplazarse y abandonar su lugar de residencia por temor a ser violentada de nuevo<sup>411</sup>.

Este relato permite afirmar que las mujeres líderes se convierten en ejemplo de resiliencia para otras mujeres. Asimismo, el espacio del liderazgo, aunque en el aspecto político logre convertir las propuestas individuales y colectivas en realidad por la participación obtenida en espacios que lo promueven, genera riesgos para las mujeres que las convierte en objetivos constantes para sufrir de cualquier tipo de violencia.

### **Rol de desplazada**

La disputa territorial en el conflicto armado colombiano ha dejado en el país, alrededor de 4.151.334 víctimas de desplazamiento forzado, que han tenido que dejar sus lugares de residencia y habitación por prevención, presión y/o cohesión por parte de grupos armados debido al ambiente hostil en el que se convirtió su espacio vivencial<sup>412</sup>. Dentro de la esfera registrada en la base gubernamental oficial de víctimas del conflicto armado en Colombia, se reportan 29.582 mujeres víctimas de VS.

En esa amplia cifra, se encuentran las mujeres de la muestra de estudio, quienes argumentan que tuvieron que salir de sus casas por causa de la VS que sufrieron. En sus relatos lo argumentan en los siguientes términos: “Tuve que salir de mi casa porque me

---

<sup>409</sup> López León, María Jimena. "Las mujeres imaginadas de la guerra: narraciones de excombatientes paramilitares sobre las mujeres y el conflicto armado." *Antropología* (2009).

<sup>410</sup> Entrevista realizada por policía judicial/Entrevista2/Caso34

<sup>411</sup> Entrevista realizada por policía judicial/Entrevista2/Caso34

<sup>412</sup> Última consulta realizada el día 31 de agosto de 2020. <https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victimas-ruv/37394>

dijeron que si no me iba me iban a matar”<sup>413</sup>; “yo tuve que dejar mi casa, mis cosas porque me amenazaron”<sup>414</sup>; “solo cogí al niño y salí al otro día de allí”<sup>415</sup>. Lo anterior evidencia la relación existente entre el desplazamiento forzado al que fueron sometidas como consecuencia de los actos de VS de los que fueron víctimas.

Aunado a esto, al realizar un análisis de frecuencias donde se tuvo en consideración la zona donde las mujeres vivían en el momento de sufrir VS, el 97,14% manifestó que tuvieron que desplazarse desde zonas rurales donde vivían. Para comprender el desplazamiento, Salcedo y Páez en su investigación sobre esta temática ofrecen una caracterización de los desplazamientos, teniendo en cuenta las circunstancias de abandono forzado de los lugares de habitación permanente y el territorio de desplazamiento. En ese caso explican que “el desplazamiento viene asumiendo varias direcciones socio-espaciales: campo-campo, campo-ciudad y pendular”<sup>416</sup>.

Enmarcan los autores, que cuando se da la primera situación, “las víctimas se trasladan hasta la salida de los lugares de origen, hacia las cabeceras de las poblaciones cercanas y se hace bajo la presión de los combates entre grupos armados o las incursiones sorpresivas de estos en las poblaciones”. En el segundo momento, refieren que cuando se produce desplazamiento de “campo-ciudad” este se lleva a cabo de manera “dispersa y planeada, obedeciendo a las circunstancias propias del ambiente de zozobra y terror instaurado por los grupos armados”. Pero cuando este desplazamiento se observa pendular, las víctimas salen y retornan al lugar de origen, “una primera salida para protegerse y huir del peligro, luego el retorno al lugar de origen con la esperanza de recuperar lo que se abandonó seguido por una nueva salida para la ciudad”<sup>417</sup>.

Siguiendo a los autores descritos, en la muestra objeto de estudio de esta tesis, los desplazamientos fueron de “campo – campo”, debido a que por miedo refirieron haber salido inmediatamente de sus casas, sin planeación y siendo envueltas por el pánico, por

---

<sup>413</sup> Entrevista realizada por policía judicial/Entrevista2/Caso65

<sup>414</sup> Entrevista realizada por policía judicial/Entrevista2/Caso68

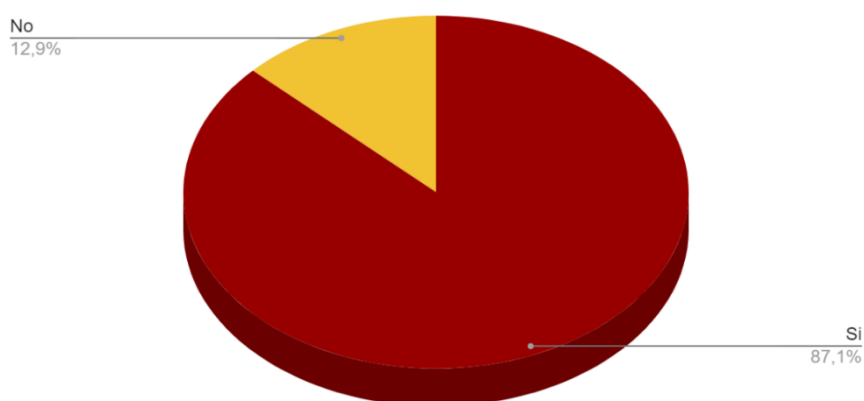
<sup>415</sup> Entrevista realizada por policía judicial/Entrevista2/Caso69

<sup>416</sup> Ávila, Edwin Diego Salcedo, and Eduardo Paes-Machado. "Victimización y desplazamiento forzado de mujeres en el conflicto armado colombiano." *Mana*. Núm 1, vol. 25 (2019): 95-125. <https://www.scielo.br/pdf/mana/v25n1/1678-4944-mana-25-01-95.pdf>

<sup>417</sup> Salcedo Ávila, Edwin Diego, y Paes-Machado, Eduardo. "Victimización y desplazamiento forzado de mujeres en el conflicto armado colombiano", 115.

los hechos de VS que padecieron<sup>418</sup>. Debido a estas afirmaciones, se realizó un análisis de frecuencias con el fin de establecer cuántas mujeres de la muestra de estudio habían sido desplazadas por hechos victimizantes relacionados con la VS. Para darlos a conocer, se elaboró la Gráfica 3 que se presenta a continuación y agrupa lo argumentado por las mujeres, siendo el 87.1% las que tuvieron que desplazarse como consecuencia de la VS en el conflicto armado colombiano.

**Gráfico 2. Rol de desplazada**



Fuente: Información interpretada de los expedientes de procesos penales adelantados en la Fiscalía 5ª Especializada de la ciudad de Popayán, Colombia. Tabla de elaboración propia (2019).

Esta gráfica representa la consecución de violaciones de derechos humanos contra las mujeres por la ocurrencia de la VS en el conflicto. Sin embargo, a pesar de que la ley catalogue a una mujer como víctima del conflicto armado, resulta insuficiente cuando se evalúan los daños que causa cada hecho victimizante, ya que no es lo mismo sufrir por VS que por otros actos cometidos en el mismo contexto bélico. Esto hace que se invisibilicen las consecuencias reales de lo que implica padecer VS en el conflicto armado, y evidencia que las políticas del Estado para hacer posible la integralidad en la reparación resultan claramente deficientes.

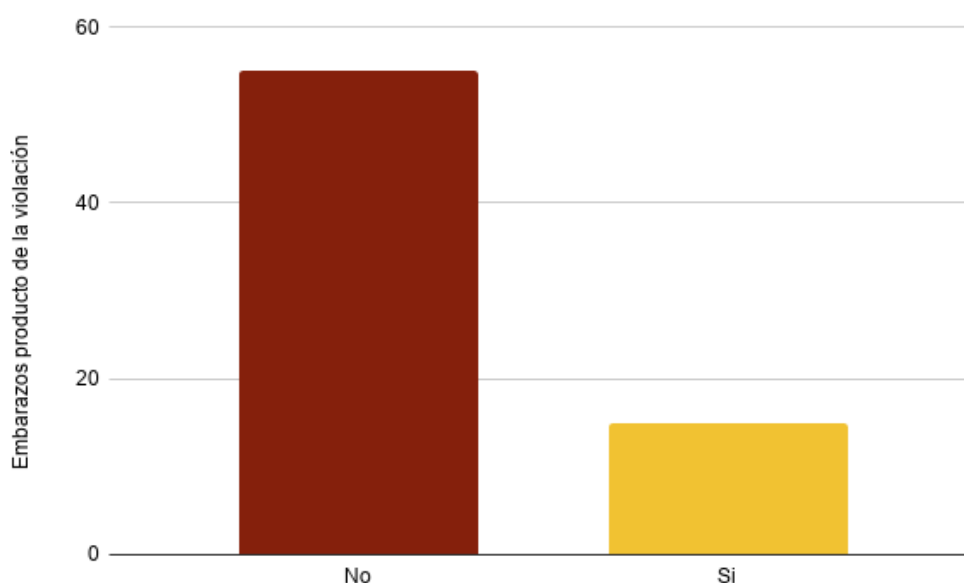
<sup>418</sup> Entrevista realizada por policía judicial/Entrevista2/Caso45



### Rol de madre cabeza de familia

Algunos de los relatos de las mujeres objeto de la muestra de estudio expresan, cómo por el hecho de haber sido víctimas de VS, tuvieron que asumir maternidades forzadas sin una división de roles de cuidado y protección de los niños concebidos, por ocasión de la violación en el conflicto armado. Es así como se encuentran en los expedientes entrevistas que dicen “yo quedé embarazada después de eso, pero como tuve que salir de ahí, nadie se enteró”<sup>419</sup> o “de ahí salió mi hijo... yo lo tuve que sacar adelante sola”<sup>420</sup>. Para dar una dimensión de la problemática, se realizó un análisis de frecuencias para determinar cuántas mujeres resultaron embarazadas producto de la violación por ocasión del conflicto armado, encontrando que 15 mujeres tuvieron que asumir este rol, tal como lo expresa el gráfico 3 a continuación.

**Gráfico 3. Embarazos producto de la violación**



Fuente: Información interpretada de los expedientes de procesos penales adelantados en la Fiscalía 5a Especializada de la ciudad de Popayán, Colombia. Tabla de elaboración propia (2019).

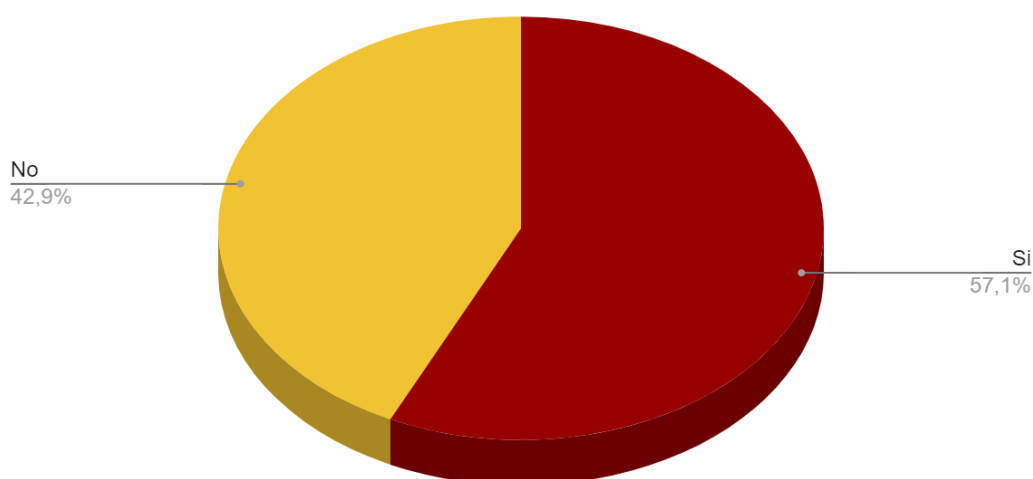
El tener un hijo o hija producto de la violación, establece socialmente un rol que las mujeres no tenían antes del hecho victimizante; el de mujer cabeza de familia, el cual se adjudica a “quien, siendo soltera o casada, ejerce la jefatura femenina de hogar y tiene

<sup>419</sup> Entrevista realizada por policía judicial/Entrevista2/Caso12

<sup>420</sup> Entrevista realizada por policía judicial/Entrevista2/Caso34

bajo su cargo, afectiva, económica o socialmente, en forma permanente, hijos menores propios u otras personas incapaces o incapacitadas para trabajar, ya sea por ausencia permanente o incapacidad física, sensorial, psíquica o moral del cónyuge o compañero permanente o deficiencia sustancial de ayuda de los demás miembros del núcleo familiar”<sup>421</sup>. Este rol sociofamiliar y económico lo asumieron el 57.1% de las mujeres de la muestra de estudio, quienes relatan que su situación cambió significativamente por la VS.

**Gráfico 4. Madre Cabeza de Familia**



Fuente: Información interpretada de los expedientes de procesos penales adelantados en la Fiscalía 5ª Especializada de la ciudad de Popayán, Colombia. Tabla de elaboración propia (2019).

Estos resultados agrupan a las personas que tuvieron hijos o hijas producto de violaciones y las que tuvieron que asumir la jefatura de sus hogares por muerte de sus compañeros o cónyuges. En este caso, se observa que las mujeres que sufren por la VS son víctimas o sobrevivientes de múltiples hechos victimizantes consecutivos o

<sup>421</sup> Congreso de Colombia. Ley 1232 de 2008, Diario Oficial No. 47.053 de 17 de julio de 2008. <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=31591>

simultáneos, que vulneran una gama de Derechos Humanos consagrados en el ordenamiento jurídico que rige en Colombia.

#### **2.1.2.1.4. Victimarios**

Una de las percepciones que recae sobre la credibilidad de las mujeres víctimas o sobrevivientes de la VS en los procesos penales, es la relacionada con la identificación del victimario o los victimarios<sup>422</sup>. Los protocolos de violencia sexual estructurados para que los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación se guíen en estos procesos y logren establecer los elementos necesarios para que estas conductas sean investigadas y sancionadas, contienen una ruta para recibir denuncias de VS, donde se indaga por la identificación de los victimarios con el fin de responsabilizar penalmente a alguien de los actos de VS y reconstruir el contexto. Lo anterior, contribuye no solo a la parte penal de los procesos sino a establecer motivos y circunstancias que dieron lugar a los actos de VS y así poder determinar los daños a las víctimas o sobrevivientes. Todo pensando en que la reparación de las víctimas a través de la justicia penal pueda por lo menos llegar a ser considerada.

No obstante, es necesario tener presente que el proceso penal no está pensado con un fin único de reparación donde el eje central del proceso sea la mujer víctima o sobreviviente de VS. Sin embargo, se crean canales de justicia restaurativa que complementan estos procesos, los cuales serán abordados a profundidad más adelante. Lo argumentado resulta de utilidad para este momento debido a que algunas de las preguntas encontradas en la denuncia y las entrevistas realizadas por policía judicial a las mujeres objeto de la muestra, son sobre el posible agresor o agresores.

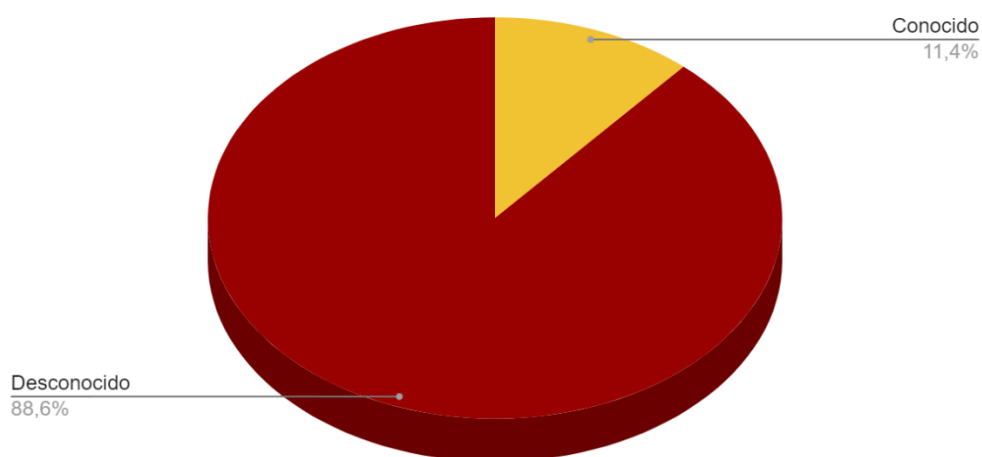
La caracterización del agresor o de los agresores es una de las misiones del proceso penal y de los agentes judiciales que intervienen en su estructuración, por lo que la voz de la víctima es el primer indicio para dar con el responsable de la conducta. En los casos de estudio de esta tesis, las mujeres argumentaron en un 88,6% que conocían a su victimario, refiriendo la pertenencia a grupos armados frecuentes en las zonas rurales donde habitaban. Pero al momento de dar mayores detalles para su reconocimiento, las

---

<sup>422</sup> Al respecto se puede consultar: Galvis, María Clara. *Situación en Colombia de la VS contra las mujeres*, 12 y ss.

referencias se limitaban a nombres popularizados en la zona. Solo las víctimas o sobrevivientes que son identificadas como reinsertadas dentro de programas estatales reconocen plenamente a los sujetos que las sometían a actos de VS. Tal como lo muestra la gráfica 5, el 11,4% de las mujeres de la muestra desconocían totalmente a su agresor.

**Gráfico 5. Reconocimiento de Agresor y/o agresores de Violencia Sexual**



Fuente: Información interpretada de los expedientes de procesos penales adelantados s en la Fiscalía 5ª Especializada de la ciudad de Popayán, Colombia. Tabla de elaboración propia (2019).

Además de lo referido, las mujeres relataron cómo identificaron prendas alusivas a grupos armados o contaron cómo los agresores habían llegado a sus casas, identificándose como miembros de un grupo armado en particular. En los expedientes estudiados se pudieron leer líneas en las entrevistas que argumentaban “ellos entraron a mi casa y preguntaron por mi papá. Yo les pregunté que quién lo necesitaba, y me respondieron que la guerrilla”<sup>423</sup>. Asimismo, identificaron siglas o letras en sus uniformes<sup>424</sup>. A través de sus relatos se pudo observar cómo los miembros de grupos armados entraban a casas de las víctimas sobrevivientes por diversos motivos, intimidar a la población considerada blanco contradictor de sus causas, para generar terror y miedo

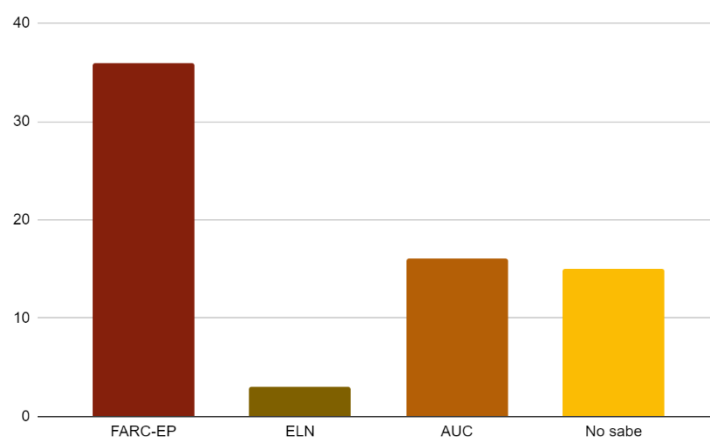
<sup>423</sup> Entrevista realizada por policía judicial/Entrevista1/Caso13

<sup>424</sup> Entrevista realizada por policía judicial/Entrevista1/Caso17

en las zonas, entre muchos otros, que hacían de la VS prácticas cotidianas en la población rural.

Esta caracterización del agresor o los agresores como parte del grupo armado como lo contaron las víctimas sobrevivientes sirve para demostrar la conexión de la VS con el contexto bélico vivido. Es por eso por lo que tomando lo relatado por las mujeres de la muestra de estudio, se realizó un análisis de frecuencias que se plasmó en la gráfica 6, para establecer los grupos armados que presuntamente habían sido los responsables de la VS contra las mujeres.

**Gráfico 6. Presuntos Grupos Victimarios**



Fuente: Información interpretada de los expedientes de procesos penales adelantados en la Fiscalía 5ª Especializada de la ciudad de Popayán, Colombia. Tabla de elaboración propia (2019).

En la anterior gráfica, las mujeres referenciaron 3 grupos armados distintos en sus políticas de acción, sus ideales de lucha y sus dinámicas de VS. El primero de ellos, denominado por sus precursores como Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), reinsertado en gran parte con el Acuerdo de Paz suscrito con el Estado en el año 2016. Los miembros de este grupo fueron señalados como presuntos agresores por 36 mujeres de la muestra, equivalente al 51,43%<sup>425</sup>. De estas 36

<sup>425</sup> Información interpretada de los expedientes de procesos penales en la Fiscalía 5 Especializada en la ciudad de Popayán, Colombia, 2019.

mujeres, 9 de ellas pertenecían a este grupo armado y fungían como combatientes dentro de la estructura armada hasta su reinserción<sup>426</sup>.

Tal como lo argumenta Gutiérrez y Carranza en su estudio sobre las mujeres combatientes de las Farc, este grupo tiene un cambio de estrategia en 1976, el cual consistió en centrar su ideología en la igualdad y la inclusión de todas las personas para conformar un “ejército del pueblo”<sup>427</sup>. Este cambio, hizo que el reclutamiento de mujeres tuviera mucha más apertura, robusteciendo de personal para cumplir con los fines de su estructura para la belicidad<sup>428</sup>.

En su recorrido histórico, comentan los precitados autores que desde esa fecha se puede considerar la feminización del grupo en un sentido cuantitativo, ya que según cifras de sus mismos miembros, llegaron a tener en sus filas un 40% de mujeres<sup>429</sup>. Esta afirmación la acompañan con una descripción de dos características del reclutamiento que hacen posible que las mujeres fueran la base de su estructura y al mismo tiempo las principales víctimas de esta. La primera consiste en el número de mujeres que hacían parte del grupo y la segunda es la que determina los roles dentro de la organización. Esta última característica tiene relación con el estudio que se lleva a cabo en esta tesis, debido a que lo descrito por los autores, coincide con la descripción que hacen las mujeres de las actividades que tenían que asumir dentro del grupo.

En ese sentido, los roles se construyen a partir de las características biológicas y las reglas de comportamiento en ese contexto social y bélico específico. Con respecto a las primeras, las consecuencias de esto se materializan en los distintos límites a su vida

---

<sup>426</sup> Entrevista realizada por policía judicial/Entrevista1/Caso13, Entrevista realizada por policía judicial/Entrevista1/Caso13, Entrevista realizada por policía judicial/Entrevista1/Caso13, Entrevista realizada por policía judicial/Entrevista1/Caso13, Entrevista realizada por policía judicial/Entrevista1/Caso13, Entrevista realizada por policía judicial/Entrevista1/Caso13, Entrevista realizada por policía judicial/Entrevista1/Caso13, Entrevista realizada por policía judicial/Entrevista1/Caso13.

<sup>427</sup> Al respecto puede consultarse: Zinecker, Heidrun. “Aprendizaje organizacional y aprendizaje mediante la Historia como argumento por parte de actores violentos no estatales. El caso de las FARC-EP en Colombia”. *Análisis político*, núm.78, vol. 26 (2013): 63-89.

<sup>428</sup> Centro Nacional de Memoria Histórica, *Guerrilla y población civil trayectoria de las FARC 1949-2013*. Tercera edición. Bogotá: CNMH, 2014. <http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2013/farc/guerrilla-poblacion-civil.pdf>

<sup>429</sup> Sanín, Francisco Gutiérrez, and Carranza Franco, Francy. "Organizing Women for Combat: The Experience of the FARC in the Colombian War." *Journal of Agrarian Change* 17, no. 4 (2017): 770-78. <http://web.a.ebscohost.com/biblioteca5.uc3m.es/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=0&sid=8817995a-0d38-4ee8-9feb-85a504c5a0fb%40sdc-v-sessmgr02>

sexual y reproductiva, teniendo como una obligación la anticoncepción; y en caso de embarazo la promoción del aborto forzado o la entrega de los recién nacidos a un hogar sustituto que podía ser conformado por familiares o desconocidos<sup>430</sup>.

En segundo lugar, las mujeres del grupo debían comportarse con lealtad, lo que implicaba un límite en las relaciones interpersonales con otros grupos o civiles, con prerrogativas de castigo si llegara a descubrirse que fungían como novias o parejas de miembros de otros grupos armados<sup>431</sup>. También debían ejercer constantemente labores de limpieza, cocina y cuidado, como también desarrollar actividades tales como controlar las comunicaciones, operar radioteléfonos, fungir como auxiliares contables, entre otras<sup>432</sup>. Estos roles concuerdan con lo expresado en la muestra de estudio en la que relatan que desde su reclutamiento habían desempeñado distintas labores para mantener el orden de campamentos y estamentos físicos donde se encontrarán<sup>433</sup>.

En las entrevistas realizadas por funcionarios estatales las mujeres comentan cuáles eran sus labores cotidianas en el grupo armado, aduciendo que no solo debían llevar un fusil sino “ranchar, lavar la ropa de los comandantes y limpiar”<sup>434</sup>. Comentan, además, que en varias ocasiones sufrieron violaciones por parte de sus superiores y en algunas ocasiones de sus compañeros de lucha, reiterando que eran prácticas normalizadas que fueron asumidas como actos de VS por ellas, después de seguir los procesos con los psicólogos de los programas estatales de reinserción<sup>435</sup>. Antes de esto, estaban convencidas que lo que sucedía con la VS dentro del conflicto eran situaciones normales de la guerra y por eso, aunque estaban en desacuerdo, toleraban lo que ocurría con ellas. En sus entrevistas refieren que pensaban que tener relaciones sexuales sin que

---

<sup>430</sup> Juan David Laverde Palma, “Así obligan a las mujeres a abortar en las Farc”, El Espectador, 2013. <https://www.elespectador.com/noticias/judicial/asi-obligan-a-las-mujeres-a-abortar-en-las-farc/>

<sup>431</sup> Ibid.

<sup>432</sup> Luis Andrés Fajardo Arturo y Rosa Yineth Valoyes Valoyes, Violencia Sexual como crimen internacional perpetrado por las Farc, Colección Derecho y Conflicto, Editorial Planeta Colombiana, 2015. [https://www.usergioarboleda.edu.co/wp-content/uploads/2015/04/violencia\\_sexual\\_libro\\_completo.pdf](https://www.usergioarboleda.edu.co/wp-content/uploads/2015/04/violencia_sexual_libro_completo.pdf)

<sup>433</sup> Entrevista realizada por policía judicial/Entrevista1/Caso13, Entrevista realizada por policía judicial/Entrevista1/Caso13, Entrevista realizada por policía judicial/Entrevista1/Caso13, Entrevista realizada por policía judicial/Entrevista1/Caso13

<sup>434</sup> Entrevista realizada por policía judicial/Entrevista1/Caso13, Entrevista realizada por policía judicial/Entrevista1/Caso13, Entrevista realizada por policía judicial/Entrevista1/Caso13, Entrevista realizada por policía judicial/Entrevista1/Caso13

<sup>435</sup> Entrevista realizada por policía judicial/Entrevista1/Caso13, Entrevista realizada por policía judicial/Entrevista1/Caso13, Entrevista realizada por policía judicial/Entrevista1/Caso13, Entrevista realizada por policía judicial/Entrevista1/Caso13

quisieran tenerlas era algo cotidiano y que ignoraban las rutas de atención en salud, en caso de quedar embarazadas o contraer una enfermedad de transmisión sexual<sup>436</sup>.

Así, la normalización de la violencia contra las mujeres refleja un desconocimiento de la conceptualización de la violencia que se subsana con posterioridad a la denuncia interpuesta, cuando son los entes judiciales, administrativos y personal de salud quienes les informan qué es violencia sexual y cómo se manifiesta, con el fin de que su ejercicio de comprensión, les permita identificar si han sido víctimas por algún acto de VS en el conflicto armado.

Las mujeres de la muestra de estudio que referenciaron que el presunto grupo al que pertenecía su agresor era las FARC-EP, denunciaron los hechos de violencia por motivos diversos (querer una mejor calidad de vida, por temor a perder su vida o la de sus seres queridos, entre otras). Sin embargo, en su totalidad, no tenían claridad ni conocimiento previo sobre lo que es o no VS en el conflicto armado.

Esto puede ser comprendido con más claridad cuando se revisa el proceso penal y las medidas administrativas de reinserción, donde uno de los pasos para ingresar a estos planes es presentar la denuncia ante la autoridad judicial competente de todos los hechos que puedan ser considerados delitos con ocasión del conflicto armado<sup>437</sup>. Aunque este tema será profundizado más adelante, se puede entrever que una de las actuaciones penales que permiten analizar la VS desde la voz de las mujeres víctimas sobrevivientes, es la denuncia.

Pero volviendo al tema que tiene prelación en este apartado y aunque el objeto principal de esta investigación no es profundizar sobre la historia de las FARC-EP, al analizar los presuntos grupos victimarios de la muestra de estudio, se aprecia que el papel

---

<sup>436</sup> Entrevista realizada por policía judicial/Entrevista1/Caso13, Entrevista realizada por policía judicial/Entrevista1/Caso13, Entrevista realizada por policía judicial/Entrevista1/Caso13, Entrevista realizada por policía judicial/Entrevista1/Caso13

<sup>437</sup> Al respecto hay dos rutas en Colombia que serán objeto de análisis en este estudio. La primera es referente a la creada con el proceso de desmovilización de las AUC con la ley 975 o ley de justicia y paz que puede ser consultada en el siguiente link <https://www.minjusticia.gov.co/Portals/0/pdf/Cartilla%20Justicia%20y%20Paz.pdf>; y la ruta creada con el Acuerdo de Paz en el 2016 que tiene lineamientos para la desmovilización de las FARC-EP que puede ser consultada en <http://www.reincorporacion.gov.co/es/reincorporacion/ruta-de-reincorporaci%C3%B3n>.



de la mujer en las dinámicas de VS fue invisibilizado por el desconocimiento y normalización de conductas constitutivas de VS dentro y fuera del conflicto.

Estos análisis llevaron a que se preguntara por el nivel educativo de las mujeres de la muestra de estudio, ya que el Estado debe prever herramientas idóneas para la prevención y atención de la VS. Al indagar por el nivel educativo, no solo de las 36 mujeres referidas sino el de toda la muestra, se encuentra como lo representa la tabla 2, que el 27% no ha recibido siquiera un año de educación básica y solo un 35% logró terminar la primaria<sup>438</sup>. Esto prueba la deficiencia del sistema educativo en el acceso a la educación de mujeres que se encuentran en espacios rurales, y muchas de ellas en lugares remotos, según lo registrado por las autoridades en los procesos penales.

Por otro lado, otro de los grupos señalados por las mujeres de la muestra es el autodenominado AUC o Autodefensas Unidas de Colombia, que tuvo su terminación con la Ley 975 de 2005, más conocida a nivel internacional como “ley de justicia y paz” – analizada más adelante-. Este grupo en particular tenía una estrategia distinta al reclutamiento, debido a que “se autoproclamaban autoridades de un territorio que controlaban y así disponían de las mujeres para sostener relaciones sexuales forzosas con ellas”<sup>439</sup>.

Esta estructura, creada en principio como una organización ajustada a ley, terminó por recibir ayuda de las Fuerzas Militares de Colombia para neutralizar a otros grupos armados que tenían poder en ciertas regiones del país. Sin embargo, convirtieron en estrategia de grupo la práctica de VS “con el propósito de obtener información, como medio de castigo, para causar terror en las víctimas y en la comunidad general, entre otras finalidades”<sup>440</sup>.

---

<sup>438</sup> Información interpretada de los expedientes de procesos penales en la Fiscalía 5 Especializada en la ciudad de Popayán, Colombia, 2019.

<sup>439</sup> María Camila Rincón Ortega, "Violencia sexual fue una práctica sistemática de Auc y Farc", El Espectador, 2013. <https://www.elespectador.com/noticias/judicial/violencia-sexual-fue-una-practica-sistemica-de-auc-y-farc/>

<sup>440</sup> Yesby Yadira, Ramos, López, "Mujeres y violencia sexual: un breve contexto del bloque Catatumbo de las Autodefensas Unidas de Colombia.", Tesis de Grado, Universidad Católica de Colombia, 2016. <https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/13878/4/MUJERES%20Y%20VIOLENCIA%20SEXUAL.%20%20UN%20BREVE%20CONTEXTO%20DEL%20BLOQUE%20CATATUMBO%20DE%20LAS%20AUTODEFENSAS%20UNIDAS%20DE%20COLOMBIA..pdf>

El CNMH de Colombia logra resumir las estrategias de este grupo a través de fuentes primarias y secundarias para la reconstrucción de lo que ocurrió en el conflicto armado. En su informe, refiere que las mujeres eran sometidas a la VS “1) para atacar a las mujeres por su condición de liderazgo; 2) para destruir el círculo afectivo de aquellos considerados como enemigos; 3) para “castigar” conductas transgresoras o ignominiosas desde la perspectiva de los actores armados; 4) violencia sexual articulada a prácticas culturales, y 5) violencia sexual orientada a generar cohesión entre los integrantes de grupos paramilitares y el afianzamiento de sus identidades violentas”<sup>441</sup>.

Al describir las líneas de acción del grupo, el informe refiere el caso de la masacre de Bahía Solano, Colombia, en la cual las mujeres lideresas indígenas de comunidades ubicadas en esta región fueron violadas por cumplir con el papel central de defensa, conservación y protección de su territorio ancestral y su comunidad.

Además, comenta que, con masacres como las de El Salado y Trujillo, se castigaron a los hombres considerados enemigos a través de sus mujeres para humillarlos<sup>442</sup>. Asimismo, documentan casos en los que el castigo a las mujeres consistía en limitar su libre expresión, restringiendo su forma de vestir y lucir ante la sociedad. Esto lo evidencian a través del relato de una mujer que manifiesta que por vestirse para ir de fiesta y vestir de una forma que a los comandantes no les gustaba, le raparon su cabello. Además, dice el informe, que las sanciones impuestas consistían también, en multarlas y someterlas a VS<sup>443</sup>.

El CNMH igualmente describe como la VS de paramilitares, en algunos casos, tenía relación con las prácticas culturales o lineamientos sociales de las poblaciones que desplazaban. Es el caso de adolescentes que eran ofrecidas o utilizadas para satisfacer los deseos de comandantes por no haber tenido contacto sexual con ningún hombre. Y para terminar el CNMH señala como en algunos casos la VS era grupal, lo que hacía fortalecer los lazos de amistad del grupo. Sin embargo, advierte que con respecto a este grupo en

---

<sup>441</sup> Centro Nacional de Memoria Histórica, *Informe General: Basta Ya, Colombia: Memoria de Guerra y Dignidad*, CNMH, 2016, P. 80  
<http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2013/bastaYa/basta-ya-colombia-memorias-de-guerra-y-dignidad-2016.pdf>

<sup>442</sup> Centro Nacional de Memoria Histórica, *Informe General: Basta Ya, Colombia: Memoria de Guerra y Dignidad*, 80 y ss.

<sup>443</sup> Centro Nacional de Memoria Histórica, *Informe General: Basta Ya, Colombia: Memoria de Guerra y Dignidad*, 80 y ss.

específico se daba lo que ellos llaman “oportunidad”, donde las circunstancias favorecen espacios para la comisión de VS sin que estos sean planeados, ni establecidos.

En contraste con este rastreo, que se logró además con los testimonios de las mujeres víctimas sobrevivientes de violencia sexual, en el estudio de caso presentado en esta tesis, el 22,86% equivalente a 16 mujeres fueron víctimas sobrevivientes de este grupo paramilitar, tal y como se evidencia a continuación en la tabla 3:

**Tabla 3. Presunto Grupo Agresor señalado por la Víctima Sobreviviente**

<i>Etiqueta de Valor</i>	<i>Valor</i>	<i>Frecuencia</i>	<i>Porcentaje</i>	<i>Porcentaje Válido</i>	<i>Porcentaje Acumulado</i>
	AUC	16	22,86	22,86	22,87
	ELN	3	4,29	4,29	27,14
	FARC-EP	36	51,43	51,43	78,57
	No sabe	15	21,43	21,43	100
Total		70	100	100	

Fuente: Información interpretada de los expedientes de procesos penales adelantados en la Fiscalía 5ª Especializada de la ciudad de Popayán, Colombia. Tabla de elaboración propia (2019).

De acuerdo con las entrevistas del estudio del caso, varias víctimas sobrevivientes fueron blanco de este grupo armado por ser vírgenes, estar vinculadas con hombres considerados enemigos, para fortalecer los lazos del grupo y por haber estado inmersas en situaciones de oportunidad, tal y como se puede apreciar a continuación en el gráfico 7:



que fueron violadas por grupos de más de dos personas, donde describen como unos observan, otros las violan y otros participan de diversas formas<sup>447</sup>. Las demás mujeres de la muestra refieren que se encontraban solas en su casa por lo cual, en ausencia de gente de su núcleo vivencial, procedieron a entrar al lugar de habitación para violarlas<sup>448</sup>.

En esa línea argumentativa, encontramos al Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupo armado al margen de la ley fundado en 1964 que “ha sido capaz de sostener hostilidades en varios departamentos, con ataques a la fuerza pública, asaltos a estaciones de Policía, tomas de algunas poblaciones, hostigamientos y sabotajes”<sup>449</sup>. Sus dinámicas de violencia sexual son muy similares a las del grupo armado FARC-EP, según lo relatado por las víctimas en múltiples investigaciones. El CNMH en su informe denominado “La guerra inscrita en el cuerpo” expone testimonios de excombatientes de este grupo en particular, los cuales evidencian varios tipos de violencia como son las violaciones, tocamientos, acosos y abortos forzados<sup>450</sup>.

En la muestra de estudio de esta tesis, 3 de las mujeres que señalan como presunto victimario a un integrante de este grupo, referencian que fueron víctimas sobrevivientes de violación. Expresan, por ejemplo, “estaba yo en la casa y llegaron unos señores preguntando por mi papá diciendo que era de parte del ELN, como él no estaba, ahí me agarraron”<sup>451</sup>. Relatos como los descritos, evidencian que las mujeres eran de la sociedad civil, con ninguna pertenencia a ningún grupo armado. Esto es relevante, ya que las principales investigaciones que documentan las voces de víctimas sobrevivientes de este grupo armado son sus combatientes, quienes argumentan cómo les daban anticonceptivos para evitar el embarazo y eran sometidas a abortos forzados si su pareja no quería

---

<sup>447</sup> Entrevista realizada por policía judicial/Entrevista1/Caso13, Entrevista realizada por policía judicial/Entrevista1/Caso13, Entrevista realizada por policía judicial/Entrevista1/Caso13, Entrevista realizada por policía judicial/Entrevista1/Caso13

<sup>448</sup> Entrevista realizada por policía judicial/Entrevista1/Caso13, Entrevista realizada por policía judicial/Entrevista1/Caso13 Entrevista realizada por policía judicial/Entrevista1/Caso13, Entrevista realizada por policía judicial/Entrevista1/Caso13

<sup>449</sup> Centro Nacional de Memoria Histórica, La guerra inscrita en el cuerpo, Informe nacional de violencia sexual en el conflicto armado Informe, CNMH, 2017, [http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes-accesibles/guerra-inscrita-en-el-cuerpo\\_accesible.pdf](http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes-accesibles/guerra-inscrita-en-el-cuerpo_accesible.pdf)

<sup>450</sup> Centro Nacional de Memoria Histórica, La guerra inscrita en el cuerpo, Informe nacional de violencia sexual en el conflicto armado Informe, CNMH, 2017, [http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes-accesibles/guerra-inscrita-en-el-cuerpo\\_accesible.pdf](http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes-accesibles/guerra-inscrita-en-el-cuerpo_accesible.pdf)

<sup>451</sup> Entrevista realizada por policía judicial/Entrevista1/Caso13, Entrevista realizada por policía judicial/Entrevista1/Caso13, Entrevista realizada por policía judicial/Entrevista1/Caso13

tenerlo<sup>452</sup>. Las afectaciones físicas y psicológicas se evidencian en expresiones reiterativas en las que aducen que esos episodios cambiaron la forma de observarse y definieron su vida, a partir de la VS.

La información aportada da una aproximación real de los hechos que produjeron daños en las víctimas sobrevivientes, quienes como veremos más adelante, no han podido tener una reparación integral ni adecuada para su proceso.

## **2.2. Normatividad y jurisprudencia colombiana sobre procesos penales de Violencia Sexual**

Las sanciones, las obligaciones y los derechos en Colombia se encuentran consagradas en normas que establecen límites a ciertos actos u omisiones referentes a conductas de VS contra las mujeres. Dentro de esta amplia gama, los procesos penales tienen como norma primordial el Código Penal colombiano en el cual se encuentran consagrados parámetros, principios y delitos que sancionan conductas u omisiones que atentan contra bienes jurídicos como lo son la integridad física y sexual de las mujeres.

El contexto jurídico penal colombiano en relación con el conflicto armado, atravesó cambios en su parte sustancial y procesal considerando dentro de sus preceptos delitos contra las mujeres como el acceso carnal violento, los actos sexuales abusivos, la tortura, el embarazo forzado, la esterilización forzada, entre otros, de manera general. La Ley 599 de 2000- Código Penal colombiano- se convirtió en el blindaje penal para las mujeres que sufrían de algún tipo de violencia <sup>453</sup>.

Sin embargo, el reconocimiento del conflicto armado instó a la sanción de una ley que adiciona delitos con base en los tratados internacionales del DIH. Se enmarcan en esta línea, 13 delitos contra “personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional

---

<sup>452</sup> Al respecto puede consultarse: Marulanda Echeverri, Nasly Julieth. "La violencia sexual hacia mujeres en el marco de guerras y conflictos armados como expresión del patriarcado. Manifestaciones en el contexto colombiano." Trabajo de grado, Universidad de Antioquia, 2018. <http://bibliotecadigital.udea.edu.co/handle/10495/15121>.

<sup>453</sup> Congreso de Colombia. ley 599 de 2000, “Código Penal”, Diario oficial No. 44.097, 24 de julio de 2000. [http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley\\_0599\\_2000.html](http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0599_2000.html)

Humanitario (DIH)”, concordantes con los establecidos en el Estatuto de Roma y ratificado en este país a través de la Ley 742 de 2002<sup>454</sup>. Las mujeres, como personas protegidas son caracterizadas como tal porque son integrantes de la población civil o no participan en las hostilidades que se presentan dentro del conflicto, según las normas del DIH y la legislación nacional.

Lo anterior resulta relevante debido que esta característica determina cuál es el Juez natural de investigación de la conducta y el que decidirá en su momento, la reparación penal de las víctimas sobrevivientes. Por ello, aquellos delitos de VS sin relación al conflicto son investigados por la justicia ordinaria y los que son cometidos en este escenario bélico son de la justicia especializada. De acuerdo con lo referido, se encontró en el estudio realizado que los procesos penales de la muestra son de competencia de los jueces especializados, y por ende, los victimarios investigados por conductas reguladas por el DIH<sup>455</sup>.

Cuatro de estos delitos especiales imponen sanciones por acciones u omisiones relacionadas con la violación y los actos sexuales contra personas que en el DIH son consideradas personas protegidas<sup>456</sup>. Estos aparecen con etiquetas como “acceso carnal violento en persona protegida, acceso carnal abusivo en persona protegida menor de catorce años, actos sexuales violentos en persona protegida y actos sexuales con persona protegida menor de catorce años”<sup>457</sup>. Este cuarteto de delitos coincide en las definiciones establecidas por los Estados parte en los tratados internacionales sobre VS, donde todos los actos que no sean consentidos y atenten contra la integridad sexual de las mujeres con relación al conflicto armado deben ser prevenidos, investigados y sancionados, ya sea por la justicia local o internacional.

El primero de ellos, el de “acceso carnal violento en persona protegida” describe el delito más frecuente padecido por la muestra de estudio el cual se describe en el Código

---

<sup>454</sup> Ibid.

<sup>455</sup> Para distinguir esa víctima especial, sujeto pasivo de la acción, La normatividad vigente explica, en su art 135 parágrafo quienes son personas las protegidas por el DIH (población civil, personas que no participan en las hostilidades, enfermos, heridos, personal sanitario, sacerdotes, entre otros ) pero en todo caso por defecto remite a los convenios de Ginebra I ,II,III y IV y los protocolos I y II de 1.977 y “ los que llegaren a ratificarse”. En ese sentido, se aclara que en Colombia estos convenios hacen parte de la legislación interna por mandato constitucional, art 93.

<sup>456</sup> Ibid.

<sup>457</sup> Ibid.

Penal colombiano en los siguientes términos: “El que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, realice acceso carnal por medio de violencia en persona protegida incurrirá en prisión de ciento sesenta (160) a trescientos veinticuatro (324) meses y multa de seiscientos sesenta y seis punto sesenta y seis (666.66) a mil quinientos (1500) salarios mínimos legales mensuales vigentes”<sup>458</sup>. Sentencias condenatorias por este delito dieron a conocer los padecimientos de las mujeres víctimas sobrevivientes por este delito, que implica penetración de pene u otro objeto sin consentimiento de la víctima.

Al respecto, la Corte Suprema de Justicia de Colombia en la sentencia contra Rodrigo Alberto Zapata Sierra, argumenta que “frente a la motivación para los ataques sexuales se indicó por parte de la Fiscalía que, de los 710 casos registrados a nivel nacional, 116 (16.3%) obedecieron al aparente vínculo de la víctima con otras partes del conflicto y 542 casos (76.3%) al estatus de poder del perpetrador”<sup>459</sup>.

Muchos de los testimonios de las víctimas sobrevivientes coinciden en sus descripciones en que frecuentemente fueron sometidas por la fuerza o coaccionadas a mantener relaciones sexuales ya sea con penetración vaginal o anal<sup>460</sup>. Relatos que cuentan esta situación son encontrados en los procesos de la muestra de estudio que narran, por ejemplo, cómo fueron amenazadas con armas y sometidas por varios hombres para lograr violarlas: “iba para mi casa cuando un hombre me siguió, me amenazó con un arma y me llevó por unos cafetales. En una caseta me arrancó el jean y me violó. Después de eso me amenazó con matar a mi familia. Yo quedé en embarazo y cuando la niña tenía 3 meses ese tipo me amenazó y me dijo que tenía que irme de ahí”<sup>461</sup>.

Otro relato nos muestra cómo la complicidad de los agresores jugaba un papel importante al momento de cometer los ilícitos: “al querer reclutar a mi hijo, unos guerrilleros entraron a mi casa y violaron a mi hija y a mí. Unos la sostenían a ella y a mí por los brazos y piernas, otros veían y uno nos violó”<sup>462</sup>. Hechos como estos, son tomados en los procesos penales como indicios que demuestran cómo la fuerza, la superioridad

---

<sup>458</sup> Ibid.art.138

<sup>459</sup>Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia SP5333-2018, “Caso bloque pacífico héroes del chocó y frente suroeste de las autodefensas”, 5 de diciembre de 2018, MP. Eugenio Fernandez Carlier. <http://consultajurisprudencial.ramajudicial.gov.co:8080/WebRelatoria/csj/index.xhtml>

<sup>460</sup> Al referirse la normativa al acceso carnal violento se hace referencia a lo que a nivel internacional se conoce como el crimen internacional de violación.

<sup>461</sup> Entrevista realizada por policía judicial/Entrevista1/Caso40

<sup>462</sup> Entrevista realizada por policía judicial/Entrevista1/Caso37



que dan las armas y la pertenencia a un grupo armado, sirven como mecanismo de intimidación hacia las mujeres.

Además, el contexto donde se desarrollan invita a no perder de vista la relación entre los actos de VS y el conflicto armado colombiano. En ese sentido, la Corte Suprema de Justicia de Colombia unificó sus interpretaciones en relación con este punto, argumentando que el vínculo entre la VS y el conflicto no tendría que ser entendido solo en términos espaciales ya que estos actos son cometidos en territorios en los que se presentan combates y donde no los hay. Por lo tanto, aclara que, se pueden presentar varios factores que pueden determinar si existe una relación de la VS contra las mujeres y el conflicto armado.

En primer lugar, se debe determinar si el acto cometido depende del ambiente hostil que genera el conflicto. En segundo lugar, si el contexto bélico se convierte en decisivo para incidir en la capacidad o decisión del victimario para realizar estos actos; y por último, si la intención del victimario tiene como propósito causar un daño a las mujeres que no participan directamente en el conflicto o son civiles<sup>463</sup>. La prueba de esta relación, permite que se imputen delitos a los victimarios y seguir el proceso penal hasta lograr la condena y reparación por los daños causados a las mujeres.

Lo expuesto invita a reflexionar sobre los distintos ambientes de hostilidad antes y dentro del conflicto armado particular de estudio, ya que puede notarse cómo aparentemente se mezclan formas de dominación que ya existían dentro de la sociedad y nuevas formas de violencia relacionadas con el sistema de opresión, dominación y violencia dentro del conflicto armado que motivan a los victimarios a dominar, no solo través de la sexualidad de los cuerpos, sino también a través de ideales de conquista política y territorial.

Pero cuando se transita hacia escenarios libres de violencia, quedan las secuelas de los actos de VS que deben ser abordados para lograr ideales políticos como la reconciliación y la paz. Por ende, atendiendo a lo referido, la legislación nacional colombiana contra la VS contempla de forma diferenciada los delitos de este tipo de

---

<sup>463</sup>Corte Constitucional de Colombia, sentencia C-291 de 2007, “Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 135, 156 y 157 (parciales) de la Ley 599 de 2000, y 174, 175, 178 y 179 de la Ley 522 de 1999.”, 25 de abril del 2007. MP. Manuel José Cepeda Espinosa, p.35, <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2007/C-291-07.htm>

violencia que se cometen por ocasión del conflicto armado y los que se encuentran por fuera de las relaciones, entre los actos y ambientes hostiles de conflicto armado.

Así, las voces de las víctimas sobrevivientes y sus relatos sobre la VS contra ellas, dieron a conocer prácticas dentro del conflicto que tuvieron que ser reguladas con imposición de sanciones a los victimarios. Los movimientos de mujeres y diversas organizaciones que visibilizaron la VS como un problema social, político y de salud pública, lograron con su activismo, poner en el radar social la VS como algo prioritario para el sistema penal por atentar contra la integridad sexual y física de las personas bajo su tutela.

Otro de los delitos consagrados en la normatividad penal colombiana es el de “los actos sexuales violentos en persona protegida”. Este delito es descrito como aquel donde se cometen actos distintos al acceso carnal, tales como tocamientos, besos forzados, entre otros. Una de las víctimas sobrevivientes de la muestra expresa que “estaba en una finca recostada descansando cuando un hombre se me acuesta al lado y comienza a acariciarse su miembro y lo sobaba con la parte trasera de mis nalgas. Yo grité y el hombre huyó porque unos trabajadores se dieron cuenta”<sup>464</sup>. Otra comenta que “estos hombres nos tocaron varias veces y también a mis hermanas, además esos tipos se masturbaban una y otra vez delante ellas”.

Las anteriores conductas, descritas en la normatividad penal como actos sexuales, amplían la gama de delitos de VS más allá de la violación, siendo congruentes con la legislación internacional sobre la materia. Por ende, se destaca la participación de las mujeres en la creación de la normatividad, porque son sus voces escuchadas por la comunidad legislativa del Congreso de Colombia –órgano constituido por elección popular-, dando a conocer un panorama real de la VS en este contexto particular.

Es así como sale a la vida jurídica la Ley 1719 de 2014, donde se recoge un sentir colectivo de víctimas de violencia sexual, que al contar sus experiencias, dan la posibilidad de denominación a diversos tipos de VS como el de la desnudez forzada, los actos sexuales contra niñas y adolescentes, los embarazos forzados, abortos forzados a

---

<sup>464</sup> Entrevista realizada por policía judicial/Entrevista1/Caso41

los que fueron sometidas, la esterilización forzada por la cual tuvieron que redireccionar sus vidas, la esclavitud forzada y la trata de personas con fines de explotación sexual<sup>465</sup>.

Diversos informes de organizaciones en pro de los derechos de las mujeres, así como el Centro Nacional de Memoria Histórica CNMH, que nace de la Ley 1448 del 2011, la cual es conocida como la “ley de víctimas y restitución de tierras”, recogen información sobre metodologías que emplean las entrevistas como medios de captación de la información sobre este tema. Dentro de sus hallazgos exteriorizan que, a lo largo del territorio nacional, las mujeres fueron sometidas a distintos actos de VS por única vez o de forma repetitiva<sup>466</sup>.

Uno de estos actos es el de la esterilización forzada en el conflicto armado colombiano, que contempla tres elementos según la normatividad penal<sup>467</sup>. El primero es la relación del acto con el conflicto armado, el segundo es la utilización o uso de la violencia para cometer los actos y la tercera es el daño a la capacidad biológica de reproducción de las mujeres<sup>468</sup>.

Relatos como el de las víctimas sobrevivientes de los Montes de María -norte de Colombia-, dan a conocer cómo estos tres elementos confluyen, indicando que en su territorio había presencia paramilitar, refiriendo que este grupo armado daba órdenes coercitivas para que las mujeres se sometieran a procedimientos que afectaban su sistema reproductivo. Uno de esos testimonios nos dice: “Mire, nosotros aquí en nuestro departamento tuvimos el tema de esterilización, nos mandaban a capar para que no tuviéramos hijos y esto lo hicieron en el hospital”<sup>469</sup>.

Estas dinámicas de esterilización forzada se presentaron en Colombia, en mujeres que pertenecían a las filas de estos grupos armados donde los roles aparentemente dejaban

---

<sup>465</sup>Al respecto puede consultarse: Centro Nacional de Memoria Histórica, La guerra inscrita en el cuerpo, Informe nacional de violencia sexual en el conflicto armado Informe, CNMH, 2017. [http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes-accesibles/guerra-inscrita-en-el-cuerpo\\_accesible.pdf](http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes-accesibles/guerra-inscrita-en-el-cuerpo_accesible.pdf)

<sup>466</sup>Centro Nacional de Memoria Histórica. “mujer lideresa, diálogo por la memoria, Santa Marta”, CNMH, 2015. [http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes-accesibles/guerra-inscrita-en-el-cuerpo\\_accesible.pdf](http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes-accesibles/guerra-inscrita-en-el-cuerpo_accesible.pdf)

<sup>467</sup> Congreso de Colombia., ley 1719 de 2014, “Acceso a la Justicia de Víctimas del conflicto armado” Diario oficial No. 49.186, 18 de junio de 2014. [http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley\\_1719\\_2014.html](http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1719_2014.html)

<sup>468</sup> Ibid. art. 7

<sup>469</sup> Ibid.

a un lado las características de feminidad de las mujeres para dedicarse a labores masculinas dentro de la guerra como combatientes. En ese caso, con el testimonio expuesto puede observarse la vulneración de los derechos sexuales y reproductivos, que quedan sujetos a disposición de los intereses grupales de la organización delictiva.

En ese sentido, el control de los cuerpos de las mujeres es primordial ya que se prevé dentro de la concepción de estos grupos armados la construcción de personal apto y útil para la guerra. Esto implica que las mujeres a pesar de tener labores de cuidado y ser usadas para explotación sexual por parte de algunos miembros de su grupo, tenían que cumplir un rol para la lucha armada, siendo un posible obstáculo en los contextos agresivos en los que se encontraban, la etapa de maternidad.

Es así como el Centro de Memoria Histórica denomina la esterilización forzada como “prácticas disciplinarias para la formación de cuerpos para la guerra, cuerpos donde la feminidad no tuvo cabida, pues era considerada como sinónimo de debilidad ante los grupos armados contrincantes”<sup>470</sup>. La concepción de la maternidad y las capacidades biológicas reproductivas de las mujeres es tomada en forma negativa por tener implicaciones más allá de lo biológico.

La humillación de los grupos cuando las mujeres que pertenecen a ellos son violadas implican pérdida de poder y territorio, pérdidas económicas y baja de personal destinado a servir en los enfrentamientos<sup>471</sup>. Y los embarazos no deseados de su personal dan paso a paternidades no contempladas, situaciones económicas no ideales para crianza de los niños y niñas, falta de recursos económicos para manutención de la madre y los hijos e hijas, y con ellos, nace la posibilidad de que los grupos contrincantes utilicen a sus hijos e hijas para aprovechar y ganar terreno en la guerra que se fragua.

Asimismo, las víctimas sobrevivientes comentan en sus relatos cómo son obligadas a planificar forzosamente para evitar embarazos dentro de las filas de los grupos armados. Testimonios como el que se refiere a continuación ilustra la realidad de lo que padecen las mujeres dentro de este conflicto armado particular: “Cuando fui reclutada,

---

<sup>470</sup>Centro Nacional de Memoria Histórica, La guerra inscrita en el cuerpo, Informe nacional de violencia sexual en el conflicto armado Informe, CNMH, 2017, 343. [http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes-accesibles/guerra-inscrita-en-el-cuerpo\\_accesible.pdf](http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes-accesibles/guerra-inscrita-en-el-cuerpo_accesible.pdf)

<sup>471</sup> Ibid.

tenía 15 años. Me fui señorita y ellos allá lo obligaban a uno a planificar porque los comandantes me obligaban a estar con ellos a la fuerza. Uno no podía oponerse porque el comandante era el que decidía”<sup>472</sup>.

Las voces de las niñas y mujeres dan a conocer otra de las formas de violencia sexual sancionadas por el ordenamiento jurídico colombiano, relacionada con el aborto forzado. El informe que da el CNMH de Colombia por mandato de la Ley 1719 de 2014, recoge testimonios que relatan cómo las mujeres eran obligadas a interrumpir su embarazo o en el peor de los casos, sus embarazos eran interrumpidos por el victimario. En estos testimonios se encuentra, por ejemplo, cómo una mujer que ocultaba su embarazo fue sometida por la fuerza para confesar su estado, siendo posteriormente amarrada, su embarazo interrumpido de forma violenta y asesinada delante de sus compañeros y compañeras, para que tomaran ejemplo y no se repitiera<sup>473</sup>.

Sin embargo, esta práctica no es la única que se presenta en estos escenarios. También existen relatos de mujeres que describen cómo quedaron embarazadas a raíz de una violación ocurrida en tiempo de conflicto armado. Aunque la experiencia internacional de mujeres en conflictos armados como el de Ruanda muestra cómo las mujeres eran violadas con un propósito racial determinado, siendo obligadas a tener hijos producto de la violación, en Colombia la dinámica no presenta estos patrones.

Si bien existe dentro de la ley un artículo específico relacionado con el embarazo forzado, caracterizado por contener dentro de sus elementos constitutivos, la obligación impuesta por parte del violador a la mujer para que mantenga el embarazo producto de violación (en el ámbito internacional) o del acceso carnal violento (en el ámbito nacional), la práctica reiterativa es violar a las mujeres que pertenecen a la población civil, dejarlas en embarazo y forzarlas a desplazarse o coaccionarlas para que guarden silencio de lo que les ocurrió, por el castigo por parte de los altos mandos de sus tropas.

---

<sup>472</sup>Se puede consultar al respecto el siguiente sitio web: *Semana*. <https://www.semana.com/nacion/articulo/violencia-sexual-en-las-farc-fiscalia-presenta-informe/483340>

<sup>473</sup>Centro Nacional de Memoria Histórica, La guerra inscrita en el cuerpo, Informe nacional de violencia sexual en el conflicto armado Informe, CNMH, 2017, 123. [http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes-accesibles/guerra-inscrita-en-el-cuerpo\\_accesible.pdf](http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes-accesibles/guerra-inscrita-en-el-cuerpo_accesible.pdf).

Esto lo podemos apreciar en el estudio de caso objeto de esta tesis, donde una mujer comentó en su entrevista: “yo estaba con mi papá y a mi casa llegaron 5 hombres armados. Amarraron a mi papá y uno de ellos me violó delante de él. Yo quedé inconsciente y por la violación quedé en embarazo y el hombre que me violó me amenazó con matarme si contaba algo. Así que me tuve que ir de ahí”<sup>474</sup>.

Ahora bien, el cuerpo normativo de la VS también ha contemplado la prostitución forzada como uno de los tipos de VS que tienen relación con el conflicto armado. El sometimiento de niñas, adolescentes y mujeres a “prestar servicios sexuales” se volvió frecuente en algunos sectores donde tenían mando grupos al margen de la ley. En diversos informes de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, se ofrecen estadísticas para visibilizar la ocurrencia de este tipo de violencia. Por ejemplo, la Casa de la Mujer, al realizar una encuesta a más de dos mil mujeres sobre VS en el conflicto armado, estableció que este delito era cometido en un 45,76% por miembros de grupos armados ilegales los cuales sometían a las niñas, adolescentes y mujeres a que se prostituyeran<sup>475</sup>.

También el delito de “esclavitud sexual en persona protegida” adicionado al Código Penal colombiano, vigente por la Ley 1719 de 2014, aduce que se sancionará a todo aquel que “con ocasión y el desarrollo el conflicto armado ejerza uno de los atributos del derecho de la propiedad por medio de la violencia sobre persona protegida para que realice uno o más actos de naturaleza sexual”<sup>476</sup>.

Estos delitos van relacionados con la “trata de personas con fines de explotación sexual que advierte que aquel que con ocasión y el desarrollo del conflicto armado capte, traslade, acoja o reciba a una persona protegida dentro del territorio nacional o hacia el exterior con fines de explotación sexual será sancionado por el aparato judicial”<sup>477</sup>. Así mismo, el legislador aclara que “se entiende por explotación de carácter sexual el obtener

---

<sup>474</sup> Entrevista realizada por policía judicial/Entrevista1/Caso32

<sup>475</sup> Centro Nacional de Memoria Histórica. “Caminos para la memoria”, CNMH. <http://www.centrodehistoriamemoria.gov.co/micrositios/caminosParaLaMemoria/descargables/6.reparaciones/crimenes-que-no-prescriben.pdf>

<sup>476</sup> Congreso de Colombia., ley 1719 de 2014, “Acceso a la Justicia de Víctimas del conflicto armado” Diario oficial No. 49.186, 18 de junio de 2014. [http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley\\_1719\\_2014.html](http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1719_2014.html)

<sup>477</sup> Congreso de Colombia. ley 599 de 2000, “Código Penal”, Diario oficial No. Diario Oficial No. 44.097, 24 de julio de 2000. [http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley\\_0599\\_2000.html](http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0599_2000.html)

provecho económico, cualquier otro beneficio para sí o para otra persona mediante la explotación de la prostitución ajena, la esclavitud sexual, el matrimonio servil, el turismo sexual o cualquier otra forma explotación sexual”<sup>478</sup>. Aunque dentro de la muestra de estudio no se registra ningún caso de trata de personas o esclavitud sexual, se reconoce que dentro del conflicto armado colombiano existen casos relativos a estos delitos<sup>479</sup>.

Por último, el delito de desnudez forzada en persona protegida es una novedad en el catálogo de delitos, ya que es considerado un delito autónomo, descrito en los siguientes términos: “El que, con ocasión del desarrollo conflicto armado, por medio de la violencia, obligue a una persona protegida a desnudarse total o parcialmente a permanecer desnuda, incurrirá en prisión de sesenta y cuatro (64) a ciento sesenta y dos (162) meses...”<sup>480</sup>.

Esta apreciación normativa nacional es concordante con lo expresado por Tribunales Internacionales Penales, como es el caso del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, el cual analiza en su sentencia Akayesu, como algunas víctimas fueron forzadas a bailar desnudas delante de la multitud, estableciendo dentro de sus argumentos que la VS va más allá de la penetración vaginal, debido a que involucra todos los actos que transgreden los derechos sexuales de las personas y vician su consentimiento por el uso de la fuerza o la coerción.

Dado que el énfasis de este apartado es la normatividad nacional penal de la VS, se reconoce que estas son complementadas con otras normas que sirven de base para la protección de las mujeres en cualquier escenario de violencia. Es así como cabe mencionar la Ley 1257 de 2008, la cual contiene medidas de sensibilización y define qué es violencia contra la mujer, daño físico, sexual, psicológico, patrimonial, entre otros.

Esta va acompañada de una serie de decretos reglamentarios expedidos por el Ministerio de Justicia y de Derecho como lo son el decreto 4799 de 2011; el cual “establece funciones a las Comisarías de Familia, la Fiscalía General de la Nación y de control de garantías los juzgados civiles para el otorgamiento de medidas de protección

---

<sup>478</sup> Ibid

<sup>479</sup> Al respecto, puede consultarse la base de datos de la Corte Suprema de Justicia que compila las sentencias de condenados por este delito. <http://consultajurisprudencial.ramajudicial.gov.co:8080/WebRelatoria/csj/index.xhtml>

<sup>480</sup> Congreso de Colombia., ley 1719 de 2014, “Acceso a la Justicia de Víctimas del conflicto armado” Diario oficial No. 49.186, 18 de junio de 2014. [http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley\\_1719\\_2014.html](http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1719_2014.html)

a mujeres víctimas de violencia”<sup>481</sup> -; el Decreto 4796 de 2011, el cual “define las acciones necesarias para detectar prevenir y atender integralmente a través de los servicios que garantice el sistema general de Seguridad Social en salud a las mujeres víctimas de violencia e implementar mecanismos para hacer efectivo el derecho a la salud”<sup>482</sup> -; y el Decreto 1630 de 2019, que “define las medidas de atención para mujeres víctimas la prestación de las mismas los procedimientos considerando si la solicitud se presenta ante autoridad de salud”<sup>483</sup>.

### **2.2.1. La perspectiva de género como pilar fundamental en Colombia para los procesos penales de Violencia Sexual**

El bloque de constitucionalidad en Colombia, consagrado en el artículo 93 de la Constitución Política de 1991, establece que los tratados internacionales y demás normas sobre los Derechos Humanos son parte de nuestro sistema jurídico y, por tanto, sus principios, obligaciones y deberes rigen en el país al igual que una norma nacional.

Convenciones como la relativa a eliminar las formas de discriminación hacia la mujer (CEDAW), ratificada por el Congreso de Colombia a través de la Ley 51 de 1981 y la Convención Interamericana de Belém do Pará, introducida a nuestro ordenamiento jurídico por la Ley 248 de 1995, establecen la prohibición de la discriminación hacia las mujeres por el hecho de ser mujeres o por cualquier otra condición social y las obligaciones de los Estados para eliminar toda violencia contra las mujeres<sup>484</sup>.

<sup>481</sup> Presidente de la República de Colombia, decreto 4799 de 2011, “se reglamentan parcialmente las Leyes 294 de 1996, 575 de 2000 y 1257 de 2008” Diario oficial No. 48289, 20 de diciembre de 2011.

<http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1551034>

<sup>482</sup> Presidente de la República de Colombia, decreto 4796 de 2011, “se reglamentan la ley 1257 de 2008” Diario oficial No. 48289, 20 de diciembre de 2011.

<http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1551034>

<sup>483</sup> Presidente de la República de Colombia, decreto 1630 de 2019, “relativo a las víctimas de violencia sexual”, 9 de septiembre de 2019.

[https://www.minsalud.gov.co/Normatividad\\_Nuevo/Decreto%20No.%201630%20de%202019.pdf](https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Decreto%20No.%201630%20de%202019.pdf)

<sup>484</sup> Puede consultarse: Congreso de Colombia. Ley 248 de 1995, “se aprueba la Convención Internacional para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, suscrita en la ciudad de Belem Do Para”, Diario oficial No. 42.171, 29 de diciembre de 1995. [http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1605470](http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0248_1995.html#:~:text=Por%20medio%20de%20la%20cual,9%20de%20junio%20de%201994; Congreso de Colombia. Ley 51 de 1981, “se aprueba la “Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer””, Diario oficial No. 35794, 7 de julio de 1981. <a href=)



Dentro del amplio espectro normativo, la obligación de respeto y garantía, aquella que invita a tomar medidas para hacer efectivos los derechos humanos, se complementa con la obligación de involucrar la perspectiva de género en los distintos procesos administrativos y judiciales debido a que “para la eliminación de la violencia contra la mujer, el Estado colombiano está obligado a investigar, sancionar y reparar la violencia estructural contra la mujer”, siendo obligación de los funcionarios y operadores judiciales garantizar que las medidas que se empleen sean efectivas.

La Corte Constitucional colombiana, reitera en su jurisprudencia cómo los procesos penales deberán tener en cuenta esta perspectiva para evitar que sus decisiones se basen en estereotipos de género, o lleguen a revictimizar a las mujeres. En la sentencia 462 del 2018 se afirma que “investigar, sancionar y reparar la violencia estructural contra la mujer dentro de nuestro ordenamiento, está en cabeza de la Rama Judicial del Poder Público, por lo que son los operadores judiciales quienes deben velar por su goce efectivo”<sup>485</sup>.

Es por ello por lo que los procesos de VS en el conflicto armado deben ser abordados desde una óptica libre de expresiones violentas o discriminatorias que tienden a entorpecer el proceso, a tal punto, que fracturen la confianza de las víctimas en el sistema que las protege. La Corte señala que “cuando las mujeres víctimas de violencia acuden a las autoridades para el amparo de sus derechos, en repetidas ocasiones se produce una revictimización por parte de los operadores jurídicos, toda vez que la respuesta que se espera de estas autoridades no es satisfactoria y, además, con frecuencia, confirma patrones de desigualdad, discriminación y violencia en contra de esta población”<sup>486</sup>.

En ese entendido, la capacitación de los funcionarios que tienen a su cargo la investigación y juzgamiento de delitos de VS y violencia contra la mujer en general, deberá responder a los postulados enmarcados en los tratados internacionales teniendo en cuenta las interpretaciones del órgano colegiado constitucional.

---

<sup>485</sup> Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-462/18, “Violencia institucional contra la mujer”, 3 de diciembre del 2018. MP. Antonio José Lizarazo Ocampo. <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2002/C-228-02.htm>

<sup>486</sup> Ibid.

Sin embargo, concluye la Corte diciendo que dentro de las actuaciones judiciales se ha producido una “a naturalización de la violencia contra la mujer, obviando la aplicación de enfoques de género en la lectura y solución de los casos por la reproducción de estereotipos”<sup>487</sup>. Es así como dentro de los procesos se encuentran fallos que desfavorecen a las víctimas sobrevivientes por las decisiones que se toman en sus casos, justificando las conductas cometidas por sus victimarios, dando argumentos que tienden a considerar que la víctima consintió el encuentro sexual porque llevaba cierto tipo de vestimenta, o se dedicaba al oficio de la prostitución, o no manifestó su no consentimiento gritando, entre muchas otras.

Los estereotipos de género encontrados en dichas decisiones judiciales “se refieren a imágenes sociales generalizadas, preconceptos sobre características personales o roles que cumplen o deben ser cumplidos por los miembros de un determinado grupo social”<sup>488</sup>. En el caso de las mujeres se las etiqueta a partir de su comportamiento femenino que se rige por la moralidad del deber.

Para prevenir esto, el poder judicial en cabeza de los jueces penales y demás personal que tiene a su cargo procesos de VS en el conflicto armado reciben talleres, capacitaciones y entrenamiento para sensibilizarse con el fenómeno delictivo en cuestión y poder lograr que su trabajo satisfaga los intereses de justicia de derecho penal nacional y el de las víctimas sobrevivientes. No obstante, los casos presentados por vulneración de los derechos de las mujeres en estos casos son reiterados.<sup>489</sup>

---

<sup>487</sup> Ibid

<sup>488</sup> Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-878/14, “Violencia de género”, 18 de noviembre de 2014, MP. Jorge Iván Palacio Palacio. <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2004/t-025-04.htm>.

<sup>489</sup> Al respecto puede consultarse: Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-878/14, “Violencia de género”, 18 de noviembre de 2014, MP. Jorge Iván Palacio Palacio. <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2004/t-025-04.htm>; Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-462/18, “Violencia institucional contra la mujer”, 3 de diciembre del 2018. MP. Antonio José Lizarazo Ocampo. <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2002/C-228-02.htm>; Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-297/16, “tipo penal de feminicidio”, 8 de junio de 2016, MP. Gloria Stella Ortiz Delgado. <https://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2016/C-297-16.htm>; Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-590/17, “Violencia de Género”, 21 de septiembre de 2017, MP. Alberto Rojas Ríos. <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/t-590-17.htm>; Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-012/16, “Violencia de Género”, 22 de enero de 2016, MP. Luis Ernesto Vargas Silva. <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/t-012-16.htm>

Los diversos pronunciamientos insisten además en “la protección de la igualdad procesal” que debe existir en los procesos judiciales de violencia contra las mujeres, ya que “en ningún caso los derechos del agresor pueden ser valorados judicialmente con mayor peso que los derechos humanos de la mujer a su integridad física y mental y a vivir libre de cualquier tipo de violencia”<sup>490</sup>.

Asimismo, señala la Corte que cuando los procesos judiciales versen sobre VS contra las mujeres estos deben “tener en cuenta la desigualdad sistemática que ha sufrido la mujer y su condición social, como factores que la ponen en situación de riesgo y amenaza”<sup>491</sup>. Es por ello por lo que el análisis de contexto y la reconstrucción de los hechos a través de las voces de las víctimas sobrevivientes es fundamental para poder analizar la realidad de discriminación estructural e histórica de la violencia, así como desde las características de los grupos poblacionales que sufrieron las consecuencias de la VS<sup>492</sup>.

También, la perspectiva de género obliga a los funcionarios judiciales a “analizar todas las pruebas aportadas en los procesos, valorarlas dentro de los cauces racionales y ordenar las pruebas necesarias, con especial énfasis en aquellas que muestran la existencia de violencia contra las mujeres”<sup>493</sup>.

Sin embargo, en los casos de VS en el conflicto, la carga probatoria se deberá flexibilizar “privilegiando los indicios sobre las pruebas directas, cuando estas últimas resulten insuficientes”<sup>494</sup>, ya que las circunstancias del territorio donde ocurren las violencias, el contexto bélico, el tiempo transcurrido entre los actos de VS y la denuncia de los hechos, dificultan la recolección de evidencias para juzgar y condenar a los victimarios.

---

<sup>490</sup> Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-338/18, “Violencia de Género”, 22 de agosto de 2018, MP. Gloria Stella Ortiz Delgado. <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/t-338-18.htm>

<sup>491</sup> Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-297/16, “tipo penal de feminicidio”, 8 de junio de 2016, MP. Gloria Stella Ortiz Delgado. <https://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2016/C-297-16.htm>

<sup>492</sup> Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-462/18, “Violencia institucional contra la mujer”, 3 de diciembre del 2018. MP. Antonio José Lizarazo Ocampo. <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2002/C-228-02.htm>

<sup>493</sup> Ibid.

<sup>494</sup> Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-462/18, “Violencia institucional contra la mujer”, 3 de diciembre del 2018. MP. Antonio José Lizarazo Ocampo. <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2002/C-228-02.htm>

La consecuencia de no aplicar la perspectiva de género en este último supuesto vulneraría el derecho a la justicia de las víctimas sobrevivientes, debido a que no se tendrían en cuenta las especificidades de su caso para ser juzgado con rigurosidad. Además, se evitaría el archivo del proceso o el cierre del caso si se evaluaran las posibilidades y recursos reales de acceso a trámites judiciales que la víctima tendría para que el caso no quede en la impunidad<sup>495</sup>.

Por último, la Corte exhibe “un rol transformador o perpetuador de las decisiones judiciales” con una perspectiva de género, ya que con las distintas actuaciones penales se pretende cambiar los escenarios de violencia, haciendo que la cultura jurídica tenga en cuenta las relaciones de poder como factor de la perpetuidad de la violencia contra las mujeres<sup>496</sup>.

### **2.2.2. Normatividad del derecho penal y procesal penal relativo sobre Violencia Sexual en el conflicto armado**

Para iniciar un proceso penal por VS la víctima sobreviviente, como se ha mencionado en los apartados anteriores, debe denunciar ante las autoridades judiciales para dar apertura al caso que pretende ser sancionado. En esa secuencia, una vez este requisito de procedibilidad ocurra, el caso es asignado a un Fiscal especializado, quien se encargará de la investigación y acusación. Posteriormente un Juez especializado fallará si el victimario resulta responsable de la conducta que se le acusa.

Para dar apertura a la investigación, el Fiscal debe realizar el examen del tipo penal y lograr adecuar preliminarmente la conducta a lo descrito en la norma vigente. Por ello, para dar apertura a la etapa de investigación, tendrá que tomar en consideración la presunta ocurrencia de la conducta punible descrita en el Código Penal- Ley 599 de 2000, la plena identificación de la víctima sobreviviente y sus características sociodemográficas.

---

<sup>495</sup> Sentencia T-462/18, “Violencia institucional contra la mujer”, 3 de diciembre del 2018. MP. Antonio José Lizarazo Ocampo. <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2002/C-228-02.htm>

<sup>496</sup> Ibid.

Para dicho fin, resulta indispensable conocer la coexistencia dos sistemas procesales vigentes dentro del ordenamiento jurídico penal colombiano que permitirán definir cuáles son los pasos para investigar y juzgar a los victimarios de VS. Las normas que contienen estos procedimientos son la Ley 600 de 2000 y la Ley 906 de 2004.

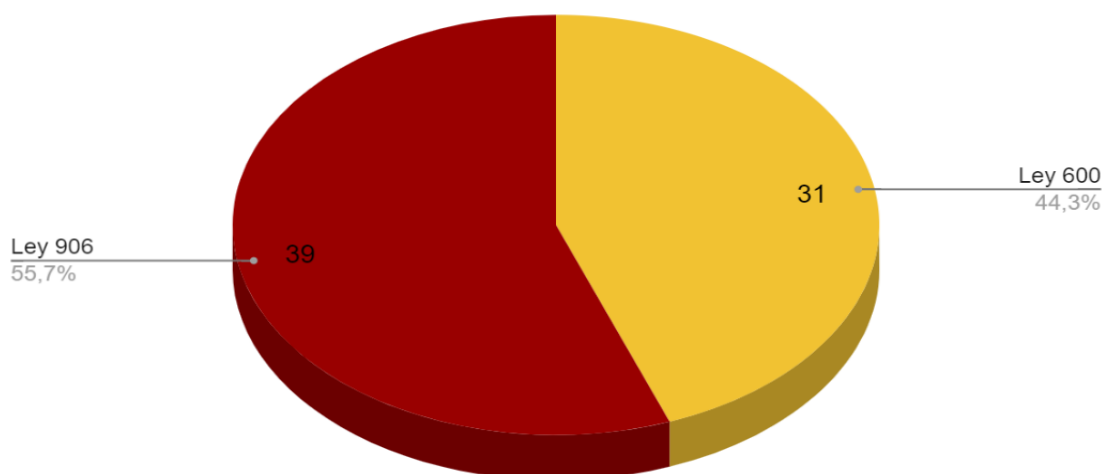
El estudio de estas normas es pertinente para la investigación, ya que para establecer si el proceso penal es eficiente en materia de VS, debemos determinar cómo funciona el proceso, en qué etapa procesal está cada caso de la muestra recolectada, y si se toma en consideración el costo que tiene para una víctima sobreviviente un proceso penal de VS.

Los dos sistemas mencionados tienen sus diferencias (uno de corte inquisitivo y otro de tendencia acusatoria) pero en ambos se distingue una fase de indagación, otra de investigación y el juicio. Además, su aplicación está condicionada por la ocurrencia de los hechos. Por su parte, una de las organizaciones de mujeres se dio a la tarea de ilustrar cuáles son las normas por aplicar según las fechas de los hechos en estos términos: “si los hechos ocurrieron en el periodo comprendido entre el 24 de julio del 2001 y el 31 de diciembre de 2004, la legislación vigente es la ley 600 de 2000, si los hechos ocurrieron en el periodo comprendido entre el primero de enero 2005 y la fecha actual, la legislación vigente es la ley 906 de 2004”<sup>497</sup>.

En esa línea, la revisión de los procesos de las 70 víctimas sobrevivientes analizados en esta tesis -ver gráfica 8 sobre la ley procesal de los casos del estudio-, arroja que el 44.3% de los procesos penales de VS están siendo tramitados por la Ley 600 de 2001 y el 55.7% por Ley 906 de 2004, ubicando la muestra de estudio en hechos ocurridos entre el 24 de julio del 2001 hasta la fecha actual.

---

<sup>497</sup> En la guía de casos de violencia sexual, Humanas precisa que si los hechos ocurrieron en el periodo comprendido entre el 20 de noviembre de 1991 y el 23 de julio del 2001 la legislación vigente es el decreto 2700 de 1990. Humanas. “*Guía para llevar casos de violencia sexual. Propuestas de argumentación para enjuiciar crímenes de violencia sexual cometidos en el marco del conflicto armado colombiano*”. Corporación Humanas – Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género, 2009, 89, [https://www.humanas.org.co/archivos/Guia\\_para\\_llevar\\_casos\\_de\\_violencia\\_sexual.pdf](https://www.humanas.org.co/archivos/Guia_para_llevar_casos_de_violencia_sexual.pdf)

**Gráfico 8 . Ley procesal de casos**

Fuente: Información interpretada de los expedientes de procesos penales adelantados en la Fiscalía 5ª Especializada de la ciudad de Popayán, Colombia. Tabla de elaboración propia (2019).

En la denuncia que presentan las víctimas sobrevivientes en un formato limitante, se detalla un ítem que contiene una parte de información sociodemográfica donde se consignan datos de la víctima, del presunto victimario si se conoce y se dan a conocer los hechos que serán objeto de investigación dentro del proceso que se inicia. Este formato es denominado Formato de Noticia Criminal, debido a que se condensan los datos iniciales de lo que será un caso de VS, el cual tiene un objetivo orientador de la investigación, pues allí se tejen posibles hipótesis sobre lo ocurrido.

Considerando lo consignado en dicho formato, se encuentra que dentro de los diferentes procesos están señalados los años de ocurrencia de los hechos y la fecha de denuncia. Con esto, se pudo apreciar que las víctimas tardan mucho en denunciar lo que les sucedió, siendo el año 2015 en el que más denuncias se presentaron. Al indagar en los expedientes, la razón probable del incremento de denuncias en este año en particular, se explica en la facilidad para acercarse a la entidad judicial para obtener una reparación, siendo este un factor motivador para las víctimas sobrevivientes.

Por directrices anteriores a 2015, la Unidad para la atención y reparación de víctimas, creada por la Ley 1448 de 2011 para liderar el proceso de reparación de víctimas

en Colombia, impulsó en los municipios – unidades territoriales locales-, unas campañas para dar a conocer las rutas de atención, asistencia y reparación que la ley ofrecía para todas las víctimas por hechos ocurridos en el conflicto armado a partir de 1986.

A través de estas campañas, las víctimas sobrevivientes relatan en sus entrevistas que se enteraron de la posibilidad que tenían de denunciar por los actos de VS padecidos en un lugar cercano a sus lugares habituales de residencia, y algunas mujeres que conocían el proceso, pero se habían abstenido de denunciar, en esa oportunidad lo hicieron<sup>498</sup>. Asimismo, aducen que al conocer que otras mujeres lo realizaban, les generó confianza para poner en conocimiento de las autoridades judiciales, lo que les ocurrió<sup>499</sup>.

Otras comentan que la posibilidad de obtener una reparación integral o económica también las motivó a denunciar, ya que para acceder a la reparación por vía administrativa y ser incluidas como víctimas del conflicto en la base de datos nacional, necesitaban realizar este trámite judicial.

A manera de ejemplo, una de las mujeres describe su conflicto económico y su frustración por el hecho de VS que la marcó. Manifiesta en su entrevista que su intención con el proceso no era obtener verdad o la justicia con el proceso penal, sino acceder a la reparación económica por vía administrativa. Para corroborar lo argumentado, la mujer refiere al respecto que cree indispensable la denuncia para acudir a otras entidades en los siguientes términos: “para estar registrada como víctima, yo tenía que denunciar”<sup>500</sup>.

El mismo ejemplo sirve para reafirmar que la demora en las denuncias de los hechos pudo llegar a generar impunidad, ya que sin denuncia no hay proceso. El promedio de tiempo entre la ocurrencia de los hechos y la realización de la denuncia de las mujeres de la muestra de estudio es de aproximadamente 10 años. Esta aproximación se logra realizando un análisis comparativo con el programa SPSS versión 24.0, de dos etiquetas: año de ocurrencia de los hechos y año de denuncia.

Al indagar por qué ocurre esto, se encuentra en las entrevistas que las víctimas tenían miedo de denunciar o no tenían suficiente información para realizarla<sup>501</sup>. Perder el

---

<sup>498</sup> Entrevista realizada por policía judicial/Entrevista1/Caso61

<sup>499</sup> Entrevista realizada por policía judicial/Entrevista1/Caso35

<sup>500</sup> Entrevista realizada por policía judicial/Entrevista1/Caso28

<sup>501</sup> Entrevista realizada por policía judicial/Entrevista1/Caso21, Entrevista realizada por policía judicial/Entrevista1/Caso22, Entrevista realizada por policía judicial/Entrevista1/Caso23, Entrevista

miedo a denunciar por la estigmatización, por encontrarse en el mismo lugar de los victimarios y por la inseguridad de la zona por la presencia de actores armados, fueron algunos de las razones expuestas por las víctimas sobrevivientes, como factores de dilación de la interposición de sus denuncias ante los entes judiciales. Esto se puede evidenciar en la entrevista a una de las víctimas que refiere “yo denuncié ahora porque tenía miedo de que me mataran a mí y a mi familia”<sup>502</sup>.

Ese tiempo, tiene como consecuencia el riesgo procesal de investigación denominado prescripción de la acción penal, entendido como el castigo estatal que impide a la justicia perseguir el delito por el transcurso de un periodo de tiempo sin resultados o investigación. Así los delitos de VS sean consagrados a la luz del DIH, en Colombia la acción penal que se instaure para juzgar a los victimarios de estas conductas, prescribe.

En ese entendido, “si la violencia sexual concurre con desplazamiento forzado y/o desaparición forzada, tortura u homicidio de un defensor o defensora de derechos humanos, integrante de una organización sindical o periodista, el término de prescripción es de 30 años”<sup>503</sup>. Pero si es catalogado por los jueces como un crimen internacional, ya sea de lesa humanidad, de guerra o como parte de un genocidio, es imprescriptible. En el caso de los procesos de esta muestra de estudio, ninguno es tramitado como un crimen internacional.

Por otra parte, se establece la correlación entre categorías como la edad y la omisión de denuncia para establecer si existe relación entre los años en que denuncia y la edad que tiene la persona cuando lo hace. Para ello, se interpreta el coeficiente de correlación de Pearson el cual es utilizado cuando se desea conocer si entre dos variables existe una relación estadística comprobable, que indique una asociación, es decir, que si una de las variables -edad en el caso de estudio- aumenta, la otra variable lo hace en igual proporción de la primera – omisión de denuncia. Para que esto pueda observarse el valor de la correlación (R) deberá ser menor a 1 y mayor que 0, por lo cual, en el caso de

---

realizada por policía judicial/Entrevista1/Caso24, Entrevista realizada por policía judicial/Entrevista1/Caso25, Entrevista realizada por policía judicial/Entrevista1/Caso26, Entrevista realizada por policía judicial/Entrevista1/Caso27, Entrevista realizada por policía judicial/Entrevista1/Caso28, Entrevista realizada por policía judicial/Entrevista1/Caso29

<sup>502</sup> Entrevista realizada por policía judicial/Entrevista1/Caso23

<sup>503</sup> Fiscalía General de la Nación. Judicialización de los hechos de violencia sexual. <https://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/Modulo-4.pdf>



estudio, existirá una correlación entre la omisión de la denuncia y la edad si la correlación es bilateral y su valor es menor a 0.

En la tabla 4 -Correlación entre edad y omisión de denuncia- se puede apreciar que la correlación es significativa porque es equivalente al 0,001, lo cual puede interpretarse en el presente caso de estudio que existe una correlación entre estas dos variables debido a que la edad constituye un factor determinante para que la víctima sobreviviente denuncie ya sea por desconfianza en el sistema, por miedo a la denuncia, por desconocimiento de las medidas, por evitar el estigma social que la VS trae consigo, entre otras. Por ende, según los resultados de correlación apunta a afirmar que entre más joven es la víctima menos recurre a denunciar.

Esto puede tener múltiples explicaciones debido a las diversas variables que pueden influir para que cada mujer prefiera quedarse en el anonimato antes de ir a denunciar. Sin embargo, los resultados permiten referir que la edad de las mujeres puede ser determinante al momento de establecer edades aproximadas de denuncia. Aunque la comisión de actos de VS en el conflicto ocurre en mujeres de diversas edades, las estrategias para que las mujeres denuncien resultan tardías y en algunos casos poco efectivas.

Esto trae como consecuencia que en materia probatoria se tengan inconvenientes para seguir con la etapa procesal que sigue en los procesos. Esta etapa es la de indagación la cual está establecida para constatar los hechos, identificar plenamente a los victimarios, recolectar evidencias que ayuden más adelante a mostrar la culpabilidad del presunto victimario o a establecer la relación de la VS con el conflicto armado.

Es aquí donde resulta relevante las diferencias entre la Ley 600 del 2000 y la Ley 906 de 2004, siendo la primera aquella que se basa en un sistema que utiliza los medios escritos para impulsar los procesos. Además, concentra todas las funciones de investigar, acusar y juzgar en una misma autoridad, concede una participación reducida a la víctima y el acusado no participa en la investigación sino cuando se le acusa.

En este sistema, la prioridad es desarrollar la investigación, realizar la acusación y si hay méritos, terminar condenando al victimario dejando en un segundo plano la reparación de las víctimas.

**Tabla 4 Correlación entre edad y omisión de denuncia**

Correlaciones		Edad	Omisión de denuncia
Edad	Correlación de Pearson	1	,521**
	Sig. (bilateral) R		,000
	N	70	70
Omisión de denuncia	Correlación de Pearson	,521**	1
	Sig. (bilateral)	,000	
	N	70	70

\*\* . La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

Fuente: Información interpretada de los expedientes de procesos penales adelantados en la Fiscalía 5ª Especializada de la ciudad de Popayán, Colombia. Tabla de Elaboración Propia (2019).

En cambio, la segunda plantea un modelo basado en el sistema oral acusatorio, el cual establece audiencias que se realizan en cada etapa procesal de forma oral, teniendo como característica la transparencia. Además, existe una separación de las funciones entre el Juez, el Ministerio Público, la Policía Judicial que se encarga la investigación, los jueces de garantías, los jueces de conocimiento y los jueces de ejecución de penas, para que el proceso logre cumplir con el objetivo que el derecho penal impone.

Esta última ley tiene en cuenta que la participación de la víctima debe ser una parte fundamental del proceso, dando a conocer derechos de intervención e injerencia en cada etapa procesal. Desde la indagación, la víctima puede estar al tanto del proceso y con una comunicación fluida con los fiscales- ente acusador -para que sus intereses no se desdibujen dentro de las audiencias.

Por su parte, la Ley 906 de 2000 logró ampliar esta participación de la víctima sobreviviente para dar paso al reconocimiento de sus derechos a verdad y justicia con apoyo de la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, no lo consagra como un sujeto independiente con participación individual dentro del proceso, debido a la

limitación de su participación en las audiencias, en especial la de juicio oral. Las víctimas sobrevivientes de VS expresan la reiterada victimización que sufren en el proceso penal debido al renuente llamado de los funcionarios judiciales para que se amplíe en repetidas ocasiones lo que le aconteció.

Esto podemos corroborarlo en los distintos procesos objeto de estudio, en cuyos expedientes se encontraron varias órdenes de la Fiscalía General de la Nación dirigidas a Policía Judicial para que realicen reiteradas entrevistas. En el gráfico 9, sobre número de entrevistas realizadas por Policía Judicial, vemos que 37 de los procesos de la muestra poseen dos entrevistas de las víctimas sobrevivientes de actos de violencia sexual.

Las preguntas que se hacen en las entrevistas están relacionadas con la identificación del victimario, los hechos objeto de investigación, los posibles testigos y las medidas de reparación que han recibido por vía administrativa. Esto queda consignado en diversos informes que presenta Policía Judicial a la Fiscalía, los cuales tienen como propósito esclarecer algunos hechos que carecen de claridad en la denuncia y la obtención de posible información que ayude a recolectar evidencia para proceder con las etapas procesales establecidas en la ley.

No obstante, sin desconocer que la información obtenida resulta pertinente para lograr avanzar en la investigación, la víctima sobreviviente se ve en la obligación de elegir entre lo menos perjudicial para su proceso personal de reparación. Esto puede apreciarse en la revisión de las leyes de procedimiento penal y las entrevistas tomadas por Policía Judicial, donde para los funcionarios es importante la fluida cooperación de la víctima sobreviviente, debido a la necesidad de establecer las circunstancias de la VS.

Los relatos que aducen “yo espero que cojan a ese tipo”<sup>504</sup> o “yo nunca recibí ayuda psicológica por lo que me pasó”<sup>505</sup> o “no quiero que más mujeres tengan que pasar por esto”<sup>506</sup> permiten interpretar lo que desean dentro del proceso penal. Pero en algunos casos están agotadas de acudir a la justicia para repetir lo que les sucedió<sup>507</sup>.

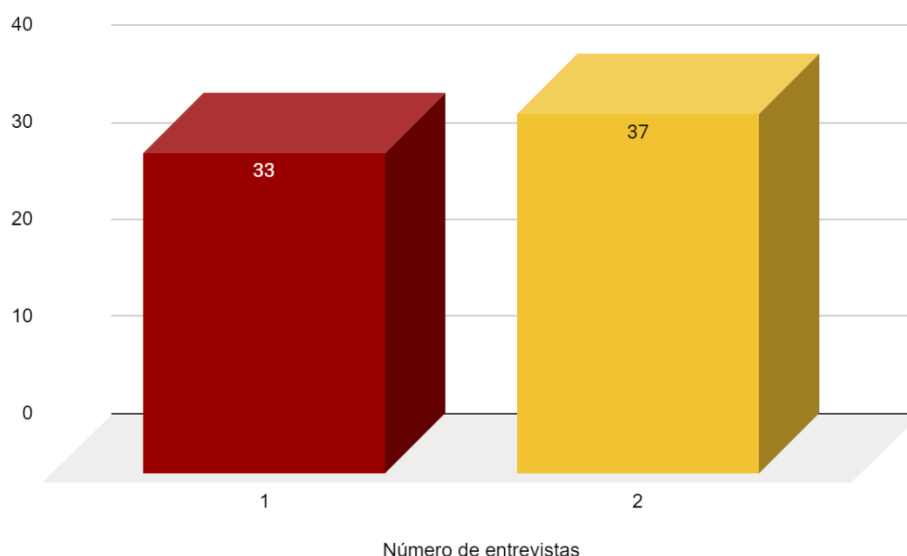
---

<sup>504</sup> Entrevista realizada por policía judicial/Entrevista1/Caso5

<sup>505</sup> Entrevista realizada por policía judicial/Entrevista1/Caso3

<sup>506</sup> Entrevista realizada por policía judicial/Entrevista1/Caso16

<sup>507</sup> Entrevista realizada por policía judicial/Entrevista1/Caso14, Entrevista realizada por policía judicial/Entrevista1/Caso18

**Gráfico 9. Número de Entrevistas realizadas por Policía Judicial**

Fuente: Información interpretada de los expedientes de procesos penales adelantados en la Fiscalía 5ª Especializada de la ciudad de Popayán, Colombia. Tabla de Elaboración Propia (2019).

#### **2.2.2.1. Ley 600 del 2000**

Debido a que esta norma tiene una temporalidad para su aplicación relacionada con la fecha de ocurrencia de los hechos, esta ley por su parte concibe desde su artículo 21 que los funcionarios judiciales son los encargados de adoptar las medidas necesarias para que las conductas que cometen los autores de VS se investiguen y puedan ser juzgados y las víctimas puedan ser reparadas<sup>508</sup>. Por ende, el proceso que impulsan dentro de sus etapas procesales- la de investigación previa, la de investigación y juzgamiento- comprenden lo que se conocerá como proceso penal con ley 600.

La investigación previa apunta a recolectar evidencias que ayuden a determinar si existe el delito y cuáles son los posibles autores realizando su plena identificación. Una

<sup>508</sup>Congreso de Colombia. ley 600 de 2000, “Código Penal de Procedimiento Penal”, Diario oficial No. 44.097, 24 de julio del 2000, art. 21. [http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley\\_0600\\_2000.html](http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0600_2000.html)

vez se logre este objetivo, se pasa a la etapa de investigación donde se ratifica la identificación de los presuntos autores, se recolectan evidencias que permitan demostrar cada una de las exigencias del delito de acuerdo con sus elementos constitutivos, se establezca la participación en las acciones u omisiones que serán objeto de investigación, se identifiquen las víctimas del delito o posibles testigos, entre otros. Una vez se recopilen todas las evidencias que permitan atribuirle el delito al victimario se prosigue a dar continuidad al proceso.

Sin embargo, esta etapa también puede culminar de dos formas: con una decisión inhibitoria o con el archivo del proceso. En el primer caso, si el Fiscal no encuentra evidencias de la existencia del delito o muere el presunto victimario identificado se declara mediante auto inhibitorio el cierre del caso ya que se está ante una causal objetiva de improcedibilidad de la acción penal. En el segundo caso, se archiva porque no existen evidencias suficientes para dar con el paradero del victimario o para justificar la existencia de algún elemento del tipo penal. No obstante, el caso puede reabrirse, con el límite del tiempo de prescripción, si aparece una nueva prueba.

En cualquiera de los casos expuestos, la víctima tiene la posibilidad de constituirse como parte civil en el proceso (sistema de ley 600 de 2000) o ser reconocida como víctima (sistema de ley 906 de 2004) para que, finalizado el proceso con sentencia condenatoria y conforme a la normatividad vigente, solicite la reparación debido a que “la conducta punible origina la obligación de reparar los daños materiales y morales con ocasión de aquella”<sup>509</sup>.

Todo lo descrito tiene relevancia en el estudio que aquí se expone ya que en los casos de observación del estudio desde el año 2015 hasta el año 2019, todos los procesos que se llevan a cabo en aplicación con la ley 600 de 2000, se encuentran en la etapa de investigación previa, es decir los 31 procesos de la muestra. La plena identificación del victimario aún no se pudo esclarecer por las circunstancias en las que se perpetraron los actos de VS investigados. Solo el 11,4 % de la muestra total refirió que conocía a su agresor dando a conocer los alias de sus victimarios<sup>510</sup>.

---

<sup>509</sup> Congreso de Colombia. ley 599 de 2000, “Código Penal”, Diario oficial No. Diario Oficial No. 44.097, 24 de julio de 2000, art. 94. [http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley\\_0599\\_2000.html](http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0599_2000.html)

<sup>510</sup> Observar gráfico 8. Ley procesal de casos

Sin embargo, a pesar de que los entes que se encargan de la investigación realizaron estudios de contexto para establecer qué grupos armados operaban en las zonas donde ocurrieron los hechos de VS, identificando sus principales integrantes, wste objetivo resulta complejo para los investigadores y en muchos casos imposible por la inexistencia de la individualización e identificación de estos por parte de las víctimas sobrevivientes ya que estas personas, dentro del grupo al margen de la ley, se identifican con un sobrenombre o alias. Esto reduce las posibilidades de identificación de victimarios al carecer de claridad sobre sus nombres completos, número de identificación, sus características morfológicas, y su posible paradero.

La proyección con los hallazgos observados en los procesos de la muestra de estudio apunta al archivo de los procesos por no haber logrado determinar al sujeto activo de la conducta penal investigada, o al cierre de estos a través de un auto inhibitorio o de preclusión en el escaso porcentaje de tener un posible autor identificado o de preclusión. Por lo anterior, se aumentaría no solo las estadísticas de impunidad sino los casos que por la vía penal extingue la posibilidad de recibir una reparación por esta vía que se adecue a los intereses de las víctimas sobrevivientes.

Adicional a esto, se pudo observar que las víctimas sobrevivientes de la muestra de estudio, por la dilación del proceso penal, optan por otros mecanismos para ser reparadas con prontitud recurriendo al proceso civil o a procesos administrativos. Como se verá más adelante, aunque existan alternativas para la reparación, la vía penal está siendo poco efectiva, eficaz y eficiente debido a que la obtención de las evidencias y pruebas para determinar la responsabilidad penal de los victimarios son complejas y en algunos casos inexistentes, ya sea porque la víctima sobreviviente no reconoce a sus agresores por las circunstancias en las que ocurrieron los hechos o porque los funcionarios no logran encontrar los medios para obtención de evidencias que resulten pertinentes para probar que alguien es responsable del delito.

Lo que reposa en los expedientes, además de la denuncia y el formato de noticia criminal, son todas las actuaciones de la Fiscalía para poder esclarecer si se está ante un delito de VS que cumpla con la adecuación típica de cada uno: hechos claros y coherentes, un sujeto que comete la conducta plenamente identificado, un contexto de conflicto armado relacionado con los hechos, y acciones u omisiones que permitan argumentar la

existencia del delito, entre otras. Los documentos que soportan lo referido son informes de policía judicial con entrevistas, análisis de contexto de violencia focalizados, reconocimiento de personas como los victimarios, informes médico legales sobre lesiones físicas y psicológicas e informes administrativos de reparación administrativa de las víctimas sobrevivientes de VS<sup>511</sup>.

Si en los procesos se esclarece lo referido y la Fiscalía logra determinar, si hay delito, posibles autores y la identificación de los mismos, se pasará a la siguiente etapa procesal de la ley 600 del 2000, ya que abren la investigación. Esto se materializa con la expedición de un auto donde ordenan la indagatoria del autor del delito, es decir, se formaliza la vinculación al presunto autor al proceso brindándole todas las garantías a sus derechos.

En la indagatoria se realiza la imputación de cargos donde se le da a conocer al imputado cuál es el delito por el que será procesado, donde con la narración de los hechos se le da la posibilidad de aceptarlos o no y/o someterse a mecanismo de terminación anticipada del proceso en la medida que se acepten los cargos y/o culpabilidad en la conducta.

El paso procesal siguiente implica resolver la situación jurídica del indagado donde se impone medida de aseguramiento – intramuros o en residencia- en establecimiento carcelario si: a) el sujeto presenta un peligro para la sociedad, b) existe el riesgo de que no comparezca al proceso o, c) obstruye la justicia; o se opte por la detención preventiva en su domicilio. Si ninguna de las causales se puede probar, el Juez puede optar por no imponer medida de aseguramiento.

Concluido este trámite con el agotamiento de recursos a que haya lugar y quedando en firme la decisión se pasa a la etapa de investigación cuyo objetivo principal es recolectar pruebas. Esta etapa culmina con el cierre de investigación, alegatos y calificación del proceso.

La calificación puede darse de dos formas: o se precluye la acción penal porque no se logra esclarecer los elementos del delito o el autor fallece; o se llama a juicio al

---

<sup>511</sup> Información interpretada de los expedientes de procesos penales en la Fiscalía 5 Especializada en la ciudad de Popayán, Colombia.

acusado. Entonces, se lleva a cabo la audiencia preparatoria donde se dan a conocer todas las evidencias de caso y por último se lleva a cabo la audiencia de juicio.

En esta última fase, se condenará o se absolverá al acusado de la conducta de VS por el que se procesa y con el fallo condenatorio la víctima sobreviviente podrá solicitar los perjuicios a que haya lugar por la vía penal. Si llegan a absolver, la víctima puede acudir a otras instancias judiciales como la vía civil.

#### **2.2.1.2.Ley 906 de 2004**

De los 70 procesos de la muestra de estudio 39 son tramitados según la ley de procedimiento penal, ley 906 de 2004. Las múltiples audiencias sucesivas que se realizan para que una persona sea juzgada por un delito de VS bajo esta directriz, comienzan con la etapa de investigación o indagación. Esta etapa es muy similar a la llevada a cabo en la etapa de investigación preliminar y la de investigación de la ley 600 del 2000, donde lo que se pretende es esclarecer si existe un delito con las características que se encuentran en el código penal, cuáles son los autores, lograr su plena identificación, establecer quienes son los posibles testigos, recolectar informes de policía judicial con dictámenes ya sean de medicina legal u otras entidades para sustentar los daños a la integridad física, psíquica, psicológica o de otra índole.

Las víctimas sobrevivientes pueden pedir su vinculación como parte en el proceso para aportar a la Fiscalía pruebas que sirvan para esclarecer los hechos de investigación, sugerir hipótesis de investigación, o dar a conocer posibles testigos que corroboren lo acontecido, entre otras. Todos los procesos de la muestra de estudio desde el año 2015 al año 2019 se encuentran en esta etapa procesal. La gran dificultad es la identificación plena del victimario para proceder a la siguiente etapa procesal.

Así como en la ley 600 del 2000, el derecho de las víctimas sobrevivientes a solicitar una reparación por vía penal en este proceso se ve en peligro ya que si esto no ocurre, el fiscal puede solicitar la preclusión del proceso o el archivo de este. Para que haya una reparación por esta vía, como se verá en el siguiente apartado, debe existir un fallo condenatorio del victimario. De lo contrario, la víctima sobreviviente tendrá que recurrir a otras vías de reparación alternas para lograrlo.



Esta alternatividad va en contravía de lo que se plantea en normas sustanciales y procesales penales con respecto a la reparación ya que se aduce la competencia a los funcionarios judiciales que tienen la obligación de llevar a cabo el proceso de procurar que las víctimas puedan acceder a una compensación, indemnización y resarcimiento de los daños ocasionados por la conducta de VS cometida.

Una vez finalizada la etapa de investigación, la fiscalía solicita al Juez una audiencia de imputación de cargos donde el Fiscal muestra el avance de su investigación preliminar dando a conocer que tiene suficientes elementos para argumentar que se cometió un delito con las características particulares del caso. En esta audiencia se le pregunta al victimario sobre la aceptación de cargos si así lo desea o declararse inocente. Si es la primera opción por la que opta el imputado, se da tránsito a emitir el sentido del fallo condenatorio dando la posibilidad a las víctimas sobrevivientes de entablar un incidente de reparación integral<sup>512</sup>.

Pero si el imputado no acepta los cargos, el proceso sigue con la audiencia de acusación. Es en esta audiencia que el Fiscal descubre todas las evidencias que ha recolectado hasta ese momento -como informes medico legales, entrevistas con las víctimas y testigos, inspecciones a lugares donde ocurrieron los hechos, informes de policía judicial para el reconocimiento de los victimarios, entre otras- dando a conocer al Juez las razones por las cuales el acusado es el responsable de la comisión de un delito de VS. Si el acusado sigue sin aceptar los cargos se da paso a la audiencia preparatoria dónde la defensa da a conocer cuáles son las evidencias qué pueden ayudar a esclarecer lo sucedió y se logre declarar inocente al victimario.

Si no hay ninguna refutación de lo presentado se pasa, por último, a la audiencia de juicio oral donde el Juez da la palabra tanto al ente acusador como a la defensa para que expongan su teoría del caso. Estos tienen la oportunidad de interrogar y contrainterrogar a los testigos de los actos cometidos. Además, la víctima sobreviviente puede intervenir, si así lo desea, a través del ente acusador para dar a conocer su sentir con lo que va ocurriendo dentro de la audiencia.

---

<sup>512</sup> Ley 906 de 2004, arts. 94, 96 y 102.

El Juez en esta etapa es el encargado junto con el Ministerio Público de velar por los derechos humanos del victimario y de la víctima. Si en el juicio se logra probar que el acusado cometió el delito por el que se le acusa, el fallo que se dicta es condenatorio y es el que da paso al incidente de reparación integral.

### **2.2.1. Normatividad nacional sobre reparación de víctimas del conflicto armado**

Dada la diversidad de nociones que giran alrededor de la reparación y los distintos enfoques que condensan el resarcimiento de los perjuicios causados por actos de VS dentro del conflicto armado en Colombia, se acoge el concepto de reparación integral entendida como aquella que tiene lugar cuando se causa un daño por la comisión de un delito de VS, por parte de quien o quienes puedan ser considerados responsables<sup>513</sup>. En ese entendido, se han establecido algunas medidas que no solo tienden a resarcir los daños a través de una indemnización económica, sino que conciben la rehabilitación, la satisfacción de las víctimas y las garantías de no repetición de la conducta que se sancionó.

Aunque el objeto de investigación de esta tesis apunta a analizar el concepto de la reparación penal, la que se suscita en estancias administrativas o en los procesos de justicia transicional en Colombia también será abordado ya que en Colombia la víctima sobreviviente tiene la potestad de solicitar ante otras instancias administrativas o judiciales de forma alternativa la reparación a que haya lugar. Esto se presenta ya que el proceso penal se centra en investigar y juzgar los delitos que atentan contra bienes jurídicos personales, colectivos, morales, sexuales, patrimoniales, entre otros, siendo un objetivo secundario el relacionado con el resarcimiento de los perjuicios de los sujetos pasivos de las conductas que se sancionan.

Recurrir a otras instancias, constituye una garantía para las víctimas sobrevivientes ya que pueden ser reparadas sin dilaciones procesales que dependen de la condena penal de un victimario. Sin embargo, como lo veremos a lo largo de este

---

<sup>513</sup> Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia 34145-2011, “Reparación Integral”, 13 de abril del 2011, MP. Sigifredo Espinosa Pérez. [http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-34145-de-abril-13-de-2011?documento=jurcol&contexto=jurcol\\_a0f476f139df0084e0430a0101510084&vista=STD-PC](http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-34145-de-abril-13-de-2011?documento=jurcol&contexto=jurcol_a0f476f139df0084e0430a0101510084&vista=STD-PC)

apartado, ninguna de las mencionadas tiene en cuenta los interés y necesidades de las víctimas sobrevivientes que cuentan con características individuales y colectivas diversas, debido a la homogenización de las reparaciones.

Además, el costo que tiene para las víctimas sobrevivientes el proceso penal es alto por la demora en la culminación de los procesos penales, el estigma social que se puede presentar por ser víctima sobreviviente de estos delitos, la revictimización de las mujeres dentro de las actuaciones del proceso, entre otras.

Aunque las normas relacionadas con los derechos de las mujeres y la reparación apuntan a proteger y garantizar los derechos consagrados en la normatividad internacional e interna, se analizarán en el ámbito penal la ley 600 del 2000, la ley 742 de 2002, la ley 906 del 2004, decreto 4799 de 2011, ley 1719 de 2014, la ley 1257 de 2018, debido a que condensan lo relativo al incidente de reparación integral y demás normas especiales que cobijan la VS en los conflictos armados.

Bajo este mismo criterio, con respecto a la reparación por vía administrativa se analizará la ley 1448 de 2011, el decreto 4800 de 2011, decreto 1725 de 2012, decreto 2460 de 2015 y el decreto 1356 de 2019. Posteriormente, debido a los distintos procesos de justicia transicional paralelos a los procesos penales en la justicia ordinaria las leyes que se analizarán son la ley 975 de 2005, la ley 1592 de 2012, el Acto Legislativo 1 de 2012 y el acuerdo de paz de 2016.

### **2.2.1.1. Reparación en el proceso penal**

Atendiendo a la normatividad vigente sobre VS en el conflicto armado, el derecho penal en materia de reparación presenta como enfoque el que tiene la justicia retributiva cuando se aplica la ley 600 del 2000 y el enfoque que da la justicia restaurativa con la aplicación de la ley 906 del 2004<sup>514</sup>.

La primera estipula dentro de su articulado que la reparación del daño ocasionado por el delito tiene como finalidad el cubrimiento de perjuicios que se hayan causado por

---

<sup>514</sup> Acosta, L. & Medina, R. (2015). La Víctima y su Resarcimiento en los Sistemas Penales Colombianos. *Jurídicas CUC*, 11(1), 39-58. doi: <http://dx.doi.org/10.17981/juridcuc.11.1.2015.2>, p. 45

la ocurrencia de alguna conducta objeto del proceso, la cual será proporcional al daño ocasionado. La segunda, tiene como objetivo devolver a la víctima sobreviviente a la situación más cercana a la que tenía con anterioridad al acto de VS, brindando la posibilidad a distintos sujetos de reclamarla si logran probar que se han visto perjudicados con la conducta que se condena. Esto en razón a que el delito puede afectar no solo al Estado y al victimario sino a la víctima sobreviviente y a la comunidad.

A partir del anterior argumento, se analiza la ley 600 del 2000 ya que en 31 procesos de la muestra de estudio aplican esta norma para su desarrollo. En primer lugar, esta ley estipula que “los funcionarios judiciales deberán adoptar las medidas necesarias para que cesen los efectos creados por la comisión de la conducta punible, las cosas vuelvan al estado anterior y se indemnicen los perjuicios causados por la conducta punible”<sup>515</sup>.

Según la interpretación de Acosta y Medina, a pesar de que el proceso penal tenga este deber taxativo, la reparación se limitaba solo a dar una indemnización como resarcimiento de perjuicios materiales y morales, ya sean por daños individuales o colectivos<sup>516</sup>. Es posterior a la entrada en vigencia de la ley 600 del 2000 que la Corte Constitucional, con la sentencia C-228 de 2002, precisa que dentro del proceso penal la víctima sobreviviente tiene derecho a una reparación de los perjuicios causados, así como a la verdad y a la justicia. Por lo cual, adiciona el concepto de integralidad basado en la dignidad del ser humano ya que es concebido como un derecho intrínseco de las personas y no puede reducirse solo a una tasación de una indemnización económica.

Debido a esto, afirma que “el reconocimiento de una indemnización por los perjuicios derivados de un delito es una de las soluciones por las cuales ha optado el legislador ante la dificultad en materia penal de lograr el pleno restablecimiento de los derechos y bienes jurídicos violentados en razón a la comisión de un delito. Pero no es la

---

<sup>515</sup> Congreso de Colombia. ley 600 de 2000, “Código Penal de Procedimiento Penal”, Diario oficial No. 44.097, 24 de julio del 2000, art.21. [http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley\\_0600\\_2000.html](http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0600_2000.html)

<sup>516</sup> Acosta, L. & Medina, R. “La Víctima y su Resarcimiento en los Sistemas Penales”, 45.

única alternativa ni mucho menos la que protege plenamente el valor intrínseco de cada ser humano”<sup>517</sup>.

En ese sentido, la reparación de los daños asociada a la dignidad humana concibe a las víctimas sobrevivientes como sujetos de protección instando a los distintos funcionarios judiciales a realizar lo necesario para que el delito cometido no vuelva a ocurrir. Para obtenerla, la víctima sobreviviente debe constituirse como parte civil en cualquier parte procesal y aportar lo necesario para dar a conocer al Juez cuáles son los daños que la conducta le ocasionó.

La acción civil, una vez culminado el proceso penal, prosperará si con esta información debidamente incorporada al proceso se acredita: que se cometió el delito, cuáles son los autores y su plena identificación, cuáles son los sujetos llamados a reparar y cuáles son los perjuicios sufridos. Si esto se consigue se procederá a tasar y liquidar la indemnización correspondiente, teniendo en cuenta, que debe existir un fallo condenatorio contra el victimario<sup>518</sup>.

Sin embargo, observando los procesos penales de la muestra de estudio que se encuentran en su totalidad en etapa de investigación previa, se aprecia que la víctima sobreviviente tiene que seguir esperando a que la investigación avance y haya un fallo condenatorio al victimario si lo que pretende es reclamar los perjuicios por vía penal. El desgaste del proceso y los costos monetarios por los daños morales, psicológicos, y de otra índole, se incrementan con esta dilación procesal. Es por lo que las víctimas sobrevivientes buscando immediatez, acuden- como lo veremos en el siguiente apartado- a otro tipo de alternativas de reparación.

Por ende, el análisis se centra en los resultados que las víctimas sobrevivientes esperan con el proceso judicial. El derecho a la verdad y la justicia son dos de los ingredientes de esa reparación que instan a las víctimas sobrevivientes a esperar mientras el proceso penal culmina. La verdad judicial constituye una de las motivaciones para que

---

<sup>517</sup> Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-228/02, “Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 137 de la Ley 600 de 2000, “(p)or la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”, 3 de abril del 2002. MP. Manuel José Cepeda Espinosa y Eduardo Montealegre Lynett. <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2002/C-228-02.htm>

<sup>518</sup> Congreso de Colombia. ley 600 de 2000, “Código Penal de Procedimiento Penal”, Diario oficial No. 44.097, 24 de julio del 2000, art. 42. [http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley\\_0600\\_2000.html](http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0600_2000.html)

no se desista en los procesos de VS. Saber las razones por las cuales fueron sometidas a violaciones, tocamientos y demás actos de VS, conocer quiénes son las personas que participaron para que estuviera en la situación actual y demás particularidades de los hechos, son percibidas para las mujeres como las ventajas del proceso penal.

Asimismo, ocurre con las víctimas sobrevivientes de la muestra de estudio que tiene procesos penales por VS en el conflicto armado colombiano con aplicación de la ley 906 de 2004. Son ellas las que expresan en sus experiencias que esperan que se haga justicia en sus procesos, queriendo con esto, que haya una condena al victimario por los actos cometidos. La asociación de la sanción penal con la realización de la justicia es algo frecuente entre las víctimas sobrevivientes ya que conciben que si hay condena al victimario este derecho ha sido respetado y garantizado. De lo contrario, tienen la percepción de que sus casos quedaron en la impunidad.

Por lo argumentado, se concibe que las percepciones de la justicia que tienen las víctimas sobrevivientes determinan socialmente el grado de éxito del proceso penal sobre VS en el conflicto armado. Debido a esto, resulta pertinente referirse al artículo 102 de la ley 904 de 2004 que estipula la figura del incidente de reparación integral el cual opera cuando la sentencia condenatoria está en firme. Los legitimados para proponerlo son la víctima sobreviviente, el Fiscal o el Ministerio Público y su trámite se lleva a cabo a través de audiencias orales donde se entrega al Juez lo necesario para probar todos los perjuicios por el acto de VS objeto de condena.

Al respecto, la Corte Suprema de Justicia refiere que “se trata, entonces, de un mecanismo procesal independiente y posterior al trámite penal propiamente dicho, pues el mismo ya no busca obtener esa declaración de responsabilidad penal, sino la indemnización pecuniaria fruto de la responsabilidad civil derivada del daño causado con el delito - reparación en sentido lato- y cualesquiera otras expresiones encaminadas a obtener la satisfacción de los derechos a la verdad y a la justicia, todo lo cual está cobijado por la responsabilidad civil”<sup>519</sup>.

---

<sup>519</sup> Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia 34145-2011, “Reparación Integral”, 13 de abril del 2011, MP. Sigifredo Espinosa Pérez. [http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-34145-de-abril-13-de-2011?documento=jurcol&contexto=jurcol\\_a0f476f139df0084e0430a0101510084&vista=STD-PC](http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-34145-de-abril-13-de-2011?documento=jurcol&contexto=jurcol_a0f476f139df0084e0430a0101510084&vista=STD-PC)

Todo lo anterior, es considerado en el aparato de justicia penal como una opción de la víctima sobreviviente donde se incluyen “los daños materiales directos, el lucro cesante, las oportunidades perdidas, así como los perjuicios morales, tales como el dolor o el miedo sufridos por las víctimas, los perjuicios estéticos o los daños a la reputación de las personas, o también los llamados daños punitivos, dentro de límites razonables”<sup>520</sup>

Con relación a este punto, se establece lo que la víctima sobreviviente puede solicitar en el incidente de reparación integral. En el caso de la VS, las víctimas sobrevivientes dentro de la muestra de estudio argumentan en sus entrevistas que requieren una indemnización por todos los daños causados y atención psicológica<sup>521</sup>. Los perjuicios materiales los mencionan al relatar cómo por el desplazamiento forzado se vieron obligadas a abandonar sus trabajos lo que ocasionó la pérdida de ingresos, abandonaron sus estudios, su casa, sus pertenencias, y demás cosas tangibles que hacían parte de su diario vivir.

Además, los perjuicios morales percibidos en las entrevistas permiten observar que los de carácter subjetivo- aquellos que por ser muy personales se dificulta su tasación por afectar a la persona en distintos niveles y con el solo hecho de probar que existen basta para ser reconocidos- se enmarcan en la pérdida de identidad, baja autoestima por lo padecido y no superado, o la discriminación que sufrieron por ser sus cuerpos sometidos a VS, entre otros<sup>522</sup>.

Con relación a la cuantificación de los perjuicios, la jurisprudencia colombiana define los criterios que tienen los jueces en estos casos donde los perjuicios son tan diversos y difíciles de establecer <sup>523</sup>. Estos consisten en establecer montos máximos en concordancia con los daños causados y probados- hasta 1000 salarios mínimos- o tener

---

<sup>520</sup> Expediente: D-11709, Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 94 (parcial) de la Ley 599 de 2000, Por la cual se expide el Código Penal, Actor: Juan Sebastián Serna Cardona, Sentencia C-344/17. <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-344-17.htm>

<sup>521</sup> Entrevista realizada por policía judicial/Entrevista1/Caso9, Entrevista realizada por policía judicial/Entrevista1/Caso10, Entrevista realizada por policía judicial/Entrevista1/Caso14, Entrevista realizada por policía judicial/Entrevista1/Caso15, Entrevista realizada por policía judicial/Entrevista1/Caso16

<sup>522</sup>Ibid. Se referencian algunas de las entrevistas debido a que solo se cuenta con las entrevistas de policía judicial para poder relatar lo que conciben como los principales perjuicios.

<sup>523</sup> Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 12 de diciembre de 2015, rad. 24011

en cuenta montos flexibles en caso de que las víctimas sobrevivientes hayan sufrido un daño que amerite una reparación especial.

Todo lo anterior, se aplica teniendo en cuenta que en el incidente de reparación integral “ya no puede ser objeto de controversia definir si el penalmente responsable está llamado a indemnizar o no, puesto que tal carga se deriva directamente de la condena penal en su contra por incurrir en el comportamiento delictivo que es fuente de responsabilidad civil extracontractual”<sup>524</sup>. Esto quiere decir que en esta actuación procesal se entra a establecer únicamente cuáles fueron los perjuicios causados para proceder a tasar y liquidar los que haya lugar. En ningún caso, entrará en discusión la calidad de víctima sobreviviente dentro del incidente, ni la responsabilidad penal, ni la obligación de reparar del penalmente responsable en el fallo <sup>525</sup>.

En complemento a todo lo anterior argumentado, la normatividad penal en materia de reparación tiene en consideración la ley 1257 de 2008 y la ley 1719 de 2014, debido a que condensan lo relativo a los derechos de las víctimas y su injerencia en el incidente de reparación integral y demás normas especiales que cobijan la VS en los conflictos armados.

La ley 1257 de 2008 consagra un decálogo de derechos de las víctimas de violencia y discriminación contra las mujeres que, aunque no los desarrolla en profundidad, se convierte en el pilar fundamental para todas las normas penales que involucren víctimas de delitos contra las mujeres. Dentro de ellos se encuentra consagrado “el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y garantías de no repetición frente a los hechos constitutivos de violencia”<sup>526</sup>. En complemento establece 4 tipos de daños que pueden ocasionarse cuando se produce violencia contra la mujer. El primero está descrito como “daño psicológico”, donde la víctima sobreviviente ve afectada su salud

---

<sup>524</sup> Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Auto AP2865-2016, “Reparación Integral”, 10 de mayo de 2016, MP. Fernando Alberto Castro Caballero, [http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-34145-de-abril-13-de-2011?documento=jurcol&contexto=jurcol\\_a0f476f139df0084e0430a0101510084&vista=STD-PC](http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-34145-de-abril-13-de-2011?documento=jurcol&contexto=jurcol_a0f476f139df0084e0430a0101510084&vista=STD-PC)

<sup>525</sup> Ibid.

<sup>526</sup> Congreso de Colombia., la ley 1257 de 2008, “Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones”, 4 de diciembre de 2008. <https://www.rednacionaldemujeres.org/phocadownloadpap/ley%201257%20de%202008.pdf>



psicológica, la autodeterminación o el desarrollo personal<sup>527</sup>. Asimismo, se debe derivar de las acciones u omisiones destinadas a degradar o controlar. Autores como Echeburúa, de Corral, y Amor, lo conciben como las secuelas psíquicas y emocionales que presenta una víctima por un hecho violento que padece en un determinado contexto y que paraliza procesos en la vida cotidiana de las mismas <sup>528</sup>.

Lo relativo a la psiquis según los autores referenciados, se mantiene en el plano de las “alteraciones clínicas” que imposibilitan que las víctimas se enfrenten a distintos desafíos comunes dentro de su diario vivir. Sumado a esto, las secuelas emocionales son aquellas en las que se ocasionan “alteraciones irreversibles en el funcionamiento psicológico habitual” siendo los cambios en su comportamiento, el estrés postraumático casos muy comunes en las víctimas<sup>529</sup>.

En los casos de violencia sexual autoras como Escribens refieren que “muchas de ellas registran como consecuencia de la experiencia de abuso un sentimiento de muerte interna, así como la dificultad para reconocerse como víctimas cargando fuertes sentimientos de culpa”<sup>530</sup>. Sentimientos similares son experimentados por algunas de las víctimas sobrevivientes de la muestra de estudio las cuales se expresan en los siguientes términos: “desde ese día yo me morí por dentro”<sup>531</sup>, “yo no le he dicho nada a mis hijos, me da vergüenza”<sup>532</sup>. Es por ello, que reclaman tratamientos psicológicos y psiquiátricos para poder superar lo sucedido y seguir desarrollando sus planes de vida<sup>533</sup>.

---

<sup>527</sup> Ibid.

<sup>528</sup> Echeburúa, Enrique, Paz, Corral, y Pedro Javier Amor. "Evaluación del daño psicológico en las víctimas de delitos violentos." *Psicothema*, núm 1, vol. 14 (2002): 139-146.

<sup>529</sup> Echeburúa, Enrique, Paz, Corral, y Pedro Javier Amor. "Evaluación del daño psicológico en las víctimas de delitos violentos", 140.

<sup>530</sup> Escribens, Paula. Proyecto de vida de mujeres víctimas de violencia sexual en conflicto armado interno. Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer DEMUS, 2012. P.30

<sup>531</sup> Entrevista realizada por policía judicial/Entrevista1/Caso10

<sup>532</sup> Entrevista realizada por policía judicial/Entrevista1/Caso19

<sup>533</sup> Puede consultarse al respecto: Banquéz Banquéz, Marcela Cecilia, and Darlys Margarita Bonfante Villa. Experiencia de ansiedad, desde el enfoque de bienestar, en mujeres víctimas de violencia sexual en situación de desplazamiento en la ciudad de Cartagena. Diss. Universidad de Cartagena, 2019, Ba, Inessa, and R. S. Bhopal. "Physical, mental and social consequences in civilians who have experienced war-related sexual violence: a systematic review (1981–2014)." *Public health* 142 (2017): 121-135; dos Reis, Maria Jose, Maria Helena Baena de Moraes Lopes, and Maria José Duarte Osis. "'It's much worse than dying': the experiences of female victims of sexual violence." *Journal of clinical nursing* 26.15-16 (2017): 2353-2361; Torres, Lorena Cudris, et al. "Malestar Psicológico en víctimas de violencia sexual, intrafamiliar y del conflicto armado." *Tempus Psicológico* 3.1 (2020): 81-102.

Esto se suma a la segunda forma de daño que es denominada por la ley 1257 de 2008 como “el daño o sufrimiento físico”, la cual está determinada por los perjuicios corporales que puede padecer una víctima sobreviviente de VS. Los dictámenes medico legales presentan un mapa físico de violencia que permiten observar cómo los golpes, patadas, o mordiscos, entre otras expresiones físicas de violencia, son accionadas en esa relación de poder para someter a las mujeres a través de la coerción y la fuerza.

Las experiencias crudas de las víctimas sobrevivientes de la muestra de estudio contemplan cómo fueron empleadas siendo en algunos casos tan graves que las dejaron inconscientes. Es el caso, por ejemplo, de una de las víctimas sobrevivientes que expresa que fue violada por miembros de un grupo armado de camino al lugar de trabajo de su esposo, donde pretendía dejarle el almuerzo. Lo que recuerda es que la sacaron de la carretera por donde iba caminando y la forzaron a ingresar al campo. Cuando despertó estaba en el hospital donde la atendieron por los múltiples golpes y las agresiones que presentó<sup>534</sup>.

No obstante, en la muestra de estudio de esta tesis, 93% de las agresiones físicas que causan este tipo de daño a las víctimas sobrevivientes se conocen por las entrevistas de éstas, ya que muy pocas de ellas acudieron a centros hospitalarios o a las entidades medicas forenses para ser atendidas. Asimismo, ninguna de las mujeres entrevistadas por policía judicial del estudio refirió tener alguna discapacidad por este motivo. Por ende, al querer probar los daños físicos en los procesos penales donde no sea posible obtener una evidencia médica contundente, las víctimas sobrevivientes deberán recurrir a otros medios probatorios que ayuden a establecer el tipo de daño sufrido.

La tercera es la relativa al “daño o sufrimiento sexual”, que es causado por la acción de ser víctima sobreviviente de cualquier tipo de VS o por ser sometido para realizar un acto de VS con otro ser vivo. La norma la describe en los siguientes términos “consecuencias que provienen de la acción consistente en obligar a una persona a mantener contacto sexualizado, físico o verbal, o a participar en otras interacciones sexuales mediante el uso de fuerza, intimidación, coerción, chantaje, soborno, manipulación, amenaza o cualquier otro mecanismo que anule o limite la voluntad

---

<sup>534</sup> Entrevista realizada por policía judicial/Entrevista1/Caso20

personal. Igualmente, se considerará daño o sufrimiento sexual el hecho de que la persona agresora obligue a la agredida a realizar alguno de estos actos con terceras personas”<sup>535</sup>.

Al ser analizado este artículo, se observa que pueden existir varias posibilidades de sufrimiento sexual. El que toda víctima sobreviviente padece por ser sometida a los actos de VS, los que son obligados a realizar actos de VS y los que ocurren cuando además de ser violadas son obligadas a interactuar con terceras personas.

En ese entendido, la contextualización de la VS se vuelve el criterio más relevante para determinar si existe este tipo de daño. Las circunstancias expeditas del caso, las intenciones de los victimarios, el uso de la fuerza o distintos medios para coaccionar, deberán ser esclarecidas dentro de los procesos penales y el del incidente de reparación integral. Es allí donde la relevancia de los relatos, experiencias y entrevistas de las víctimas sobrevivientes se vuelve un insumo de evidencias que ayudan a establecer los perjuicios que por estos hechos se causan.

Por último, la ley expone el “daño patrimonial”, enmarcando una serie de afectaciones que alteren la satisfacción de necesidades de las víctimas sobrevivientes. Aquí el Juez deberá tener en cuenta que las mujeres en algunos de los casos no solo son víctimas de VS sino también desplazadas por los victimarios que, a través de intimidaciones, logran que ellas dejen sus viviendas y lugares de habitación. Este tipo de daño puede ser tasado para establecer un monto económico para que la víctima sobreviviente sea resarcida<sup>536</sup>.

Por su parte, la ley 1719 de 2014 establece los delitos con relación al conflicto armado dando aplicación al DIH caracterizando los sujetos de protección como aquellos que no participan directamente en las hostilidades, enunciando que las mujeres, niñas y niños entrarán en esta categoría. Sin embargo, el análisis de la reparación exige centrar la

---

<sup>535</sup> Congreso de Colombia., la ley 1257 de 2018, “Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones”, 4 de diciembre de 2008.

<https://www.rednacionaldemujeres.org/phocadownloadpap/ley%201257%20de%202008.pdf>

<sup>536</sup> Puede consultarse al respecto: Cortés, Édgar, y "El daño patrimonial derivado de las lesiones a la integridad psicofísica. Notas sobre la jurisprudencia de la CIDH". *Revista de Derecho Privado* , no. 12-13 (2007): 307-323. Redalyc, <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=417537588011>, Piedrahíta, Ingry L. Acosta. "La dinámica probatoria del incidente de reparación integral." *CUADERNOS DE DERECHO PENAL* (2018): 139, Hernández Mahecha, Héctor Hernando. La reparación integral conforme al código de procedimiento penal, ley 906 de 2004. Diss. Universidad Santiago de Cali, 2017.

atención en las garantías y derechos de las víctimas sobrevivientes de VS en ocasión al conflicto armado. Dentro de estas, “el derecho a no ser confrontadas con el agresor, a no ser sometidas a pruebas repetitivas y a solicitar a las autoridades judiciales que se abstengan de ordenar la práctica de pruebas o excluyan las ya practicadas que conlleven una intromisión innecesaria o desproporcionada de su derecho a la intimidad”, devenga una de las exigencias de las víctimas sobrevivientes de la muestra de estudio.

Dentro de los procesos se encontró que el 50% de las víctimas sobrevivientes dieron más de una entrevista a los funcionarios de policía judicial siendo las preguntas muy similares con respecto a lo ocurrido con la VS, los presuntos victimarios y la indicación de nuevos indicios para demostrar la participación de las personas presuntamente responsables dentro del proceso penal. Esto permite argumentar que dentro de los procesos existe evidencia de la violación de los derechos de las víctimas sobrevivientes a no ser sometidas a varios interrogatorios o entrevistas para que repitan lo sucedido. Lo anterior mencionado puede llegar a revictimizar a las mujeres víctimas sobrevivientes debido a que son llamadas a contar más de una vez lo que les acontece afectando su estado sociológico y emocional.

Además, establece como obligación de los funcionarios judiciales el adelantar las investigaciones en un plazo razonable so pena de incurrir en alguna sanción disciplinaria o de cualquier otra índole<sup>537</sup>. Los procesos penales objeto de la muestra de estudio duraron 4 años en la misma etapa procesal sin resultados favorables para dar con la identificación plena de los victimarios. Esto trae como consecuencia que la reparación por vía penal aun sea algo lejano para las víctimas sobrevivientes, sin desconocer que los intereses de éstas también vean que el proceso penal contiene medidas de justicia y verdad que favorecen a la reparación integral anhelada.

Adicional a esto, la ley 1719 de 2014 estipula dentro de los derechos de las víctimas sobrevivientes, el respecto a su intimidad, a ser informada en cada una de las etapas procesales, a no ser discriminada debido a su raza o sexo, a recibir asesoría y acompañamiento especializado durante el proceso, a ser protegidas para que su vida no

---

<sup>537</sup>Congreso de Colombia., ley 1719 de 2014, “Acceso a la Justicia de Víctimas del conflicto armado” Diario oficial No. 49.186, 18 de junio de 2014, art 17. [http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley\\_1719\\_2014.html](http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1719_2014.html)

corra peligro, etc. Es por lo que esta ley prevé un articulado especial para la reparación de víctimas de VS, que ofrece directrices aplicables a los procesos penales.

Adiciona al concepto de integralidad las medidas de “restitución, indemnización, satisfacción, rehabilitación y garantías de no repetición”<sup>538</sup> para que la víctima sobreviviente tenga las garantías necesarias para que pueda continuar sus planes de vida so pena de lo acontecido.

Como restitución, se entenderá en el ordenamiento jurídico nacional ya sea en instancias penales o de otra índole, las medidas que estén encaminadas a intentar restablecer la situación de la víctima sobreviviente al momento en que se encontraba al momento en que ocurrían los hechos. Esta medida resulta compleja de aplicar, ya que en cuando se aborda la VS en el conflicto armado, se presentan escenarios de violencia antes de la comisión de actos de VS.

Esto hace que las relaciones de poder y opresión en las que socialmente están sometidas las mujeres diariamente con o sin conflicto armado presenten una dificultad para concebir siquiera volver al mismo círculo violento del que se pretende salir. Por lo anterior argumentado, se expone como eje central de desarrollo de la medida, la construcción contextual de vivencia de las mujeres antes, durante y después del conflicto armado ya que, si se carece del mismo, no podremos con certeza determinar si esta medida cumple el propósito para el que fue creada.

Adicionalmente, la norma introduce las medidas de satisfacción comprendiendo que en los casos de VS en el conflicto armado, uno de los derechos vulnerados es la dignidad de las víctimas sobrevivientes. La afectación corporal, física y emocional de las mujeres por estar su identidad asociada a sus cuerpos, será reparada con medidas que logren disminuir el dolor de las mismas por lo acontecido y permitan brindar tranquilidad.

El reto está en que el Juez que resuelva el incidente de reparación integral logre reconocer, más allá de lo probatorio, que per se una víctima sobreviviente de VS está inmersa en un sistema de múltiples violencias que hacen que las medidas no solo apunten a criterios de objetividad sino a aquellos que respondan a las necesidades e intereses

---

<sup>538</sup> Congreso de Colombia., ley 1448 de 2011, “Ley de víctimas y Restitución de Tierras” Diario oficial No. 48.096, 10 de junio de 2011.

[http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley\\_1448\\_2011.html](http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1448_2011.html)

propios de las víctimas sobrevivientes. Es por este motivo que se vuelve necesario la escucha constante de las mujeres en el proceso penal, debido que es a través de ellas que se pueden conocer elementos que indiquen cuáles son las medidas que pueden darle bienestar a sus vidas y de paso a las de sus círculos familiares y comunitarios.

En complemento, las medidas de rehabilitación son las que con frecuencia se vuelven recurrentes en las peticiones de las mujeres víctimas sobrevivientes. Los traumas por las violaciones, las repercusiones por los actos que tuvieron que pasar, las secuelas de enfermedades de transmisión sexual, la afectación por maternidades forzadas son algunos de los casos expuestos durante este estudio de caso. Por ende, el Juez deberá atender a los requerimientos de las mujeres en este sentido para que pueda continuar con su vida bien informada y atendida integralmente.

Sin embargo, una de las medidas que introduce la norma con respecto a la violencia sexual es la referente a brindar garantías de no repetición. El Juez deberá estar informado sobre los planes estatales sobre reparación que intenten que los hechos probados en juicio no vuelvan a repetirse para decidir en su fallo cuáles serán otorgadas en los incidentes de reparación. La participación de las víctimas sobrevivientes en esta medida en particular es difusa ya que los planes estatales ya se encuentran establecidos en programas educativos, culturales, y de otra índole que no han tenido en cuenta los casos particulares de las mujeres que aparecen en los procesos penales. En ese sentido, se vuelve complejo para el Juez direccionar a las víctimas sobrevivientes en estas medidas sin tener el control de los escenarios de violencia que pueden pervivir en la vida de las mujeres.

Pero lo que puede presentarse como una novedad para todas las medidas expuestas es que la norma introduce en la interpretación el enfoque diferencial como referente para establecer que la reparación debe tomar en consideración características sociodemográficas como la raza, la edad, la identidad de género y la orientación sexual, condiciones de discapacidad y características contextuales y vivenciales. Así se podrá garantizar que la víctima sobreviviente sea reparada integralmente y se garantice que el delito no vuelva a ocurrir.

No obstante, para evitar que las víctimas sobrevivientes de VS en el conflicto armado, que son caracterizadas con muchas etiquetas, sean reparadas solo por la VS

producto del fallo condenatorio, el juez tiene discrecionalidad para establecer las medidas de reparación y darle la integralidad que se requiere. Es decir que, si durante el proceso se logra probar, por ejemplo, que la mujer es afrodescendiente, víctima sobreviviente de VS, desplazada, pero la condena versa solo por el delito de acceso carnal violento en persona protegida, la reparación será en todo caso integral.

Es por lo que, siguiendo ese hilo conductor, la ley consagra algo más dentro de su contenido referente a la participación de la víctima sobreviviente de VS en cualquier etapa procesal para dar a conocer los daños que ha sufrido con la conducta que se pretende sancionar, por lo cual, deberá ser escuchada y su voz atendida cuando de reparación se trate. Por consiguiente, si la víctima sobreviviente se encuentra ausente en el momento en que culmina el proceso penal y deba proponerse el incidente de reparación integral, son los funcionarios judiciales los que tendrán que solicitarlo atendiendo a los daños que durante el proceso fueron expuestos por la víctima sobreviviente y demás partes intervinientes.

También se advierte que en caso de que los delitos sean sometidos a conciliación para poder llegar a un acuerdo con respecto a la reparación, solo podrán transar las indemnizaciones a que haya lugar siendo, en cualquier caso, irrenunciables y no conciliables las medidas de restitución, satisfacción, rehabilitación y garantías de no repetición.

Muchas preguntas quedan del ejercicio analítico de la reparación que inciden en el argumento de la poca eficacia, efectividad y eficiencia de la reparación por vía penal. Sin embargo, la ley prevé otras vías de reparación dado que no todos los actores están obligados a indemnizar, pero es una obligación catalogada de solidaria y atemperada a la ley. En caso de que el acusado muera antes de darse el fallo condenatorio o si el auto es inhibitorio o la sentencia por cual cualquier causa es absolutoria, o si la acción civil de reparación prescribe- ley 600 de 2000- al igual que la acción penal; será otro mecanismo el que empleen las víctimas sobrevivientes para acceder a la reparación.

#### **2.2.1.2. Reparación por vía administrativa**

Dentro de las opciones de reparación que la legislación colombiana establece para las víctimas sobrevivientes del conflicto armado en Colombia, está prevista aquella que se encuentra en cabeza del Estado. Esta vía se crea debido a que el Estado será responsable por los daños materiales, morales y físicos que se causen ya sea por la omisión de sus deberes o por la comisión de delitos por parte de sus funcionarios cuando estos estén en ejercicio de sus funciones<sup>539</sup>. Estas obligaciones están consagradas en los mandatos constitucionales locales como en los tratados internacionales sobre derechos humanos<sup>540</sup>.

El deber de reparar los daños que se ocasionen por incumplimiento de estos deberes estatales abre la posibilidad de que el Estado sea llamado a responder solidariamente en condenas por delitos de VS. Esto está previsto ya que, en el caso particular de estudio, el incumplimiento de deberes como el de debida diligencia de los funcionarios públicos en los procesos o actuaciones que adelanten las personas ante los entes judiciales y administrativos, así como el deber de prevenir, investigar y sancionar a los autores de delitos sexuales, entre otros, dan paso a lo que se conoce como reparación por vía administrativa.

En ese sentido, existen dos vías para reclamar la reparación por vía administrativa. En primer lugar, la vía judicial establece que se pueden adelantar acciones y/o procesos ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo a través de la acción de reparación directa en cualquier contexto; y en segundo lugar, las que se centran en medidas de justicia transicional ya sean las que se tramitan ante entidades especiales como la Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas solo en contexto de conflicto armado o las que se presentan ante los jueces especiales de JT como “los jueces de justicia y paz”<sup>541</sup> o los que conforman la jurisdicción especial para la paz.

#### **2.2.1.2.1. Reparación judicial ante lo contencioso administrativo**

Esta acción prevista en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo contenido en la ley 1437 de 2011 del Congreso de Colombia,

<sup>539</sup> Organización de Estados Americanos, “Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.(Convención De Belem Do Para)”, 14 de agosto de 1995. <http://www.oas.org/juridico/spanish/Tratados/a-61.html>

<sup>540</sup> Organización de Estados Americanos, “Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. (Convención De Belem Do Para)”, 14 de agosto de 1995. <http://www.oas.org/juridico/spanish/Tratados/a-61.html>

<sup>541</sup> Congreso de Colombia, Ley 975 de 2005, “Ley de verdad justicia y reparación”, Diario Oficial 45.980, 25 de julio de 2005. [https://www.cejil.org/sites/default/files/ley\\_975\\_de\\_2005\\_0.pdf](https://www.cejil.org/sites/default/files/ley_975_de_2005_0.pdf)



regula la acción de reparación directa que tiene como objetivo lograr la declaración de responsabilidad extracontractual del Estado por daños ocasionados a las personas por acciones u omisiones de sus agentes”<sup>542</sup>. Asimismo, la interpretación del Consejo de Estado y la Corte constitucional- altas cortes colombianas- establecen escenarios donde las víctimas pueden acudir a esta jurisdicción como alternativa a la vía penal cuando los hechos tienen ocurrencia en el escenario bélico colombiano.

Siguiendo esta línea, la víctima sobreviviente puede acudir ante esta jurisdicción interponiendo una demanda mediante abogado en ejercicio, cuando: a) el victimario pertenezca a las fuerzas militares o cualquier entidad estatal, b) Exista autoría, colaboración o participación de funcionarios estatales para realizar la conducta que ocasionó el daño a la víctima, c) por incumplimiento de obligaciones constitucionales del Estado de proteger y garantizar los derechos consagrados en la constitución y los tratados internacionales sobre Derechos Humanos.

Dentro de estas obligaciones dos de ellas, se observaron en el estudio de esta tesis las cuales son “la obligación de monitoreo y evaluación de la situación de violencia de género” y “la obligación de diligencia debida”<sup>543</sup>.

La primera, encuentra sentido en los distintos tratados internacionales que contienen mandatos a los Estados para que acojan planes y políticas sobre la eliminación de violencia contra la mujer, que los obliga a adecuar sus sistemas jurídicos, políticos y económicos a preceptos garantes de derechos como la libertad, la dignidad y la igualdad.

La segunda, está orientada a garantizar que dentro de las actuaciones que se garanticen los derechos de las víctimas como el de participación en los procesos, a no ser revictimizadas, a recibir atención médica, psicológica o psiquiátrica cuando la víctima sobreviviente lo requiera, a ser atendidos por funcionarios con formación en perspectiva de género y delitos sexuales, entre otros<sup>544</sup>.

Estos dos deberes, son vulnerados en los casos de estudio en esta tesis, debido a que las víctimas fueron sometidas a momentos de revictimización dentro de las

---

<sup>542</sup> Fecha diario Oficial 18 de noviembre de 2020 (51502), [http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley\\_1437\\_2011\\_pr003.html#140](http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011_pr003.html#140)

<sup>543</sup> Al respecto puede consultarse: Corte Interamericana de Derechos Humanos Rosendo Cantú y otras V.S México, Fernandes ortega y otros v.s México; caso j vs Perú, V.R:P. y V.P.C y otros vs Nicaragua

<sup>544</sup> Ibid..

actuaciones procesales desconociendo los mandatos internacionales y nacionales sobre la materia<sup>545</sup>. En todo caso, “a la persona interesada no le corresponde presentar las razones jurídicas de sus pretensiones, sino simplemente relatar los hechos, omisiones, operación u ocupación, para que el juez administrativo se pronuncie con base en el derecho aplicable al caso”<sup>546</sup>.

En ese sentido, el juez aplicando la perspectiva de género, tiene discrecionalidad para determinar las indemnizaciones a que haya lugar cuando las circunstancias del caso de violencia superen los tope establecidos en la legislación vigente.

En concordancia con lo anterior argumentado, las pruebas para demostrar el perjuicio giraran en torno a criterios de flexibilidad basados en indicios, dándole importancia al testimonio y relato de la víctima, el de los testigos y demás pruebas circunstanciales que no se limitan solo a la toma de muestras de fluidos corporales en casos de violaciones o dictámenes de medicina legal que reposan en cabeza del Estado<sup>547</sup>. Por ello, el examen del conflicto armado en estos casos amerita un análisis de contexto a través las voces de las víctimas sobrevivientes con un sustento probatorio amplio para tasar y liquidar los perjuicios.

Respecto a este último punto, para poder determinar los perjuicios de las víctimas sobrevivientes, se toman en consideración que “el daño es el presupuesto principal de la responsabilidad extracontractual del Estado el cual exige para ser resarcido, desde el punto de vista de la responsabilidad subjetiva, (i) una conducta que constituya una

---

<sup>545</sup> Se puede observar la Gráfica 9. Número de entrevistas de las víctimas.

<sup>546</sup> Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-644/11, “Demanda de inconstitucionalidad al nuevo código de procedimiento administrativo”, 31 de agosto de 2011, MP. Jorge Iván Palacio Palacio. <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/C-644-11.htm>

<sup>547</sup> Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Caso de la “masacre de mapiripán” vs. Colombia”, del 15 de septiembre de 2005, [https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec\\_134\\_esp.pdf](https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_134_esp.pdf); Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Caso Acosta Calderón vs. Ecuador” vs. Colombia”, del 24 de junio de 2005, [https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec\\_129\\_esp1.pdf](https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_129_esp1.pdf); Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Caso Rosendo Cantú y otra vs. México”, del 31 de Agosto de 2010, [https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec\\_216\\_esp.pdf](https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_216_esp.pdf); Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Caso Fernández Ortega y otros vs. México”, del 30 de Agosto de 2010, [https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec\\_215\\_esp.pdf](https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_215_esp.pdf); Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Caso V.R.P., V.P.C. y otros vs. Nicaragua” vs. Colombia”, del 8 de marzo de 2018, [https://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec\\_350\\_esp.pdf](https://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_350_esp.pdf); Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Caso V.R.P., V.P.C. y otros vs. Nicaragua” vs. Colombia”, del 8 de marzo de 2018, [https://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec\\_350\\_esp.pdf](https://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_350_esp.pdf); Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Caso mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco vs. México”, del 28 de Noviembre de 2018, [https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec\\_371\\_esp.pdf](https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_371_esp.pdf)

infracción a la norma que tutela un interés legítimo y (ii) el menoscabo o detrimento de un derecho patrimonial o extrapatrimonial de una persona.”<sup>548</sup>

Estos perjuicios que se derivan de ese daño que se causa, producen efectos que transgreden a las víctimas en muchas esferas de su vida por lo que se toma en consideración que solo con demostrar que se cometió un ilícito no basta para determinar los daños que se ocasionaron a las víctimas sobrevivientes de VS. En ese entendido, daños materiales e inmateriales o cualquier otro que se cause en relación con los hechos ocurridos en el conflicto armado serán parte de la reparación en estos procesos.

Es así como daños físicos, psicológicos, psiquiátricos, “el daño a la vida de relación o la alteración grave a las condiciones de existencia como el derecho al buen nombre, al honor o a la honra; el derecho a tener una familia”, entre otros, comprenderán algunos de los perjuicios que se causan por la VS en el conflicto armado.

No obstante, esta vía administrativa adiciona al concepto de reparación un concepto denominado “el daño a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados” los cuales se causan por “la violación de derechos contenidos en fuentes normativas diversas”<sup>549</sup>. Esta vulneración se presenta por violación de derechos el respeto a la dignidad, la seguridad, el de vivir en espacios libre de violencias, entre otros; que afectan de forma diferente a cada una de las víctimas sobrevivientes de VS.

Es por lo anterior que se analiza la tasación estandarizada de estos daños en particular según el Consejo de Estado. Este órgano de justicia establece la suma hasta de 100 salarios mínimos mensuales vigentes colombianos para liquidarlos, pero si los perjuicios son tan graves que desbordan los criterios establecidos quedará a discrecionalidad del juez tasar el monto. En ese sentido argumenta que “esta discrecionalidad está regida por: (i) la regla de que la indemnización del perjuicio se hace a título de compensación, dado que “la suma establecida no se ajustará nunca al monto exacto del perjuicio, pero buscará, de alguna manera, restablecer el equilibrio roto con su ocurrencia”, mas no a título de restitución; (ii) el principio de equidad previsto en el

---

<sup>548</sup> Consejo de Estado, “Sentencia de Unificación de Reparación Integral”, Rad.05001-23-25-000-1999-01063-01(32988), 28 de agosto de 2014. MP. Ramiro de Jesús Pazos Guerrero. [http://www.consejodeestado.gov.co/documentos/boletines/151/S3/05001-23-25-000-1999-01063-01\(32988\).pdf](http://www.consejodeestado.gov.co/documentos/boletines/151/S3/05001-23-25-000-1999-01063-01(32988).pdf)

<sup>549</sup> Ibid.

artículo 16 de la Ley 446 de 1998; (iii) el deber de estar sustentada en los medios probatorios que obran en el proceso respecto del daño y su intensidad; y (iv) el deber de estar fundada, cuando sea el caso, en otras providencias para efectos de garantizar el principio de igualdad”<sup>550</sup>

Pero la decisión que tome debe estar basada en los criterios de reparación integral consagrados en la legislación nacional e internacional con medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición<sup>551</sup>.

Las víctimas del estudio de esta tesis tienen la opción de acudir ante este juez para que se realice la tasación de sus perjuicios y se condene a pagar al Estado por ellos, ya sea por ser sus funcionarios los responsables del daño ocasionado, por ocasionarse falencias en las actuaciones judiciales en los procesos penales de las víctimas sobrevivientes de VS, o por desconocer la perspectiva de género lo cual trae consigo la revictimización de las mujeres dentro de los procesos.

Por otra parte, las víctimas del estudio de esta tesis no argumentan estar interesadas en recurrir a esta vía para que les otorguen una reparación ya que su interés en el proceso penal es que den con los responsables de los delitos de VS y que se sepa la verdad de lo ocurrido. Lo referido da para plantear también la oportunidad de éxito que tendría este proceso si bien el “el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, en lo relativo a la acción de reparación directa, instituye un término de dos años para que sea impetrada, contados a partir del día siguiente a la ocurrencia de la causa del daño”<sup>552</sup>.

Para resolver el interrogante, el Consejo de Estado determina que dadas las condiciones de conflicto armado que llevan a las víctimas sobrevivientes a guardar silencio por miedo u otros motivos, y por la connotación de contexto en el que se configura la VS, sería insuficiente y vulnerador de los tratados internacionales considerar este tiempo para dar por terminada la acción administrativa<sup>553</sup>. Por ende, si la intención de las víctimas sobrevivientes es acudir a esta vía tendrán que dar a conocer por qué el

---

<sup>550</sup> Ibid.

<sup>551</sup> Ibid.

<sup>552</sup> [https://www.procuraduria.gov.co/relatoria/media/file/flas\\_juridico/1287\\_CE-Rad-34548.pdf](https://www.procuraduria.gov.co/relatoria/media/file/flas_juridico/1287_CE-Rad-34548.pdf)

<sup>553</sup> <https://www.urosario.edu.co/Facultad-de-Jurisprudencia/Grupos-Investigacion/Derecho-Internacional/Sentencias/2016/03-2016-06-Consejo-de-Estado-NR-56282.pdf>

Estado debe ser declarado responsable por los perjuicios y probar los daños que crean deban ser reparados, con el conocimiento que, así como el proceso penal, el proceso contencioso administrativo puede durar entre 1 hasta 10 o más años en definirse.

#### **2.2.1.2.2. Reparación en los Proceso de Justicia Transicional**

Aunque son múltiples los intentos gubernamentales a lo largo de la historia que exponen salidas políticas al conflicto armado que se suscita en Colombia, actualmente están vigentes dos de los procesos de JT conocidos como 1) Justicia y Paz y 2) Proceso de Paz<sup>554</sup>.

Sin embargo, existe normativa que hace parte de ambos procesos como la ley 1448 de 2011 conocida como “la ley de víctimas y restitución de tierras”, que concentra su accionar en la garantía de los derechos de las víctimas que por hechos ocurridos en el conflicto armado sufren daños físicos, psicológicos, morales, entre otros, que deben ser atendidos por el Estado con postulados basados en principios universales como el de la dignidad humana.

El acto legislativo 1 de 2012, introduce un nuevo artículo transitorio en la constitución política de 1991, donde establece las medidas de justicia transicional como herramientas para lograr salir del conflicto armado que Colombia atraviesa con el objetivo de lograr la paz. Además, instaura las medidas de verdad, justicia y reparación como fundamentales para lograr este objetivo y determina la aplicación de medidas judiciales y extrajudiciales de reparación para las víctimas<sup>555</sup>.

Las medidas de indemnización, rehabilitación, restitución, garantías de no repetición, y satisfacción de las víctimas hacen parte de la reparación que en su conjunto

---

<sup>554</sup> El primer proceso esta direccionado por: Congreso de Colombia, Ley 975 de 2005, “Ley de verdad justicia y reparación”, Diario Oficial 45.980, 25 de julio de 2005. [https://www.cejil.org/sites/default/files/ley\\_975\\_de\\_2005\\_0.pdf](https://www.cejil.org/sites/default/files/ley_975_de_2005_0.pdf)

El segundo proceso esta direccionado por: Acuerdo para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, de 24 de noviembre de 2016, (EVA – Acuerdo final de 2016), [https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma\\_pdf.php?i=79893](https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=79893)

<sup>555</sup> Congreso de Colombia., el Acto Legislativo 1 de 2012, “instrumentos jurídicos de justicia transicional” Diario oficial No. 48.508, 31 de julio de 2012. [http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/acto\\_legislativo\\_01\\_2012.html](http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/acto_legislativo_01_2012.html)

contribuye a los procesos encaminados a reconocer las vulneraciones a las que haya lugar en este contexto, reconstruir el tejido humano y social y evitar la repetición de los actos violentos que dejan cada vez más víctimas.

Por su parte, el primero de los procesos, se materializó con la ley 975 del 2005 donde el Estado y un grupo armado- las AUC- pactaron la desmovilización de sus tropas para lograr la reincorporación y reconciliación del país, ya que con sus múltiples acciones contra la población civil dejaron alrededor de 3 millones de víctimas<sup>556</sup>.

Autores como García, argumentan que “agruparon en el momento de su fundación oficial a 9 organizaciones paramilitares de las existentes en el país, que, a modo de degeneración de las tradicionales y atávicas Autodefensas, se convirtieron en una entidad armada paraestatal, vital en el extenso y multiactoral conflicto interno”<sup>557</sup>. Financiadas por el narcotráfico y con colaboración de políticos, empresarios entre otros, esta organización tuvo como finalidad hasta su desmovilización, luchar contra grupos guerrilleros con estrategias de control territorial<sup>558</sup>.

Para su desmovilización, la ley 975 de 2005, sus decretos reglamentarios y demás marco jurídico aplicable, se centró en alcanzar una reconciliación nacional que involucra no solo a los victimarios sino a las víctimas, el Estado y a toda la sociedad<sup>559</sup>. Medidas de justicia, verdad y reparación son puestas en marcha para conseguir lo propuesto, por lo que se conciben penas alternativas para los victimarios que se desmovilicen y confiesen todos los delitos que cometieron otorgándoles una pena de 5 a 8 años<sup>560</sup>.

---

<sup>556</sup> Unidad para la atención y reparación de víctimas. “Registro Único de Víctimas”. Acceso el 15 de octubre de 2020. <https://www.unidadvictimas.gov.co/es/solicitud-de-inscripcion-en-el-registro-unico-de-victimas/281>

<sup>557</sup> Patricio García Pérez. La privatización de la violencia en Colombia y las AUC: de las autodefensas al paramilitarismo contrainsurgente y criminal. Izquierdas versión On-line ISSN 0718-5049, Izquierdas (Santiago) no.27 Santiago abr. 2016. <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-50492016000200009>

<sup>558</sup> Puede consultarse: Agudelo, Germán Darío Valencia. "Reconstrucción analítica del proceso de desarme, desmovilización y reinserción con las Autodefensas Unidas de Colombia, 2002-2007." *Perfil de coyuntura económica* 10 (2007): 147-191; Venegas Franco, Alejandro, y "Editorial". *Revista Estudios Socio-Jurídicos* 7, no. Esp (2005): 6-7. Redalyc, <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=73309901>; Cortés Quantip, Reinaldo, y "Paramilitares: violencia y política en Colombia". *Aldea Mundo* 5, no. 10 (2001): 25-32. Redalyc, <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=54301004>

<sup>559</sup> Agudelo, Germán Darío Valencia. "Reconstrucción analítica del proceso de desarme, desmovilización y reinserción con las Autodefensas Unidas de Colombia, 2002-2007." *Perfil de coyuntura económica* 10 (2007): 147-191

<sup>560</sup> Congreso de Colombia, Ley 975 de 2005, “Ley de verdad justicia y reparación”, Diario Oficial 45.980, 25 de julio de 2005. [https://www.cejil.org/sites/default/files/ley\\_975\\_de\\_2005\\_0.pdf](https://www.cejil.org/sites/default/files/ley_975_de_2005_0.pdf)

Para ello, se establecen dependencias jurisdiccionales especiales conocidas como “jueces de justicia y paz” que investigan y juzgan penalmente a las personas reincorporadas en aplicación de la ley 975 de 2005 pero siguiendo los postulados de la legislación penal y procesal vigente.

Dentro de este proceso penal especial se establecen audiencias libres, donde los victimarios dan a conocer su pasado delictual reconociendo los motivos que los llevaron a cometer actos de VS, ofrecen información sobre las personas que participaron o colaboraron en la comisión de los delitos, cuentan lo ocurrido y paradero de las personas desaparecidas, entre muchas más; que ayudan a las víctimas en sus procesos subjetivos de superación de lo acontecido y a su vez, conforman la memoria histórica del conflicto.

En concordancia con lo relatado, ninguno de los procesos de la muestra de estudio es tramitado por esta normatividad especial, no obstante, si algún victimario llegara a confesar dentro de las audiencias libres la comisión de alguno de los delitos que se investigan en la Fiscalía Especializada de la muestra, se deberá realizar el trámite pertinente para que el caso pase a los jueces de justicia y paz.

Además, la dependencia del relato del victimario para constituir lo que será la verdad judicial del proceso en algunas ocasiones, no logra el resultado que se espera debido a la no aceptación por parte de los victimarios de delitos de VS en el conflicto armado. La negación de la VS en el conflicto se vuelve constante en los victimarios debido a que puede afectar el curso de su proceso si se demuestra que este delito tiene la connotación de lesa humanidad.

En el caso previsto, el ordenamiento jurídico colombiano determina expresamente que los delitos con esta denominación no son objeto de amnistías, ni indultos ni penas alternativas, por lo cual deberán tramitarse ante los fiscales especializados que tengan competencia para investigar y acusar a los autores de graves violaciones al DIH con las penas previstas en el código penal -ley 599 de 2000-.

En este entendido, el Estado debe recurrir a otros procesos que le permitan cumplir con las obligaciones adquiridas en los tratados internacionales en materia de derechos humanos, so pena de incurrir en una vulneración de los derechos de las víctimas sobrevivientes. Es por ello por lo que anclado al paquete normativo transicional se

establecen “los programas administrativos masivos de reparación que priorizan categorías de víctimas y tipos de victimización, y definen medidas que permitan abarcar, de manera diferenciada, las distintas categorías”<sup>561</sup>.

Es así como, el Decreto 1290 de 2008 crea “el programa de reparación individual por vía administrativa para las víctimas de los grupos armados al margen de la ley” concordante la ley 975 de 2005 en su artículo 42 se concibe que “en caso de que no se haya logrado individualizar al victimario pero se demuestre el daño y el nexo causal con las actividades del grupo armado ilegal beneficiario por las disposiciones de la presente ley, el Tribunal directamente o por remisión de la Unidad de Fiscalía, ordenará la reparación a cargo del Fondo de Reparación”<sup>562</sup>.

Este fondo contiene bienes de los victimarios desmovilizados que se emplean para indemnizar a las víctimas de los delitos relacionados con el conflicto armado. En caso de que no alcancen los recursos, por mandato legal se tomarán del presupuesto nacional asignado para tal fin, o se recurrirá a donaciones o las fuentes de financiación externa reguladas por la ley 1592 de 2012<sup>563</sup>.

No obstante, al analizar el origen de los recursos, los parámetros políticos y jurídicos preestablecidos que determinan el daño, cómo se debe reparar y cuál es el monto que debe otorgarse a cada una de las víctimas, se aprecia que la reparación puede llegar a presentar falencias en cuanto a su estructura ya que las víctimas sobrevivientes no construyen sus propios procesos bajo sus intereses, necesidades y recursos sino bajo los parámetros existentes que convinieron en las mesas de dialogo o que reposan en las leyes vigentes o programas de gobierno.

Para no caer en una vulneración de derechos humanos por incumplimiento de sus deberes y obligaciones, el Estado crea reparaciones administrativas y programas gubernamentales con enfoque de género y diferencial que involucran a las víctimas en la

---

<sup>561</sup> Al respecto puede consultarse: Justicia Transicional. <http://www.justiciatransicional.gov.co/Justicia-Transicional/Reparaciones>

<sup>562</sup> Congreso de Colombia, Ley 975 de 2005, “Ley de verdad justicia y reparación”, Diario Oficial 45.980, 25 de julio de 2005. [https://www.cejil.org/sites/default/files/ley\\_975\\_de\\_2005\\_0.pdf](https://www.cejil.org/sites/default/files/ley_975_de_2005_0.pdf)

<sup>563</sup> Congreso de Colombia., ley 1592 de 2012, “Se introducen modificaciones a la Ley 975 de 2005” Diario oficial No. 48633, 3 de diciembre de 2012.

<http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1684609>



fase de ejecución de las medidas y no desde la fase de diseño de estas, a pesar de que dentro de sus directrices estén previstas<sup>564</sup>.

Esto puede apreciarse con la ley 1448 de 2011, “por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”<sup>565</sup>, donde se establece como finalidad “contribuir a que las víctimas sobrelleven su sufrimiento y, en la medida de lo posible, al restablecimiento de los derechos que les han sido vulnerados”<sup>566</sup>.

Esta norma crea “el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas – SNARIV” la cual tiene como función resolver las solicitudes de reparación de las víctimas del conflicto armado. Esta entidad realiza una entrevista a las víctimas para asesorarlas sobre las medidas que la ley otorga – medidas de rehabilitación, indemnización, satisfacción, garantías de no repetición y restitución- de acuerdo con su caso.

Dentro de estas medidas se prevén acciones que serán realizadas por entidades administrativas u otros según su experticia o relación con las afectaciones. Por ejemplo, se encuentran las medidas de satisfacción donde se realizan actividades conmemorativas para las víctimas, se otorgan “cartas de dignificación”, se realizan actos de perdón públicos, entre otros, que ayudan a que las víctimas logren mitigar el daño que la VS deja en sus vidas.

Dentro de las medidas de rehabilitación se encuentran las actividades de la “Estrategia de Recuperación Emocional Grupal” donde se crean espacios institucionales, con directrices específicas donde la gente puede asistir a grupos que llevan a cabo actividades de reparación individual y colectiva. Además, si la víctima requiere asistencia médica, el ministerio de salud dentro del “programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas del Conflicto Armado”, brinda la atención física, psicológica, psíquica a que haya lugar para que la víctima logre superar lo acontecido por la VS.

---

<sup>564</sup> Congreso de Colombia, Ley 975 de 2005, “Ley de verdad justicia y reparación”, Diario Oficial 45.980, 25 de julio de 2005. [https://www.cejil.org/sites/default/files/ley\\_975\\_de\\_2005\\_0.pdf](https://www.cejil.org/sites/default/files/ley_975_de_2005_0.pdf)

<sup>565</sup> Congreso de Colombia., ley 1448 de 2011, “Ley de víctimas y Restitución de Tierras” Diario oficial No. 48.096, 10 de junio de 2011. [http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley\\_1448\\_2011.html](http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1448_2011.html)

<sup>566</sup> Ibid.art.9

De igual manera, la ley prevé medidas de restitución donde las personas pueden tener acciones que apunten a volver a restitución de sus viviendas y predios rurales, a recuperar los empleos que tenían antes de sufrir por la VS, entre otras. Dentro de las medidas de garantías de no repetición, están las que tienden a la “verificación de los hechos y difusión pública y completa de la verdad, a la desmovilización y de los Grupos organizados al margen de la ley (GAOML), y la sanción a los responsables de los hechos victimizantes”<sup>567</sup>. Y la indemnización puede ser administrativa o a través del fondo de reparación<sup>568</sup>.

Para que la entidad administrativa repare a las víctimas deberá conocer mediante solicitud de estas, los hechos que ocasionaron los daños y los posibles nexos con el conflicto armado. Esta solicitud debe incluir la resolución que indique su inserción en el Registro Único de Víctimas (RUV)- base de datos administrativa de víctimas del conflicto armado del Estado- para poder acceder a las medidas de reparación a que haya lugar según el caso.

Lo anterior descrito, al ser contrastado con lo encontrado en los procesos penales de estudio, arroja como resultado que las víctimas sobrevivientes de la muestra adelantaron este trámite de inclusión en el RUV, siendo incluidas en esta base de datos. Sin embargo, solo una de ellas fue reparada con una indemnización administrativa de 18 millones de pesos colombianos, con una medida de satisfacción la cual consistía en un curso de capacitación en el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)<sup>569</sup>. Esta mujer además manifiesta que lo adquirido no fue suficiente para sentirse reparada<sup>570</sup>.

En concordancia con la línea de argumentación, al evaluar el tiempo para resolver las solicitudes de reparación ante esta unidad es incierto, debido a que son más de 8 millones de víctimas registradas en la base datos, por lo cual, aunque todas recibirán una respuesta, esta puede no llegar de forma ágil. Esto genera que el desgaste y la incertidumbre para las víctimas sobrevivientes incrementa debido a que deben continuar subsistiendo a pesar de las afectaciones que la VS les ocasionó.

---

<sup>567</sup> Al respecto puede consultarse el sitio web de la Unividad para las víctimas en el siguiente dominio web: <https://www.unidadvictimas.gov.co/es/reparacion-integral-individual/286>

<sup>568</sup> Ibid.

<sup>569</sup> Entrevista realizada por policía judicial/Entrevista1/Caso28

<sup>570</sup> Ibid.

Adicional a esto, la percepción del tiempo que transcurre en el trámite de reparación por esta vía puede generar desconfianza y descontento en las víctimas sobrevivientes al carecer de resolución inmediata en sus solicitudes. Asimismo, las víctimas sobrevivientes de la muestra de estudio refieren en sus relatos que ya están incluidas en el RUV y por ello, creen que la reparación se les dará con esta inclusión en la base de datos.

Al respecto el Consejo de Estado refiere que ser incluidas como víctimas en el RUV no garantiza la reparación de estas. Lo anterior lo expresa diciendo que “no es lo mismo decidir si una persona debe o no inscribirse en el Registro Único de Víctimas, a resolver si una persona tiene derecho a ser reparada administrativamente con una suma de dinero, y ligado a lo anterior, en qué monto, quiénes serían los beneficiarios de éste, y, por consiguiente, cuál es tabla de indemnización a tener en cuenta”<sup>571</sup>. Para la reparación, el ente administrativo debe analizar los perjuicios que se causaron en cada una de las víctimas sobrevivientes, las cuales deberán aportar lo necesario para ayudar a la administración a otorgar las medidas que necesita la víctima.

Así, para que las medidas de reparación estén acordes con el derecho de la víctima “a ser reparadas de manera adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva”<sup>572</sup> se requiere que la administración resuelva las solicitudes de reparación en un tiempo razonable considerando que los daños pueden dejar secuelas que se pueden agravar con el tiempo.

Pero el panorama más incierto lo presenta el otro proceso de justicia transicional vigente en Colombia cuya base jurídica es “el Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de paz estable y duradera” (Acuerdo de paz) firmado en el año 2016 que, a pesar de crear un completo sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, con un enfoque diferencial y de género, hasta el momento sigue sin conceder reparaciones a víctimas de VS en el conflicto armado<sup>573</sup>.

---

<sup>571</sup> SENTENCIA 2014-03198 DE 15 DE ENERO DE 2015, CONSEJO DE ESTADO, [http://legal.legis.com.co/document/Index?obra=jurcol&document=jurcol\\_12367ed86d53028ce0530a010151028c](http://legal.legis.com.co/document/Index?obra=jurcol&document=jurcol_12367ed86d53028ce0530a010151028c)

<sup>572</sup> Ibid. art.25

<sup>573</sup> Acuerdo para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, de 24 de noviembre de 2016, (EVA – Acuerdo final de 2016), [https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma\\_pdf.php?i=79893](https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=79893)

Este acuerdo firmado por el grupo guerrillero “Fuerzas Revolucionarias Unidas de Colombia- Ejército del pueblo” (FARC- EP)- fundado en 1964 con propósitos políticos encaminados a lograr reformas institucionales agrarias y sociales desde una ideología política marxista leninista- y el Estado colombiano en el año 2016, pretendió dar por terminado el conflicto armado con este grupo guerrillero y lograr una paz estable y duradera<sup>574</sup>.

Para cumplir con sus objetivos, las medidas de reparación para las víctimas del conflicto armado se conciben como “medidas restaurativas y reparadoras, que pretenden alcanzar justicia no solo con sanciones retributivas<sup>575</sup>. Por ende, propone varias medidas especiales que se centran en la víctima y su transformación de vida individual y comunitaria.

En primer lugar, denomina “medidas de reparación integral para la construcción de paz” a todas aquellas referidas por las normas nacionales e internacionales como la indemnización, la rehabilitación, la restitución, la satisfacción y las garantías de no repetición. La misión del Estado será por mandato legal “fortalecer los procesos de reparación colectiva y garantizar que los planes y programas de la Reforma Rural Integral tengan, donde haya lugar, un enfoque reparador”<sup>576</sup>.

Este enfoque será entendido dentro de la aplicación del acuerdo como aquel que busca reconocer los perjuicios de las víctimas en su individualidad y colectividad para proceder a resarcir, mitigar, mejorar y transformar los escenarios vivenciales y de otra índole de las personas, colectivos, organizaciones y comunidades que sufrieron por actos violentos dentro del conflicto armado<sup>577</sup>.

---

<sup>574</sup> Al respecto puede consultarse: Ríos, Jerónimo. "El Acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC: o cuando una paz imperfecta es mejor que una guerra perfecta." *Araucaria. Revista Iberoamericana de Filosofía, Política y Humanidades* 19.38 (2017): 593-618, Palou-Loverdos, Jordi. "Memoria y justicia transicional en los acuerdos de paz de Colombia." *Novum Jus: Revista Especializada en Sociología Jurídica y Política; Vol. 12, no. 2 (jul.-dic. 2018); p. 113-127* (2018), Vargas, Jakeline, and Ángela María Díaz Pérez. "Enfoque de género en el acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC-EP: transiciones necesarias para su implementación." *Araucaria* 20.39 (2018).

<sup>575</sup> Acuerdo para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, de 24 de noviembre de 2016, (EVA – Acuerdo final de 2016), [https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma\\_pdf.php?i=79893](https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=79893)

<sup>576</sup> Ibid. Punto 5.1.3.3.

<sup>577</sup> Al respecto de este enfoque puede consultarse: Mendoza, Hugo Andrés Arenas. "Las medidas de reparación integral establecidas en el Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera." *Utopía u oportunidad fallida: Análisis crítico del Acuerdo de Paz*. Universidad

Esto incluye “los actos tempranos de reconocimiento de responsabilidad colectiva”, que se materializan a través de jornadas, actos, eventos ya sean formales, públicos o solemnes donde se pida perdón a las víctimas o se reconozca la responsabilidad del Estado y de los victimarios.

Además, la reparación incluye acciones para resarcir los daños causados imponiendo una especie de sanciones sociales para los victimarios en aras de que retribuyan los perjuicios en múltiples escenarios nacionales. Dentro de estos puede observarse, por ejemplo, la colaboración de los victimarios en el restablecimiento de viviendas o sitios destruidos por el paso del conflicto, la asistencia en terrenos que contenían minas antipersona, la intervención en acciones que se encaminen a cambiar plantas que pueden ser utilizadas para uso ilícito por algunas que se encuentren en el mercado agroambiental y que su uso este permitido, entre muchas más, consagradas en el Acuerdo de Paz <sup>578</sup>.

Sin embargo, la novedad destacada del acuerdo en términos de reparación es el montaje de medidas específicas para lograr la reparación colectiva la cual reconoce que los sujetos integrados por personas que tienen costumbres comunes, ideales compartidos y demás, que hayan sufrido por ocasión al conflicto armado puedan ser considerados como víctimas debido al daño que tuvieron que soportar con atentados a sus derechos colectivos.

Las acciones con respecto a esta incluyen medidas materiales y simbólicas, medidas de convivencia, reconciliación, mecanismos de participación y planes de acción que tendrán como fundamento “medidas de rehabilitación psico social, procesos colectivos de retornos de personas en situación de desplazamiento y reparación de víctimas en el exterior”.

El acuerdo además aduce que se tendrán que idear algunos programas que ayuden a las personas que tuvieron que desplazarse y dejar sus territorios para que si desean

---

del Rosario, 2017. 183-209, Dueñas, Lorena Cecilia Vega, and Alberto José Olalde Altarejos. "La justicia restaurativa como paradigma orientador de paz: los encuentros restaurativos." *Revista Icade. Revista de las Facultades de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales* 103 (2018).

<sup>578</sup> Acuerdo para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, de 24 de noviembre de 2016, (EVA – Acuerdo final de 2016), [https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma\\_pdf.php?i=79893](https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=79893)

vuelvan a sus terrenos o sean indemnizadas aplicando además enfoques diversos como el territorial. Este implica no solo tener en consideración que las mujeres y demás personas tienen características por su condición de género, sino que también tienen arraigos territoriales que hacen que sus contextos y sus comunidades sean particulares. No obstante, una de las preocupaciones para ejecutar este acuerdo de paz es la financiación de cada uno de los planes y acciones convenidas debido a que se establece que el gobierno nacional deberá garantizar el fortalecimiento del fondo de reparación que existe por la ley 1448 del 2011. Lo inquietante es que este fondo soporta las medidas de reparación de varios sistemas que no son excluyentes dificultando que los procesos con las víctimas puedan ser ejecutados en un corto plazo.

La Justicia Especial para la Paz, órgano de justicia transicional en los procesos, hasta el 2020, acreditó 221 sujetos colectivos como víctimas las cuales esperan ser reparadas durante y finalizado el proceso judicial llevado ante este organismo transicional. El caso 005 denominado “Situación territorial Norte del Cauca y sur del Valle del Cauca” es uno de los procesos que incluye a víctimas de violencia sexual en el conflicto armado donde organizaciones de mujeres presentaron informes dando a conocer los perjuicios padecidos mujeres en este territorio específico colombiano <sup>579</sup>.

Lo problemático se presenta cuando se evalúa si la reparación por esta vía puede ser una posibilidad concebida por las mujeres víctimas de VS si sus casos deben pasar primero por un proceso de priorización y selección que dejará por fuera a muchas de ellas. Los derechos a la justicia de estas víctimas pueden estar en riesgo al no contar con opción real para acceder a estos postulados.

Por último, se observa que el factor temporal en esta vía para ejecutar las medidas de reparación sigue siendo incierto debido a que aún no se tiene una cifra exacta de personas que deban ser reparadas en cada caso de la JEP, el presupuesto no es claro para cada una de las medidas y sus postulados preestablecidos impiden que las mujeres realicen sus propios procesos sin intervención estatal.

---

<sup>579</sup>Al respecto puede consultarse el sitio web de la Justicia Especial Para la paz en el siguiente dominio web: <https://www.jep.gov.co/jepcifras/JEP%20en%20cifras%20-%20%20diciembre%204%20de%202020.pdf>

### 2.3. Eficiencia de la reparación penal en los casos de estudio

Dentro del estudio de caso de VS en el conflicto armado de esta Tesis, se determina que los procesos penales de las mujeres no cumplen con la meta establecida en el derecho penal que dictamina la obligación de reparación integral a las víctimas sobrevivientes por la comisión de los delitos de VS. El análisis de la normativa penal y procesal medido a través de frecuencias presenta un panorama de ineficacia e ineffectividad ya que ningún proceso observado pasó de la primera etapa procesal.

En 4 años de seguimiento se observa que el riesgo de ser archivados por la falta de identificación plena de los victimarios es una de las causales por las cuales se predice una alta probabilidad de no culminación de los procesos<sup>580</sup>. Esto traerá como consecuencia, la imposibilidad de otorgar reparaciones por vía penal a las víctimas quienes pueden solicitarla una vez exista fallo condenatorio al victimario en firme.

Aunque para el análisis resultó pertinente y necesario mirar cuántos procesos lograron avanzar, los indicadores que se propusieron para establecer si los procesos penales eran eficientes se centraron en las entrevistas de la víctima sobreviviente del estudio, y sus percepciones dentro del proceso.

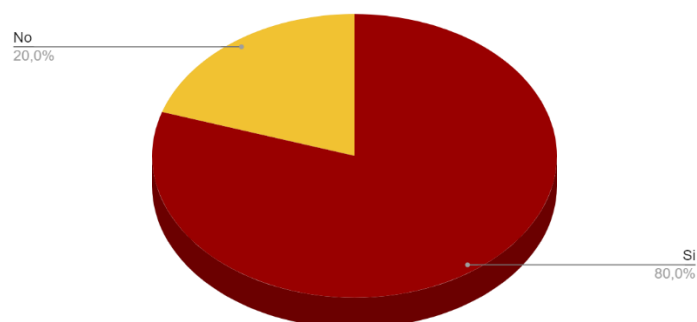
Para ello, se realizó un análisis del discurso de las entrevistas estableciendo tres categorías asociadas a palabras como impunidad, reparación y satisfacción. Al identificarlas, se observó que las mujeres de la muestra de estudio tienen la percepción de que sus casos quedaron en la impunidad al no ver avances en el proceso penal como lo muestra el gráfico 10 sobre percepción de la impunidad de las mujeres. El 80% de las víctimas sobrevivientes considera que su proceso, al no avanzar y no sancionar a los victimarios que las violentaron en periodos aproximados de 4 años- tiempo del estudio-

---

<sup>580</sup> Aunque el número de autores que intentan definir estos conceptos es voluminoso, algunos de ellos comparten que la eficacia y la efectividad de la normatividad se complementan. El primer concepto es referente al carácter de cumplimiento de los objetivos por parte de los sujetos para los que fue creada una norma y el segundo es orientado al resultado que se espera de la normatividad y así establecer el éxito de las medidas que se emplearon para que se diera ese cumplimiento. Puede consultarse al respecto: Greppi, Andrea. "Eficacia." *EUNOMÍA. Revista en Cultura de la Legalidad* (2014): 150-159; Pfeffer Urquiaga, Emilio. "Eficacia de las normas constitucionales frente a la reforma procesal penal." *Revista de Derecho Público* [En línea], 64 (2002): Págs. 48-68. Web. 26 sep. 2020; Tappis, Hannah, et al. "Effectiveness of interventions, programs and strategies for gender-based violence prevention in refugee populations: an integrative review." *PLoS currents* 8 (2016); Fernández Blanco, Carolina. "Normas sociales y problemas de eficacia y efectividad de las normas jurídicas." (2019). DOXA, Cuadernos de Filosofía del Derecho, 42 (2019) ISSN: 0214-8676 pp. 259-283.

carecen de postulados que permitan tener la convicción de que su caso no se archivará o se cerrará.

**Gráfico 10. Percepción de Impunidad en las mujeres**



Fuente: Información interpretada de los expedientes de procesos penales adelantados en la Fiscalía 5ª Especializada de la ciudad de Popayán, Colombia. Tabla de Elaboración Propia (2019).

Lo argumentado permite analizar estrategias que ayuden a cumplir con los objetivos de la norma con el mínimo “costo posible” conocido como eficiencia, la cual se alcanza eligiendo las opciones más convenientes para lograr los objetivos propuestos con un menor desgaste en el ejercicio de derechos y tiempo<sup>581</sup>. Las víctimas sobrevivientes durante sus entrevistas comentan cómo la espera para que sus procesos culminen ocasionan gastos adicionales al ser, en su mayoría, mujeres que se encuentran en territorios alejados de las oficinas donde opera el aparato de justicia, incurriendo en gastos de transporte, alimentación, niñera para las que tienen hijo o hijas, entre otros.

Además, la carencia de tratamientos psicológicos para sobrellevar los procesos hace que el desgaste emocional pueda incrementar, al asociar el traslado a la sede de la Fiscalía como un momento para recordar los hechos a los que fueron sometidas. Esto hace que los escenarios de revictimización se consideren como factores de abandono al proceso penal al evitar contar lo que les sucedió en varias ocasiones.

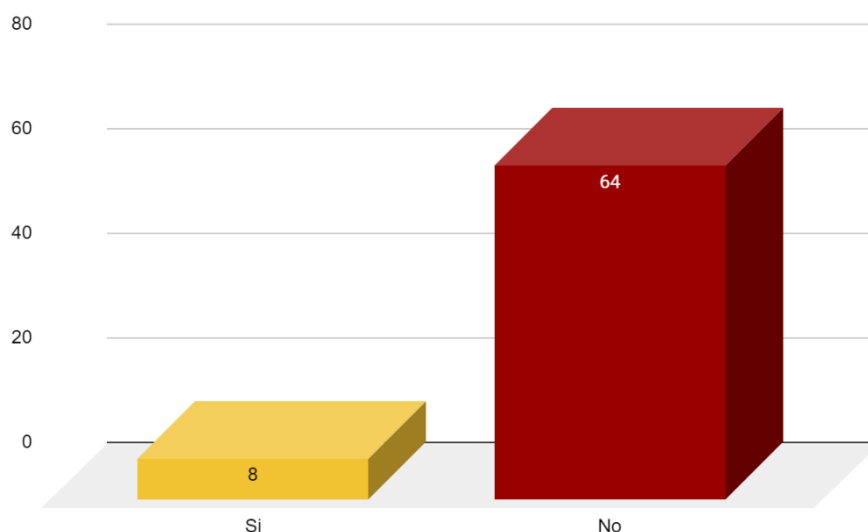
<sup>581</sup> Mokate, Karen. Eficacia, eficiencia, equidad y sostenibilidad: qué queremos decir?. Departamento de Integración y Programas Regionales, Instituto Interamericano para el Desarrollo Social, Banco Interamericano de Desarrollo, 2001: 5.



Es así como se cuestionó la percepción de las mujeres del proceso penal como reparación, al comprender que con el proceso penal no solo se busca obtener una condena al victimario que cometió el ilícito sino esclarecer la verdad, motivos y circunstancias de la VS. En ese entendido, como lo argumenta la Corte constitucional, el proceso penal es interpretado como una reparación por sí misma, ya que con ella se logra conformar la verdad judicial de la VS y se obtiene un mínimo de justicia al ser los procesos investigados y sancionados por los órganos competentes.

En concordancia con esto, al analizar los resultados y al ser ilustrados en el gráfico 11 sobre la percepción del proceso penal como reparación, se muestra que solo 8 mujeres de las 70 de la muestra de estudio concibe el proceso como un proceso que las repara. Esto puede estar ligado a la percepción de impunidad que tienen las mujeres al no ver avances significativos en sus procesos penales, pero encontrar otros factores que las afectan con su adelanto, tales como el estigma familiar y social hacia aquellas víctimas sobrevivientes de VS que por temor a ser discriminadas o rechazadas, deciden guardar silencio o huir de sus lugares de habitación.

**Gráfico 11 Percepción de proceso penal como reparación**



Fuente: Información interpretada de los expedientes de procesos penales adelantados en la Fiscalía 5ª Especializada de la ciudad de Popayán, Colombia. Tabla de Elaboración Propia (2019).

En este punto cobra sentido lo relatado en el acápite de efectividad desde una visión feminista ya que el rendimiento “óptimo” de los recursos empleados para lograr

esos objetivos propuestos en la norma<sup>582</sup>, necesita de una valoración más rigurosa para que los procesos penales lleguen a culminar.

Recordando que la eficacia será aquella que determine el nivel de cumplimiento de las normas, la efectividad la que establezca el éxito de ese cumplimiento y la eficiencia estará enmarcada en lograr los objetivos incurriendo en el gasto y costo menor para las víctimas sobrevivientes de la VS, el análisis arroja como resultado que ni el proceso penal, ni los funcionarios que se encargan de su ejecución toman en consideración el desgaste para la víctima sobreviviente en poner en funcionamiento el aparato judicial.

Por lo expuesto, haciendo contraste de lo referido en esta tesis, los resultados están acordes con las advertencias feministas en cuanto a la insuficiencia de la normatividad relativa a reparación por vía penal<sup>583</sup>. Para dar más sustento a este argumento se analizó si la víctima sobreviviente de la muestra estaba satisfecha con el proceso penal, entendiendo la satisfacción como el resarcimiento del dolor de la víctima sobreviviente por la VS tal como lo describen las leyes nacionales e internacionales sobre la materia. Esto arrojó como resultado que 63 de las 70 mujeres de la muestra refirieran que no sentían satisfacción con el proceso como lo ilustra el gráfico 12 sobre satisfacción de las víctimas sobrevivientes con el proceso penal.

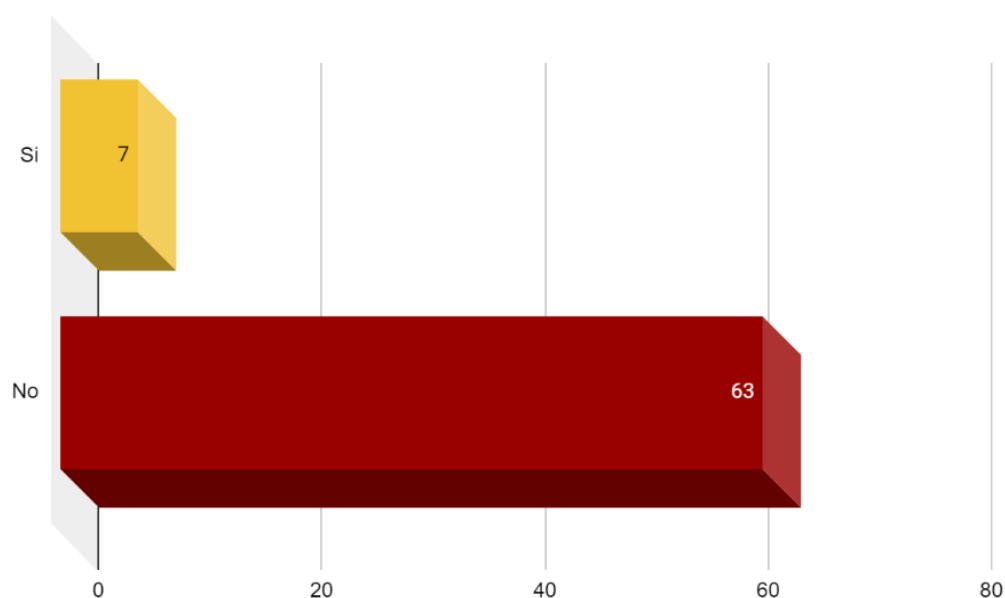
Esto permite reflexionar acerca de la conceptualización que cada víctima sobreviviente tiene con respecto al proceso de reparación siendo en muchas ocasiones, muy subjetiva la apreciación. Es por lo que en algunos casos se aprecia que las mujeres pese a recibir una reparación con diversas medidas aún no logran sentir que su proceso de dolor ha culminado.

Atendiendo a esto, para aportar al estudio se hizo el análisis en los procesos penales de la muestra preguntando si las mujeres eran parte de procesos de reparación distintos a los procesos penales, refiriendo 58 de las 70 mujeres de la muestra que no recibieron reparación de ningún tipo hasta el momento de ser entrevistadas como lo muestra la Tabla 5 de medidas de reparación recibidas por mujeres.

---

<sup>582</sup> Jeammaud, Antoine, “Legislación y realidad de la negociación. Apuntes para el análisis de sus relaciones”, en “La negociación colectiva en América Latina” editado por Ojeda Avilés, Antonio y Ermida Uriarte, Oscar (editores), , ed. Trotta, Madrid, 1993: 15- 26.

<sup>583</sup> Algunas de estas feministas están organizadas en colectivos que sacan regularmente publicaciones de sus investigaciones sobre violencia sexual en el conflicto como es el caso del colectivo actoras de cambio en Guatemala.

**Gráfico 12 Satisfacción de las víctimas sobrevivientes con el proceso penal**

Fuente: Información interpretada de los expedientes de procesos penales adelantados en la Fiscalía 5ª Especializada de la ciudad de Popayán, Colombia. Tabla de Elaboración Propia (2019).

De los 12 restantes, 1 recibió reparación por vía administrativa y 11 mujeres refieren que hacen parte de procesos de mujeres en sus comunidades o redes de apoyo. Esto, según sus apreciaciones genera desconfianza en las instituciones tanto judiciales como administrativas ya que la agilidad en la resolución de los procesos y trámites sobre el caso se quedan en una mera expectativa y no es una realidad.

**Tabla 5 Medidas de reparación recibidas por las mujeres**

			Recuento	%
Medidas de reparación recibidas en cualquiera de los procesos	Ninguna		58	82,9%
	1 o más		12	17,1%

Fuente: Información interpretada de los expedientes de procesos penales adelantados en la Fiscalía 5ª Especializada de la ciudad de Popayán, Colombia. Tabla de Elaboración Propia (2019).

### **Capítulo III. Estrategia complementaria a la reparación penal de mujeres víctimas sobrevivientes del conflicto armado colombiano**

Dado el panorama desalentador de eficiencia de la normatividad penal sobre reparación en los procesos de VS, surge el ejercicio de idear una estrategia para que las mujeres que son víctimas sobrevivientes de la VS logren iniciar y culminar sus procesos de reparación por vía penal atendiendo a sus particularidades.

En ese sentido, el estudio del conjunto normativo que contienen postulados nacionales e internacionales para lograr otorgar una reparación integral a mujeres que están en espacios donde se desarrolla un conflicto armado, permitió observar la necesidad de crear estrategias distintas a las aplicadas en los procesos penales que resultan ser insuficientes e inefectivas para las mujeres.

El tránsito hacia contextos libres de violencia donde puedan continuar, transformar, construir y ejecutar sus planes de vida pese a la situación que las llevó a ser caracterizadas como víctimas de VS, se convierte en un objetivo que puede ser difícil de alcanzar.

Por lo argumentado, en este último capítulo se darán a conocer los postulados de una estrategia de reparación complementaria al proceso penal que surge de lo observado en las entrevistas que reposan en los expedientes de la muestra de la Fiscalía Quinta Especializada de Popayán, Cauca, Colombia y del proceso que se lleva a cabo en la organización Hombres Nuevos y Mujeres Nuevas de la misma ciudad, la cual desarrolla procesos de reparación con hombres, mujeres, niños, niñas y adolescentes que por ocasión del conflicto armado colombiano sufrieron por diversas vulneraciones a sus derechos.

La novedad de la estrategia como se explicará en los apartados continuos se desarrolla desde un enfoque epistemológico feminista donde se estructuran objetivos dinámicos y flexibles a alcanzar, partiendo del hecho de que las mujeres, a través de sus experiencias, intereses y necesidades construyen sus procesos de reparación.

Al seguir esta línea, la relación de categorías sociales como la etnia, la raza, la pobreza, la edad y el género, articulan el análisis de la VS donde el aporte de las mujeres para transformar su propia realidad inmersa en escenarios de discriminación y violencia contra ellas, pueden ser la clave para lograr cambios en la sociedad. Sin desconocer que

existen en el conflicto armado colombiano otros sujetos que sufrieron daños por la VS, esta estrategia se centra en las mujeres, por ser ellas las que con mayor frecuencia acuden a los aparatos de justicia a denunciar sus casos según los reportes oficiales de la Fiscalía General de la Nación.

En ese sentido, se advierte la limitación que existe de plantear una estrategia global a todas y cada una de las mujeres víctimas de VS en el conflicto armado debido a que existe un subregistro de denuncias estimado por las organizaciones sociales de mujeres que indica que solo un porcentaje mínimo de mujeres se atreven a denunciar.

Por ende, y en congruencia con el análisis que se hace en esta Tesis, la estrategia planteada será complementaria y no alternativa o sustitutiva de la que se otorga en los procesos penales, toda vez que, por mandatos internacionales y legales, los victimarios y las personas solidariamente responsables deberán en todo caso, reparar a las víctimas por los perjuicios a que haya lugar causados con el delito cometido, investigado y juzgado.

Lo que si puede interpretarse, es que los procesos penales necesitan de complementos en su componente de resarcimiento de perjuicios de forma ágil tomando en consideración que la VS y los procesos penales que se cursan generan costos y gastos en las vidas de las mujeres que pueden ser abordados sin depender de un fallo condenatorio o del victimario.

Es por ello por lo que se propondrá en consideración que los procesos gestionados por mujeres, pero complementarios a los aparatos de justicia, resultan ser viables para que la reparación pueda cumplir con los criterios de integralidad de los que habla la normativa nacional e internacional. Así su planteamiento y ejecución no dependerán exclusivamente del fallo de un juez, de voluntades políticas y gubernamentales, ni de los victimarios.

### **3.1. Epistemología feminista como base para la estrategia**

La epistemología como “teoría del conocimiento que considera lo que se puede conocer y cómo, o a través de qué pruebas, las creencias son legitimadas como conocimiento verdadero”<sup>584</sup>, es objeto de mucho debate cuando se quiere resaltar que la mujer ha sido invisibilizada como sujeto observador transformándose en objeto

---

<sup>584</sup> Graf, Norma Blazquez. “Epistemología feminista: temas centrales”, p. 12

estudiado. Esto pone como ejes centrales en las investigaciones sociales temas generales que excluían de la historia de la ciencia a la mujer como protagonista central del desarrollo científico y, por ende, del desarrollo de políticas sociales que las beneficien.

Así como lo afirma Smith cuando se refiere a la sociología “se propende por una ciencia que no transforme en objetos a quienes se estudia, sino que, en sus procedimientos analíticos, preserve la presencia del sujeto como actor y como el que experimenta realidad”<sup>585</sup>.

Esta problemática se comienza a visibilizar a partir de los años 60 del pasado siglo, cuando “las investigadoras de la ola de estudios sobre la mujer a menudo insistieron en que la investigación feminista tiene que encaminarse a resolver los problemas concretos enfrentados por las mujeres”<sup>586</sup>.

Posteriormente, la tendencia, hasta los 70, estuvo encaminada a observar los fenómenos sociales a través de diferentes líneas epistemológicas tradicionales siguiendo enfoques que seguían reproduciendo como un conocimiento verdadero solo el emergente de un observador objetivo incapaz de dejar permeabilizar su resultado con aspectos nacidos desde la subjetividad, la contextualización y las creencias que hacían parte de un entorno social, distinguiendo entre perspectivas de hombres y mujeres.

Las vivencias, creencias, culturas y contextos, quedaban por fuera de lo investigado a menos que el observador las convirtiera en cosas observables que pudieran dar cuenta de esa realidad objetiva. Tal como lo afirma Christiansen, “en el marco de esa epistemología clásica, la separación entre el observador y lo observado se da por sentada: lo social queda convertido en un objeto de estudio cuyo modo de comportamiento se concibe como siendo independiente del acto de observación”<sup>587</sup>.

Bajo esos postulados, las mujeres seguían el esquema tradicional en la ciencia donde sus voces eran silenciadas debido a que “la producción de conocimiento que obsesivamente ha perseguido esa descripción “correcta” (única, final, concluyente, “verdadera”, “real”) ha intensificado actitudes desvalorizantes, intolerantes y

---

<sup>585</sup> Smith, Dorothy E. *The conceptual practices of power: A feminist sociology of knowledge*. University of Toronto Press, 1990, 12.

<sup>586</sup> Harding, Sandra G. *The science question in feminism*. Cornell University Press, 1986, 6.

<sup>587</sup> Christiansen-Ruffman, Linda, and Carla Accardi. "Developing feminist sociological knowledge: processes of discovery." (1998), 125.

condenatorias al cerrar toda posibilidad de escuchar otras explicaciones acerca de lo observado”<sup>588</sup>.

Por estas argumentaciones y en la lucha de darle un giro a lo que se consideraba válido para la ciencia, comenzaron a tomar fuerza las críticas hacia el modelo de conocimiento. Autoras como Hekman, afirman que son las mujeres las que se preocupan por introducir perspectivas de observación distintas que permiten un mejor acercamiento a los problemas sociales que se investigan. Es así como argumenta que “la producción científica se debe al trabajo ímprobo de algunas mujeres y muy pocos varones que han apostado por integrar, en su investigación y en su docencia, la transversal de género y el feminismo para revelar la mayor exclusión de la historia de la humanidad: la de las mujeres”<sup>589</sup>.

En ese entendido, Connelly, apoya que “algunas feministas han considerado que las ciencias (sobre todo, las exactas y naturales, y en menor grado las sociales) eran cotos masculinos que excluían a las mujeres o donde las mujeres estaban presentes de manera minoritaria, razón por la cual, hasta la fecha, su aporte pasa desapercibido”<sup>590</sup>.

Situadas en ese panorama, las investigaciones sobre VS fueron por mucho tiempo, un tema solo de mujeres y explorado por los hombres. Ejemplos como el expuesto por Connelly en un estudio donde la violencia es analizada desde corrientes epistemológicas como el positivismo y el constructivismo, afirma que “era frecuente que los etnógrafos sólo entrevistaran a los hombres en las sociedades en las cuales hacían trabajo de campo, y a partir de esos datos construían sus monografías, que desde los setenta fueron criticadas por su androcentrismo”<sup>591</sup>.

También se encuentra, por ejemplo, la obra de Vigarello, que nos ilustra desde su investigación histórica acerca de la violación, con algunos de los testimonios judiciales de procesos y sentencias de violaciones a mujeres a lo largo de la historia francesa, que demuestran como la credibilidad de la mujer estaba condicionada a los testimonios de los

---

<sup>588</sup> Ibid, 126.

<sup>589</sup> Hekman, Susan. "Truth and method: Feminist standpoint theory revisited." *Signs: Journal of Women in Culture and Society* 22.2 (1997): 342

<sup>590</sup> Hekman, Susan. "Truth and method: Feminist standpoint theory revisited." *Signs: Journal of Women in Culture and Society* 22.2 (1997): 341-365.

<sup>591</sup> Goldsmithli Connelly, Mary. “Estudios de la mujer: debates metodológicos y epistemológicos”. *Sociológica México*, vol. 33 (2015): 25-44.

hombres, a la discrecionalidad del Juez y cualquier sospecha en lo argumentado podría incluso hasta llevarlas a la cárcel<sup>592</sup>.

Por este y múltiples ejemplos más, las mujeres, a partir de los 70, denominan lo que ya se venía fraguando como Epistemología Feminista, debido a que “nunca se les había dado a las mujeres una voz de autoridad al establecer su propia condición o la de los demás o al afirmar como deberían cambiarse tales condiciones”<sup>593</sup>. En ese sentido, autoras como Alcoff y Potter, demuestran que “el término nos permite identificar la trayectoria histórica del trabajo actual y ver de dónde venimos”<sup>594</sup>.

Tal como expresa Graf, se entiende que “la epistemología feminista aborda de qué manera categorías como el género influye en las concepciones del conocimiento, en la persona que conoce y en las prácticas de investigar, preguntar y justificar”<sup>595</sup>.

Es por ello que, al ser críticos con las epistemologías tradicionales, se observa que el argumento de objetividad queda refutado cuando éste se fundamenta en reglas rigurosas y métodos de investigación habituales ya que “dejan sin examinar el contexto, el descubrimiento que se considera no racional y por lo tanto, es exento de análisis al olvidar identificar los deseos, intereses y valores sociales que han dado forma a las ciencias”<sup>596</sup>.

En ese entendido, la epistemología feminista parte de que si se examinan los fenómenos sociales desde una posición androcentrista, se indica que las suposiciones y valores emergen del grupo de hombres que los vive, socializa y aplica. Esto genera que este grupo dominante sea “epistémicamente limitado” con respecto a otros grupos por razones de discriminación<sup>597</sup>. Es por lo que, diversos puntos de vista que emergen de otros grupos y/o colectivos, permiten comprobar hipótesis e investigar temas desde otros ángulos que enriquecen la solución de problemas sociales y generan conocimiento científico<sup>598</sup>.

Esto tiene repercusión en esta Tesis, al retomar líneas epistemológicas feministas partiendo de la reflexión acerca del cómo lograr resultados y soluciones a diversos y complejos problemas de las personas que han sufrido VS en los conflictos armados con

---

<sup>592</sup> Vigarello, Georges. *Historia de la violación*, .178.

<sup>593</sup> Harding, Sandra. *Ciencia y feminismo*,4.

<sup>594</sup> Alcoff, Linda, y Potter, Elizabeth. *Feminist epistemologies*. Routledge, 2013, 4.

<sup>595</sup> Graf, Norma Blazquez. “Epistemología feminista: temas centrales”. *Género e Sexualidade*, vol.1 (2010): 12

<sup>596</sup> Graf, Norma Blazquez. “Epistemología feminista: temas centrales”, 19

<sup>597</sup> Alcoff, Linda, and Elizabeth Potter, eds. *Feminist epistemologies*. Routledge, 2013. P.3

<sup>598</sup> Alcoff, Linda, and Elizabeth Potter, eds. *Feminist epistemologies*. Routledge, 2013. P.3



especial atención a las mujeres. Así como lo asevera Kirby, “la afirmación de que hay múltiples modos feministas en el estudio de la violencia sexual durante la guerra intenta mostrar cómo estas formas de explicación crítica se diferencian entre sí y cómo sus suposiciones respectivas dan lugar a tipos particulares de historias sobre la violación en la guerra”<sup>599</sup>.

Tal como es expuesto por esta autora, se destaca históricamente que este tipo de concepción del conocimiento que emerge de las mujeres se presenta con aplicación de postulados que representan la esencia de las experiencias feministas<sup>600</sup>. Por ende, se toma en consideración que al referirse a la violencia es necesario plantarse desde estas posturas y no desde el punto de vista machista ya que esta, toma en consideración que solo observando los problemas de mujeres a través de estas pueden ser abordados de forma más asertiva<sup>601</sup>.

En este punto, según la autora, se plantean como posibles tres corrientes occidentalistas como la del Empirismo Feminista; El Punto de Vista Feminista y el Postmodernismo Feminista, que se entenderán complementarias<sup>602</sup>. Por eso, se toma en consideración lo argumentado por Gargallo, cuando dice que “la práctica feminista debe tender a la transformación de las mentalidades que permiten los abusos del poder de género (en el sentido de poder social y simbólicamente asignado a los roles masculinos)”<sup>603</sup>.

En concordancia con lo descrito, debido al examen de un contexto de VS como el colombiano, con un conflicto armado con sus propios matices, emergen otras corrientes como la del feminismo latinoamericano. Partiendo de ellas, se dará a continuación una breve explicación de las líneas epistemológicas para justificar el por qué para la violencia sexual en escenarios de conflicto resulta pertinente una mirada feminista en contextos específicos, sin llegar a un relativismo que sesgue los resultados de investigación que se pretenden presentar como génesis estructural del aporte al conocimiento científico en este área.

---

<sup>599</sup> Kirby, Paul. "How is rape a weapon of war? Feminist International Relations, modes of critical explanation and the study of wartime sexual violence." *European Journal of International Relations* 19.4 (2013): 802.

<sup>600</sup> Harding, Sandra. *Ciencia y feminismo*, 124

<sup>601</sup> Harding, Sandra. *Ciencia y feminismo*, 123

<sup>602</sup> Harding, Sandra. *Ciencia y feminismo*, 123

<sup>603</sup> Gargallo, Francesca. *Ideas feministas latinoamericanas*. Universidad de la Ciudad de México, 2004.p.149

### 3.1.1. Breve recorrido por las distintas corrientes epistemológicas feministas

Históricamente, se visibiliza la VS como un acto sin consentimiento que afecta la integridad sexual del individuo que lo padece, donde el escenario de conflicto afecta con mayor severidad a las mujeres por la construcción social de la llamada “feminidad”, que concibe a la mujer como un sujeto pasivo, vulnerable y reprimido<sup>604</sup>.

Por ello, las mujeres que han tenido el infortunio de padecer la violencia sexual en escenarios de conflicto armado, como se viene mostrando a lo largo de este texto, son consideradas dentro de los esquemas tradicionales como un medio para la consecución de metas dentro de las dinámicas del conflicto<sup>605</sup>.

En ese caso, el feminismo y sus exponentes argumentan que la VS debe ser abordada con una perspectiva integral donde se tenga en cuenta que las mujeres sufren daños por la VS y que éstos deben ser reparados<sup>606</sup>. Aunque existan distintas corrientes feministas y sus propuestas no sean del todo uniformes en cuanto a sus postulados, todos coinciden en que la VS no es un simple ítem tangencial sino un tema principal que hay que abordar<sup>607</sup>.

Por ende, el feminismo, como “la teoría y práctica política articulada por mujeres que tras analizar la realidad en la que viven toman conciencia de las discriminaciones que sufre por la única razón de ser mujeres y deciden organizarse para acabar con ellas”<sup>608</sup>, señala la necesidad de tomar como eje principal los testimonios de violencia sexual sin silenciarlos<sup>609</sup>.

Bajo ese entendido, resulta necesario abordar el feminismo como marco interpretativo y estrategia de justificación del conocimiento para ofrecer una explicación

---

<sup>604</sup> Ibid.

<sup>605</sup> Banwell, Stacy. "Rape and sexual violence in the Democratic Republic of Congo: A case study of gender-based violence." *Journal of Gender Studies*, núm.1, vol.23 (2014): 45-58.

<sup>606</sup> Puede consultarse al respecto: Rubio Marín, Ruth, *The gender of reparations: unsettling sexual hierarchies while redressing human rights violations*, 30 y ss ; Guillerot, Julie. "Reparaciones con perspectiva de género." *Consultoría para la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. México: OACNUDH. Recuperado en* (2009); Melo, María Eugenia Ibarra. "Mujeres, verdad, justicia y reparación en Colombia." *Universitas humanística* 72 (2011): 247-273; Durbach, Andrea, and Louise Chappell. "Leaving behind the age of impunity: Victims of gender violence and the promise of reparations." *International Feminist Journal of Politics* 16.4 (2014): 543-562.

<sup>607</sup> Gruber, Aya. "Rape, feminism, and the war on crime." *Wash. L. Rev.* 84 (2009): 581.

<sup>608</sup> Varela, Nuria. *Feminismo para principiantes*. B de books, 2014.p.14.

<sup>609</sup> Robson, Kathryn. "The subject of rape: Feminist discourses on rape and violability in contemporary France." *French Cultural Studies* 26.1 (2015): 45-55.

del por qué hay que repensar las estructuras que generan conceptualizaciones tradicionales que influyen en las formas en que se repara a las mujeres que sufren por la VS en el conflicto armado.

Estas concepciones tradicionales “crean la falsa impresión de que las mujeres se han limitado a ser víctimas, que nunca han protestado con éxito, y que no pueden ser agentes sociales eficaces a favor de sí mismas o de otros”<sup>610</sup>, y giran en torno a la concepción de la víctima de la violación como un sujeto potencialmente violable y silenciado a través de un enfoque en las representaciones de la violabilidad corporal como parte de una estrategia<sup>611</sup>.

Por ende, la estrategia que se pretende exponer en esta Tesis a partir de una mirada feminista tiende a diseñarse con las mujeres, para las mujeres y no sobre las mujeres. Todo con el fin de evitar que la estructuración de las políticas orientadas a prevenir y reparar a las mujeres que sufren por la VS en el conflicto armado siga siendo creada desde la institucionalidad y no desde las mujeres violentadas de forma individual y colectiva.

Estas mujeres, con diversas características sociodemográficas de clase, raza y cultura, frecuentemente son silenciadas e ignoradas al no existir, como dice Vigarello, una mujer universal, o tampoco una sola "experiencia de la mujer" cuando de violencia sexual se trata<sup>612</sup>.

En ese entendido “lo masculino y lo femenino son siempre categorías que se producen y aplican dentro de una clase, una raza y una cultura particulares, en el sentido de que las experiencias, deseos e intereses de mujeres y de hombres difieren en cada clase, raza y cultura. Pero, de la misma manera, clase, raza y cultura son siempre categorías dentro del género, puesto que las experiencias, deseos e intereses de mujeres y hombres difieren precisamente de acuerdo con su clase, raza y cultura”<sup>613</sup>.

De acuerdo con esto, dichas particularidades permiten abordar cambios a favor de las víctimas sobrevivientes abordando como punto de partida otro enfoque diferente al tradicional sin olvidar “que no importan los sectores que conforman el movimiento, sino

---

<sup>610</sup> Harding, Sandra. *Ciencia y feminismo*. Ediciones Morata, 1996, 35.

<sup>611</sup> Robson, Kathryn. "The subject of rape: Feminist discourses on rape and violability in contemporary France." *French Cultural Studies* 26.1 (2015): 45-55.

<sup>612</sup> Vigarello, Georges. *Historia de la violación: siglos XVI-XX*, 78.

<sup>613</sup> Harding, Sandra. *Ciencia y feminismo*. Ediciones Morata, 1996: 40

las ideas que lo atraviesan y lo constituyen y que son estas ideas las que dan coherencia a la actuación feminista, las que sostienen esta actuación precisamente como tal”<sup>614</sup>.

En esa misma línea, Cespedes afirma que “el feminismo en singular es un concepto que reúne un sinnúmero de discursos que, a pesar de sus diferencias de aproximación, fuentes teóricas y categorías de análisis, tienen un punto de partida y un objetivo común: la discriminación de lo femenino respecto de lo masculino y la necesidad de subvertir ese orden de las cosas”<sup>615</sup>. Sin embargo, dado que “ha habido una globalización de las demandas para restringir la violencia de los hombres contra las mujeres mediante el uso de la regulación legal y para proporcionar recursos a las mujeres que han sufrido violencia”<sup>616</sup>, no se puede desconocer que cada contexto posee unos orígenes que llevan a que esa dominación y opresión tenga rasgos característicos que pueden llegar en algunos puntos a ser coincidentes.

En ese caso, se observa que esta línea epistemológica no solo toma como única categoría el género sino indaga a través de varias que se complementan. En ese orden, Alcoff y Potter, argumentan que “encontramos un fuerte consenso entre las feministas de hoy en día que tanto el término como el proyecto del feminismo en sí, deben ser más inclusivos de lo que permite un enfoque sólo en el género. Si el feminismo quiere liberar a las mujeres debe abordar todas las formas de dominación porque las mujeres ocupan los rangos de cada categoría de personas oprimidas”<sup>617</sup>.

En ese orden de ideas, la epistemología feminista da además un giro en las investigaciones planteándolas a partir de la relación sujeto- sujeto, que sea capaz de mirar los problemas investigativos integrando, en su génesis y resolución, categorías que serán, como lo son: el género, la diferencia y la interseccionalidad<sup>618</sup>. Esto considerando que las mujeres “al no tener un sólo método, exclusivo de su género, para crear el conocimiento”<sup>619</sup>, pueden emplear diversos caminos para aportar a la solución de

<sup>614</sup> Gargallo, Francesca. *Ideas feministas latinoamericanas*. Universidad de la Ciudad de México, 2004.p.36

<sup>615</sup> Céspedes Báez, Lina María y Prieto Ríos, Enrique. *Utopía u oportunidad fallida: análisis crítico del Acuerdo de Paz*, 126.

<sup>616</sup> Khan, Ummni. "Let's Get It on: Some Reflections on Sex-Positive Feminism." *Women's Rts. L. Rep.* 38 (2016): 346.

<sup>617</sup> Alcoff, Linda, and Elizabeth Potter, eds. *Feminist epistemologies*. Routledge, 2013. P.3

<sup>618</sup> Al respecto puede consultarse: Campbell, Kirsten. "The promise of feminist reflexivities: Developing Donna Haraway's project for feminist science studies." *Hypatia* 19.1 (2004): 162-182; Collins, Patricia Hill, and Sirma Bilge. *Intersectionality*. John Wiley & Sons, 2020, Crenshaw, Kimberlé W. *On intersectionality: Essential writings*. The New Press, 2017; Serret, Estela. "Igualdad y diferencia: la falsa dicotomía de la teoría y la política feministas." *Debate Feminista* 52 (2016): 18-33.

<sup>619</sup> Collins, Patricia Hill, and Sirma Bilge. *Intersectionality*. John Wiley & Sons, 2020, p. 31

problemas y generar conocimiento científico. Esto con el fin de que cuando se visualice la violencia sexual dentro de los conflictos armados, se realice de forma integral sin desconocer las múltiples categorías analíticas que necesitan ser examinadas.

Es allí donde comienza la estructuración del análisis más allá del mero fenómeno jurídico que despliega la VS dentro del conflicto armado; identificando a las mujeres como sujetos con múltiples identidades y no como meros objetos, encasilladas en categorías institucionales rígidas que no permiten lograr una reparación integral.

Por tanto, se explicará brevemente en que consiste cada corriente con el fin de destacar la importancia de una mirada feminista en las investigaciones sobre este tema. Asimismo, dado que el contexto específico de estudio en esta Tesis es latinoamericano y sus feministas propenden por la defensa de su propia epistemología, se destacarán los estudios que emergen de estas dinámicas locales. Sin embargo, se tomarán los puntos convergentes y objetivos comunes de las corrientes que luchan contra la violencia sexual.

Debido a esto, se pretende sentar las bases a una estrategia que re-estructura el conocimiento a través la mirada feminista de la VS dentro del conflicto armado pensando en la víctima sobreviviente y su reparación.

### **3.1.1.1. Empirismo Feminista o Feminist Empirism**

Esta corriente epistemológica transmite la preocupación “por la participación equitativa de los géneros en las negociaciones y los procedimientos relativos a la selección de problemas y validación de conocimientos”<sup>620</sup>. Parte de la observación de sesgos sociales que pueden ser discriminatorios pero subsanados siguiendo los mismos métodos de investigación al distinguir “la mala ciencia del mal uso de la ciencia”<sup>621</sup>.

Según esta línea, se debe observar que los objetivos, valores cognitivos y otras suposiciones de fondo de un contexto de investigación dependen de factores sociales, éticos o valores políticos locales que deben ser incorporados por ejemplo al método científico para superar los sesgos sociales limitados.

---

<sup>620</sup> Ostrovsky, A. (2009). *Epistemologías feministas: pensando en aportes a la reflexión crítica de la disciplina*. II Congreso Internacional de Investigación, 2 al 14 de noviembre de 2019, La Plata, Argentina. Disponible en: [http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab\\_eventos/ev.12044/ev.12044.pdf](http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.12044/ev.12044.pdf)

<sup>621</sup> Harding, Sandra G., ed. *The feminist standpoint theory reader: Intellectual and political controversies*. Psychology Press, 2004, 24.

Autoras como Ashton y McKenna, argumentan que “la epistemología feminista puede considerarse como la rama de la epistemología social que investiga la influencia de las concepciones y normas socialmente construidas sobre los intereses y las experiencias de género y el género en la producción de conocimiento”<sup>622</sup>. Asimismo, Longino, argumenta que el reto se presenta en el desarrollo de los criterios para mejorar los objetivos cognitivos donde el conjunto completo de normas reguladoras, incluidas las virtudes teóricas que guían las prácticas epistémicas de una comunidad podrían llamarse su epistemología, y esta sería local ya que se le da primacía al contexto<sup>623</sup>.

Por su parte, Amat, Estivalis, y Martí, aducen que “el empirismo feminista apuesta por reformular el método científico a partir del reconocimiento de una pluralidad de perspectivas, la validez teórica desde el consenso y de la eliminación de sesgos androcéntricos y patriarcales en las definiciones de racionalidad y objetividad”<sup>624</sup>.

Así pues, el empirismo feminista parte de que el conocimiento es concebido como algo social desligándose de la idea de “sujeto con conocimiento único” e individual<sup>625</sup>. En ese entendido, se concibe la ciencia desde el grupo y para el grupo.

No obstante, esta línea epistemológica se caracteriza por negar la existencia de un solo conjunto de criterios para la elección de la teoría o valores cognitivos que se apliquen en cada contexto de investigación<sup>626</sup>. Esto quiere decir que, según el contextualismo, los objetivos de la ciencia dependen del contexto de la investigación, los métodos y los criterios con los que se observe el objeto de análisis.

Es por esta negación que autoras como Harding argumentan que si bien “el sexismo y el androcentrismo son componentes de “sesgos sociales corregibles” y es más probable que las mujeres (o las feministas y los feministas, sean mujeres u hombres), como grupo, obtengan más resultados no sesgados y objetivos que los hombres (o los no feministas y las no feministas), como grupo; el empirismo insiste en que sus normas metodológicas solo se aplican en el contexto de la justificación (comprobación de

<sup>622</sup> Ashton, Natalie Alana, and Robin McKenna. "Situating feminist epistemology." *Episteme* 17 (1): 28-47. (2020), 38.

<sup>623</sup> Longino, Helen E. "Feminist standpoint theory and the problems of knowledge." (1993): 201-212.

<sup>624</sup> Amat, Andrea Francisco, María Lozano Estivalis, and Joan Traver Martí. "Paradojas epistemológicas de una investigación participativa feminista." *Asparkia: investigació feminista* 26 (2015): 156-169.

<sup>625</sup> Ostrovsky, A. (2009). *Epistemologías feministas: pensando en aportes a la reflexión crítica de la disciplina*. II Congreso Internacional de Investigación, 2 al 14 de noviembre de 2019, La Plata, Argentina. Disponible en: [http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab\\_eventos/ev.12044/ev.12044.pdf](http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.12044/ev.12044.pdf)

<sup>626</sup> Intemann, Kristen. "25 years of feminist empiricism and standpoint theory: Where are we now?." *Hypatia* 25.4 (2010): 778-796.

hipótesis y la interpretación de los datos) y no en el contextos del descubrimiento cuando se identifican y definen los problemas”<sup>627</sup>.

Esto tiene repercusión en el análisis de la VS cuando se evalúa el contexto de los conflictos armados y sus diversas mutaciones para comprobar causas y efectos de la violencia exacerbada que se vive en este tipo de escenarios.

Estudios como los de Swaine, donde se explica la variación más allá de la violencia sexualizada estratégica empleada en algunos conflictos como el de Liberia, Irlanda del Norte y Timor-Oriental, evidencian que este tipo de investigaciones resultan más apropiadas con una mirada feminista, por los sesgos que puede conllevar el tener una visión meramente androcéntrica<sup>628</sup>.

Sin embargo, estudios como los de Robson evidencian que las feministas, cuando abordan los estudios sobre la VS deberían plantear sus problemas de investigación explorando otras categorías como el género que son diversas a las evaluadas comúnmente tales como la estrategia, la pena, la prevención y la culpabilidad que permean generalmente los estudios donde la violencia sexual es el objeto principal de la investigación<sup>629</sup>.

Por lo cual, lo argumentado por Harding deja en evidencia que esta línea epistemológica, si bien no se percata de lo que implica que la escogencia, identificación y definición del problema de investigación inicie con esa mirada feminista, sí indica que dentro de su proceso metodológico se considere la mirada de las feministas de las hipótesis y resultados, logrando alcanzar mayor objetividad en la ciencia<sup>630</sup>. Esto permite abordar la violencia sexual desde otras categorías para poder plantear estrategias que funcionen de forma integral en su prevención, castigo y reparación.

Ahora bien, planteado ese escenario, es pertinente aclarar que, si bien el contexto influye en las estrategias que se llevan a cabo en las prácticas de la violencia sexual en los conflictos armados, no es el único factor que la determina como tal. Así pues, como lo afirma Wood, en algunos conflictos armados no se presentan patrones de violencia

---

<sup>627</sup> Harding, Sandra G., ed. *The feminist standpoint theory reader: Intellectual and political controversies*. Psychology Press, 2004: 23-24.

<sup>628</sup> Swaine, Aisling. "Beyond strategic rape and between the public and private: Violence against women in armed conflict." *Hum. Rts. Q.* 37 (2015): 755

<sup>629</sup> Robson, Kathryn. "The subject of rape: Feminist discourses on rape and violability in contemporary France." *French Cultural Studies* 26.1 (2015): 45-55.

<sup>630</sup> Harding, Sandra. "¿Existe un método feminista." *Debates en torno a una metodología feminista* (1998): 13.

sexual por parte de grupos insurgentes como en el caso de El Salvador, por lo cual no se debe generalizar el factor contexto como el determinante para que se cometan este tipo de delitos en escenarios bélicos<sup>631</sup>. Lo que si podemos apreciar es que, aunque “la violación no es inevitable en la guerra”<sup>632</sup> y es la mujer con características reconocidas en su raza, sexo y género, la que principalmente es sometida a actos considerados dentro del conglomerado de delitos de VS.

### 3.1.1.2. El Punto de Vista Feminista o Feminist Standpoint

Esta corriente toma en consideración que “la situación de las mujeres les otorga el privilegio epistemológico en un mundo dominado por los hombres, un privilegio derivado de que, desde su posición marginal, las mujeres pueden ver lo que a los hombres se les escapa desde sus posiciones de poder”<sup>633</sup>.

Con esta mirada se comienza a promover “la transformación de la perspectiva de las mujeres en un punto de vista con un fundamento moral y científicamente preferible, para nuestras interpretaciones y explicaciones de la naturaleza y la vida social”<sup>634</sup>. Es así como sus defensoras argumentan que los sujetos tienen diferentes ubicaciones sociales que vienen con experiencias diferentes y las de las mujeres, las privilegian.

Autores como Pimmer, analizan que “más que de una teoría en sentido estricto, se trata de observar diferentes posturas epistemológicas que reivindican no sólo que todo conocimiento está situado en un contexto social, sino que ciertas posiciones dentro de ese contexto permiten generar un conocimiento más adecuado y objetivo de la respectiva estructura y las relaciones sociales”<sup>635</sup>. Por su parte, Smith, propone crear un método científico para las mujeres que no las transforme en meros objetos de estudio, sino que en

---

<sup>631</sup> Wood, Elisabeth Jean. "Armed groups and sexual violence: When is wartime rape rare?." *Politics & Society* 37.1 (2009): 153

<sup>632</sup> Wood, Elisabeth Jean. "Armed groups and sexual violence: When is wartime rape rare?." *Politics & Society* 37.1 (2009): 132

<sup>633</sup> Guzmán, Maricela, and Augusto Pérez. "La teoría de género y su principio de demarcación científica." *Cinta de Moebio. Revista de Epistemología de Ciencias Sociales* 30 (2007), p.4

<sup>634</sup> Harding, Sandra. "¿Existe un método feminista." *Debates en torno a una metodología feminista* (1998): 13.

<sup>635</sup> Pimmer, Stefan. "El pensamiento y su lugar: consideraciones epistemológicas en torno al punto de vista feminista y el pensamiento fronterizo." *Tabula Rasa* 27 (2017): 280.



sus procesos investigativos mantenga al sujeto como protagonista y como el que experimenta la realidad que observa<sup>636</sup>.

Rose por su parte, resalta los movimientos activistas de mujeres en el cambio en la ciencia al plantear una “metodología feminista que busque la unión de formas subjetivas y objetivas de conocer el mundo”<sup>637</sup>. Asimismo, Hartsock cuestiona la idea relativa a las características de ser mujer como variable única para concebir una ciencia feminista adicionando “la lucha política y la teoría de la ciencia feminista” como posibles variables para contribuir a esta teoría sucesora<sup>638</sup>.

Así por esa línea, Harding describe en sus estudios sobre la materia, que las características de esta línea epistemológica comienzan en “la actividad generalizada y la experiencia social”<sup>639</sup>, lo cual implica que las características distintivas de la situación de las mujeres en una sociedad estratificada por el género se estén utilizando como recursos en la nueva investigación feminista. Esto implica que estos recursos “que no son utilizados por los investigadores convencionales, sean los que permitan al feminismo producir descripciones empíricamente más precisas y explicaciones teóricamente más ricas que la investigación convencional”<sup>640</sup>.

Además, fundamenta que, si bien las diversas líneas epistemológicas tienen posturas y temas específicos en sus agendas en pro de la ciencia, estas deben entenderse complementarias más que contradictorias debido a su lucha por la inclusión de una mirada feminista dentro del conocimiento. Por estas argumentaciones se define el término de la línea epistemológica como punto de vista al determinar que tomarlo “sugiere una perspectiva real de las mujeres: lo que de hecho no se puede ver”<sup>641</sup>.

Esto implica que, si bien las experiencias de las mujeres son valiosas para comenzar a explorar un tema de investigación, se debe insistir en una ubicación objetiva de las vidas de estas mujeres como el lugar donde debe comenzar la investigación feminista. En ese sentido, es importante valorar las experiencias y el discurso de las mujeres dado que el punto de vista feminista da una ventaja epistémica siempre y cuando

---

<sup>636</sup> Smith, Dorothy E. *The experienced world as problematic: A feminist method*. University of Saskatchewan, 1981, p1.

<sup>637</sup> Rose, Hilary. "Hand, brain, and heart: A feminist epistemology for the natural sciences." *Signs: Journal of Women in Culture and Society* 9.1 (1983): 87.

<sup>638</sup> Hartsock, Nancy C.M. *The feminist standpoint revisited, and other essays*. Routledge, 1998.

<sup>639</sup> Harding, Sandra. *Ciencia y feminismo*. Ediciones Morata, 1996: p.24

<sup>640</sup> Harding, Sandra. *Ciencia y feminismo*. Ediciones Morata, 1996: p.119

<sup>641</sup> Harding, Sandra. *Ciencia y feminismo*, 123

se tenga la capacidad de identificar un conjunto particular de valores que juegan un papel en la producción de conocimiento<sup>642</sup>.

Es en ese punto que la violencia sexual cobra valor como objeto investigado al evidenciar que lo que se busca con un punto de vista feminista es obtener que de las experiencias y prácticas de las mujeres emerjan los postulados que estructuren las bases para erradicar este flagelo y así, crear mejores condiciones para la víctima de violencia sexual basadas en la lucha política que ofrecen los movimientos feministas<sup>643</sup>.

Es allí donde esta línea epistemológica fundamenta la ciencia feminista como aquella “teoría de la actividad generalizada y de la experiencia social”<sup>644</sup>. Por ello, el punto de vista feminista como corriente epistemológica es “dominante” en investigaciones que toman como objeto de estudio la violencia sexual<sup>645</sup>.

Estudios como los llevados a cabo por Turshen, acerca de la violencia sexual como violencia política y económica, denotan el cambio que quiere introducir el punto de vista feminista al visibilizar en las prácticas de los conflictos en el África, cómo la violación y el abuso sexual de mujeres durante los conflictos fueron estrategias sistemáticas y deliberadas de las guerras con un componente económico y político, que requieren ser considerados y analizados con otros matices que solo la mirada feminista proporciona<sup>646</sup>.

En ese sentido, investigaciones como la de Banwell toman en consideración esta postura epistemológica, al indagar sobre el caso de violencia sexual en República Democrática del Congo, y estudiar el nivel de violencia macro, meso y micro en este

---

<sup>642</sup> Harding, Sandra. *Ciencia y feminismo*, 123 -124.

<sup>643</sup>Múltiples investigaciones siguen implícitamente este punto de vista en sus investigaciones sobre violencia sexual. Para profundizar puede consultarse: Kelly, L. (1988). How women define their experiences of violence; Moser, C. N., & Clark, F. (Eds.). (2001). Victims, perpetrators or actors?: Gender, armed conflict and political violence; Palgrave Macmillan; Menon, N. (2001). Embodying the self: Feminism, sexual violence and the law. *Subaltern Studies*, 11, 66-105; Pineau, L. (1989). Date rape: A feminist analysis. *Law and Philosophy*, 8(2), 217-243; Gruber, A. (2009). Rape, feminism, and the war on crime. *Wash. L. Rev.*, 84, 58; Wilderson III, F. B. (2017). Reciprocity and rape: Blackness and the paradox of sexual violence. *Women & Performance: a journal of feminist theory*, 27(1), 104-111; MacKinnon, C. A. (2017). Rape, genocide, and women's human rights. In *Genocide and Human Rights* (pp. 133-144). Routledge; Theidon, K. (2017). Feminist and Human Rights Struggles in Peru: Decolonizing Transitional Justice by Pascha Bueno-Hansen. *Human Rights Quarterly*, 39(3), 769-774.

<sup>644</sup> Harding, Sandra. *Ciencia y feminismo*, 123 -124.

<sup>645</sup> Fawcett, Barbara, et al. *Practice and research in social work: Postmodern feminist perspectives*. Psychology Press, 2000.p.10

<sup>646</sup> Turshen, Meredith, and Clotilde Twagiramariya. "What women do in wartime: Gender and conflict in Africa." (1998).

contexto, recurriendo a lo que ella llama “una lente feminista”<sup>647</sup> para plantear un debate en torno a lo que es necesario para lograr una paz justa en la República Democrática del Congo<sup>648</sup>.

Sin embargo, para abordar la violencia sexual en escenarios de conflicto se requiere de una mirada feminista que logre visibilizar lo que a simple vista no logra verse introduciendo categorías de análisis y no solo una como principal. El género lleva a plantear desde la crítica reflexiones y debates que generan una redirección a los estudios de la violencia sexual, y sus aportes sirven para que conocimiento científico no solo enriquezca la ciencia, sino que sea útil para la creación de estrategias para la erradicación, prevención, y reparación de las personas que hayan padecido de la violencia sexual en estos escenarios.

Es por ello, que han emergido movimientos sociales como el de las mujeres negras, las asiáticas, las africanas o las latinoamericanas, defendiendo puntos de vista contextuales que traen a colación otras categorías -tales como la raza, la etnia, la edad, los niveles de pobreza, las herramientas educativas, el contexto histórico, social, cultural, político o económico, entre otras- que al ser estudiadas añaden herramientas diferentes para encontrar una salida a los problemas a los que se ven enfrentadas.

### **3.1.1.3. Feminismo Posmoderno o Postmodernism Feminist**

Esta nueva corriente “plantea la existencia de múltiples puntos de vista atravesados por variables de género, etnia, religión, posición social, entre otras; desplazando así, la idea del punto de vista por una “mirada desde aquí y ahora” dado que “la adscripción a identidades, incluidas las de género, no es monolítica ni estática”<sup>649</sup>.

Investigadoras como Frost y Elichaooff, al relatar la genealogía de este movimiento, han expuesto su génesis en “el feminismo negro o black feminist”<sup>650</sup> caracterizado por construir sus discursos y activismo social al observar que no se

<sup>647</sup> Banwell, Stacy. "Rape and sexual violence in the Democratic Republic of Congo: A case study of gender-based violence." *Journal of Gender Studies* 23.1 (2014): 45-58.

<sup>648</sup> Banwell, Stacy. "Rape and sexual violence in the Democratic Republic of Congo: A case study of gender-based violence." *Journal of Gender Studies* 23.1 (2014): 45.

<sup>649</sup> Amat, Andrea Francisco, María Lozano Estivalis, and Joan Traver Martí. "Paradojas epistemológicas de una investigación participativa feminista." *Asparkia: investigació feminista* 26 (2015): 156.

<sup>650</sup> Frost, Nollaig, and Frauke Elichaooff. "Feminist postmodernism, poststructuralism, and critical theory." *Feminist research practice: A primer* (2014): 42-72.

reconocían todas las mujeres en ese sujeto universal que pretendieron potencializar las teorías occidentales.

Entre tanto condujeron al desarrollo de otras categorías de análisis como la interseccionalidad, la cual será desarrollada a profundidad más adelante; mostrando otra alternativa para “desafiar las relaciones de poder dentro de diferentes dimensiones de identidad en el entrelazamiento”<sup>651</sup>.

En esa línea, al dar una visión de las críticas del postmodernismo al punto de vista feminista, describe que “este enfoque exige la utilización de un fundamento adecuado para investigar las fragmentadas identidades que crea la vida moderna: feminista-negra, socialista-feminista, entre otras, por lo cual las reivindicaciones feministas solo son más aceptables y menos deformantes si se basan en la solidaridad entre estas identidades fragmentadas modernas y entre las políticas que las crean”<sup>652</sup>.

En ese entendido, el postmodernismo feminista busca resaltar las variaciones de las vidas y las identidades de las mujeres para resolver cuestiones como las planteadas por Frost y Elichaooff, donde la identificación y el examen detallado de los múltiples ejes de diferencia que constituyen las identidades de las mujeres, se considera un eje central para dar una visión feminista a los objetos investigados. Por ello, argumentan que “explorar las interacciones entre ejes tales como el género, la sexualidad, la clase, la raza y las capacidades, proporcionan una visión más informada sobre las formas en que la cultura, la historia y la sociedad dan forma a la identidad”<sup>653</sup>.

En ese caso, coinciden con Amat, Estivalis, y Martí en que se “exige utilizar un fundamento adecuado para investigar las fragmentadas identidades que crea la vida moderna”<sup>654</sup>, que en el caso de estudio se centran en la violencia sexual.

Esta corriente expone que en lugar de la existencia de una verdad esencial existen múltiples verdades subjetivas y relativas de la construcción personal que “están

---

<sup>651</sup> Frost, Nollaig, and Frauke Elichaooff. "Feminist postmodernism, poststructuralism, and critical theory." *Feminist research practice: A primer* (2014): 44.

<sup>652</sup> Harding, Sandra G., ed. *The feminist standpoint theory reader: Intellectual and political controversies*. Psychology Press, 2004. P 25

<sup>653</sup>Frost, Nollaig, and Frauke Elichaooff. "Feminist postmodernism, poststructuralism, and critical theory." *Feminist research practice: A primer* (2014): 44.

<sup>654</sup> Amat, Andrea Francisco, María Lozano Estivalis, and Joan Traver Martí. "Paradojas epistemológicas de una investigación participativa feminista." *Asparkia: investigació feminista* 26 (2015): 156-169.

conformadas no sólo por la experiencia subjetiva sino también por lo que está disponible en la sociedad, la cultura, la palabra hablada y escrita<sup>655</sup>.

Por ello, estas autoras argumentan que al evidenciarse la aplicación de normas hegemónicas que consideran a las mujeres como miembros de un grupo con raíces opresoras y determinadoras para la construcción social, se aleja de una categorización binaria a menudo arbitraria y artificial como hombre y mujer; ofreciendo una apertura a las posibilidades para explorar las experiencias y el comportamiento en relación con el contexto.

A su vez, Fawcett, Featherstone, Fook, y Rossiter adicionan al debate la concepción del sujeto como tema central de diferencia entre las demás epistemologías; argumentando que “la mayoría de las/los feministas posmodernos, están preocupados en diversos grados por continuar un proyecto de resistencia a la opresión, sin embargo, difieren en el papel del sujeto en relación con este proyecto”<sup>656</sup>. En ese caso, refutan el concepto de sujeto de la ilustración caracterizado por ser concebidos como “individuos desencarnados e incorpóreos”<sup>657</sup>, siendo el pensamiento feminista el que resalta la importancia de “la interdependencia y la ubicación en la construcción de la subjetividad”<sup>658</sup>.

Bryson, por su parte, destaca que el posmodernismo no sólo enfatiza las diferencias entre mujeres y los consecuentes peligros de generalizar sobre su situación, sino también cuestiona la suposición subyacente común a todas las feministas modernas sobre hablar de mujeres y hombres en absoluto. Así, “destruye la base ontológica de cualquier aseveración sobre las mujeres ya que los mismos términos hombre y mujer no son referencias estables a los fenómenos del mundo real sino categorías artificiales y fluidas de significado que deberían ser cuestionadas”<sup>659</sup>.

Además, en el postmodernismo feminista “tratan de hacer una crítica social, sin basarse en la filosofía, con el objetivo de que la crítica surja libremente y sin ninguna

---

<sup>655</sup> Frost, Nollaig, and Frauke Elichao. "Feminist postmodernism, poststructuralism, and critical theory." *Feminist research practice: A primer* (2014): 44.

<sup>656</sup> Fawcett, Barbara, et al. *Practice and research in social work: Postmodern feminist perspectives*. Psychology Press, 2000. 10.

<sup>657</sup> Fawcett, Barbara, et al. *Practice and research in social work: Postmodern feminist perspectives*, 14.

<sup>658</sup> Fawcett, Barbara, et al. *Practice and research in social work: Postmodern feminist perspectives*, 14.

<sup>659</sup> Blakeley, Georgina, and Valerie Bryson, eds. *The impact of feminism on political concepts and debates*. Manchester University Press, 2007, 113.

perspectiva teórica universal, resultando ser una crítica más pragmática”<sup>660</sup>. Guillén, al hacer un recuento del posmodernismo feminista, aduce que “para las feministas posmodernas, el feminismo replicó los mismos errores de la ciencia masculina en tanto impulsaron el desarrollo de principios universales y esencialistas que representaban las voces únicamente de las mujeres blancas occidentales, burguesas, heterosexuales y cristianas. Fallaron al no reconocer la diversidad de las experiencias de las mujeres, y se buscó explicaciones causales de la opresión de las mujeres universales”<sup>661</sup>.

En esa línea, diversas investigaciones con vestigios de este pensamiento han abordado la violencia en el conflicto desde las minorías sexuales para contribuir a la apertura de debates que conciban dentro de sus análisis sobre identidades diversas a las binarias (hombre/mujer). Autoras como Moore y Barner, al revisar la literatura de las minorías sexuales en zonas de conflicto e inspeccionar la literatura universal acerca de los derechos humanos, los crímenes de guerra, los efectos psicosociales de la guerra y la violencia sexual, resaltan como las definiciones de violencia sexual en organismos internacionales crean exclusión de las múltiples sexualidades de las personas, traducidos en muchos casos en invisibilidad, al existir actos de violencia contra población LGBTI<sup>662</sup>.

Consecuentemente, feministas como Butler, plantean que el género surge como “el aparato a través del cual tiene lugar la producción y la normalización de lo masculino y lo femenino junto con las formas interjusticiales, hormonales, cromosómicas, psíquicas y performativas”<sup>663</sup>, que sirven para atribuir funciones construidas o estructurales que exacerban la violencia contra la mujer en los diferentes escenarios bélicos.

No obstante, esto no solo ocurre en el caso de la población LGTBI, sino en diversos colectivos como lo son las comunidades indígenas en medio de sus dinámicas bélicas. Esto lo argumentan, por ejemplo, autoras como Handrahan, al estudiar las relaciones de etnia con género y conflicto donde se problematiza las complejidades de las

---

<sup>660</sup> Guillén, Nancy Piedra. "Feminismo y postmodernidad: entre el ser para sí o el ser para los otros." *Revista de Ciencias Sociales (Cr)* 4.102 (2003): 43-55.

<sup>661</sup> Guillén, Nancy Piedra. "Feminismo y postmodernidad: entre el ser para sí o el ser para los otros." *Revista de Ciencias Sociales (Cr)* 4.102 (2003): 43-55.

<sup>662</sup> Moore, Melinda W., and John R. Barner. "Sexual minorities in conflict zones: A review of the literature." *Aggression and violent behavior* 35 (2017): 33-34.

<sup>663</sup> Judith, Butler. "Deshacer el género." *Editorial Paidós, Barcelona* (2006), 70.

realidades sociales, conceptos de comunidad y se realiza una comprensión de las dinámicas de conflicto y posconflicto<sup>664</sup>.

No obstante, así como argumenta Harding, “esta postura devela sus propios problemas al basar su éxito en la solidaridad de identidades al plantear si podemos permitirnos renunciar al intento de elaborar una única descripción feminista y autentica de la realidad ante las profundas alianzas entre la ciencia y los proyectos sociales sexistas, racista, clasista e imperialista”<sup>665</sup>.

Aunado a lo anterior, la crítica a esta corriente feminista postmoderna radica en que “abandonan el tema justo cuando las mujeres blancas y las personas de color afirman su derecho a ser súbditos o redefinir lo que significa ser un sujeto”<sup>666</sup>. Esto cobra sentido cuando en ciertos contextos de conflicto armado, se entiende superada la lucha feminista al reconocerse institucionalmente con enfoques postmodernos a las víctimas de violencia sexual como población LGBTI, indígenas, entre otras; desconociendo que los efectos de la dominación y la opresión siguen estando de forma estructural. Este punto neurálgico da paso a repensar el planteamiento del conocimiento sobre VS que debe ser integral, en tanto debe tomarse en consideración que importan las/los sujetos de la estructura del conocimiento, cultura, idiosincrasia y su contexto.

#### **3.1.1.4. Feminismo Latinoamericano**

Este movimiento de activismo social y político que pretende luchar por la eliminación de desigualdades de sistemas opresores que se presentan en territorios latinoamericanos, pone en juego las dinámicas locales y globales para estructurar sus teorías y propuestas a favor de las mujeres con diversas identidades. Si bien existen diferentes bifurcaciones del movimiento al admitir enfoques diversos en la concepción de los objetivos de las agendas feministas y su manera de resolución de problemas, Vigoya y Gil, destacan que uno de los aspectos epistemológicos convergentes es el estudio sobre las maneras en que “la dominación, la exclusión y los estereotipos no están anclados en

---

<sup>664</sup> Handrahan, Lori. "Conflict, gender, ethnicity and post-conflict reconstruction." *Security Dialogue* 35.4 (2004): 442.

<sup>665</sup> Harding, Sandra G., ed. *The feminist standpoint theory reader: Intellectual and political controversies*. Psychology Press, 2004, 26.

<sup>666</sup> Moore, Melinda W., and John R. Barner. "Sexual minorities in conflict zones: A review of the literature." *Aggression and violent behavior* 35 (2017): 33-37.

lo local, sino que se encuentran en la interacción de distintas escalas socio espaciales, como son lo local y lo global”<sup>667</sup>.

En ese sentido, el desarrollo del feminismo latinoamericano exterioriza permeaciones en enfoques occidentales tal como lo afirma Barriga cuando aduce que “el feminismo latinoamericano fue quizá el único movimiento que compartió con sus semejantes europeos más rasgos comunes que otras organizaciones de la región: por la composición de sus miembros, por las banderas levantadas y por su constante reformulación del concepto de autonomía”<sup>668</sup>. Asimismo, Gargallo, afirma que “las ideas feministas latinoamericanas han sido doblemente influidas por corrientes feministas y de liberación de las mujeres europeas y estadounidenses, y por la idea latinoamericana de que la liberación es siempre un hecho colectivo, que engendra en el sujeto nuevas formas de verse en relación con otros sujetos”<sup>669</sup>.

Esta relación es explicada por Arriagada como “aquella relación horizontal donde se reconoce a la persona como un ser con potencialidades para promover su condición de calidad de vida. Es aquí donde radica la mayor fortaleza de dicha connotación, puesto que, al reconocer a la persona con todas sus implicaciones intrínsecamente humanas, lo vemos como un ser no sólo capaz de ser un sujeto activo de su propio cambio, sino que lo reconocemos en su dignidad como sujeto de decisiones”<sup>670</sup>.

En ese caso, Fornero expresa que este feminismo se caracteriza por una diversidad de manifestaciones y perspectivas que pretenden transformar sus espacios y reconocerse como sujetos autónomos que pueden relacionarse de manera igualitaria sin que existan relaciones de poder opresivas<sup>671</sup>.

Sin embargo, desde sus primeras manifestaciones hasta nuestros días, se vienen desarrollado diferentes posturas con respecto a sus objetivos principales, encontrando, como diferencia notoria con los movimientos occidentales, que el feminismo latinoamericano desde 1960 encuentra una bifurcación entre “un feminismo de izquierda

---

<sup>667</sup> Viveros Vigoya, M.; Gregorio Gil, C. Sexualidades e interseccionalidad en América Latina, el Caribe y su diáspora. *Revista de Estudios Sociales*, 49: 9-16 (2014). [<http://hdl.handle.net/10481/32440>] p.10

<sup>668</sup> Barrig, Maruja. "Los malestares del feminismo latinoamericano: una nueva lectura." *Ponencia para la reunión sobre Estudios de América Latina, Asociación The Palmer House Hilton, Chicago, Illinois* 24 (1998), p.10

<sup>669</sup> Gargallo, Francesca. *Ideas feministas latinoamericanas*. Universidad de la Ciudad de México, 2004.p.32

<sup>670</sup> Arriagada, Irma. "Dimensiones de la pobreza y políticas desde una perspectiva de género." *Revista de la CEPAL* (2005), p.145

<sup>671</sup> Fornero, Agustina. "Feminismo latinoamericano y procesos de subjetivación política de mujeres líderes indígenas contemporáneas en la provincia de Jujuy." *Studia Politicae* 35 (2015): 91-101.



que profesaba su cercanía con partidos y guerrillas; y un feminismo de mujeres que reivindicaban la más plena autonomía de las organizaciones políticas masculinas y de los sistemas de pensamiento androcéntricos y que, al enfrentamiento con el Estado y con los hombres, anteponían la construcción de relaciones entre mujeres”<sup>672</sup>.

Es así como se reconoce que los orígenes históricos del feminismo latinoamericano, como lo argumenta Gargallo, “impulsan sus formas actuales y sus propósitos colectivos: a) como movimiento libertario que enfrenta el sexismo disparador de la subordinación de las mujeres, típico de la década de los setenta; b) como movimiento social en construcción, que empieza a estructurarse en organismos no gubernamentales y en asociaciones para trabajar con y para las mujeres, en ocasiones presionando al Estado, común en los ochenta; c) como movimiento identitario, organizado desde la diversidad de demandas y de pertenencias de las mujeres, preocupado por su visibilidad y presencia en el espacio público, mayoritario en los noventa”<sup>673</sup>.

Esto lleva a reflexionar en esta Tesis sobre los conflictos armados que se presentaron a lo largo de la historia latinoamericana, que desencadenaron no solo alternativas sociales revolucionarias sino movimientos de mujeres que buscaban salir de sistemas opresivos y de dominación que traen los contextos enunciados. Estos escenarios bélicos agravaron las condiciones de las mujeres que ya venían siendo oprimidas en estructuras sociales, económicas y políticas impuestas; considerándolas como objetos y no como sujetos de derechos.

Además, sus cuerpos eran armas de guerra dentro de estrategias bélicas de los diferentes bandos enfrentados, siendo las mujeres víctimas de violencia sexual<sup>674</sup>, donde “ninguna mujer está exenta del ejercicio de esas relaciones abusivas de poder, de hecho,

---

<sup>672</sup> Fornero, Agustina. "Feminismo latinoamericano y procesos de subjetivación política de mujeres líderes indígenas contemporáneas en la provincia de Jujuy." *Studia Politicae* 35 (2015): 91-101.

<sup>673</sup> Gargallo, Francesca. *Ideas feministas latinoamericanas*. Universidad de la Ciudad de México, 2004, 339

<sup>674</sup> También puede consultarse: Díaz, A. A. (2003). Guerra y vida cotidiana: el caso de las mujeres zapatistas. *Prohistoria: historia, políticas de la historia*, (7), 107-124; Rodríguez, R. P., & Brozovich, M. V. P. (2018). Violencia patriarcal y ritualización. Claves para la comprensión de la desposesión de los cuerpos/territorios de las mujeres en América Latina. *Revista SE-Revista de Ciencias Sociales y Humanas*, 11(11), 163-176; Obregón, M. E. W. (2005). Mujeres en armas: ¿avance ciudadano o subyugación femenina?. *Análisis Político*, 18(54), 63-80; Segato, R. L. (2014). Las nuevas formas de la guerra y el cuerpo de las mujeres. *Sociedade e Estado*, 29(2), 341-371; Sánchez, O. A. (2008). Las violencias contra las mujeres en una sociedad en guerra. Bogotá, Zalaquett, C. (2009). *Chilenas en armas: testimonios e historia de mujeres militares y guerrilleras subversivas*. Catalonia.

los estereotipos, el prejuicio, el sometimiento o la negación que hacen que la violencia sexual cada día sea más utilizada como un instrumento de guerra”<sup>675</sup>.

Autoras como Bartra o Segato, entre otras, manifiestan desde la crítica a los movimientos feministas occidentales cómo el “modelo hegemónico” impuesto, debe dejarse a un lado y partir de una epistemología feminista latinoamericana. Igualmente, siguiendo a Fornero, una de las críticas más relevantes, ha sido que en general “no se ha considerado a las mujeres no blancas, no parte de los saberes de las mujeres indígenas, afrodescendientes, migrantes; ni de sus procesos de resistencia”<sup>676</sup>.

En ese camino, al abordar la violencia sexual en conflictos armados, Segato, una feminista latinoamericana, afirma que “el papel y función asignado al cuerpo femenino o feminizado en las guerras de hoy se delata una rotación o viraje del propio modelo bélico”<sup>677</sup>. Es así como expresa que dada la multiplicidad de mutaciones de los conflictos latinoamericanos “el cuerpo de la mujer es parte esencial y central dentro de las dinámicas asimétricas de conflicto porque son formas de violencia inherente e indisoluble de la dimensión represiva del Estado contra los disidentes y contra los excluidos pobres y no-blancos; de la para-estatalidad propia del accionar bélico de las corporaciones militares privadas; y de la acción de los sicariatos – constituidos por pandillas y maras – que actúan en las barriadas periféricas de las grandes ciudades latinoamericanas – y, posiblemente, en el contexto subterráneo de la interconexión entre todos ellos”<sup>678</sup>.

En ese sentido, al explicar cómo el cuerpo de las mujeres en estos escenarios es “en sí mismo, terreno-territorio de la propia acción bélica”<sup>679</sup> donde “la violación como método, en el nuevo contexto bélico, no es apropiación sino destrucción, es decir, la devastación física y moral de un organismo-pueblo”<sup>680</sup>; pasa de ser considerado solo un factor dentro de la estrategia del conflicto a ser un todo dentro del querer dominante hacia el enemigo. En ese caso “este tipo de violencia resulta poco inteligible, al mismo tiempo

---

<sup>675</sup> Mosquera, Diana Carolina Prado. “La guerra, una batalla que nos trastornó e invisibilizó (lgbt).” *De género y guerra. Nuevos enfoques en los conflictos armados actuales* (2017): 19

<sup>676</sup> Fornero, Agustina. “Feminismo latinoamericano y procesos de subjetivación política de mujeres líderes indígenas contemporáneas en la provincia de Jujuy.” *Studia Politicae* 35 (2015): 91-101.

<sup>677</sup> Segato, R. L. (2016). *La guerra contra las mujeres*. Traficantes de sueños.p.352.

<sup>678</sup> Gargallo, Francesca. *Ideas feministas latinoamericanas*. Universidad de la Ciudad de México, 2004.p.335

<sup>679</sup> Gargallo, Francesca. *Ideas feministas latinoamericanas*. Universidad de la Ciudad de México, 2004.p.339

<sup>680</sup> Gargallo, Francesca. *Ideas feministas latinoamericanas*. Universidad de la Ciudad de México, 2004.p.339

que aquéllos a quienes el mensaje va dirigido lo interpretan de forma automática y sin mediaciones: saben que se trata del poder expresándose por detrás de la crueldad impune”<sup>681</sup>.

Así, para proponer un cambio, enriquecen el debate aduciendo que los cambios en estos escenarios solo pueden suceder de forma gradual, por lo que se hace necesaria la creación de estrategias que deberán contener no solo herramientas encaminadas a diagnosticar y arrojar estados actuales del problema a través de datos estadísticos para demostrar que existe y cuáles son las personas más propensas a sufrirla o que la han sufrido; sino aquellas que resuelvan los meollos originarios del fenómeno para poderlo erradicar.

En ese orden de ideas, Contreras, Both, Guedes & Dartnall, con su investigación sobre la violencia sexual en Latinoamérica y el caribe, muestran que “la evidencia indica que la prevención de la violencia sexual depende de transformar las estructuras jerárquicas de género y las normas sociales hacia modelos más igualitarios de relaciones entre mujeres y hombres. Por ello, las estrategias de prevención centradas en cambiar comportamientos, actitudes y valores son una prioridad en la región”<sup>682</sup>.

En ese caso argumentan que “la violencia sexual no sólo afecta a las víctimas, sino que también tiene consecuencias para los avances socioeconómicos y políticos de la sociedad. Por lo tanto, la violencia sexual debería conceptualizarse como parte de las prioridades de desarrollo de las políticas gubernamentales”<sup>683</sup>.

Por otro lado, Torres dice que “la experiencia latinoamericana muestra escenarios de horror, donde las mujeres han sufrido la violencia de soldados, paramilitares, guerrilleros e integrantes de bandas o pandillas” por lo que “el gran reto es colocar el acento en la violencia sexual y definirla como un problema de derechos humanos”<sup>684</sup>, lográndose al darle prelación a las voces de las víctimas sin considerarlas meros testimonios para que el hecho delictivo pueda ser conocido.

---

<sup>681</sup> Gargallo, Francesca. *Ideas feministas latinoamericanas*. Universidad de la Ciudad de México, 2004,363.

<sup>682</sup> Contreras, Juan Manuel, et al. “Violencia sexual en Latinoamérica y el Caribe: análisis de datos secundarios. Iniciativa de Investigación sobre la Violencia Sexual”,76.

<sup>683</sup> Contreras, Juan Manuel, et al. “Violencia sexual en Latinoamérica y el Caribe: análisis de datos secundarios. Iniciativa de Investigación sobre la Violencia Sexual”,79.

<sup>684</sup> Torres Falcón, Marta. "Entre el silencio y la impunidad: violencia sexual en escenarios de conflicto." *La ventana. Revista de estudios de género* 5.41 (2015):108.

Estas dos investigaciones dan paso al debate clásico de la epistemología feminista latinoamericana al permear el conocimiento a través de “la contingencia política y económica del subcontinente con sus ideas marcando hasta tal punto su origen y desenvolvimiento”<sup>685</sup>. Esto implica que “sus ecos permeen las ideas acerca del papel de las mujeres en la sociedad y se revivan en la separación reciente entre las feministas de lo posible, o institucionalizadas, y las feministas autónomas, o utópicas”<sup>686</sup>.

Este debate sirve para vislumbrar como las diferentes investigaciones sobre violencia sexual en escenarios de conflicto han optado por propuestas que vinculan sus estrategias de prevención, erradicación y castigo a las instituciones estatales materializadas a través de políticas públicas; y por otro aquellas que las desvinculan del Estado optando por los mecanismos autogestionados en pro de los derechos de las personas que han sufrido violencia sexual en ocasión de estos escenarios bélicos.

En ese margen, reafirman la relación sujeto- sujeto enunciada en párrafos anteriores al encontrar dentro de la población latinoamericana mujeres que, además de serlo, son indígenas, afrodescendientes, negras, palenqueras, cimarrones, con discapacidades, entre otras; que llevan a considerar dentro de las políticas públicas o los sistemas autogestionados el estudio del fenómeno, en este caso el de la violencia sexual, a partir de una mirada feminista latinoamericana que identifique a partir de las correlaciones entre ejes tales como el género, la clase y la raza, un enfoque más integral para poner a funcionar mecanismos que tengan en cuenta de donde se viene<sup>687</sup>.

Organizaciones como “Articulación Feminista Marcosur – AFM”<sup>688</sup>, “la Red Global de Mujeres Constructoras de Paz – GNWP”<sup>689</sup>, “Comando Colibrí en México”<sup>690</sup>, “La Casa del Encuentro en Argentina”<sup>691</sup>, “la Organización Fraternal Negra Hondureña”<sup>692</sup>, “Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas”<sup>693</sup>, “la Red Nacional de

---

<sup>685</sup> Segato, R. L. (2016). *La guerra contra las mujeres*. Traficantes de sueños.p.36

<sup>686</sup> Segato, R. L. (2016). *La guerra contra las mujeres*. Traficantes de sueños.p.36

<sup>687</sup> Femenías, María Luisa. "Esbozo de un feminismo latinoamericano." *Revista Estudios Feministas* 15.1 (2007): 11-25.

<sup>688</sup> Puede consultarse su sitio web en: <https://www.mujeresdelsur-afm.org/>

<sup>689</sup> Puede consultarse su sitio web en: <https://gnwp.org/gnwp-regresa-a-colombia-para-reforzar-su-programa-de-la-localizacion-sobre-la-rsnu-1325-y-1820/>

<sup>690</sup> Puede consultarse su sitio web en: <https://luchadoras.mx/comando-colibri-brazo-armado-del-feminismo/>

<sup>691</sup> Puede consultarse su sitio web en: <http://www.lacasadelencuentro.org/>

<sup>692</sup> Puede consultarse su sitio web en: <https://www.escri-net.org/es/miembro/organizacion-fraternal-negra-hondurena-ofraneh>

<sup>693</sup> Puede consultarse su sitio web en: <https://reddesalud.org/>

Mujeres”<sup>694</sup>, “Ruta pacífica de las mujeres”<sup>695</sup> entre muchas más; trabajan desde latinoamericana, por los derechos de las mujeres.

### **3.1.2. Violencia sexual en conflictos armados y epistemología feminista**

Al articular el campo de la ciencia a esta lucha política y social, se descubre como aporte a los estudios de VS en escenarios de conflicto el enfoque epistemológico feminista como alternativa para generar conocimiento científico que ayude no solo a enriquecer el banco de las ciencias sociales en el campo teórico y paradigmático sino para dar soluciones efectivas para sancionar, erradicar, prevenir y reparar los daños ocasionados a las mujeres.

Es allí donde la caracterización de cuerpos sexuados, la autonomía de las mujeres y el contexto bélico latinoamericano diferenciado del estudio permite transitar por las diversas corrientes que serán expuestas a lo largo de estos apartados. El error institucional al abordar la VS en escenarios de conflicto consiste en clasificar las experiencias creyéndolas universales utilizando categorías homogeneizadoras que surgen de la opresión y la dominación que se exagera en los escenarios bélicos.

Es el caso, por ejemplo, de conflictos armados como el llevado a cabo en El Salvador, en Guatemala y en Colombia, que difieren de las dinámicas bélicas de otros países que también contemplan dentro de sus estrategias la VS contra las mujeres. Las experiencias de las mujeres latinoamericanas requieren de la mirada feminista ya que permiten comprender de qué manera el carácter universalizante y binario con el que se ha interpretado el género requiere indagar las correlaciones entre ejes distintos y no solo centrados únicamente en el género.

Es por ello por lo que se afirma que esta epistemología feminista aporta desde las experiencias de las mujeres una mirada diversa para dar solución a los problemas que acarrea la violencia sexual en escenarios de conflicto proponiendo transformaciones en las estructuras que lo que hacen es seguir perpetuando la condición de víctimas de las mujeres de forma peyorativa y discriminatoria.

---

<sup>694</sup> Puede consultarse su sitio web en: <https://www.rednacionaldemujeres.org/>

<sup>695</sup> Puede consultarse su sitio web en: <https://rutapacifica.org.co/wp/>

Latinoamérica en especial, con la mutación de los diversos escenarios bélicos, requiere plantear conocimientos que ayuden para que los patrones que han hecho que la violencia sexual perdure a pesar de haber terminado el conflicto, se deconstruyan logrando así forjar identidades teniendo en cuenta su historia, su cultura y sus formas de pensar y visualizar sus vidas.

Aquí es donde las entrevistas de las mujeres constituyen un punto clave para la construcción del conocimiento partiendo de la base de víctimas de violencia sexual para conformar el acervo jurídico y político para su investigación, prevención, erradicación y reparación. Las categorías en las que se han encasillado a las mujeres como la raza, la edad o el estrato “han sido configuradas como categorías estables y un constructo conceptual que estratifica las sociedades (diferenciando y subalternizando “lo no-blanco” de “lo blanco”<sup>696</sup>; llevando a que se correlacionen.

En ese caso, Colombia con sus mujeres blancas, negras, afrodescendientes, palenqueras, indígenas, con discapacidades y demás, es el país de Latinoamérica con víctimas de violencia sexual con cifra aproximada de 4'000.000 dentro de los 13'000.000 de víctimas del conflicto armado<sup>697</sup>. Esto lleva a visibilizar la lucha incansable por los movimientos feministas en pro de crear garantías que permitan salir de su estado de victimización institucional y lograr a través de una reparación, la consumación de sus planes de vida.

### 3.1. Justificación de la Estrategia

Debido al panorama de los procesos penales con respecto a la demora para obtener un fallo condenatorio para el victimario y crear la oportunidad procesal para reparar a las víctimas de VS por vía penal, se toma en consideración que la víctima sobreviviente no denuncia el hecho victimizante inmediatamente le ocurre sino mucho después de que sucedió. Tal como se observó en el caso de estudio de esta Tesis, esta realidad aportó indicios acerca de las prácticas de mujeres con apoyo de redes de mujeres, organizaciones

---

Almendra, Javiera Cubillos. "La importancia de la interseccionalidad para la investigación feminista." *Oxímora revista internacional de ética y política* 7 (2015): 130<sup>696</sup>

<sup>697</sup> Unidad para la atención y reparación de víctimas. “Registro Único de Víctimas”. Acceso el 15 de octubre de 2020. <https://www.unidadvictimas.gov.co/es/solicitud-de-inscripcion-en-el-registro-unico-de-victimas/281>

o colectivos que conciben la reparación como causa para la defensa de los derechos de las personas.

Mientras la víctima sobreviviente se decide a denunciar, las mujeres comienzan a compartir sus experiencias con otras mujeres ya sea por empatía, porque se identifican con características similares con otras mujeres como la edad, la pertenecía étnica o raizal, entre otras. Es así como se comienza a forjar lo que será la red primaria de apoyo a la VS de mujeres, en esta estrategia complementaria. Sus procesos comienzan con el primer relato, palabra, llanto que comparten con otros seres humanos que se convierten en confidentes, amigas, colegas y empatizadoras del dolor que padecen. Es con ese acercamiento que las mujeres comienzan sus propios procesos para dar a conocer lo sucedido y buscar verdad, justicia y reparación por la VS que sufrieron y a desarrollar proyectos conjuntos para mejorar las condiciones de vida de cada una de ellas de forma individual y colectiva.

Estos proyectos permiten identificar los planes de vida de las mujeres que fueron afectados por la VS y las acciones que deben reconocerse y ejecutarse para reparar lo reparable, dando paso a la transformación de escenarios que permitan que las mujeres sigan adelante a pesar del acto de VS que las victimizó. Uno de esos objetivos para dar a conocer lo sucedido y obtener justicia es la acción de interponer la denuncia ante los entes judiciales y así lograr que los victimarios sean investigados, condenados y obligados a reparar los perjuicios materiales, inmateriales y de otra índole.

En ese escenario, la estrategia complementaria está orientada a continuar con el camino de la reparación con la puesta en conocimiento de las autoridades judiciales del hecho victimizante, reconociendo dentro del proceso penal el proceso de reparación previo cuya génesis se lleva a cabo por la unión de mujeres.

Esto aportará más garantías a los derechos de las víctimas sobrevivientes reconociendo que sus construcciones acerca de lo que debe o no ser concebido dentro de los daños por VS, serán parte de sus procesos. Eso incluye también a aquellas mujeres que no tienen una red de apoyo previa dándoles la posibilidad de ser parte de las existentes o conformar una nueva la cual deberá ser reconocida dentro de los procesos para comenzar a identificar daños y planes de vida que fueron destruidos, transformados o cambiados por ocasión del hecho que tuvieron que padecer.

Sus redes de apoyo y sus proyectos de reparación serán tomados en cuenta al tomar las medidas necesarias para vincular los procesos colectivos que se fraguen en sus propios círculos de apoyo, organizaciones de mujeres u otros colectivos que se dediquen a la reparación de VS. Esto aportará a la víctima sobreviviente, ya que se comienza a proyectar una estrategia de reparación a las mujeres que sirve no solo a las mujeres, sino también al Estado y a la sociedad debido a la contribución social que la misma puede generar.

Las obligaciones y derechos Estatales de proteger y garantizar a las mujeres espacios libres de violencias, y la relativa a la creación de programas y políticas de reparación de daños por vulneraciones a sus derechos se proyectan en una garantía de cumplimiento con la estrategia, ya que no solo se tendrían indicadores que visibilicen los estados de los procesos sino el compromiso con las víctimas sobrevivientes al establecer mecanismos que hagan efectiva y ágil la reparación desde y para las mujeres.

Su contribución a corto plazo está prevista para lograr generar confianza en el sistema penal, quien hará el seguimiento de las medidas y contribuciones a los procesos de reparación dando aplicación de la perspectiva de género al garantizar que las mujeres serán atendidas “por personas formadas en Derechos Humanos, y enfoque diferencial al igual que todas las instituciones involucradas en la atención a víctimas de violencia sexual harán esfuerzos presupuestales, pedagógicos y administrativos para el cumplimiento de esta obligación”<sup>698</sup>.

Asimismo, el Estado cumplirá a mediano plazo con las garantías procesales que protegen los derechos de las mujeres víctimas sobrevivientes como el derecho a la participación activa en los procesos, “a que se considere su condición de especial vulnerabilidad, atendiendo a su condición etaria, de discapacidad, pertenencia a un grupo étnico, pertenencia a poblaciones discriminadas o a organizaciones sociales o colectivos que son objeto de violencia sociopolítica, en la adopción de medidas de prevención, protección, en garantías para su participación en el proceso judicial y para determinar su reparación”<sup>699</sup>.

---

<sup>698</sup>Congreso de Colombia., ley 1719 de 2014, “Acceso a la Justicia de Víctimas del conflicto armado” Diario oficial No. 49.186, 18 de junio de 2014.

[http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley\\_1719\\_2014.html](http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1719_2014.html)

<sup>699</sup> Ibid. art. 13 No. 11.



También, para las mujeres víctimas sobrevivientes generará a mediano plazo un avance en las medidas de reparación donde estructuren los objetivos de acuerdo con esos planes de vida. Esto ayudará que a largo plazo la reparación cumpla con sus expectativas y logre el propósito de la misma, que es resarcir el daño ocasionado con el delito de VS mientras el sistema penal procede a garantizar en este sistema, el derecho a la justicia, verdad y reparación.

Es por todo lo planteado, que se considera una novedad para los procesos penales el comenzar con la reparación de forma inmediata con la denuncia y adecuar las herramientas judiciales a los procesos de reparación de las víctimas sobrevivientes y no al revés, toda vez que la reparación por vía penal no se adecua a los interés, necesidades y planes de vida de las víctimas sobrevivientes debido a que su objetivo principal es investigar y juzgar victimarios.

### **3.2. Necesidades e intereses de las mujeres con la reparación**

Para establecer lo que es necesario o no para las víctimas de violencia sexual en su reparación se toma en consideración que existen varias teorías planteadas a través de autores que definen lo que se debe considerar como necesidades. En ese sentido, Miller al establecer los principios de la justicia social explica como “las necesidades son planteadas como aquellas condiciones que permiten a las personas llevar una vida mínimamente decente en su sociedad”<sup>700</sup>.

Así argumenta varias posibilidades para plantear las necesidades considerando que “la necesidad se juzga en términos de capacidad para funcionar de diversas maneras, no en términos de la elección de un individuo sobre si ejercer una capacidad particular”<sup>701</sup>. El autor considera que como principio de justicia social debe incorporarse una concepción de la necesidad que no sea meramente idiosincrásica o limitada a aquellos que tienen una visión particular de la buena vida. Por ende, establecer criterios que tengan en cuenta los planes de vida de las mujeres resulta un desafío debido a que si se interpreta en términos subjetivos lo que puede significar una necesidad para una mujer puede que no lo sea para otra. En ese entendido, la precaución en la no confusión de necesidades y deseos se vuelve

---

<sup>700</sup> Miller, David. *Principles of social justice*. Harvard University Press, 1999, 210.

<sup>701</sup> Ibid.

primordial en la estrategia para no crear en las víctimas sobrevivientes una falsa expectativa con el proceso de reparación por vía penal<sup>702</sup>.

Es por eso por lo que para esta estrategia se realizó un acercamiento a una organización de mujeres que trabaja con víctimas de violencia en la ciudad de Popayán-Cauca, llamada Hombres Nuevos y Mujeres Nuevas que hacen sus procesos de reparación visibles a través de técnicas artísticas como la escritura y la pintura. A 20 mujeres que interpusieron denuncia ante el aparato judicial penal por actos de VS en el conflicto armado se les preguntó qué medidas consideraban mínimamente necesarias en sus procesos de reparación.

Dentro de estas medidas referenciaron medidas necesarias para ejecutar sus planes de vida- como lo muestra la Tabla 6. Medidas Mínimamente Necesarias- la indemnización para llevar a cabo sus proyectos productivos, la ayuda psicológica, la obtención de una vivienda segura, una oportunidad laboral, una reparación simbólica y en el ítem de otras, las mujeres mencionaron las medidas de restitución de tierras ya que fueron víctimas de desplazamiento forzado como consecuencia de la VS.

**Tabla 6. Medidas Mínimamente Necesarias**

	Recuento	Porcentaje
Indemnización	20	100,0%
ayuda psicológica	18	90,0%
vivienda segura	18	85,0%
oportunidad laboral	17	84,0%
reparación simbólica	10	50,0%
Otra	8	40,0%

Fuente: Información interpretada el cuestionario aplicado a mujeres víctimas de violencia sexual que pertenecían a la Fundación Hombres Nuevos y Mujeres Nuevas en la ciudad de Popayán. Tabla de elaboración propia (2017).

<sup>702</sup> Ibid.

La percepción de lo que necesitan está relacionado con lo que quieren lograr a corto, mediano y largo plazo después de ocurrido los hechos de VS. Esto amerita un estudio detallado con las víctimas sobrevivientes para identificar cuáles eran sus planes de vida antes de la VS, cómo repercutió en ellos la VS y que necesitan para ser retomados pese al suceso victimizante o cómo aportar si por las consecuencias del acto de VS estos planes se cambiaron o se transformaron.

Es, por ende, que las necesidades en la estrategia serán definidas en relación con el daño causado por la VS, distinguiendo que, aunque no es lo mismo necesidad que daño, se reconoce la interrelación de ambas que en el análisis de VS tienen. En ese entendido se comparte que “para saber cuáles son las necesidades de una persona debemos identificar sus planes de vida, después establecer qué actividades son esenciales para ello y finalmente investigar las condiciones que permiten llevar a cabo esas actividades”<sup>703</sup>.

### **3.3. Objetivos de la Estrategia**

Para determinar el alcance de la estrategia de reparación planteada desde un enfoque feminista se tendrá en cuenta que los derechos de las mujeres víctimas sobrevivientes de la VS en el conflicto armado y las obligaciones y deberes estatales serán la base para establecer lo pretendido con la estrategia.

En ese entendido el objetivo general de la estrategia será:

Complementar el proceso penal de VS en el conflicto armado colombiano que se adelanta ante los entes judiciales especializados de Colombia en su componente de reparación integral.

Para desarrollarlo será necesario establecer distintos objetivos específicos congruentes con el proceso para poder lograrlo en los siguientes términos:

1. Reconocer dentro del proceso penal de VS en el conflicto armado colombiano, los procesos de reparación que surgen de las mujeres con apoyo de redes de mujeres, organizaciones, o quien haga sus veces, como parte de las medidas de reparación integral por vía penal.

---

<sup>703</sup> Ribotta, Silvina. "Necesidades y derechos: un debate no zanjado sobre fundamentación de derechos (consideraciones para personas reales en un mundo real)." *Jurídicas* 5.1 (2008):48.

2. Incorporar al proceso penal de VS en el conflicto armado colombiano la identificación de los planes de vida de las mujeres que son parte de los procesos penales los cuales fueron afectados por la comisión de actos de violencia sexual en el conflicto armado colombiano.
3. Contribuir en el diagnóstico y caracterización del daño de los planes de vida de las mujeres víctimas sobrevivientes por el delito de VS en ocasión al conflicto armado colombiano, en colaboración de las víctimas sobrevivientes, redes de mujeres, organizaciones, o quien haga sus veces.
4. Apoyar las actividades de las mujeres víctimas sobrevivientes que se lleven a cabo dentro de los procesos de reparación reconocidos en el proceso penal, que surgen de las mujeres con soporte de redes de mujeres, organizaciones, o quien haga sus veces.
5. Contribuir al diagnóstico de condiciones para lograr que las víctimas de violencia sexual en el conflicto armado colombiano determinen lo esencial en sus proyectos de vida.

### **3.4. Hacia una ruta complementaria de reparación penal por delitos de violencia sexual en el conflicto armado colombiano**

El recorrido para llevar a cabo la estrategia propuesta está determinado por unos objetivos y distintas acciones para desarrollarlos. Esta ruta establecerá la guía para los funcionarios judiciales, las víctimas sobrevivientes, grupos de apoyo, organizaciones de mujeres, entre otros, que entren a formar parte de las medidas de reparación de la estrategia. Es por ello por lo que se describirán cinco líneas de acción desde un enfoque feminista diseñadas para cumplir con cada uno de los objetivos.

El primero será el reconocimiento de procesos gestionados por mujeres para mujeres que tendrá como propósito vincular los procesos de reparación de las mujeres al proceso penal. El segundo denominado “Transitando por las experiencias de las mujeres” desarrollará el objetivo de identificación de los planes de vida de las mujeres que hacen parte de los procesos penales como víctimas. El tercero enmarcará todo lo relacionado con lo que la violencia sexual dejó en las mujeres tomando en consideración los daños

que dejó la VS en los planes de vida de las mujeres. El cuarto, “de mujeres para mujeres: ejercicios y actividades”, planteará una serie de acciones para llevar a cabo los planes de vida como medio de reparación y, por último, el quinto “materializando mis proyectos”, dará cuenta de cómo realizar el diagnóstico para establecer las condiciones que deben existir para cumplir con esos planes de vida.

### **3.4.1. Reconocimiento de procesos de reparación gestionados de mujeres para las mujeres**

En Colombia concurren grupos de apoyo, organizaciones sociales de mujeres, organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos, que se constituyen legalmente ante diferentes entes gubernamentales con razones sociales encaminadas a la generación de procesos de reparación autogestionados, las cuales a partir de un enfoque feminista converjan para que, a través de la mirada de las mujeres, se observen los problemas a los que se ven enfrentadas por causa de la VS<sup>704</sup>.

Algunas de sus metas están encaminadas a lograr que las víctimas sobrevivientes de violencia sexual denuncien ante las autoridades, a ofrecer ayuda jurídica y sicosocial a las mujeres y sus familias, a crear actividades de reparación simbólica donde interactúen de forma voluntaria en ejercicios educativos, políticos y sociales que permitan reconocer los daños que les dejó la VS y considerar distintas estrategias para repararlos.

Organizaciones como la observada en esta investigación, nacen a la vida jurídica con un acta de constitución que se presenta ante entes estatales como la cámara de comercio, las gobernaciones, entre otras<sup>705</sup>, que las hace visibles debido a que su información básica como persona jurídica puede ser consultada en las bases de datos nacionales. Sus procesos son valiosos entre muchas cosas más, por los escenarios de participación que crean para que las mujeres relaten lo sucedido, consigan estructurar sus

<sup>704</sup> Para consultar los requisitos de registro puede consultarse: *Derecho Colombiano*, [https://www.derechocolombiano.com.co/derecho-civil/requisitos-para-crear-una-fundacion-en-colombia-2018/#:~:text=Es%20necesario%20registrar%20o%20inscribir,Lucro%20de%20la%20Alcald%C3%ADa%20Mayor](https://www.derechocolombiano.com.co/derecho-civil/requisitos-para-crear-una-fundacion-en-colombia-2018/#:~:text=Es%20necesario%20registrar%20o%20inscribir,Lucro%20de%20la%20Alcald%C3%ADa%20Mayor.).

<sup>705</sup> La Cámara de Comercio de Colombia permite realizar los trámites para registrar una organización u otras de distinta índole. Puede consultarse su sitio web oficial: *Cámara de Comercio del Cauca*, <https://www.cccauca.org.co/>

proyectos de vida, y permitan contribuir a procesos colectivos que ayudarán a la generación de cultura para la no violencia contra las mujeres en el conflicto armado.

Planteado esto, la estrategia comenzará a operar una vez se identifique que la víctima sobreviviente vinculada al proceso penal acredite ser partícipe de algún proceso de reparación con apoyo de mujeres, una organización u otra. Para el reconocimiento de estos procesos la Fiscalía deberá en primer lugar, rastrear por localidad, los distintos procesos de reparación que lleven a cabo las mujeres de las denuncias que se encuentren asignadas a cada sede de la Fiscalía General de la Nación con el fin de conformar una base de datos de los procesos de reparación de mujeres.

No obstante, las mujeres parte de los procesos penales son las que deberán solicitar al Fiscal que dé trámite al reconocimiento de su proceso como medida de reparación penal. Una vez recibida esta petición, el ente asignado a cada proceso deberá 1) solicitar a la organización o quien haga sus veces, su registro de existencia y representación o documento equivalente que compruebe que la organización existe, 2) certificación emitida por el o la representante legal de la organización a la que pertenece la mujer, donde se certifique que la mujer vinculada al proceso penal como víctima está inmersa actualmente en los procesos de reparación que se llevan allí, indicando el nombre completo, identificación, fecha de ingreso, descripción individual y colectiva de medidas llevadas a cabo hasta el momento y las que faltan por ejecutar y 3) una descripción del plan anual más reciente que describa los procesos de reparación que se desarrollan en la organización. Con estos datos, el Fiscal procederá a solicitar al Juez competente el reconocimiento de los procesos de reparación de las mujeres víctimas sobrevivientes como parte de las medidas de reparación por vía penal.

Descrita la parte procedimental, se toma en consideración que los procesos pueden comenzar incluso con anterioridad a que las víctimas sobrevivientes denuncien ante las autoridades judiciales. Es por lo que la mujer cuando no esté en ninguna red de apoyo u organización se direccionará a las distintas redes identificadas en la localidad donde se encuentre, siendo la elección de participar en ellas únicamente de la víctima sobreviviente.

En ningún momento podrá obligarse a las mujeres a pertenecer a algún proceso de reparación complementario en ninguna circunstancia debido a que no pueden violarse

los derechos de las mujeres en prelación al cumplimiento de las obligaciones y deberes Estatales de reparar por los perjuicios causados por la VS en el conflicto armado colombiano de forma ágil y eficiente.

Sin embargo, cabe aclarar que si bien lo que se pretende es no coartar o desconocer los procesos de las mujeres en sus núcleos de confianza, esto no subsume de responsabilidad al victimario que eventualmente será condenado por el delito de VS en el conflicto armado, o a los responsables solidarios. Por el contrario, lo que se quiere es comenzar lo más pronto posible a las mujeres a procesos de reparación, entre otras razones, para no generar costos y gastos extra a las víctimas sobrevivientes con el proceso penal.

Asimismo, su reconocimiento tendrá en cuenta que lo que interesa en la reparación no siempre es el resultado sino el proceso que lleva a que las mujeres logren retomar sus planes de vida y ejecutarlos en el pleno ejercicio de sus derechos.

### **3.4.2. Transitando por las experiencias de las mujeres**

Las voces de las víctimas sobrevivientes de VS demuestran que muchas de las aspiraciones que tenían en sus vidas fueron afectadas por consecuencia de los actos objeto del delito sexual debido a que gran parte de ellas tuvieron que abandonar sus lugares de habitación, renunciar a sus trabajos ya sean formales o informales, dejar sus estudios, romper relaciones interpersonales, entre muchas otras.

Debido a esto, incorporar la identificación de los planes de vida de las mujeres en el proceso penal de VS permite tener claridad sobre “las aspiraciones y actividades que son centrales para la forma de vida de una persona”<sup>706</sup> y que fueron afectados por la comisión de actos de VS en el conflicto armado colombiano. Esto es novedoso ya que en los aparatos judiciales penales el ejercicio para otorgar la reparación se limita a relacionar pruebas de que existe un perjuicio contra la persona sin establecer criterios que definan las afectaciones a los planes de vida.

---

<sup>706</sup> Ribotta, Silvina. "Necesidades y derechos: un debate no zanjado sobre fundamentación de derechos (consideraciones para personas reales en un mundo real).", 48 y ss.

Ribotta, por ejemplo, explica que dentro de las distintas teorías que rodean las necesidades, uno de los autores que establecen las definiciones de lo que son los planes de vida es Miller, el cual establece que “el daño es aquello que interfiere directa o indirectamente con las actividades esenciales para su plan de vida mientras que la necesidad debe entenderse como aquello que es necesario para permitir que esas actividades se lleven a cabo”<sup>707</sup>.

Partiendo de estos conceptos, se proponen ejercicios participativos para las mujeres dentro de escenarios que surjan en sus procesos gestionados por mujeres o quien haga sus veces, ya que la comunicación y confianza en los círculos que se tejen en estos permite establecer en cada proceso las distintas aspiraciones que tenían las mujeres antes de padecer VS.

Sin embargo, estas actividades deberán ir más allá del taller teórico que brindan en otros escenarios como los enmarcados en la ley 1448 de 2011 donde las autoridades administrativas reúnen a las víctimas y les dan capacitaciones elaboradas por los funcionarios con enfoques pedagógicos conductistas y no constructivistas<sup>708</sup>.

Aunque algunos de las estrategias convocan a mujeres para desarrollar los objetivos de la ley y tratan de mirar contextos vivenciales y culturales, las estrategias ya están dadas con recursos limitados a los enfoques normativos. Esto tiene como repercusión que las mujeres no sean las que lideren sus propios procesos, sino que sigan los preestablecidos siendo relegadas al papel asistencialista- las mujeres que solo asisten a las actividades y firman las listas de asistencia-.

Procesos de reparación con actividades relacionadas con el arte, la cultura, las narrativas, entre otros, condensan una amplia gama de iniciativas que surgen de la unión de mujeres con la necesidad de compartir sus experiencias y planes de vida antes de la VS y su proceso de transformación como efecto del delito que les tocó padecer.

---

<sup>707</sup> Ibid.

<sup>708</sup> Al respecto se puede consultar: Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas, “Estrategias de Reparación Integral con Enfoque Diferencial y de Género”, <https://www.unidadvictimas.gov.co/es/estrategias-de-reparacion-integral-con-enfoque-diferencial-y-de-genero/43933>



Para lograr este objetivo, las mujeres encuentran ejercicios empleando, por ejemplo, la pintura, la cual resulta útil para los talleres artísticos de reparación donde se apoya a las víctimas sobrevivientes en sus ejercicios individuales y colectivos con la auto proyección de sus retratos en el lienzo<sup>709</sup>.

Otro ejemplo puede observarse en ejercicios de auto reflejo dentro de obras de teatro en las cuales se podían establecer aspiraciones de las mujeres a través de personajes creados en las obras, generando entre muchas cosas más, que las mujeres se reconocieran en los planes de vida de los guiones y continuaran sus procesos de reparación<sup>710</sup>.

Estos ejemplos, muestran la necesidad que se tiene en la estrategia de incorporar al proceso penal de VS en el conflicto armado colombiano la identificación de los planes de vida de las mujeres que son parte de los procesos penales los cuales fueron afectados por la comisión de actos de violencia sexual en el conflicto armado colombiano.

No obstante, se debe tener en cuenta que los planes de vida de las mujeres son permeados por factores estructurales de discriminación, desigualdad y opresión. Esto hace que el análisis de los planes vida que se incorporen en el proceso penal deba contar con criterios de rigurosidad debido a que solo podrán ser tomados en cuenta aquellos que fueron afectados por los actos de VS que se investigan dentro del proceso.

En ese caso, volviendo a los procesos penales de la muestra pudo visibilizarse que los planes de las mujeres fueron interrumpidos por hechos de VS debido a que tuvieron que desplazarse forzosamente por lo que les ocurrió. Esto trae como consecuencia que las mujeres tuvieran que asumir distintos roles que antes no desempeñaban como las de cabeza de hogar o la de madres. Todos estos factores, harán de la identificación una tarea rigurosa que utilice el aparato de investigación en la justicia para garantizar los derechos de las mujeres que hacen parte de los procesos.

### **3.4.3. Lo que la VS dejó en las mujeres**

---

<sup>709</sup>Laura Soriano Ruiz, Angélica María Anichiarico González, Samuel Silveira Martins. “construcción de paz transformadora e inclusiva de la mujer en el post acuerdo a través de técnicas creativas, artísticas y vivenciales” en La construcción de la paz, coord.. Ricardo Tapia, Angélica Anichiarico y Ramses López, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Mexico y la Corporación Universitaria Autónoma del Cauca, Colombia, 197.

<sup>710</sup> Ibid.

Una vez establecidos los planes de vida afectados por la VS en los procesos penales se da paso a la realización del diagnóstico y caracterización del daño de los planes de vida de las mujeres víctimas sobrevivientes por el delito de VS en ocasión al conflicto armado colombiano, en colaboración de las víctimas sobrevivientes, redes de mujeres, organizaciones, o quien haga sus veces.

Estos daños en el proceso penal y el incidente de reparación integral deben estimarse teniendo en consideración las características del perjuicio-teniendo en cuenta el género, la edad, su pertenencia a los grupos étnicos y raizales y su condición socioeconómica-, los sujetos afectados con la VS, los elementos esenciales del plan de vida que fueron afectados por la VS y el grado de afectación de cada uno de ellos.

Todo con el fin de que, al finalizar el proceso penal con el fallo condenatorio en firme, el Juez tenga claridad del daño causado, no se pierdan evidencias por la tardanza de la resolución del caso y se logre realizar una tasación y liquidación de perjuicios materiales, inmateriales y de otra índole acordes a los planes de vida de las mujeres, sus intereses y necesidades.

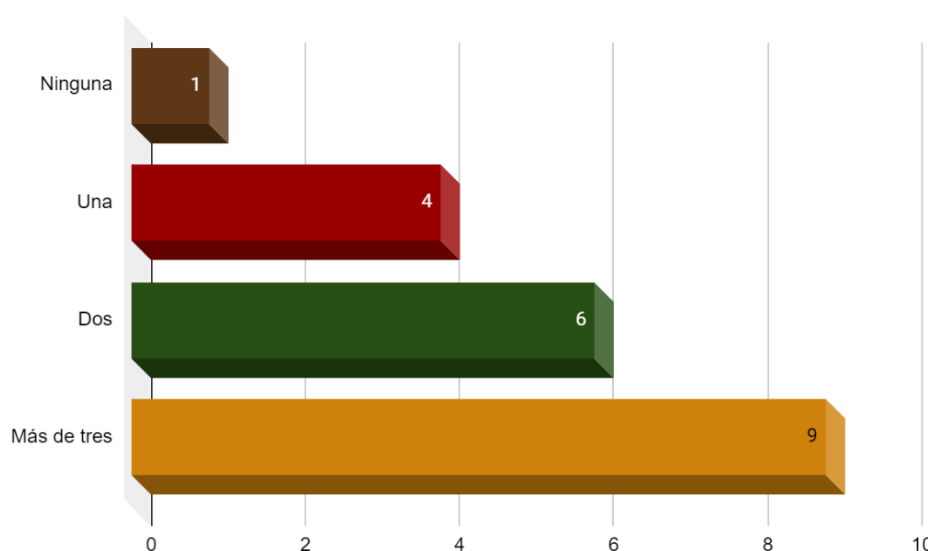
Según la Tabla 6. Medidas Mínimamente Necesarias, expuesto en el acápite de necesidades e intereses de las mujeres en la reparación, se infiere que las afectaciones en los planes de vida pueden estar encaminadas a 2 puntos: oportunidades laborales y vivienda segura. Los otros ítems como la indemnización, la ayuda psicosocial que se requiere por las afectaciones físicas, psíquicas y psicológicas que aparecen con el hecho sexual violento que se investiga, la restitución de sus tierras y el acto o la reparación simbólica, son consideradas en los fallos sobre reparaciones por estos delitos.

Lo que no es considerado, y que sería algo que tendría de ventaja la estrategia propuesta, es lo relacionado a esas aspiraciones que tenían las mujeres a tener ejes económicos estables para poder solventar sus propias metas y las de sus seres dependientes económicamente de ellas.

En la observación a la Fundación objeto de estudio se les preguntó a las mujeres sobre las personas que tenían a su cargo y sobre los cambios a sus vidas en este aspecto. Sus respuestas diagramadas en el Gráfico 13 sobre personas a cargo de las mujeres, permiten evidenciar que al ser desplazadas por la VS y otros tipos de violencia padecida,

asumieron roles de proveedoras que antes no tenían o su carga económica incrementó por ser todo su núcleo familiar el que tuvo que desplazarse. El 45% de la muestra tiene más de tres personas a su cargo y solo el 5% no tiene ninguna persona por la cual responder económicamente.

**Gráfico 13 Personas a cargo de las Mujeres**



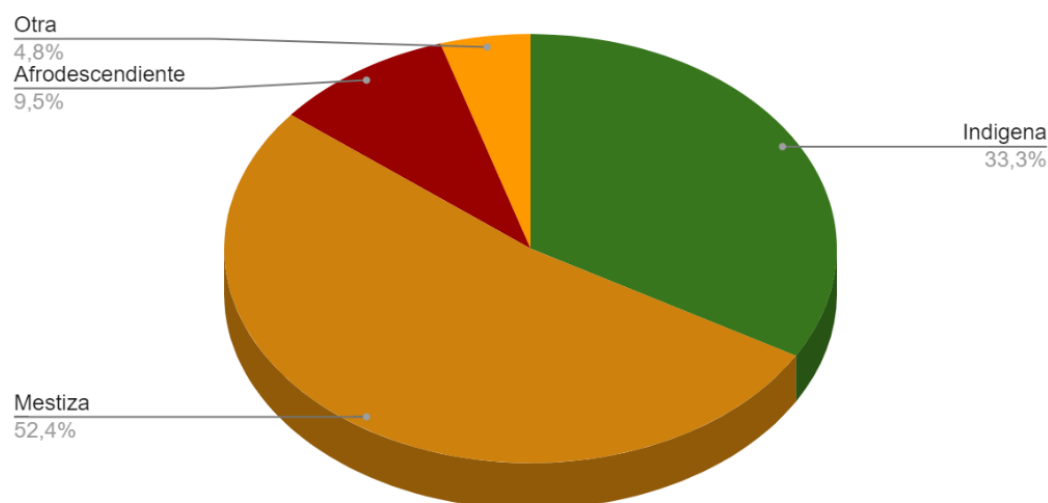
Fuente: Información interpretada el cuestionario aplicado a mujeres víctimas de violencia sexual que pertenecían a la Fundación Hombres Nuevos y Mujeres Nuevas en la ciudad de Popayán. Tabla de elaboración propia (2017).

Las organizaciones de mujeres y de otra índole promueven iniciativas de emprendimiento y economía circular que resulten rentables y de paso, apoyen la economía del país<sup>711</sup>. No obstante, tomando en consideración que las agrupaciones de mujeres tienen matices étnicos y raizales, se presenta dentro de la caracterización de los daños aquellas relacionadas con estos puntos que afectan sus comunidades y su proyección económica y cultural dentro de la sociedad.

Por ejemplo, las respuestas de las mujeres de la Fundación relacionadas con su pertenencia étnica y raizal arroja que el 33,3 % pertenece a algún grupo étnico colombiano y el 9,5% a la población afrodescendiente como se observa en la Gráfica 14 sobre pertenecía étnica de mujeres en la fundación.

711

**Gráfico 14 Pertenencia Étnica de mujeres de la Fundación**



Fuente: Información interpretada el cuestionario aplicado a mujeres víctimas de violencia sexual que pertenecían a la Fundación Hombres Nuevos y Mujeres Nuevas en la ciudad de Popayán. Tabla de elaboración propia (2017).

Esto a su vez, da paso a considerar que estas personas tuvieron que salir de sus viviendas y dejar sus lugares de arraigo para aventurarse en otros territorios que les permitieran por lo menos conservar sus vidas. La realidad implica asumir que estas comunidades sufrieron por el desplazamiento y por la VS de sus mujeres, cambiando las actividades económicas de sustento para todos los miembros de su comunidad. Es por lo expresado que éstos deben ser incluidos en el diagnóstico y caracterización que la estrategia plantea.

En consecuencia, con lo que se argumenta, resulta también pertinente resaltar que para el proceso de diagnóstico los ejercicios y actividades que se realizan dentro de las dinámicas individuales y colectivas de los grupos de mujeres son necesarios debido a que es en estos escenarios que se generan espacios para que las mujeres relaten sus aspiraciones y actividades.

Por ello, se tiene como lineamiento que el diagnóstico supere las barreras formales y no solo se limite a dar cifras estimadas para lograr una indemnización, sino que se enfoque en las afectaciones de las actividades, anhelos, aspiraciones de las mujeres con el ánimo de que reconociéndolas transiten a estados de materialización de sus planes como forma de avanzar en diferentes aspectos de su vida.

#### **3.4.4. De mujeres para mujeres: ejercicios y actividades**

Para comenzar a materializar la reparación de las víctimas sobrevivientes de VS en el conflicto armado, y apoyar las actividades que se lleven a cabo dentro de los procesos de reparación reconocidos en el proceso penal, que surgen de las mujeres con soporte de redes de mujeres, organizaciones, o quien haga sus veces; se propone realizar agendas con actividades culturales y educativas que tengan como propósito fortalecer los planes de vida de las mujeres en sus componentes individuales y colectivos.

Organizaciones como “Ruta Pacífica de Mujeres”, que tienen como misión “fortalecer la visión feminista del pacifismo, la no-violencia y las resistencias civiles, para promover la inclusión de las propuestas de las mujeres colombianas y así impulsar transformaciones en lo público y lo privado que contribuyan a la construcción de la paz y la justicia social en el país”<sup>712</sup>, establece dentro de sus ejes la reparación para llevar a cabo ejercicios y actividades que ayuden a las mujeres a identificar los perjuicios dentro de sus vidas que deja la VS y demás delitos del DIH.

En su recorrido, sus proyectos tienen en sus agendas capacitaciones, fortalecimiento de habilidades y capacidades de las mujeres para gestionar sus procesos de reparación dando asesoría jurídica, psicosocial y de otro tipo para contribuir a la paz y al desarrollo del país con una perspectiva feminista. Esta organización subsume a 300 organizaciones más “que irradian su accionar a cerca de 10.000 mujeres ubicadas en más de 142 municipios de 18 departamentos de Colombia”<sup>713</sup>.

Esta incidencia nacional y el logro de reunir a muchas organizaciones con el mismo propósito y con el mismo enfoque epistemológico, promueve los procesos de

---

<sup>712</sup> *Ruta Pacífica de Mujeres*, <https://rutapacifica.org.co/wp/quienes-somos/>

<sup>713</sup> Ibid.

reparación en construcción con las mujeres y en relación con varios sectores que pueden favorecer los procesos. Esto significa que los grupos de mujeres y organizaciones no trabajan de forma aislada dentro de ciertas esferas, sino que se desarrollan en colaboración y apoyo de otras que pueden resultar complementarias.

También está el ejemplo “la Corporación de mujeres ecofeministas comunitar”, la cual “tiene como propósito brindar acompañamiento psico-jurídico a mujeres víctimas de las violencias en el marco del conflicto armado o violencias en el ámbito privado”<sup>714</sup>, quien comprende dentro de sus estrategias líneas que abordan, desde la investigación, problemas de las mujeres relacionados con escenarios de violencia de género y sus respectivos procesos de reparación.

Es así como sus proyectos en conjunto con otras organizaciones sociales encaminados a realizar revisiones sobre la restitución de tierras de las mujeres en diversas regiones de Colombia evidencian como las mujeres presentan sus solicitudes ante las autoridades administrativas e idean proyectos productivos que las empoderan y les brindan salidas económicas para solventar sus necesidades<sup>715</sup>.

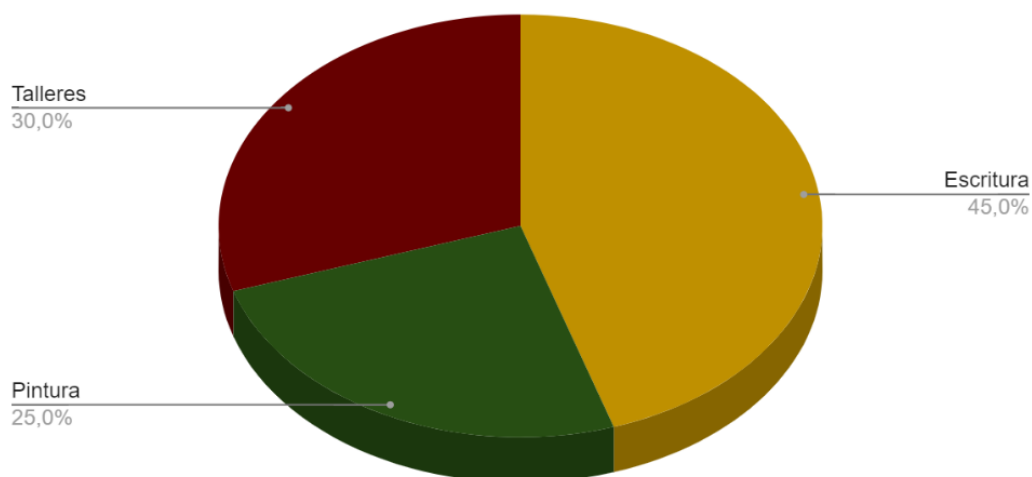
Asimismo, entre las organizaciones de mujeres que se observaron de primera mano en este estudio, se encuentra la Fundación Hombres Nuevos y Mujeres Nuevas, que a través del arte desarrolla sus procesos de reparación simbólica. Cuando se les preguntó a las mujeres de la muestra de observación cuáles eran las actividades y técnicas que usaban para realizar sus ejercicios de reparación contestaron en un 45% que la escritura les servía mucho para desahogó de sus emociones, en un 30% los talleres psicosociales y en un 25% la pintura.

---

<sup>714</sup> Al respecto se puede consultar su página oficial: Corporación de Mujeres EcoFeministas COMUNITAR. <https://landportal.org/node/44062>

<sup>715</sup> Ibid.

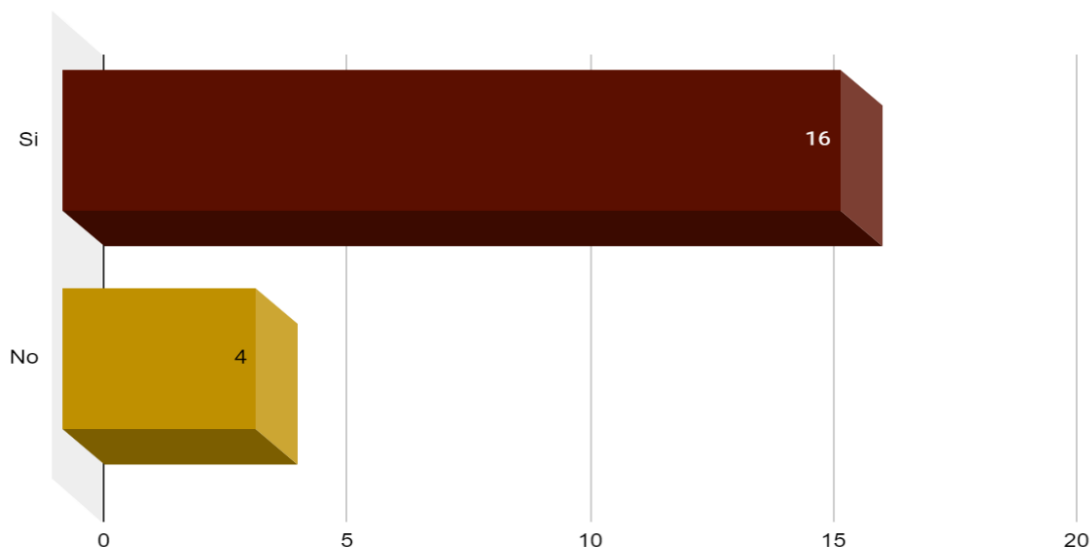
**Gráfico 15 Actividad Artística Reparadora**



Fuente: Información interpretada el cuestionario aplicado a mujeres víctimas de violencia sexual que pertenecían a la Fundación Hombres Nuevos y Mujeres Nuevas en la ciudad de Popayán. Tabla de elaboración propia (2017).

Esta información obtenida por parte de las mujeres resulta relevante para la estrategia que se presenta ya que son actividades que servirían para realizar el diagnóstico de daños en los planes de vida de las mujeres. La proyección de sus emociones y sentimientos y los reflejos de su identidad a través de estas técnicas artísticas y narrativas permitiría que las víctimas sobrevivientes de VS transiten hacia escenarios que fortalezcan sus capacidades y finalmente proyecten sus planes de vida pese a la VS que sufrieron.

Además, se les preguntó si creían que los procesos y actividades llevados a cabo en la Fundación aportaban en sus procesos de reparación y respondieron, como lo expresa el Gráfico 16 sobre percepciones de los procesos de reparación, en un 80% , que percibían que las actividades que realizaban en estos procesos aportaban a sus vidas.

**Gráfico 16 Percepción sobre los procesos de reparación**

Fuente: Información interpretada el cuestionario aplicado a mujeres víctimas de violencia sexual que pertenecían a la Fundación Hombres Nuevos y Mujeres Nuevas en la ciudad de Popayán. Tabla de elaboración propia (2017).

### 3.4.5. Materializando mis proyectos

Después que los planes de vida de las mujeres estén identificados y las afectaciones a los mismos, el aparato judicial deberá contribuir al diagnóstico de condiciones para lograr que las víctimas de violencia sexual en el conflicto armado colombiano determinen lo esencial en sus proyectos de vida. Para esto, es necesario establecer de forma aproximada los elementos, escenarios y herramientas que se necesitan para que las mujeres logren sus aspiraciones y ejecuten las actividades necesarias para hacerlas una realidad.

En ese sentido, el cálculo de gastos y costos de los planes de vida que podrán concebir proyecciones no solo económicas sino sociales y políticas que predispongan, podrá ser una herramienta útil para determinar los montos de indemnizaciones o para los procesos de restitución de tierra, adquisición de viviendas seguras, la obtención de oportunidades laborales, entre otras. Para esto, el aparato judicial cuenta con la interpretación de las altas cortes sobre el tema, las cuales apuntan a determinar montos de



reparación de acuerdo con los daños ocasionados con la VS, atendiendo a la perspectiva de género.

Al respecto, para tasar y liquidar los montos de “la reparación no pecuniaria por afectación o vulneración relevante de bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados”<sup>716</sup>, se toma en consideración los hechos de VS que afectaron a las mujeres, la necesidad de reparar estos perjuicios causados, y las personas afectadas- pueden ser las mujeres o sus familias-.

En el caso de las indemnizaciones se toma en cuenta como tope máximo estándar el de 100 salarios mínimos mensuales vigentes, con la salvedad de que en el caso de la VS en el conflicto armado el Juez, debido a que el Estado reconoce que está inmerso en estructuras patriarcales que hacen de la opresión y la discriminación una normalidad compatible con la violencia contra las mujeres en estos escenarios bélicos, puede establecer montos superiores con la condición de que aparezca "motivado por el juez y ser proporcional a la intensidad del daño y la naturaleza del bien o derecho afectado”<sup>717</sup>

Sin embargo, la demora de los procesos penales en resolver los casos de VS permiten plantear en la estrategia una financiación externa previa al fallo judicial de condena contra el victimario con el fin de que las mujeres consigan desarrollar sus planes de vida. Es por lo que se propone que la financiación de las estrategias sea de carácter mixto, una parte que se obtenga a través de financiación de proyectos de intervención social de reparación de las mujeres y organizaciones, y otra por parte del Estado en cumplimiento de sus deberes y obligaciones internacionales sobre la reparación integral.

#### **3.4.5.1. Financiación por proyectos de proyección social**

La experiencia de las mujeres del movimiento anti violación norteamericano, descrito en el primer capítulo, dio una perspectiva a la forma de financiación de la estrategia para evitar la maleabilidad de los enfoques de las medidas y procesos de reparación al analizarse la dependencia económica Estatal y gubernamental.

---

<sup>716</sup> Consejo de Estado, “Sentencia de Unificación de Reparación Integral”, Rad.05001-23-25-000-1999-01063-01(32988), 28 de agosto de 2014. MP. Ramiro de Jesús Pazos Guerrero.[http://www.consejodeestado.gov.co/documentos/boletines/151/S3/05001-23-25-000-1999-01063-01\(32988\).pdf](http://www.consejodeestado.gov.co/documentos/boletines/151/S3/05001-23-25-000-1999-01063-01(32988).pdf)

<sup>717</sup> Ibid.

Los matices políticos que pueden estar en contravía de los planes de vida de las mujeres víctimas de violencia sexual en el conflicto armado y que hacen parte del Estado pueden jugar en contra de la estrategia que se pretende defender en esta tesis doctoral, al invisibilizar a las mujeres imponiendo medidas de reparación con el fin estatal de cumplir con los deberes y obligaciones contenidas en los tratados internacionales.

En ese entendido, la financiación externa para la estrategia puede ser gestionada por parte de las mujeres que hacen parte de los procesos de reparación de forma directa y apoyada por el ente judicial utilizando como técnica la realización de proyectos de intervención social de reparación de mujeres víctimas sobrevivientes de VS en el conflicto armado donde se implemente la estrategia complementaria.

Esto permitiría que se puedan comenzar procesos mucho antes del fallo condenatorio del victimario y seguir con los preestablecidos. En ese entendido, se concebirán como proyectos de intervención social aquellos cuyo “propósito consiste en diagnosticar y caracterizar un problema de orden práctico o una situación problemática para plantear estrategias que permitan articular estrategias y acciones para su superación”<sup>718</sup>.

Formularlos, responde a estructuras donde se identifique el planteamiento del problema y se lleven a cabo diagnósticos que determinen que tipo de intervención se requiere, la población afectada y los planes de vida en los que se pretende incidir. Así, es importante planear desde un enfoque feminista los objetivos coherentes con ese problema que se detectó, el cual responde a hechos sociales abordados desde perspectivas feministas que se encaminen a trabajar con la población víctima de VS. Es así como se planifica y se trazan metodologías para abordar la reparación de la VS en el conflicto armado colombiano.

Así puede continuar con las actividades para desarrollar cada objetivo, aplicando técnicas apropiadas con perspectiva de género que aborden distintas características de las mujeres, su contexto y sus planes de vida. En ese desarrollo, la financiación de planes de

---

<sup>718</sup> Al respecto puede consultarse el siguiente sitio web: <https://wac.colostate.edu/docs/books/encarrera/stagnaro-representacao.pdf>

vida a través de proyectos de intervención puede llegar a ser viable si el enfoque responde a los postulados de la estrategia.

Por ende, definir la fuente de financiación de los mismos es de vital importancia, ya que es por medio de los convenios interinstitucionales, los fondos de cooperación para víctimas de los conflictos armados, los fondos privados a favor de los derechos de las mujeres, fundaciones, institutos nacionales e internacionales, entre muchos otros, que los procesos de gestión de mujeres logran obtener recursos para sus actividades, encontrando a nivel nacional e internacional convocatorias para financiar proyectos de esta índole y poder sumarse a la lucha contra la VS de mujeres<sup>719</sup>.

### **3.5. Fortalezas y Debilidades**

Dentro de las distintas ventajas que podemos observar en la estrategia, está la posibilidad de obtener reparación dentro del proceso penal sin depender del fallo condenatorio el victimario que lo hará responsable del pago de perjuicios por el delito de violencia sexual. Esto hace que lo relativo a la obligación que tienen los funcionarios de tratar de que la víctima sea reparada de forma ágil y eficaz pueda tener una salida viable en los términos de la legislación nacional e internacional.

Además, reconocer los procesos gestionados de mujeres o por diversas organizaciones de mujeres que se enmarcan en la epistemología feminista permiten abordar los problemas de las mujeres y las afectaciones a sus planes de vidas por las violencias sexuales que sufrieron de forma particular en el conflicto armado. Las mujeres se encuentran inmersas en círculos de violencia por la discriminación y la opresión estructural y de otra índole, que hacen que los planes de vida de las mujeres en estos escenarios bélicos sean afectados por características sociodemográficas e identitarias, contextos de violencia permanente, entre otros factores.

---

<sup>719</sup> Muchas son los fondos que ofrecen financiación para proyectos contruidos por mujeres. Al respecto pueden consultarse los siguientes sitios web oficiales: <https://fondoparalainvestigacion.fundacionwwbcolombia.org/convocatoria-2019/>, <https://www.formulacionproyectos.com/convocatoria-proyectos-para-la-mujer-la-paz-y-la-accion-humanitaria-2020/>, <https://www.fondoeuropeoparalapaz.eu/convocatorias/>,

Identificar los planes de vida de las mujeres a partir de las experiencias y voces de estas, abre la puerta para ser más acertados en el tratamiento que se le va a dar a la reparación de las mujeres por VS en el conflicto armado. Asimismo, determinar los daños y afectaciones a la vida de las mujeres permitirá no sólo satisfacer necesidades esenciales si no transformar las percepciones que tienen las víctimas sobrevivientes sobre la reparación por vía penal.

Esto trae como consecuencia que la confianza en el aparato de Justicia aumente por el reconocimiento de las mujeres como sujetos de transformación de sus entornos individuales y colectivos.

La observación que se realizó a la Fundación hombres y mujeres nuevos permitió un acercamiento real al problema social que se presenta con la reparación por vía penal de las mujeres afectadas por la VS y por otros delitos relacionados con la misma. En esa línea, los ejercicios y actividades relacionadas con la cultura, la educación, el arte y demás, generan en las víctimas una percepción positiva de avance en sus procesos de reparación.

Asimismo, al proponerse una financiación mixta para lograr aplicar la estrategia y que las mujeres logren ejecutar sus planes de vida con esta perspectiva que se propone en la tesis se puede apreciar que las organizaciones de mujeres o de otra índole no pierden autonomía por tener fuentes de financiación estatales. En ese sentido, se estima que la financiación de la estrategia como un proyecto de intervención social en distintos fondos promoverá la libertad de las mujeres en la construcción de sus propios procesos de reparación sin desconocer que existirá una relación interdependiente con el proceso judicial en cabeza del aparato judicial.

Sin embargo, también se advierte que esta estrategia está dirigida a mujeres víctimas sobrevivientes vinculadas a procesos penales de delitos de VS en ocasión al conflicto armado. Esto puede ser una limitante para aquellas personas que no encajan en esta categoría ya que dentro de las mismas existe un subregistro de denuncias que aún no salen a la luz por miedo al denunció, por falta de interés o confianza en el sistema o por predilección de la víctima por procesos de reparación distintos al que ofrece el derecho penal.

En ese sentido la estrategia no está encaminada a desconocer otros sujetos derechos sino a reconocer que las mujeres son aquéllas que sufren de diversas maneras distintos tipos de violencias dentro del conflicto armado. Por ende, a diferencia de otros grupos poblacionales, su percepción en el conflicto como armas de guerra, como objetos y no como sujetos, apuntan a tomar medidas diferenciadas que tengan en cuenta las características individuales y colectivas de las mujeres.

Además, se advierte que algunos críticos de la estrategia pueden sentar su postura en que la VS no sólo debe plantearse desde un enfoque feminista donde el conocimiento emana de la observación de problemas que viven las mujeres. Por lo cual, se defiende que las soluciones deben surgir del ejercicio de pensar cómo transformar los espacios violentos en violencia en escenarios de paz a través de la reparación.

Con respecto a este punto, la estrategia se enmarca desde este enfoque ya que se advierte durante la tesis que existe ineffectividad de los procesos de reparación por vía penal con aplicación de enfoques generales que no toman en consideración que la mujer ha sido oprimida, discriminada, invisibilizada por razón de su género, sexo, raza, edad y nivel socioeconómico.

No obstante, la financiación de orden mixto puede llegar a malinterpretarse aduciendo que las organizaciones de mujeres tendrán obligatoriamente que asumir costos adicionales para que la estrategia pueda llegar a ser exitosa. es decir, que se le pone una carga a las mujeres para poder autogestionar sus propios procesos de reparación, exonerando de alguna manera al Estado de cumplir con sus deberes y obligaciones de reparar los perjuicios ocasionados con el delito que se juzga.

Pero la matización que se realiza sobre este punto es que las mujeres son constructoras de sus propios procesos y la injerencia absoluta del Estado puede llegar a ser perjudicial para los procesos que se gestan dentro de estos escenarios para las mujeres. El control de sus propios procesos así exista un proceso penal, es guiado por las mujeres y los aliados son los funcionarios judiciales. Así se conserva tanto los enfoques primarios de las estrategias como los ejercicios y actividades que se desarrollen a favor de la reparación de las víctimas sobrevivientes de VS.

### 3.6. Evaluación y seguimiento

Debido a que este proceso presenta cierta flexibilidad se propone formar un comité de seguimiento conformado por las organizaciones de mujeres o quien haga sus veces, un funcionario encargado del proceso penal y una representante de las víctimas sobrevivientes de violencia sexual. No obstante, en ningún momento el seguimiento debe convertirse en el juzgamiento o enjuiciamiento de las víctimas sobrevivientes de violencia sexual. En ese sentido, este proceso consistirá en determinar el grado de avance de la estrategia de acuerdo con los cinco objetivos planteados.

Lo anterior permitirá que se establezcan evaluaciones preliminares que den cuenta de los avances en la reparación de las mujeres para poder mejorar la estrategia en los puntos de debilidad de la misma.

Por ende, para determinar si la estrategia cumple con los objetivos que se establecieron inicialmente como complemento a la reparación por vía penal se propone una evaluación de impacto de la estrategia definida como “aquella que intenta constatar los cambios producidos por las intervenciones a que son sometidas las poblaciones objetivo en la cual es aplicado un cierto proyecto, Es decir, la evaluación busca medir los resultados – en términos de cambios/efectos -, que una determinada intervención social (plan/programa/proyecto) ha transferido a una población objetivo cualquiera e implica una serie de procedimientos técnicos concatenados”<sup>720</sup>.

Es aquí donde los indicadores de eficiencia toman relevancia al observar si los costos y gastos de las mujeres son tenidos en cuenta en el proceso penal para establecer la reparación <sup>721</sup>. Tener un diagnóstico al iniciar la estrategia, y uno al final, permitirá realizar un ejercicio comparativo de lo que se alcance hasta el momento de iniciar el incidente de reparación integral como consecuencia de la responsabilidad del victimario, logrando en la detección de las afectaciones a los planes de vida de las mujeres que han sufrido por la violencia sexual en el conflicto armado.

Es por ello por lo que identificar la relación que existe entre el costo y el beneficio que el reconocimiento de procesos gestionados por mujeres y organizaciones

<sup>720</sup>[https://www.mapunet.org/documentos/mapuches/Evaluacion\\_impacto\\_de\\_proyectos\\_sociales.pdf](https://www.mapunet.org/documentos/mapuches/Evaluacion_impacto_de_proyectos_sociales.pdf), p.7

<sup>721</sup> Cohen Ernesto y Franco Rolando. Evaluación de proyectos sociales. Ed. Siglo XXI 1991

de mujeres y de otra índole, dará paso a concluir si la evaluación es positiva o por el contrario se tendrá que mejorar. Siguiendo a Cohen, y Franco, estos procesos de evaluación “normalmente consisten en servicios que satisfacen necesidades básicas y contribuyen a alcanzar fines políticamente priorizados”<sup>722</sup>.

Asimismo, los procesos de autoevaluación son recomendables para que las estrategias funcionen debido a que por más que se tenga claridad en los objetivos que se pretenden desarrollar en una estrategia, existen otros factores que no dependen de los funcionarios a cargo del proceso penal, ni de las víctimas sobrevivientes, ni del victimario. Por ende, el examen debe estar abierto a considerar elementos circunstanciales que se relacionen tangencialmente con el fenómeno que se aborda.

### 3.6. Resultados Esperados

Lo que se espera con esta estrategia complementaria de reparación por vía penal es lograr que las víctimas de violencia sexual obtengan una reparación ágil y acorde con sus planes de vida, los cuales fueron afectados por el hecho que las victimizó.

Con respecto al primer objetivo de la estrategia acerca del reconocimiento dentro del proceso penal de VS en el conflicto armado colombiano, los procesos de reparación que surgen de las mujeres con apoyo de redes de mujeres, organizaciones, o quien haga sus veces, como parte de las medidas de reparación integral por vía penal, se espera que las mujeres obtengan un protagonismo dentro de la construcción de sus propios procesos de reparación.

Esto hace que los procesos que se fragüen dentro de las organizaciones de mujeres puedan ser visibilizados e integrados a los aparatos de Justicia no sólo para satisfacer los derechos de las víctimas sino para cumplir los deberes y obligaciones del Estado adquiridos en el ordenamiento jurídico nacional e internacional.

Con respecto al segundo objetivo que tiende a incorporar al proceso penal de VS en el conflicto armado colombiano, la identificación de los planes de vida de las mujeres que son parte de los procesos penales los cuales fueron afectados por la comisión de actos

---

<sup>722</sup> Cohen, Ernesto, and Rolando Franco. *Evaluación de proyectos sociales*. Siglo XXI, 2000.p.199

de violencia sexual en el conflicto armado colombiano, se espera fortalecer los distintos planes, estrategias, actividades, ejercicios, para poder establecer un plan para las mujeres.

Esto tiene relación también con el tercer objetivo que tiende a contribuir en el diagnóstico y caracterización del daño de los planes de vida de las mujeres víctimas sobrevivientes por el delito de VS en ocasión al conflicto armado colombiano, en colaboración de las víctimas sobrevivientes, redes de mujeres, organizaciones, o quien haga sus veces. En esa perspectiva lo que se pretende es que la estimación que realizan los jueces al finalizar el proceso penal en el incidente de reparación integral tome en cuenta las distintas afectaciones que tuvieron las mujeres como consecuencia de la violencia sexual ya que a raíz de ésta fueron sucesivamente víctima de otros delitos como el desplazamiento forzado.

Es por ello por lo que se espera el apoyo a las actividades de las mujeres víctimas sobrevivientes que se lleve a cabo dentro de los procesos de reparación reconocidos en el proceso penal, que surgen de las mujeres con soporte de redes de mujeres, organizaciones, o quien haga sus veces. Contribuir al diagnóstico de condiciones para lograr que las víctimas de violencia sexual en el conflicto armado colombiano determinen lo esencial en sus proyectos de vida.



## Conclusiones

---

La investigación que se desarrolla en esta Tesis doctoral, al centrar su objeto de estudio en la violencia sexual de las mujeres en los conflictos armados, específicamente el que acontece en Colombia, visibiliza la necesidad de plantear una estrategia de reparación desde una mirada feminista que complemente las medidas que se toman en los procesos penales de VS con ocasión en el conflicto armado colombiano debido a que dicho proceso resulta ineficiente.

El estudio comienza a mostrar en el primer capítulo que la VS tiene múltiples concepciones que cambian según el contexto, la postura que se tome al abordarlas o la normatividad a aplicar. En ese entendido, se concluye que el escenario contextual de conflicto armado permite conceptualizar la VS como un evento ineludible de la guerra que se vive, o como estrategia de los grupos enfrentados o como un evento aislado al conflicto por ser un acto cometido con fines definidos por fuera del conflicto armado pero que repercute en la vida de las mujeres.

Dado este panorama, las mujeres son concebidas como armas de guerra y objetos sexuales para deleite de las tropas enfrentadas, como medios para castigar y/o humillar a los adversarios utilizando la coerción, la fuerza o la intimidación para someter a las mujeres, entre otras. Para ello se observaron, las estrategias establecidas en algunos contextos de conflicto como el de Ruanda, Ex Yugoslavia, El Salvador, entre otros, donde las mujeres son los principales sujetos violentados- aunque no los únicos- por victimarios que pertenecen a grupos enfrentados en conflicto.

Sin embargo, las concepciones feministas sobre la VS apuntan a visualizar a las mujeres de maneras distintas en la guerra, reconociendo que son sujetos de creación y transformadores de contextos. Los avances genuinos para lograr posesionar su postura de cero tolerancia a la violencia contra las mujeres, lleva a los movimientos feministas a plantear alternativas para que las mujeres sean reparadas por la ocurrencia de cualquier acto de VS.

Así se destaca en el movimiento feminista anti-violación, que pudo lograr cambios judiciales y legislativos para eliminar la violencia contra la mujer. Sus metas políticas y sociales logran dar a conocer cómo las estrategias de reparación logran ser exitosas al perfilar sus propias metas. Es así como se concluye que proporcionar servicios directos a

las mujeres que han sido violadas, enseñar a las mujeres cómo evitar y resistir la violación y ayudarlas a hacerlo; alentar (o forzar) a las instituciones locales —hospitales, departamentos de policía y oficinas de fiscales— a que sean más receptivas a las mujeres<sup>723</sup>, ayudan con los procesos de reparación individual y colectiva de las mujeres.

Sin embargo, esta experiencia también deja como conclusión que las estrategias cuando son dependientes de dineros estatales donde las políticas públicas son definidas con posturas políticas, suelen fracasar, al intentar adecuar lo que requieren las víctimas y lo que el Estado pretende lograr en con sus gobiernos.

En ese entendido, se aborda el concepto de eficiencia desde una mirada distinta a la jurídica donde los gastos y costos que tiene la VS deben ser tenidos en cuenta para otorgar una reparación de los daños, resaltando la importancia de considerar no solo indicadores de eficacia y efectividad para evaluar el avance en materia de VS sino también indicadores de eficiencia.

En ese orden, entra a jugar un papel importante las concepciones normativas que intentan establecer criterios generales para investigar, juzgar y reparar a las mujeres víctimas sobrevivientes de VS. Es por lo que se concibe que el DPI y el DIH, regula la VS en escenarios bélicos como crimen internacional que se caracteriza por vulnerar derechos relacionados con la integridad sexual de las personas a través de uno o varios actos como “violaciones, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de gravedad comparable”<sup>724</sup>.

En complemento, el DIDH contiene Pactos, Tratados, Convenios, entre otros, que establecen unos derechos, obligaciones y deberes de las personas y el Estado que están encaminadas a proteger de la violencia a las mujeres en cualquier tiempo. Asimismo, la jurisprudencia presenta elementos como el consentimiento, el análisis de contexto, interpretaciones sobre elementos de los delitos considerados sexuales, que presentan avances para que los Jueces incluyan dentro de sus distintas actuaciones y sentencias la perspectiva de género dentro del proceso y sus actuaciones.

No obstante, el análisis realizado en esta Tesis demuestra que, pese a que existe una normatividad vigente para condenar a los victimarios de VS, las víctimas no se sienten conformes con los procesos penales y sus reparaciones, ya que en sus relatos,

---

<sup>723</sup> Op. Cit, 369.

<sup>724</sup> Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, de 17 de julio de 1998, (ONU A/CONF.183/9), [https://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome\\_statute\(s\).pdf](https://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf)

entrevistas y testimonios argumentan la falta de perspectiva de género para abordar sus procesos.

Esteretipos de género, discriminación, juzgamientos por su vestimenta o actividad laboral, entre otros, son comentados por las mujeres cuando relatan la percepción que tienen sobre el proceso penal y la reparación. La homogenización de los casos invisibiliza muchos otros que no llegan a estas instancias por reconocerse una única forma frecuente de VS materializada en el delito de violación, desconociendo que también existen delitos de otra índole que pueden ser catalogados como VS.

Asimismo, se abordan procesos especiales como los relativos a la justicia transicional que demuestran como el interés de los Estados llevó a trazar medidas para salir de los conflictos armados encontrando en la verdad, justicia y reparación un camino para lograrlo. La perspectiva de género fue puesta en marcha en algunos procesos como el colombiano, pero la queja constante de las mujeres resulta ser la misma que en los procesos penales internacionales, consistente en la discriminación, la falta de reconocimiento como sujetos en pleno ejercicio de sus derechos, la revictimización con las distintas actuaciones de sus funcionarios que una y otra vez hacían que las víctimas contaran lo acontecido y la demora en la culminación del proceso.

Teniendo esas concepciones de VS, y al observar que los procesos internacionales penales sobre la materia dejaban un sin sabor en las víctimas sobrevivientes, se comprueba la hipótesis donde la reparación penal de mujeres víctimas sobrevivientes de VS en el conflicto armado colombiano resulta ser infectiva dado que no considera los gastos y costos que la VS y su proceso penal tiene para las mujeres.

Es por esto, que el segundo capítulo considera que la construcción contextual de lo sucedido a través de las voces de las víctimas sobrevivientes se convierte en un elemento central para establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en la que ocurrieron los hechos de VS y reconocer cuáles fueron los perjuicios que se causaron por ese mismo hecho. Es por lo que categorías de análisis como la etnia, la raza, el género y la edad comienzan a surgir en sus relatos como parte de su identidad, las cuales se convierten en características por las cuales fueron afectadas por la VS.

Casos de mujeres que argumentan como fueron violadas por pertenecer a cierto grupo racial o por el hecho de ser mujeres con características de liderazgo permiten concluir que las categorías que caracterizan a las mujeres las hacen propensas a sufrir VS.

Además, con la observación de casos de VS, con una muestra de 70 procesos de VS en el conflicto armado colombiano, se pudo demostrar cómo el 100% de los casos de las víctimas sobrevivientes durante un periodo de 4 años -2015-2019- no avanzaron de la etapa de indagación preliminar – ley 600 de 2000- o indagación- ley 906 de 2005-, lo cual genera que las mujeres no puedan aún reclamar la reparación por esta vía, debido a que para que se promueva ésta, debe existir un fallo condenatorio en firme al victimario.

Sin desconocer que la víctima sobreviviente tiene otras vías judiciales y administrativas para solicitar su reparación, la vía penal se convierte en un camino sin salida exitosa para sus pretensiones relativas a los perjuicios causados por la VS, por la falta de pruebas que indiquen quién es el verdadero victimario, logrando así una probabilidad que el caso se archive o se cierre, sin lograr llegar a la fase de reparación por vía penal que se inicia con el incidente de reparación.

Aunque dentro de sus deberes el Estado tiene la obligación de actuar en debida diligencia, de investigar y juzgar a los autores de delitos de VS, aplicar la perspectiva de género a sus procesos, y obtener con las actuaciones judiciales lo referente a la reparación, la justicia y la verdad; sus acciones no alcanzan a cumplir con las metas propuestas en el ámbito penal, lo que significa que las víctimas sobrevivientes no acceden a su reparación.

Es por ello por lo que los hallazgos permiten plantear la necesidad de crear estrategias complementarias a los procesos penales para que las mujeres víctimas sobrevivientes de VS en este escenario bélico logren su reparación teniendo en cuenta sus necesidades e intereses propios. En ese sentido, la estrategia desde y para las mujeres víctimas sobrevivientes pretende tener un equilibrio entre lo pretendido por la institucionalidad con su deber de proteger, investigar y castigar este tipo de delitos, y lo que requieren las mujeres para superar los obstáculos que se presentan cuando se es víctima sobreviviente de violencia sexual.

## Bibliografía

---

### Libros y Artículos

- Acevedo, Natalia Mejía, y Vargas Restrepo, Viviana Maritza. "El cuerpo como texto del dolor: cinco relatos de mujeres que han vivido violencia sexual en la ciudad de Medellín." *Ciencias Sociales y Educación*, núm, 11, vol. 6. (2017): 23-46.
- Acosta Jiménez, María Alejandra. et.al. *Primer Encuentro de Memorias de la Escuela Intercambio de experiencias sobre Reparación Integral a Víctimas 2011-2015 de Reparaciones internacional*. Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, 2015: 1-98, 78, <https://www.unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/documentosbiblioteca/memoriaseri1.pdf>
- Acosta Varón, Laura Sofía. "La Comisión de la Verdad de Perú y su línea de género como lección para Colombia". En *Retos y posibilidades en tiempos de construcción de paz y posconflicto*, 51-80, Programa de investigación de política exterior colombiana. Colombia: 2020.
- Afanador Contreras, María Isabel y Caballero Badillo, María Claudia. "La VS contra las mujeres. Un enfoque desde la criminología, la victimología y el derecho". *Reflexión política*, núm.27, vol.14. (2012): 122-133.
- Akinsulure Smith, Adeyinka M., and Tracy Chu. "Exploring female genital cutting among survivors of torture." *Journal of immigrant and minority health*, núm.3 Vol. 19, (2017): 769-773.
- Alam, Mayesha. *Women and Transitional Justice: Progress and Persistent Challenges in Retributive and Restorative Processes*. Springer, 2014.
- Albertson Fineman, Martha. The vulnerable subject: Anchoring equality in the human condition. *Journal of Comparative Law*, núm 4 (2013):16 y ss.
- Albertson Fineman, Martha, y Zinsstag, Estelle. *Feminist perspectives on transitional justice*. Intersentia, Series on transitional justice, vol. 13, 2013
- Alcoff, Linda y Potter, Elizabeth. *Feminist epistemologies*. Routledge, 2013: 3.
- Alexiéovich, Svetlana. *La guerra no tiene rostro de mujer*. Debate, 2015.
- Amorós, Celia. *Violencia contra las mujeres y pactos patriarcales*. Editorial Pablo Iglesias, 1990.

- Andrieu, Kora. "Civilizing peacebuilding: Transitional justice, civil society and the liberal paradigm". *Security Dialogue*, núm.5, vol.41 (2010): 537-558.
- Anichiarico González, Angélica María. "Una visión de la terminación de los conflictos armados centrada en la justicia transicional". *Universitas. Revista de Filosofía, Derecho y Política* (2016): 165-194.
- Anichiarico González, Angélica María, Silveira Martins, Samuel, y Rengifo Omen, Yulieth Fernanda. "La toma de Almaguer: crítica al concepto institucional de víctima hacia la era del posconflicto." *Estudios de Derecho*, núm. 165, vol. 74 (2018).
- Amaya Villarreal, Álvaro Francisco. "Efecto Reflejo: La práctica judicial en relación con el derecho a la verdad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos". *International Law: Revista Colombiana de Derecho Internacional*, núm 10, vol. (2007):131-157.
- Ambach, Philipp. "Performance Indicators for International (ised) Criminal Courts—Potential for Increase of an Institution's Legacy or 'Just'a Means of Budgetary Control?". *International Criminal Law Review*, núm 3, vol. 18 (2018): 426-460
- Ambos, Kai, y Oscar Julián Guerrero. *El Estatuto de Roma: de la Corte Penal Internacional*. 1.ª ed. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 1999.
- Ambos, Kai. *La parte general del derecho penal internacional. Bases para una elaboración dogmática*, Trad. Ezequiel Malarino, KONRAD-ADENAUER-STIFTUNG E.V., vol.21, 2005.
- Ambos, Kai. *Violencia sexual en conflictos armados y derecho penal internacional*. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, núm. 45, 2012.y ss.
- Aranguren Romero, Juan Pablo. *La gestión del testimonio y la administración de las víctimas: el escenario transicional en Colombia durante la Ley de Justicia y Paz*. Siglo del Hombre Editores, 2012.
- Amann, Diane Marie. "Prosecutor v. Akayesu. Case ICTR-96-4-T". *The American Journal of International Law*, núm, 1, vol. 93 (1999): 195-199
- Apoorva, Jadhav y Haynes Vala, Emily. "Informed choice and female sterilization in South Asia and Latin America." *Journal of biosocial science*, núm.6, vol. 50 (2018): 823-839.
- Arthur, Paige. "How transitions reshaped human rights: A conceptual history of transitional justice". *Humun Rigths Quarterly* Núm. 3 (2009): 321-36.
- Arvesú Juárez, Sandra Marcela. "Los silencios en la memoria. Narrativa de la violencia sexual en la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Perú". *Entre Diversidades*, 'núm. 6 (2016): 49-77.

- Aukerman, Miriam J. (2002). Extraordinary evil, ordinary crime: A framework for understanding transitional justice. *Harvard. Human. Rights Journal.*, núm,39 y vol. 15(2002):39-98.
- Azkue, Irantzu Mendiá. "Justicia transicional: dilemas y crítica feminista". *Cuadernos de Trabajo Hegoa*, núm. 59 (2012): 1-42.
- Baaz, María Eriksson, y Stern, María. "Why do soldiers rape? Masculinity, violence, and sexuality in the armed forces in the Congo (DRC)". *International studies quarterly* núm. 2, vol.53 (2009): 495-518.
- Baaz, María Eriksson y Stern, María. *Sexual violence as a weapon of war?: Perceptions, prescriptions, problems in the Congo and beyond*. Zed Books Ltd., 2013.
- Baaz, María Eriksson, y María Stern. "Curious erasures: the sexual in wartime sexual violence". *International Feminist Journal of Politics*, núm. 3, vol. 20 (2018): 295-314.
- Baines, Erin K. "Today, I want to speak out the truth: Victim agency, responsibility, and transitional justice". *International Political Sociology*, núm.4, vol. 9 (2015): 316-332.
- Banwell, Stacy. Rape and sexual violence in the Democratic Republic of Congo: A case study of gender-based violence. " *Journal of Gender Studies*" núm.1, Vol. 23 (2014): 45-58.
- Barona, Ignacio Forcada. *Derecho internacional y justicia transicional: cuando el derecho se convierte en religión*. Civitas Thomson Reuters, 2011.
- Barranco, Avilés, María del Carmen y Churruca Murguruza, Cristina. Vulnerabilidad y Protección de los Derechos Humanos. El tiempo de los Derechos, 2010, Madrid: 30 <https://biblioteca.tirant.com/cloudLibrary/ebook/show/9788490533901>
- Barreto Daza, Sandra Milena. *Riesgos de los liderazgos sociales de las mujeres en el contexto del conflicto armado colombiano: configuración de un problema de política pública*. Diss. Universidad del Rosario, 2017.
- Barreto Daza, Sandra Milena. "Los riesgos y el papel político de las lideresas sociales en la construcción de la paz territorial en Colombia". *Ciudad Paz-Ando*, núm1, vol.11 (2018): 7-15.
- Bassiouni, Mahmoud. Cherif. "El Derecho penal internacional: Historia, objetivo y contenido." *Anuario de derecho penal y ciencias penales*, núm.1, vol.35 (1982): 5-42.
- Bassanezi, Irene Tosi. "Justicia Transicional y Género." En *Investigación joven con perspectiva de género*, editado por Marian Blanco, Rosa San Segundo, 32- 46. Instituto de Estudios de Género: Universidad Carlos III de Madrid. 2016.

- Bedia Cobo, Rosa. "El cuerpo de las mujeres y la sobrecarga de sexualidad". *Investigaciones feministas*, vol. 6, (2015): 7-19.
- Bedont, Barbara, y Hall Martinez, Katherine. "Ending impunity for gender crimes under the International Criminal Court". *Brown J. World Aff.* núm.6 (1999): 65.
- Belén, Niño, María. "Aspectos novedosos de la participación política de las mujeres en el proceso de paz con las FARC-EP". *Cuadernos de estrategia*, núm.189 (2017): 209-220.
- Bell, Christine, y O'Rourke, Catherine. "Does feminism need a theory of transitional justice? An introductory essay". *The International Journal of Transitional Justice*, npum 1, vol.1 (2007): 23-44, 24.
- Bagge Laustsen. "Becoming abject: Rape as a weapon of war." *Body & Society*, núm.1, vol.11 (2005): 111-128.
- Benenson, Peter. *Colombia, cuerpos marcados crímenes silenciados. VS contra las mujeres en el marco del conflicto armado*. Amnistía Internacional, 2004.
- Björkdahl, Annika y Mannergren Selimovic, Johanna. "Gendering agency in transitional justice". *Security Dialogue*, núm.46, vol.2 (2015): 165-182.
- Boesten, Jelke. "Of exceptions and continuities: theory and methodology in research on conflict-related sexual violence". *International Feminist Journal of Politics*, núm.4, Vol.16 (2017): 506-519.
- Bou- Bou-Franch, Valentín. "El crimen internacional de esclavitud sexual y la práctica de los matrimonios forzados". *Anuario Español de Derecho Internacional*, núm. 31 (2015): 65 y ss.
- Boyle, Kaitlin M., and Kimberly B. Rogers. "Beyond the Rape "Victim"—"Survivor" Binary: How Race, Gender, and Identity Processes Interact to Shape Distress." *Sociological Forum*. Vol. 35. No. 2. 2020.
- Brants, Chrisje, y Klep, Katrien. "Transitional justice: history-telling, collective memory and the victim-witness". *International Journal of Conflict and Violence (IJCIV)*, núm1, vol. 7 (2013): 36-49.
- Brouwer, Anne Marie, y Etienne Ruwebana. "The legacy of the Gacaca courts in Rwanda: Survivors' views". *International Criminal Law Review*, núm 5, vol. 13 (2013): 937-976.
- Brouwer, Anne Marie. "What the international criminal court has achieved and can achieve for victims/survivors of sexual violence." *International Review of Victimology*, núm2, vol. 16 (2009): 183-209.
- Brownmiller, Susan. *Against our will: Men, women, and rape*. 1. <sup>a</sup> ed. New York: Ballantine Books, 1993.



- Buckley Zistel, Sussane. "Redressing Sexual Violence in Transitional Justice and the Labelling of Women as "Victims"". In *Victims of International Crimes: An Interdisciplinary Discourse*, editado por Bonacker T., Safferling C., 91-100. Asser Press, The Hague, The Netherlands, 2013
- Buckley Zistel, Susanne. "Truth commissions, human rights and gender: Normative changes in transitional moments". en *Peacebuilding in Crisis*. Editado por Tobias Debiel, Thomas Held y Ulrich Schneckener, 137-154. New York: Routledge, 2016.
- Bunting, Annie. "Spaces of international gender justice: a reply to Baldez and DeLaet". *Global Discourse*, núm. 3, vol. 8 (2018): 438-440.
- Bustamante, Vizney Leonardo. "De víctimas a sobrevivientes: implicaciones para la construcción de paces en Colombia." *Antropología y Sociología: Virajes* núm 1, vol.19 (2017): 147-164.
- Buss, Doris E. "Rethinking 'rape as a weapon of war'. *Feminist legal studies*, núm.2, vol.17 (2009): 160.
- Caicedo Delgado, Luz Piedad, et al. *Guía para llevar casos de violencia sexual: Propuestas de argumentación para enjuiciar crímenes de violencia sexual cometidos en el marco del conflicto armado colombiano*. Corporación Humanas, Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género, 2009.
- Charlesworth, Hilary, Chinkin, Christine, y Wright, Shelley. "Feminist approaches to international law." *The American Journal of International Law*, núm, 4, vol. 85 (1991): 613-645
- Campbell, Kirsten. "The gender of transitional justice: Law, sexual violence and the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia". *The International Journal of Transitional Justice*, núm,3, vol. 1 (2007): 411-432.
- Carlsen, Erika. "Rape and war in the Democratic Republic of the Congo". *Peace Review*, núm. 4, vol. (2009): 474-483.
- Castro, Roberto y Riquer, Florinda. "La investigación sobre violencia contra las mujeres en América Latina: entre el empirismo ciego y la teoría sin datos". *Cadernos de saúde pública*, núm,1, vol.19 (2003): 135-146.
- Centro de Memoria Histórica, "La masacre de El Salado: esa guerra no era nuestra". *Bogotá: Memoria Histórica*, 2009.
- Cervera, María. "La fragilidad de la república democrática del Congo: problemas y soluciones a la posesión de recursos minerales". *Revista electrónica de estudios internacionales (REEI)*, vol. 31 (2016): 8.

- Céspedes Báez, Lina-María. “La VS en contra de las mujeres como estrategia de despojo de tierras en el conflicto armado colombiano”. *Revista estudios socio-jurídicos*, núm.2 , vol. 12 (2010): 273-304.
- Céspedes Báez, Lina María, Chaparro González, Nina y Estefan Vargas, Soraya. “Metodologías en el estudio de la VS en el marco del conflicto armado colombiano”. *Colombia internacional*, núm. 80 (2014): 19-56.
- Céspedes Báez, Lina María y Prieto Rios, Enrique. *Utopía u oportunidad fallida: análisis crítico del Acuerdo de Paz*. Editorial Universidad del Rosario, 2017.
- Charlesworth, Hilary, Christine Chinkin, and Shelley Wright. "Feminist approaches to international law." *The American Journal of International Law* 85.4 (1991): 613-645
- Chenault, Suzanne. “And since Akayesu. The Development of ICTR Jurisprudence on Gender Crimes: A Comparison of Akayesu and Muhimana”. *New Eng. J. Int'l & Comp. L*, vol. 14 (2007): 221
- Christiansen Luján, María. “If you want to know what the water is like, don't ask the fish second-order epistemology in the study of violence”. *Eidos*, vol. 26 (2017): 121-148.
- Cohen, Dara Kay, Amelia Hoover Green, and Elisabeth Jean Wood. *Wartime Sexual Violence: Misconceptions, Implications, and Ways Forward*. Washington, DC: United States Institute of Peace, 2013. <http://www.tinyurl.com/y32l8y9t>
- Cohen, Dara Kay, and Ragnhild Nordas. “Sexual violence in armed conflict: Introducing the SVAC dataset, 1989–2009”. *Journal of Peace Research*, núm 3, vol.51(2014): 418-428.
- Collantes, Jorge Luis. “La Corte Penal Internacional. El impacto del Estatuto de Roma en la jurisdicción sobre crímenes internacionales”. *Revista electrónica de Ciencia Penal y Criminología*, núm.4 (2002).
- Comins Mingol, Irene. “De víctimas a sobrevivientes: la fuerza poética y resiliente del cuidar”. *Convergencia*, núm,67, vol. 22(2015): 35-54.
- Contreras, Juan Manuel, et al. “Violencia sexual en Latinoamérica y el Caribe: análisis de datos secundarios. Iniciativa de Investigación sobre la Violencia Sexual”. Sudafrica: Unidad de Investigación sobre Género y Salud, Consejo de Investigación Médica, 1 de marzo de 2010: 1-97,36, [https://clacaidigital.info/bitstream/handle/123456789/980/violencia\\_sexual\\_la\\_y\\_caribe\\_.pdf?sequence=5&isAllowed=y](https://clacaidigital.info/bitstream/handle/123456789/980/violencia_sexual_la_y_caribe_.pdf?sequence=5&isAllowed=y)
- Copelon, Rhonda. “Gender crimes as war crimes: Integrating crimes against women into international criminal law”. *McGill LJ*, vol. 46 (2000): 217

- Copelon, Rhonda. "Surfacing gender: Re-engraving crimes against women in humanitarian law." *Hastings Women's LJ*, vol.5 (1994): 243
- Copello, Patricia Laurenzo. "Violencia de género y derecho penal de excepción: entre el discurso de la resistencia y el victimismo punitivo." *Cuadernos de Derecho judicial*, vol. 9 (2007): 33-74.
- Corey, Allison, y Sandra F. Joireman. "Retributive justice: the Gacaca courts in Rwanda". *African Affairs*, núm 410, vol. 103 (2004): 73-89.
- Correa Delgado, Juan Sebastian. "Desde las voces de las mujeres campesinas reconstruimos la historia y construimos paz: Memoria histórica con las lideresas de la ACVC". *Emancipação*, núm 2, vol. 19 (2019): 1-14.
- Crawford, Kerry F. *Wartime sexual violence: From silence to condemnation of a weapon of war*. Georgetown University Press, 2017
- Cristancho Sierra, Nancy Paola. *Empoderamiento de mujeres en escenarios de reintegración social en la localidad de San Cristóbal, Bogotá (Colombia)*. Diss. Universidad Nacional de Colombia-Sede Bogotá.
- Daly, Kathleen, y Stubbs, Julie. "Feminist engagement with restorative justice". *Theoretical Criminology* núm.1, vol.10 (2006): 9-28
- Davies, Sara E., y True, Jacqui. "Reframing conflict-related sexual and gender-based violence: Bringing gender analysis back in". *Security Dialogue*, núm, 6, Vol.46 (2015): 495-512.
- De Brouwer, Anne Marie. "What the international criminal court has achieved and can achieve for victims/survivors of sexual violence". *International Review of Victimology*, núm.2, vol. 16 (2009): 183-209.
- De Brouwer, Anne Marie, y Ruwebana, Etienne. "The legacy of the Gacaca courts in Rwanda: Survivors views". *International Criminal Law Review*, núm. 5, vol. 13 (2013): 937-976.
- Diken, Bülent, and Carsten Paz Morales, Natalia. "Ausencia de una perspectiva de género en la Corte Penal Internacional: una mirada al caso Fiscalía vs. Lubanga Dyilo". *Anuario Iberoamericano de Derecho Internacional Penal* núm.1, vol. 4. (2016): 4.
- Doak, Jonathan. "The therapeutic dimension of transitional justice: Emotional repair and victim satisfaction in international trials and truth commissions". *International Criminal Law Review*, núm.2, vol..2 (2011): 263-298.

- Dorado Porras, Javier. "Justicia transicional, persecución penal y amnistías". *Derechos y Libertades: revista de filosofía del derecho y derechos humanos*, núm.28 (2013): 81-113. doi: 10.1400/216182.
- Durbach, Andrea y Chappell, Louise. "Leaving behind the age of impunity: Victims of gender violence and the promise of reparations". *International Feminist Journal of Politics* núm.4, vol. 4 (2014): 543-562.
- Eboe Osuji, Chile. *International law and sexual violence in armed conflicts*. M. Nijhoff Publishers, 2012.
- Echeburúa, Enrique, Paz, Corral, y Pedro Javier Amor. "Evaluación del daño psicológico en las víctimas de delitos violentos." *Psicothema*, núm 1, vol. 14 (2002): 139-146.
- Ellsberg, Mary, and Lori Heise. *Researching Violence Against Women: A Practical Guide for Researchers and Activists*. Washington DC: World Health Organization, Path, 2005.
- Elster, Jon. *Closing the books: Transitional justice in historical perspective*. Cambridge University Press, 2004
- Embajada Suiza en Colombia, y Fundación Semana. "La masacre de El Salado: esa guerra no era nuestra". *Organización Internacional para las Migraciones* (OIM-Misión Colombia), 2016.
- Facio, Alda, y Fries, Lorena. "Feminismo, género y patriarcado". *Academia Revista sobre enseñanza del Derecho de Buenos Aires*, núm 6 (2005): 259-294.
- Facio, Alda. "Las mujeres y la Corte Penal Internacional". En: *Aportes Andinos*. Programa Andino de Derechos Humanos, núm, 1. Ecuador: Universidad Andina Simón Bolívar, 2002: 1-7, 4.
- Fajardo, Arturo, y Valoyes, Valoyes. *Violencia sexual como crimen internacional perpetrado por las FARC*. Colombia: Editorial Planeta Colombiana S. A, 2015.
- Farwell, Nancy. "War rape: New conceptualizations and responses". *Affilia*, núm. 4, vol.19 (2004): 401.
- Fernández Blanco, Carolina. "Normas sociales y problemas de eficacia y efectividad de las normas jurídicas". *DOXA, Cuadernos de Filosofía del Derecho*, núm.42 (2019): 259-283.
- Figari Layús, Rosario, y Oettler, Anika. "El caso de las reparaciones a víctimas de violencia política sexualizada en Argentina, Guatemala, Perú y Colombia". *Violencia y desigualdad*, vol. 64 (2017):64-78.

- Figuerola, Isabela, y Franco Novoa, Noriana Marcela. "El marco jurídico del enfoque diferencial en políticas públicas para mujeres indígenas en Colombia". *Estudios Políticos* núm.57 (2020): 71-90.
- Fiscó, Sonia. "Atroces realidades: la violencia sexual contra la mujer en el conflicto armado colombiano". *Papel político*, vol. 17 (2005): 119-159
- Fiske, Susan T. "Prejudices in cultural contexts: shared stereotypes (gender, age) versus variable stereotypes (race, ethnicity, religion)". *Perspectives on psychological science* núm 5, vol. 12 (2017): 791-799.
- Fletcher, Laurel E. "A Wolf in Sheep's Clothing? Transitional Justice and the Effacement of State Accountability for International Crimes". *Fordham Int'l LJ*, núm. 39 (2015): 447-552
- Fulchiron, Amandine. "La violencia sexual como genocidio. Memoria de las mujeres mayas sobrevivientes de violación sexual durante el conflicto armado en Guatemala". *Revista mexicana de ciencia política y social*, núm. 228, vol.61 (2016): 391-422,  
[http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0185-19182016000300391&lng=es&nrm=iso](http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-19182016000300391&lng=es&nrm=iso).
- Gallego, Adrián Humberto Villegas. "El método autobiográfico, para analizar críticamente el concepto de víctima y de tránsito hacia el reconocimiento de sujeto político." Recuperado de <http://elmecs.fahce.unlp.edu.ar/v-elmecs/actas-2016/VillegasGallego.pdf>
- Galvis, María Clara. *Situación en Colombia de la VS contra las mujeres*. Corporación Humanas, Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género, 2009
- García Godos, Jemima. "Victim reparations in transitional justice-what is at stake and why". *Nordisk tidsskrift for menneskerettigheter*, núm.26 (2008): 111-130
- García, Mingo, Elisa. "Cuando los cuerpos hablan. La corporalidad en las narraciones sobre la violencia sexual en las guerras de la República Democrática del Congo". *Disparidades. Revista de Antropología*, núm 1, vol. 70 (2015): 165.
- Gardais, Ondarza, Gabriela. El control de legalidad y la eficiencia y eficacia como principios jurídicos fiscalizables. *Revista de Derecho de la Universidad Católica de Valparaíso*, vol. XXIII (2002): 323-341,  
<http://rdpucv.cl/index.php/rderecho/article/viewFile/511/479>
- Goldsmith Connelly, Mary. "Estudios de la mujer: debates metodológicos y epistemológicos". *Sociológica México*, vol. 33 (2015): 25-44.
- Gomm, Roger, Maelyn Hammersley y Foster Peter. *Case Study Method*, Londres: Sage, 2000.

- Gómez Jara, Ana María. "Human Rights Violations of Vulnerable Groups in Conflict Situations". *Current and Future Developments in Law: The Rights of Minorities: Cultural Groups, Migrants, Displaced Persons and Sexual Identity*. Bentham Science Publishers, vol.2, 2017.
- Gómez, Ana María Jara. "Human Rights Violations of Vulnerable Groups in Conflict Situations." *Current and Future Developments in Law: Volume: 2 The Rights of Minorities: Cultural Groups, Migrants, Displaced Persons and Sexual Identity*. Bentham Science Publishers, 2017
- Gornick C, Janet,C., y Meyer, David S. "Changing political opportunity: The anti-rape movement and public policy". *Journal of Policy History*, núm.10, vol. 4 (1998): 367-368.
- Graf, Norma Blazquez. "Epistemología feminista: temas centrales".*Género e Sexualidade*, vol.1 (2010): 11 y ss.
- Gray, Harriet, Stern, Maria y Chris Dolan. "Torture and sexual violence in war and conflict: The unmaking and remaking of subjects of violence". *Review of International Studies*, (2019): 1-20, <https://www.icty.org/en/cases>
- Gready, Paul y Robins, Simon. "From transitional to transformative justice: A new agenda for practice". *International Journal of Transitional Justice* 8.3 (2014): 339-361.
- Green, Llezlie L. "Gender Hate Propaganda and Sexual Violence in the Rwandan Genocide: An Argument for Intersectionality in International Law". *Colum. Hum. Rts. L. Rev.* vol. 33 (2001): 733 y ss.
- Green, Jennifer, et al. "Affecting the rules for the prosecution of rape and other gender-based violence before the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia: A feminist proposal and critique". *Hastings Women's LJ*, Vol 5 (1994): 171.
- Grisales Rodríguez, Natalia. "Cuerpo, sexualidad y violencia simbólica en la tortura sexual". *Revista de Estudios Sociales*, núm. 54 (2015): 81-92
- Greppi, Andrea. "Eficacia." *Eunomía. Revista en Cultura de la Legalidad*, (2014): 150-159
- Grupo de Memoria Histórica. *Mujeres y Guerra., Víctimas y Resistentes en el Caribe Colombiano*. Editora Aguilar, Altea, Taurus, Alfaguara, S. A., 2011, 216. <http://centrodememoriahistorica.gov.co/wp-content/uploads/2020/01/Mujeres-y-Guerra.-V%C3%ADctimas-y-Resistentes-en-el-Caribe-Colombiano.pdf>.
- Guglielmucci, Ana. "El concepto de víctima en el campo de los derechos humanos: una reflexión crítica a partir de su aplicación en Argentina y Colombia." *Revista de Estudios Sociales* 59 (2017): 83-97.

- Gutiérrez Peñaranda, Edwin, Estefanía Moreno Vargas, and Michel Paola Anaya Lagos. "Justicia transicional, una mirada al alcance y efectividad de su aplicación en el contexto latinoamericano." (2019)
- Guzman, Margaret. "Giving priority to sex crime prosecutions: The philosophical foundations of a feminist agenda." *International Criminal Law Review*, Núm.3, vol.11 (2011): 515-528
- Halley, Janet, et al. "From the international to the local in feminist legal responses to rape, prostitution/sex work, and sex trafficking: Four studies in contemporary governance feminism". *Harv. JL & Gender*, vol. 29 (2006): 335
- Harari, Yuval Noah. *Sapiens. De animales a dioses: Una breve historia de la humanidad*. Debate, 2014: 140.
- Hayner, Priscilla. "Comisiones de la verdad: resumen esquemático." *International Review of the red cross* 8, 62 (2006): 1-18.
- Hayner, Priscilla. B. *Unspeakable Truths 2e: Transitional Justice and the Challenge of Truth Commissions*. Routledge, 2010.
- Harding, Sandra. *Ciencia y feminismo*. Ediciones Morata, 1996.
- Harding, Sandra. "¿Existe un método feminista". Trad. Gloria Elena Bernal, *Debates en torno a una metodología feminista*, (1998): 1-11.
- Herrera Sánchez, Sonia. "Sin trincheras: La violencia sexual contra las mujeres como arma de guerra". *Sal Terrae*, núm. 105, (2017): 405-418
- Herrmann, Judith. "Experiences, challenges, and lessons learned—Interviewing Rwandan survivors of sexual violence". *Griffith Journal of Law & Human Dignity* 5 (2017): 166-188.
- Hartsock, Nancy C.M. *The feminist standpoint revisited, and other essays*. Routledge, 1998.
- Heineman, Elizabeth D, ed. *Sexual violence in conflict zones: From the ancient world to the era of human rights*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2011.
- Hernández Acosta, Cindy Lorena. "Violencia basada en el género y guerra: mujeres, violencia sexual, desplazamiento forzado y restitución de tierras en el departamento del Magdalena entre 1999 a 2012". *Criterios*, núm.2, vol. 8 (2015), 213.

- Henry, Nicola. "Witness to rape: The limits and potential of international war crimes trials for victims of wartime sexual violence". *International Journal of Transitional Justice*, núm.1. vol.3 (2009): 114-134.
- Hermosa, Alicia Botello, and Rosa Casado Mejía. "Estereotipos de género con respecto a las etapas reproductivas de las mujeres y sus implicaciones en la salud." *Revista Matronas Profesión* 17.4 (2016): 130-136.
- Herrmann, Judith. "Experiences, challenges, and lessons learned-Interviewing Rwandan survivors of sexual violence". *Griffith Journal of Law & Human Dignity*, núm.5 (2017): 166-188.
- Hoover Green, Amelia. "The commander's dilemma: Creating and controlling armed group violence" *Journal of Peace Research*, núm.5, vol.53 (2016): 619-632.
- Hundek Pichón, Leticia Elena. "Mujeres reinsertadas". *Advocatus*, núm 27 (2016): 65-82.
- Ibarra Melo, María Eugenia. *Mujeres e insurrección en Colombia: reconfiguración de la identidad femenina en la guerrilla*. Pontificia Universidad Javeriana, Departamento de Ciencia Jurídica y Política, Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, 2009.
- Jaramillo Estrada, Olga Luz. *Mujer y reintegración*. Diss. Universidad Nacional de La Plata, 2017.
- Jara Gómez, Ana María. "Terrorismo sexual y garantías de los derechos humanos en áreas de conflicto y post conflicto". *Revista de Ciencias Sociales*, núm. 159 (2018): 93-109.
- Jeammaud, Antoine, "Legislación y realidad de la negociación. Apuntes para el análisis de sus relaciones". En *La negociación colectiva en América Latina*, editado por Ojeda Avilés, Antonio y Ermida Uriarte, Oscar. Madrid: Trotta, (1993): 15 y ss.
- Jones, Annika. "Non-cooperation and the Efficiency of the International Criminal Court". *Cooperation and the International Criminal Court* (2016): 185-209.
- Kabunda, Mbuyi. "Causas y efectos de la conflictividad en la República Democrática del Congo y los Grandes Lagos". *Papeles de relaciones ecosociales y cambio social*, núm. 110 (2010): 133-144.
- Kastner, Philipp. "Transitional Justice+ Cyberjustice= Justice." *LJIL* 30 (2017): 753.
- Kent, Lia. "Local memory practices in East Timor: Disrupting transitional justice narratives". *International Journal of Transitional Justice*, núm3, vol. 5. (2011): 434-455.
- Kerry F. *Wartime sexual violence: From silence to condemnation of a weapon of war*. Georgetown University Press, 2017



- Kirby, Paul. "How is rape a weapon of war? Feminist International Relations, modes of critical explanation and the study of wartime sexual violence." *European Journal of International Relations* núm 4. vol. 19. (2013): 797-821.
- Koos, Carlo. "Sexual violence in armed conflicts: research progress and remaining gaps." *Third World Quarterly*, núm, 9, vol. 38 (2017): 1935-1951.
- La Haye, Eve. *War crimes in internal armed conflicts*. Cambridge: Cambridge University Press, 2008, 7.
- Lamas, Marta. "Género, diferencias de sexo y diferencia sexual". *Debate feminista*, vol. 20 (1999): 84-106.
- Lambourne, Wendy. "Transitional justice and peacebuilding after mass violence". *International Journal of Transitional Justice*, núm.1, vol.3 (2009): 28-48
- Lawson, Tamara F. "A shift towards gender equality in prosecutions: Realizing legitimate enforcement of crimes committed against women in municipal and international criminal law". *S. Ill. ULJ*, vol. 33 (2008): 181
- Lazo, A. Autonomía, Dependencia y vulnerabilidad. Tesis de Maestría, UC3M, 2016.
- Leatherman, Janie. "Sexual violence and armed conflict". En *Politics & Gender*. Editado por Hudson, Valerie 548–550. MA: Polity Press. 2011.
- Leebaw, Brownwyn Anne. "The irreconcilable goals of transitional justice". *Human Rights Quarterly*, vol. 30 (2008): 95-118, 96.
- Leentvaar, Karlijn, y Taylor, David. *Recurring Obstacles to Gender Sensitivity within Transitional Justice*. Utrecht: Impunity Watch, 2013.
- Lemaitre, Julieta y Bergtora Sandvik, Kristin. "Beyond sexual violence in transitional justice: Political insecurity as a gendered harm". *Feminist Legal Studies* núm. 3 y vol. 22(2014): 243-261
- Linares Ardila, Karen Lorena, y Sterra Acero, Aura María. "Mujeres transgresoras: formación política y organizativa frente a la violencia sexual contra las mujeres en los Montes de María". *Ciencia Política*, núm. 18, vol. 9 (2014): 157-180, 161.
- López Cárdenas, Carlos Mauricio, Canchari Canchari, Rocio Yudith y Sanchez de Rojas, Emilio. *De género y guerra: nuevos enfoques en los conflictos armados actuales*. 1.ª ed. Bogota: Universidad del Rosario, 2017.
- López Díaz, Claudia. "Selection and prioritization of crimes as a research strategy of transitional justice". *Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas*, núm.117, vol. 42 (2012): 515-579.

- López de Ávila, Ana María, y Barreto Lima, Martonio Mont'Alverne. "Género y Justicia Transicional: la Violencia Contra la Mujer en el Marco de los Conflictos Armados". *Verdade, Justiça e Reparação na America Latina* (2015): 11
- López, Guzmán Rodríguez, Diana Esther. Justicia transicional y Género: un acercamiento desde las mujeres. Diss. Universidad Nacional de Colombia, 2011
- López León, María Jimena. "Las mujeres imaginadas de la guerra: narraciones de excombatientes paramilitares sobre las mujeres y el conflicto armado." *Antropología* (2009).
- López Martín, Ana Gemma. "Primera Sentencia de la Corte Penal Internacional sobre reparación a las víctimas: caso The Prosecutor c. Thomas Lubanga Dyilo, 7 de agosto de 2012". *Revista Española de Derecho Internacional* núm, 2, vol. 65(2013): 209-226.
- López Mora, Fernando. "Crímenes de guerra, impunidad y mundialización de la justicia penal internacional en el mundo contemporáneo." En *Reflexiones sobre los derechos humanos*, editado por Rodríguez Jiménez, José Luis y Higuera del Parado, Cristina, 183-194. Ommpress Política, 2017
- Luciano, Dinys, and Karen Padilla. *Violencia sexual en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: definiciones, datos recomendados e indicadores*. IPAS y UNFPA/LACRO, 2012, <http://derechosdelamujer.org/wp-content/uploads/2016/02/Violencia-sexual-en-El-Salvador-Guatemala-Honduras-y-Nicaragua-Analisis-de-datos-primarios-y-secundarios.pdf>
- Lunde, I, and J Ortmann. "Prevalence and sequelae of sexual torture". *Lancet*, núm 8710, vol. 336, (1990): 289-91, doi:10.1016/0140-6736(90)91814-q
- Lyons, Josefina Quintero, Angélica Matilde Navarro Monterroza, and Malka Irina Meza. "La figura del estado de cosas inconstitucionales como mecanismo de protección de los derechos fundamentales de la población vulnerable en Colombia." *Revista Mario Alario D'Filippo* 3.1 (2011): 69-80.
- Mallinder, Louise, y McEvoy, Kieran. "Rethinking amnesties: Atrocity, accountability and impunity in post-conflict societies". *Contemporary Social Science*, núm1, vol.6(2011): 107-128
- Manzanero, Antonio L., and José Manuel Muñoz. "La prueba pericial psicológica sobre la credibilidad del testimonio: Reflexiones psico-legales." (2011).
- Mantilla, Falcón, Julissa. "La Justicia Transicional y los Derechos de las Mujeres: Posibilidades y retos". *IUS ET VERITAS*, núm. 51 (2015): 208-223.
- Matthews, Nancy A. *Confronting rape: The feminist anti-rape movement and the state*. Routledge, 2005.

- McCauley, Heather L, Rebecca Campbell, Nicole T. Buchanan and Carrie A. Moylan. "Advancing theory, methods, and dissemination in sexual violence research to build a more equitable future: an intersectional, community-engaged approach". *Violence against women*, n. °16, vol. 25, (2019): 1906-1931.
- Mackinnon, Catherine A. "Sexuality, pornography, and method: Pleasure under Patriarchy". *Ethics*, núm.2, vol. 99 (1989): 314-346.
- Mackinnon, Catharine A. "Rape, genocide, and women's human rights". En *Genocide and Human Rights*, editado por Mark Lattimer, 133-144. New York: Routledge, 2017.
- Mackinnon, Catherine. A. (1995). *Hacia una teoría feminista del Estado*. Trad. Eugenia Martin, Ediciones Cátedra, vol. 27, 1995.
- Mackinnon, Catherine A. "The ICTR's Legacy on Sexual Violence". *New Eng. J. Int'l & Comp. L*, núm. 2, vol. 14. (2008): 211-220.
- Marciales Montenegro, Carmen Ximena. "VS en el conflicto armado colombiano: racismo estructural y violencia basada en género". *Revista Via Iuris*, núm.19 (2015): 69-90.
- Marín, Alán Arias. "Teoría crítica y derechos humanos: hacia un concepto crítico de víctima". *Nómadas. Critical Journal of Social and Juridical Sciences*, núm.4, vol. 36 (2012).
- McMahon, Sheila M. *History of the Anti-Rape Movement. Handbook of Sexual Assault and Sexual Assault Prevention*. Springer, Cham, 2019: 47-53.
- McNickle Rose, Vicki, "Rape as a social problem: A byproduct of the feminist movement". *Social Problems*, núm.1, vol. 25 (1977): 75-89.
- Meertens, Donny, Viveros, Mara, y Arango, Luz Gabriela. "Discriminación étnico-racial, desplazamiento y género en los procesos identitarios de la población negra en sectores populares de Bogotá". *Pobreza, exclusión social y discriminación étnico-racial en América Latina y el Caribe* (2008): 181-214.
- Meneses Copete, Yeison Arcadio "Representaciones sociales sobre afrodescendientes: la aventura cultural, la VS-género y luchas multidimensionales." *Memoria y sociedad*, núm.37, vol. 18 (2014):76-92.
- Mertus, Julie. "Shouting from the bottom of the well the impact of international trials for wartime rape on women's agency." *International Feminist Journal of Politics*, núm. 1, vol 6(2004): 110-128.
- Mesa, Juan David. "Hacia una nueva mirada de la reintegración de desmovilizados en Colombia: conceptos, enfoques y posibilidades." *Revista Cs* (2017): 105-133

- Martínez Carazo, Piedad Cristina. "El método de estudio de caso. Estrategia metodológica de la investigación científica". *Revista científica Pensamiento y Gestión*, núm.20 (2006): 165-193.
- Mendoza, Karen, Domínguez, Giselt y Rosero González, Tatiana Andrea. "Justicia sobre la hierba. Tribunales Gacaca, lecciones de reconciliación para Colombia". *Estudios Políticos*, núm. 51 (2017): 218-239.
- Millet, Kate. "Theory of sexual politics". *Radical feminism: A documentary reader*, (2000): 122-62.
- Moffett, Luke. *Transitional justice and reparations: Remediating the past?. Research handbook on transitional justice*. Edward Elgar Publishing, 2017.
- Mokate, Karen. *Eficacia, eficiencia, equidad y sostenibilidad: qué queremos decir?*. Departamento de Integración y Programas Regionales, Instituto Interamericano para el Desarrollo Social, Banco Interamericano de Desarrollo, 2001: 5.
- Montañez, Anyi Viviana Castelblanco, and Angélica María Rodríguez Garzón. "El uso de la violencia sexual por parte de los paramilitares en el Caribe Colombiano. Estrategias de expansión y consolidación de la" sociedad del buen orden". *Ciudad paz-ando* 5.2 (2012): 40.
- Moore, Melinda W., y Barner, John R.. "Sexual minorities in conflict zones: A review of the literature". *Aggression and violent behavior*, Vol. 35 (2017): 33-37.
- Montenegro, Carmen Ximena Marciales. "VS en el conflicto armado colombiano: racismo estructural y violencia basada en género." *Revista Via Iuris* 19 (2015): 69-90.
- Moshan, Brook Sari. "Women, war, and words: the gender component in the permanent international criminal court's definition of crimes against humanity." *Fordham Int'l LJ*, vol. 22 (1998): 154.
- Muñoz, Gustavo, and Ana Bertilda Orrego Jaramillo. "'Con las manos en alto' el concepto de víctima del conflicto armado: una aproximación desde la literatura." *Nuevo derecho* 12.18 (2016): 2.
- Mullins, Christopher W. "'We Are Going to Rape You and Taste Tutsi Women' Rape during the 1994 Rwandan Genocide. *The British Journal of Criminology*, núm. 6, vol. 49 (2009): 719-735.
- Nabukeera-Musoke, Harriet. "Transitional justice and gender in Uganda: Making peace, failing women during the peace negotiation process." *African Journal on Conflict Resolution* 9.2 (2009).
- Nagy, Rosemary. "Transitional justice as global project: Critical reflections". *Third World Quarterly* núm.2, vol.29 (2008): 275-289

- Nesiah, Vasuki. "Discussion lines on gender and transitional justice: An introductory essay reflecting on the ICTJ Bellagio Workshop on Gender and Transitional Justice". *Colum. J. Gender & L.* núm. 15 (2006): 799-812.
- Nina. "The mark of refusal: Sexual violence and the politics of recontextualization." *Feminist theory* 5.3 (2004): 243-256.
- Ní Aoláin, Fionnuala. "Women, security, and the patriarchy of internationalized transitional justice". *Human Rights Quarterly*. núm. 31 (2009): 1055 y ss
- Ní Aoláin, Fionnuala. "Advancing feminist positioning in the field of transitional justice. *International Journal of Transitional Justice*, núm.6 y vol.2 (2012): 205-228.
- Nowrojee, Binaifer. *Your Justice is Too Slow: Will the ICTR fail Rwanda's rape victims?*, 12 y ss.
- Odio Benito, Elizabeth. "Los derechos humanos de las mujeres, la justicia penal internacional y una perspectiva de género". Ponencia presentada en la novena Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, México, D.F., 10 al 12 de junio de 2004.
- Odio Benito, Elizabeth. "De la violación y otras graves agresiones a la integridad sexual como crímenes sancionados por el derecho internacional humanitario (crímenes de guerra)". *Órgano Informativo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México*, (2001): 98-112.
- Olasolo, Héctor. "Los fines del derecho internacional penal". *International Law*, vol. 29 (2016): 93-146
- Oosterveld, Valerie. "The definition of gender in the Rome Statute of the International Criminal Court: A step forward or back for international criminal justice". *Harv. Hum Rts. J.*, vol. 18 (2005): 55.
- Orentlicher, D. F. (1991). Settling accounts: the duty to prosecute human rights violations of a prior regime. *Yale Law Journal*, 2537-2615
- Orozco Abad, Iván, et al. "*Justicia y Paz: ¿verdad judicial o verdad Histórica?*". Organización Internacional para las Migraciones (OIM-Misión Colombia), 2016, <https://es.calameo.com/read/000059089a21fb9f98a66>
- O'Reilly, María. "Peace and justice through a feminist lens: Gender justice and the women's court for the former Yugoslavia". *Journal of Intervention and Statebuilding*, núm.3, vol.3 (2016): 419-445.
- O'Rourke, Catherine. "Transitional justice and gender". en *Research Handbook on Transitional Justice*. Editado por Cheryl Lawther, Luke Moffett y Dov Jacobs, 117-141. Reino Unido: Edward Elgar Publishing, 2017.

- O'Rourke, Catherine. "International law and domestic gender justice: why case studies matter". *Transitional Justice Institute Research Paper*, n° 11-04 (2011): 11-41. [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=1804928](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1804928); or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1804928>.
- O'Rourke, Catherine. (2013). *Gender, politics in transitional justice*. Routledge, 2013.
- Ortiz, Jairo Enrique González y Carrasquilla Baza, Deibys. "Niños, niñas y adolescentes, víctimas o victimarios del conflicto armado en Colombia?". *Justicia juris* 13.1 (2017): 56-62.
- Ossandon Widow, María Magdalena. "Eficiencia del Derecho penal. El caso de los delitos contra el medio ambiente." *Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso*, vol. 24 (2010): 379 - 394.
- Palacios, Margarita, y Posocco, Silvia. "War and the politics of sexual violence". En *Introducing the New Sexuality Studies*, editado por Seidman, Steven, Fischer, Nancy y Meeks, Chet, 620-628. Routledge, 2016.
- Palacio Hernández, Ricardo. "La condición de víctima en el marco del conflicto armado colombiano y el problema de la responsabilidad". *Prisma Social: revista de investigación social* núm. 10 (2013): 459-485.
- Pain, Rachel. Space, sexual violence and social control: Integrating geographical and feminist analyses of women's fear of crime. *Progress in human geography*, núm. 4, vol.15, (1991): 415-431
- Park, Augustine. "Community-based restorative transitional justice in Sierra Leone." *Contemporary Justice Review* núm.1, vol.13 (2010): 95-119.
- Parrado Morales, Stefannia "Cuerpos Dolientes: Sobre el cuerpo, el testimonio y la reparación en mujeres indígenas víctimas de violencia sexual en el Conflicto Armado Colombiano." *Ciudad paz-ando*, núm. 1 y vol. 7 (2014): 36.
- Prada Prada, Nancy, et. al. *Memoria histórica con víctimas de violencia sexual: Aproximación conceptual y metodológica*, 40 y ss.
- Patel, Priti. "Forced sterilization of women as discrimination". *Public health reviews*, núm.1, Vol. 38 (2017): 15
- Peña, Wilmar. "El estudio de caso como recurso metodológico apropiado a la investigación en ciencias sociales". *Revista educación y desarrollo social* 3, núm.2 (2009):180-195.
- Pérez León Acevedo, Juan Pablo. "Las reparaciones en el derecho internacional de los derechos humanos, derecho internacional humanitario y derecho penal internacional". *Am. U. Int'l L. Rev.* núm. 23 (2007): 7.

- Philadelphoff Puren, Nina. "The mark of refusal: Sexual violence and the politics of recontextualization". *Feminist theory*, núm 3., vol.5 (2004): 243-256, 245.
- Pfeffer Urquiaga, Emilio. "Eficacia de las normas constitucionales frente a la reforma procesal penal". *Revista de Derecho Público*, núm.64 (2002): 48-68
- Portilla Gómez, Juan Manuel y Hernández Rojas, Andrea Paula. "La evolución y efectividad de los tribunales penales ad-hoc". *Anuario Mexicano de Derecho Internacional* (2008): 207-244.
- Posada Kubissa, Luisa. "Feminismo y guerra. A propósito de Judith Butler". *ISEGORÍA. Revista de Filosofía Moral y Política*, núm. 56, enero-junio, 2017:129.
- Puleo, Alicia. El patriarcado: ¿una organización social superada. *Temas para el debate*, (2005): 133, 39-42
- Porter, Elisabeth. "Gendered narratives: Stories and silences in transitional justice." *Human Rights Review* 17.1 (2016): 35-50.
- Porras, Javier Dorado. "Justicia transicional." *EUNOMÍA. Revista en Cultura de la Legalidad* (2015): 192-204.
- Posada Luisa Kubissa. Feminismo y guerra. A propósito de Judith Butler Feminism and war. With Regard to Judith Butler. *ISEGORÍA. Revista de Filosofía Moral y Política* N.º 56, enero-junio, 2017:129.
- Posner, E. A., & Vermeule, A. (2004). Transitional justice as ordinary justice. *Harvard Law Review*, 117(3), 761-825
- Quintero Lyons, Josefina, Navarro Monterroza, Angélica Matilde y Meza, Malka Irina. "La figura del estado de cosas inconstitucionales como mecanismo de protección de los derechos fundamentales de la población vulnerable en Colombia". *Revista Mario Alario D'Filippo*, núm,1, vol.3 (2011): 69-80
- Ramírez Robledo Libia, Adriana Arcila, Luz Elena Buriticá y Jairo Castrillón. *Paradigmas y modelos de investigación guía didáctica y módulo*. Segunda Edición. Colombia: Fundación Universitaria Luis Amigó, 2004.
- Restrepo Rodríguez, Diana, y Paz Francés, Lecumberri. "Rasgos comunes entre el poder punitivo y el poder patriarcal". *Revista Colombiana de Sociología*, núm.1, vol. 39(2016): 9-11.
- Robson, Kathryn. "The subject of rape: Feminist discourses on rape and violability in contemporary France". *French Cultural Studies*, núm 1, vol. 26 (2015): 45-55.
- Rodríguez Saavedra, Ángela. "Similitudes y diferencias de los Tribunales Ad-Hoc para Ruanda y la ex -Yugoslavia desde una perspectiva feminista". *UNIVERSITAS. Revista de Filosofía, Derecho y Política*, vol. 28 (2018): 2-18

- Rico, Margarita Rosa Cadavid. "Mujer: blanco del conflicto armado en Colombia." *Analecta política* 4.7 (2014): 301-318
- Rimé, Bernard, et al. "The impact of Gacaca tribunals in Rwanda: Psychosocial effects of participation in a truth and reconciliation process after a genocide." *European Journal of Social Psychology* 41.6 (2011): 695-706.
- Ríos, Jerónimo y Brocate, Roberto. "Violencia sexual como crimen de lesa humanidad: los casos de Guatemala y Perú". *Revista CIDOB d'Afers Internacionals*, vol. 117 (2017): 79-100.
- Roht Arriaza, Naomi, y Mariezcurrena, Javier. *Transitional justice in the twenty-first century: beyond truth versus justice*. Cambridge University Press, 2006.
- Roig, Capella I. "Jurisdicciones gacaca: Una solución local al genocidio ruandés." *REDI* núm 56 (2004): 765.
- Rombouts, Heidy. "Women and reparations in Rwanda: A long path to travel". En *What happened to the women? Gender and reparations for human rights violations*, editado por Rubio Marín, Ruth, De Greiff, Pablo y Mayer Rieckh, Alexander, 194-245. 1 edición, Social Science Research Council, 2006.
- Rubio Marín, Ruth, *The gender of reparations: unsettling sexual hierarchies while redressing human rights violations*. Cambridge University Press, 2009.
- Rosende Villar, Cecilia. "Efectos directos y reflejos de la sentencia". *Revista chilena de derecho* núm. 28 (2001): 489
- Sácouto, Susana. "Victim participation at the International Criminal Court and the Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia: A feminist project". *Mich. J. Gender & L.* núm.18 (2011): 297.
- Sagot, Montserrat. "Estrategias para enfrentar la violencia contra las mujeres: reflexiones feministas desde América Latina". *Athenea Digital. Revista de pensamiento e investigación social*. Vol. 14 (2008): 215-228.
- Salmón, Elizabeth. *Introducción al Derecho Internacional Humanitario*. Comité Internacional de la Cruz Roja, 2004.
- Salcedo López, Diana María. "Género, derechos de las víctimas y justicia transicional: Retos en Colombia". *Revista de paz y conflictos*, núm.6 (2013): 124-151.
- Sánchez Lucumí, Claudia Lorena y Stephanie Oliveros Ortiz. "La reparación integral a las víctimas mujeres: Una aproximación a la aplicación del enfoque diferencial de género en el contexto del conflicto armado colombiano". *Revista Universitas Estudiantes*, núm.11 (2014): 163-185.



- Sánchez Gómez, Olga, et al. *Encuesta de prevalencia de violencia sexual en contra de las mujeres en el contexto del conflicto armado colombiano (2010-2015)*. Bogotá: OXFAM, 2017.
- Sánchez Gómez, O. A. (2008). Las violencias contra las mujeres en una sociedad en guerra;
- Sánchez Silva, Jesús María. "Eficiencia y Derecho penal." *Anuario de derecho penal y ciencias penales*, Núm.,1 Vol. 49 (1996): 93-128.
- Sanchís, Luis Prieto. "Una perspectiva normativa sobre el bien jurídico". *Nuevo Foro Penal*, vol. 65 (2003): 46-91.
- Segato, Rita Laura. *Las estructuras elementales de la violencia: contrato y status en la etiología de la violencia*. Universidade de Brasília, Departamento de Antropología, núm, 334. 2003: 13.
- Segato, Rita Laura. El sexo y la norma: frente estatal, patriarcado, desposesión, colonidad. *Estudios Feministas*, (2014): 593-616.
- Segato, Rita Laura. "Las nuevas formas de la guerra y el cuerpo de las mujeres". *Sociedade e Estado*, núm. 2, Vol. 29, (2014): 341-371, 343.
- Segato, Rita Laura. *La guerra contra las mujeres*. 1.ª ed. Madrid: Traficantes de sueños, 2016.
- Sharp, Dustin N. "What Would Satisfy Us? Taking Stock of Critical Approaches to Transitional Justice". *International Journal of Transitional Justice*, núm,3 vol.3 (2019): 570-589.
- Short, Jonathan MH. "Sexual Violence as Genocide: The Developing Law of the International Criminal Tribunals and the International Criminal Court". *Mich. J. Race & L*, vol. 8 (2002): 503 y ss.
- Sierra Acero, Aura María, y Linares Ardila, Karen Lorena. *Ya nos cansamos de callar: VS contra la mujer como arma de guerra del paramilitarismo en la región de los Montes de María*. Universidad Pedagógica Nacional, 2014.
- Spangaro, Jo, et al. "Mechanisms underpinning interventions to reduce sexual violence in armed conflict: A realist-informed systematic review". *Conflict and health*, núm, 9, vol.1 (2015): 19.
- Skjelsbaek, Inger. "Sexual violence and war: Mapping out a complex relationship". *European journal of international relations* núm. 2, vol.7 (2001): 211-237.

- Skjelsbaek, Inger. "Victim and survivor: Narrated social identities of women who experienced rape during the war in Bosnia-Herzegovina". *Feminism & Psychology*, núm.4, vol.16 (2006): 373-403.
- Skulj Iglesias, Agustina. "Estado penal y populismo punitivo Reflexiones feministas sobre el devenir punitivista del feminismo". *Viento sur: Por una izquierda alternativa*, vol. 168 (2020): 77-85.
- Sriram, C. L., & Pillay, S. *Peace versus justice?*. The dilemma of transitional justice in Africa, 2010.
- Staggs Kelsall, Michelle y Stepakoff, Shanee. "When We Wanted to Talk About Rape': Silencing Sexual Violence at the Special Court for Sierra Leone". *International Journal of Transitional Justice*, núm.3, vol.1 (2007): 355-374, <https://doi.org/10.1093/ijtj/ijm034>
- Schneider, Andrea Kupfer. "The Intersection of Dispute Systems Design and Transitional Justice". *Harv. Negot. L. Rev.* núm. 14 (2009): 289.
- Sharratt, Sara. *Gender, shame and sexual violence: The voices of witnesses and court members at war crimes tribunals*. New York: Routledge, 2016.
- Shiva, Vandana. "Abrazar la vida. Mujer, ecología y desarrollo". *Cuadernos inacabados*, vol. 18 (1995): 1-4.
- Smith, Andrea. *Conquest: sexual violence and American Indian genocide*. Carolina del Norte: Duke University Press, 2015
- Snider, Laureen. "Feminism, punishment and the potential of empowerment". *Can. JL & Soc*, vol. 9 (1994): 75
- Stark, Lindsay, y Wessells, Mike. "Sexual violence as a weapon of war". *Jama*, núm.7, vol.308 (2012): 677-678.
- Soh, C. Sarah. *The comfort women: Sexual violence and postcolonial memory in Korea and Japan*. Chicago: University of Chicago Press, 2008
- Swaine, Aisling. *Conflict-related violence against women: transforming transition*. United Kingdom: Cambridge University Press, 2018.
- Swaine, Aisling. "Beyond strategic rape and between the public and private: Violence against women in armed conflict." *Hum. Rts. Q.* vol.37 (2015): 755.
- Tamarit Sumalla, Josep María. "Comisiones de la verdad y justicia penal en contextos de transición." *InDret: revista para el análisis del derecho*, núm. 1. (2010): 1-29.

- Tantaleán Odar, Christian Fernando. "Análisis histórico del sistema de administración de justicia en el Perú y su debilidad al afrontar casos de violación sexual de mujeres en conflicto armado interno". *Nous*, núm. ° 9, vol. 7 (2016): 53-67
- Tardón Recio, Bárbara. "La violencia sexual: desarrollos feministas, mitos y respuestas normativas globales". Tesis doctoral, Instituto Universitario de Estudios de la Mujer, 2017, <https://repositorio.uam.es/handle/10486/680682>.
- Teitel, Ruti G. *Transitional justice*. Oxford University Press on Demand, 2000.
- Teitel, Ruti G. "Transitional justice genealogy". *Harvard Humun. Rigths Journal*, vol. 16 (2003):69 y ss.
- Torre Cuadrada García Lozano, Soledad. "Los avances de la jurisprudencia internacional contra la impunidad de las violaciones en los conflictos armados". *Estudios internacionales*, núm. 190 (2018): 63-84.
- Torres Falcón, Marta. "Entre el silencio y la impunidad: violencia sexual en escenarios de conflicto". *Revista de estudios de género. La ventana*, núm. 41, vol.5 (2015):
- Uribe Sayago, María José. *El estatus de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en las FARC*. Tesis de licenciatura, Universidad San Francisco de Quito. Quito: USFQ, 2016.
- Uprimny, Rodrigo y Saffon, María Paula. "Capítulo 7 Justicia transicional y justicia restaurativa: tensiones y complementariedades". En *Entre el perdón y el paredón: preguntas y dilemas de la justicia transicional*, compilado por Angélica Rettberg, 211-232, Bogotá: Universidad de los Andes, 2005.
- Valcárcel, Amelia. *Feminismo en el mundo global*. Cátedra, 2013.
- Vallterra Meger, Sara. "Toward a feminist political economy of wartime sexual violence: The case of the Democratic Republic of Congo". *International Feminist Journal of Politics*, núm.3, vol.17 (2015): 416-434
- Van Schaak, Beth. "Obstacles on the road to gender justice: the international criminal tribunal for Rwanda as object lesson". *Am. UJ Gender Soc. Pol'y & L.*, núm.17 (2009): 361.
- Varela, Nuria. *Feminismo para principiantes*. Ediciones Books, 2014.
- Vigarello, Georges. *Historia de la violación: siglos XVI-XX*. Madrid: Catedra, 1999.
- Villa Gómez, Juan David, Toro, Cabanza Restrepo, Laura, Goez Toro, Camila y Estrada, Análida. "Los dolores que quedan son las libertades que faltan. Construcción política y social del cuerpo de las mujeres en el conflicto armado". *Revista de Psicología Universidad de Antioquía* 8, núm.2, vol.8 (2016), 147-172.

- Villellas Ariño, María. "Violencia sexual en conflictos armados". *Quaderns de Construcció de Pau*, núm.15 (2010): 1-17, 9. [https://escolapau.uab.cat/img/qcp/violencia\\_sexual\\_guerra.pdf](https://escolapau.uab.cat/img/qcp/violencia_sexual_guerra.pdf)
- Viseur Sellers, Patricia. *The prosecution of sexual violence in conflict: the importance of human rights as means of interpretation*. Women's Human Rights and Gender Unit (WRGU), 2008.
- Vivas Barrera, Tania Giovanna, y Pérez Salazar, Bernardo. "Sobre la situación de graves violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario en contra de las mujeres en el conflicto armado colombiano". En *Derechos humanos, paz y posconflicto en Colombia*, Editado por Chávez Hernández, Eduardo et.al: 94 y ss. Bogotá: Universidad Católica de Colombia, 2016.
- Wilches, Ivonne. "Lo que hemos aprendido sobre la atención a mujeres víctimas de violencia sexual en el conflicto armado colombiano." *Revista de estudios sociales*, núm. 36 (2010): 86-94.
- Wood, Elisabeth Jean. "Variation in sexual violence during war." *Politics & Society*, núm.3, vol. 34 (2006): 307-342.
- Wood, Elisabeth Jean. "Armed groups and sexual violence: When is wartime rape rare?". *Politics & Society*, núm. 1, vol. 37. (2009): 131-161
- Wood, Elisabeth Jean. "Rape as a Practice of War: Toward a Typology of Political Violence". *Politics & Society*, núm 4, vol. 46 (2018): 513-537.
- Wood, Elisabeth Jean, "Rape during War is Not Inevitable: Variation in Wartime Sexual Violence", in Morten Bergsmo, Alf B. Skre and Elisabeth Jean Wood (eds.), *Understanding and Proving International Sex Crimes*, Torkel Opsahl Academic Epublisher, Oslo, 2012, p.
- Wühler, Norbert, y Niebergall, Heike. *Property restitution and compensation: Practices and Experiences of Claims Programmes*. Hammersmith Press, 2008.
- Yin, Robert. *Applications of case study research*, Londres: Sage, 2012

## **Leyes Internacionales**

- Asamblea General de Naciones Unidas, *Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer*, (resolución 34/180), 18 de diciembre de 1979, <https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cedaw.aspx>.

- Comité Internacional de la Cruz Roja, *Reglamento relativo a las leyes y costumbres de la guerra terrestre*, 18 de octubre de 1907, tomado de *Derecho Internacional relativo a la conducción de las hostilidades*, CICR, 1996, <https://www.icrc.org/es/doc/resources/documents/misc/treaty-1907-regulations-laws-customs-war-on-land-5tdm39.htm>
- Comité Internacional de la Cruz Roja, *Protocolo I adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales*, CICR, 1977. <https://www.icrc.org/es/document/protocolo-i-adicional-convenios-ginebra-1949-proteccion-victimas-conflictos-armados-internacionales-1977>
- Comité Internacional de la Cruz Roja. *Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional*, CICR, 1977, <https://www.icrc.org/es/doc/resources/documents/misc/protocolo-ii.htm>
- Comité Internacional de la Cruz Roja. *III III. Convenio de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de guerra*, 1949, CICR, 1949, <https://www.icrc.org/es/doc/resources/documents/treaty/treaty-gc-3-5tdkwx.htm>
- Comité Internacional de la Cruz Roja. *IV Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra*, CICR, 1949, <https://www.icrc.org/es/doc/resources/documents/treaty/treaty-gc-4-5tdkyk.htm>
- Corte Penal Internacional, *Los Elementos de los Crímenes*, de 32 de mayo de 2010, (ONU, PCNICC/2000/1/Add.2), <https://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/a851490e-6514-4e91-bd45-ad9a216cf47e/283786/elementsofcrimesspaweb.pdf>
- Comité sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), *Recomendación General N° 19 sobre La violencia contra la mujer*, 29 de enero de 1992, [http://archive.ipu.org/splz-e/cuenca10/cedaw\\_19.pdf](http://archive.ipu.org/splz-e/cuenca10/cedaw_19.pdf)
- Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, de 17 de julio de 1998, (ONU A/CONF.183/9), [https://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome\\_statute\(s\).pdf](https://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf)
- Estatuto del Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia, de 25 de mayo de 1993, (ONU S/RES/827/93), <https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/InternationalTribunalForTheFormerYugoslavia.aspx>.
- Organización de Estados Americanos, “Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. (Convención De Belem Do Para)”, 14 de agosto de 1995. <http://www.oas.org/juridico/spanish/Tratados/a-61.html>

## Sentencias de Tribunales internacionales

Corte Interamericana de Derechos Humanos. “*Caso de la “masacre de mapiripán” vs. Colombia*”, del 15 de septiembre de 2005, [https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec\\_134\\_esp.pdf](https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_134_esp.pdf)

Corte Interamericana de Derechos Humanos. “*Caso Acosta Calderón vs. Ecuador*” vs. Colombia”, del 24 de junio de 2005, [https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec\\_129\\_esp1.pdf](https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_129_esp1.pdf)

Corte Interamericana de Derechos Humanos. “*Caso Rosendo Cantú y otra vs. México*”, del 31 de Agosto de 2010, [https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec\\_216\\_esp.pdf](https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_216_esp.pdf)

Corte Interamericana de Derechos Humanos. “*Caso Fernández Ortega y otros vs. México*”, del 30 de Agosto de 2010, [https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec\\_215\\_esp.pdf](https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_215_esp.pdf)

Corte Interamericana de Derechos Humanos. “*Caso V.R.P., V.P.C. y otros vs. Nicaragua*” vs. Colombia”, del 8 de marzo de 2018, [https://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec\\_350\\_esp.pdf](https://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_350_esp.pdf)

Corte Interamericana de Derechos Humanos. “*Caso V.R.P., V.P.C. y otros vs. Nicaragua*” vs. Colombia”, del 8 de marzo de 2018, [https://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec\\_350\\_esp.pdf](https://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_350_esp.pdf)

Corte Interamericana de Derechos Humanos. “*Caso mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco vs. México*”, del 28 de Noviembre de 2018, [https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec\\_371\\_esp.pdf](https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_371_esp.pdf)

Corte Penal Internacional. Fiscal contra Jean Pierre Bemba Gombo, Caso ICC-01/05-01/08, del 21 de junio del 2016, <https://www.icc-cpi.int/CaseInformationSheets/bembaEng.pdf>

Corte Penal Internacional. Fiscal contra Omar Hassan Ahmad Al Bashir, Caso ICC-02/05-01/09, del 4 de marzo de 2009, <https://www.icc-cpi.int/CaseInformationSheets/albashirEng.pdf>

Corte Penal Internacional. Fiscal contra Al-Hassan Ag Abdoul Aziz Ag MohamedAg Mahmoud, Caso ICC-01/12-01/18, de 30 septiembre de 2019, <https://www.icc-cpi.int/CaseInformationSheets/al-hassanEng.pdf>

Corte Penal Internacional. Fiscal contra Germain Katanga, Caso ICC-01/04-01/07, de 7 de marzo de 2014, <https://www.icc-cpi.int/drc/katanga>

Corte Penal Internacional. Fiscal contra Kony y col, Caso ICC-02/04-01/05, de 8 de julio de 2015 <https://www.icc-cpi.int/uganda/kony>

Corte Penal Internacional. Fiscal contra Harun y Ali Kushayb, Case ICC-02/05-01/07-2, de 27 de abril de 2017, <https://www.icc-cpi.int/Pages/cases.aspx?k=Kushayb>

- Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia. Fiscal contra Furundžija , Caso IT-95-17 / 1, del 10 diciembre de 1998, <https://www.icty.org/case/furundzija>
- Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia. Fiscal contra Mucić y col, Caso IT-96-21, del 20 February 2001, <https://www.icty.org/en/case/mucic>
- Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia. Fiscal contra Vasiljević, Caso IT-98-32, del 25 February 2004, <https://www.icty.org/x/cases/vasiljevic/acjug/en/val-aj040225e.pdf>
- Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia. Fiscal contra Plavšić, Caso IT-00-39 y 40/1, 27 de febrero de, <https://www.icty.org/en/case/plavsic>
- Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia. Fiscal contra Bralo, IT-95-17-S, del 7 diciembre de 2005: parr. 39 <https://www.icty.org/en/case/bralo>
- Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia. Fiscal contra Momčilo Krajišnik, Caso IT-00-39-T, del 27 de septiembre de 2006, <https://www.icty.org/x/cases/krajisnik/tjug/en/kra-jud060927e.pdf>
- Tribunal Penal Internacional de Ruanda. Fiscal contra Jean Paul Akayesu, Caso ICTR-96-4, del 1 de junio del 2001. <https://unictr.irmct.org/en/cases/ictr-96-4>
- Tribunal Penal Internacional de Ruanda. Fiscal contra Mujimana, Caso ICTR-95-IB-T, 1995: par.551 y ss., <https://www.womenslinkworldwide.org/observatorio/base-de-datos/fiscal-v-mikaeli-muhimana-caso-no-ictr-95-1b-t>
- Tribunal Penal Internacional de Ruanda. Fiscal contra Sylvestre Gacumbitsi, Case No. ICTR-2001-64-A, 7 de julio de 2006, <https://unictr.irmct.org/sites/unictr.org/files/case-documents/ictr-01-64/appeals-chamber-judgements/en/060707.pdf>
- Tribunal Penal Internacional de Ruanda. Fiscal contra Climent Kayishema y Obed Ruzindana, Case No. ICTR-95-1, 1 de junio de 2001, <https://unictr.irmct.org/sites/unictr.org/files/case-documents/ictr-95-1/appeals-chamber-judgements/en/010601.pdf>
- Tribunal Penal Internacional de Ruanda. Édouard Karemera y Matthieu Ngirumpatse, Case No. ICTR-98-44-A, 29 de septiembre de 2014, <https://unictr.irmct.org/sites/unictr.org/files/case-documents/ictr-98-44/appeals-chamber-judgements/en/140929.pdf>
- Tribunal Penal Internacional de Ruanda. Fiscal contra Eliézer Niyitegeka, Case No. ICTR-96-14-T, 16 de mayo de 2003, <https://unictr.irmct.org/sites/unictr.org/files/case-documents/ictr-96-14/trial-judgements/en/030516.pdf>
- Tribunal Intenacional de Ruanda. Fiscal contra Juvénal Kajelijeli, Case No. ICTR-98-44A-A, 23 de mayo de 2005, <https://unictr.irmct.org/sites/unictr.org/files/case-documents/ictr-98-44a/appeals-chamber-judgements/en/050523.pdf>

## Leyes colombianas y Jurisprudencia

Acuerdo para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, de 24 de noviembre de 2016, (EVA – Acuerdo final de 2016), [https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma\\_pdf.php?i=79893](https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=79893)

Consejo de Estado, “Sentencia de Unificación de Reparación Integral”, Rad.05001-23-25-000-1999-01063-01(32988), 28 de agosto de 2014. MP. Ramiro de Jesús Pazos Guerrero. [http://www.consejodeestado.gov.co/documentos/boletines/151/S3/0501-23-25-000-1999-01063-01\(32988\).pdf](http://www.consejodeestado.gov.co/documentos/boletines/151/S3/0501-23-25-000-1999-01063-01(32988).pdf)

Congreso de Colombia., el Acto Legislativo 1 de 2012, “instrumentos jurídicos de justicia transicional” Diario oficial No. 48.508, 31 de julio de 2012. [http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/acto\\_legislativo\\_01\\_2012.html](http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/acto_legislativo_01_2012.html)

Congreso de Colombia., ley 1592 de 2012, “Se introducen modificaciones a la Ley 975 de 2005” Diario oficial No. 48633, 3 de diciembre de 2012. <http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1684609>

Congreso de Colombia., ley 1448 de 2011, “Ley de víctimas y Restitución de Tierras” Diario oficial No. 48.096, 10 de junio de 2011. [http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley\\_1448\\_2011.html](http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1448_2011.html)

Congreso de Colombia., la ley 1257 de 2018, “Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones”, 4 de diciembre de 2008. <https://www.rednacionaldemujeres.org/phocadownloadpap/ley%201257%20de%202008.pdf>

Congreso de Colombia., ley 1719 de 2014, “Acceso a la Justicia de Víctimas del conflicto armado” Diario oficial No. 49.186, 18 de junio de 2014. [http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley\\_1719\\_2014.html](http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1719_2014.html)

Congreso de Colombia. ley 742 de 2002, “Ley que aprueba el Estatuto de Roma”, Diario oficial No. Diario Oficial No. 44.826, 7 de junio de 2002. [http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley\\_0742\\_2002.html](http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0742_2002.html)

Congreso de Colombia. ley 599 de 2000, “Código Penal”, Diario oficial No. Diario Oficial No. 44.097, 24 de julio de 2000. [http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley\\_0599\\_2000.html](http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0599_2000.html)



Congreso de Colombia. ley 600 de 2000, “Código Penal de Procedimiento Penal”, Diario oficial No. 44.097, 24 de julio del 2000.

[http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley\\_0600\\_2000.html](http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0600_2000.html)

Congreso de Colombia. ley 906 de 2004, “Código Penal de Procedimiento Penal”, Diario oficial No. 45.658, 1 de septiembre de 2004.

[http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley\\_0600\\_2000.html](http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0600_2000.html)

Congreso de Colombia, Ley 975 de 2005, “Ley de verdad justicia y reparación”, Diario Oficial 45.980, 25 de julio de 2005.

[https://www.cejil.org/sites/default/files/ley\\_975\\_de\\_2005\\_0.pdf](https://www.cejil.org/sites/default/files/ley_975_de_2005_0.pdf)

Congreso de Colombia. Ley 1232 de 2008, Diario Oficial No. 47.053 de 17 de julio de 2008.

<http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=31591>

Congreso de Colombia. ley 1437 de 2011, “Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”, Diario oficial No. 47.956, 2 de julio de 2012.

[http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley\\_1437\\_2011.html](http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011.html)

Congreso de Colombia. ley 1547 de 2011, “Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”, Diario oficial No. 47.956, 2 de julio de 2012.

[http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley\\_1437\\_2011.html](http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011.html)

Congreso de Colombia. Ley 248 de 1995, “se aprueba la Convención Internacional para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, suscrita en la ciudad de Belem Do Para”, Diario oficial No. 42.171, 29 de diciembre de 1995.

[http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley\\_0248\\_1995.html#:~:tex t=Por%20medio%20de%20la%20cual,9%20de%20junio%20de%201994](http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0248_1995.html#:~:tex t=Por%20medio%20de%20la%20cual,9%20de%20junio%20de%201994)

Congreso de Colombia. Ley 51 de 1981, “se aprueba la “Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer””, Diario oficial No. 35794,

7 de julio de 1981. <http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1605470>

Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-228/02, “Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 137 de la Ley 600 de 2000, “(p)or la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”, 3 de abril del 2002. MP. Manuel José Cepeda Espinosa y Eduardo Montealegre Lynett.

<https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2002/C-228-02.htm>

Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-462/18, “Violencia institucional contra la mujer”, 3 de diciembre del 2018. MP. Antonio José Lizarazo Ocampo.

<https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2002/C-228-02.htm>

Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-338/18, “Violencia de Género”, 22 de agosto de 2018, MP. Gloria Stella Ortiz Delgado.

<https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/t-338-18.htm>

Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-012/16, “Violencia de Género”, 22 de enero de 2016, MP. Luis Ernesto Vargas Silva.

<https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/t-012-16.htm>

Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-644/11, “Demanda de inconstitucionalidad al nuevo código de procedimiento administrativo”, 31 de agosto de 2011, MP. Jorge Iván Palacio Palacio.

<https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/C-644-11.htm>

Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-590/17, “Violencia de Género”, 21 de septiembre de 2017, MP. Alberto Rojas Ríos.

<https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/t-590-17.htm>

Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-297/16, “tipo penal de feminicidio”, 8 de junio de 2016, MP. Gloria Stella Ortiz Delgado.

<https://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2016/C-297-16.htm>

Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-878/14, “Violencia de género”, 18 de noviembre de 2014, MP. Jorge Iván Palacio Palacio.

<https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2004/t-025-04.htm>

Corte Constitucional de Colombia, Auto 092 del 2008, “tutela sobre mujer y desplazamiento forzado”, 22 de enero de 2004, MP. Manuel José Cepeda Espinosa. <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2004/t-025-04.htm>.

Corte Constitucional de Colombia, sentencia C-291 de 2007, “Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 135, 156 y 157 (parciales) de la Ley 599 de 2000, y 174, 175, 178 y 179 de la Ley 522 de 1999.”, 25 de abril del 2007. MP. Manuel José Cepeda Espinosa, p.35,

<https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2007/C-291-07.htm>

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia SP5333-2018, “Caso bloque pacífico héroes del chocó y frente suroeste de las autodefensas”, 5 de diciembre de 2018, MP. Eugenio Fernández Carlier.

<http://consultajurisprudencial.ramajudicial.gov.co:8080/WebRelatoria/csj/index.xhtml>

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia 34145-2011, “Reparación Integral”, 13 de abril del 2011, MP. Sigifredo Espinosa Pérez.

[http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-34145-de-abril-13-de-2011?documento=jurcol&contexto=jurcol\\_a0f476f139df0084e0430a0101510084&vista=STD-PC](http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-34145-de-abril-13-de-2011?documento=jurcol&contexto=jurcol_a0f476f139df0084e0430a0101510084&vista=STD-PC)

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Auto AP2865-2016, “Reparación Integral”, 10 de mayo de 2016, MP. Fernando Alberto Castro Caballero,

[http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-34145-de-abril-13-de-2011?documento=jurcol&contexto=jurcol\\_a0f476f139df0084e0430a0101510084&vista=STD-PC](http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-34145-de-abril-13-de-2011?documento=jurcol&contexto=jurcol_a0f476f139df0084e0430a0101510084&vista=STD-PC)

Presidente de la República de Colombia, decreto 4799 de 2011, “se reglamentan parcialmente las Leyes 294 de 1996, 575 de 2000 y 1257 de 2008” Diario oficial No. 48289, 20 de diciembre de 2011.

<http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1551034>

Presidente de la República de Colombia, decreto 4796 de 2011, “se reglamentan la ley 1257 de 2008” Diario oficial No. 48289, 20 de diciembre de 2011.

<http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1551034>

Presidente de la República de Colombia, decreto 1630 de 2019, “relativo a las víctimas de violencia sexual”, 9 de septiembre de 2019.

[https://www.minsalud.gov.co/Normatividad\\_Nuevo/Decreto%20No.%201630%20de%202019.pdf](https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Decreto%20No.%201630%20de%202019.pdf)

Presidente de la República de Colombia., decreto 1356 de 2019, “Decreto Único Reglamentario del Sector de Inclusión Social y Reconciliación”, 26 de julio de 2019.

<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=98271>

Presidente de la República de Colombia., decreto 2460 de 2015, “Estrategia de Corresponsabilidad de la política pública para las víctimas del conflicto armado interno”, 17 de diciembre de 2015.

<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=67435>

Presidente de la República de Colombia, decreto 1725 de 2012, “Por el cual se adopta el Plan Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas de que trata la Ley 1448 de 2011”, 16 de agosto de 2012.

<https://www.unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/documentosbiblioteca/decreto-1725-de-2012.pdf>

Presidente de la República de Colombia., el decreto 4800 de 2011, “Por el cual se reglamenta la Ley 1448 de 2011 y se dictan otras disposiciones”, 20 de diciembre de 2011.

<https://www.unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/documentosbiblioteca/decreto4800reglamentarioleyvictimas.pdf>

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, Rad. 1100160002532008-83194; 1100160002532007-83070, “Sentencia por Homicidio y otros”, 1 de diciembre de 2011, MP. Léster María González Romero.

[https://www.ictj.org/sites/default/files/subsites/ictj/docs/Sentencias\\_Justicia-y-Paz/2011.PrimeraInstancia.Pena-Morelo-y-Hdez\\_Arauca.pdf](https://www.ictj.org/sites/default/files/subsites/ictj/docs/Sentencias_Justicia-y-Paz/2011.PrimeraInstancia.Pena-Morelo-y-Hdez_Arauca.pdf)

## Otros recursos

- Amnistía Internacional, “*Los efectos de las armas en la vida de las mujeres*”, Amnistía Internacional, 2004, 10, <https://www.amnesty.org/es/documents/ACT30/001/2005/es/>
- Agencia para la Reconciliación y la Normalización. *Ruta de Reincorporación*, Bogotá: Agencia para la Reconciliación y la Normalización, 2018, <http://www.reincorporacion.gov.co/es/reincorporacion/ruta-de-reincorporaci%C3%B3n>
- Cejil. *Violencia de Género*, 23 de junio de 2020, [https://www.cejil.org/sites/default/files/legacy\\_files/IV.%20Tribunal%20Penal%20Internacional%20para%20Ruanda\\_1.pdf](https://www.cejil.org/sites/default/files/legacy_files/IV.%20Tribunal%20Penal%20Internacional%20para%20Ruanda_1.pdf)
- Fondo Fiduciario en Beneficio de las Víctimas, *La CPI prevé una justicia restauradora y retributiva*, 20 de enero de 2020, <http://www.coalitionfortheicc.org/es/explora/fondo-fiduciario-en-beneficio-de-las-victimas>
- Fondo de Verdad para las Víctimas, *Proyectos*, 20 de noviembre 2020, <https://www.trustfundforvictims.org/node/32>
- Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Sistema de Información de Clínica y Odontología Forense - SICLICO, “Análisis comparativo enero a octubre 2014 -2015 de los hechos de violencia contra mujeres en Colombia”, acceso el 20 de diciembre de 2020. <https://www.medicinalegal.gov.co/documents/20143/86545/D%C3%ADA+Internacional+de+la+Eliminaci%C3%B3n+de+la+Violencia+contra+la+Mujer.pdf/577d507c-1fa3-764d-050e-0da5c6eecef4>
- Ertürk, Yakin, “*Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer sus causas y consecuencias*”, Consejo de Derechos Humanos (A/HRC/7/6, 29), 29 de enero de 2008: 1-34.
- Organización de Naciones Unidas, “*Informe del Secretario General sobre la Independencia del poder judicial, la administración de justicia y la impunidad*”, Comisión de Derechos Humanos, (E/CN.4/1999/57), 13 de enero de 1999, <https://www.hchr.org.co/documentoseinformes/documentos/html/informes/onu/cddh/E-CN-4-1999-57.html>
- Organización de Naciones Unidas, “*Violencia sexual relacionada con los conflictos*”, Consejo de Derechos Humanos, (S/2014/181), 13 de marzo del 2004: 1-37, <https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2014/9586.pdf>
- Organización de Naciones Unidas, “*Violencia sexual relacionada con los conflictos*”, (S/RES/1325/2000), Consejo de Seguridad, 31 de octubre de 2000, <https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2006/1759.pdf>
- Ertürk, Yakin, *Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer sus causas y consecuencias*. Consejo de Derechos Humanos, (A/HRC/7/6, 29), 29 de enero de 2008: 1-34.

- Organización de Naciones Unidas, *La Plataforma de Acción de Beijing cumple 20 años*, Entidad de las Naciones Unidas para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, 2020, <https://beijing20.unwomen.org/es/in-focus/armed-conflict>
- Organización de Naciones Unidas, ONUmujeres. *La Plataforma de Acción de Beijing cumple 20 años*, Entidad de las Naciones Unidas para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, 2020, <https://beijing20.unwomen.org/es/in-focus/armed-conflict>
- Organización de Naciones Unidas, Consejo Económico y Social. *Conclusiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer sobre las esferas de especial preocupación determinadas en la Plataforma de Acción de Beijing*, (ST/ESA/327), División para el Adelanto de la Mujer, 1999, <https://www.un.org/womenwatch/daw/csw/agreedconclusions/Spanish%20AC%20PDF/43%20Spanish.pdf>
- Organización de Naciones Unidas, Consejo de Seguridad. “*Recomendaciones para la comprensión de los efectos de los conflictos armados en las mujeres y las niñas*”, (S/RES/1325/2000), <https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2006/1759.pdf?file=fileadmin/Documentos/BDL/2006/1759>
- Profemmes, “Proyecto De Lucha Contra La VSG y el VIH”, 2019, <https://profemmes.org/>
- Rueda Guzmán, Lily Andrea. *La ley de justicia y paz y el regreso a la vida civil: régimen de libertades, resocialización y reintegración de personas postuladas*, Bogotá: Ministerio de Justicia y Derecho, 2015, <https://www.minjusticia.gov.co/Portals/0/pdf/Cartilla%20Justicia%20y%20Paz.pdf>
- Unidad para la atención y reparación de víctimas. “Registro Único de Víctimas”. Acceso el 15 de octubre de 2020. <https://www.unidadvictimas.gov.co/es/solicitud-de-inscripcion-en-el-registro-unico-de-victimas/281>
- Unidad para la atención y reparación de víctimas. “Registro Único de Víctimas”. Acceso el 20 de noviembre de 2020. <https://www.unidadvictimas.gov.co/es/reportes>
- Youtube, “Davis, Laura: Gender Inclusive Transitional Justice. Peacemediation”. 1:08, publicado el 16 de junio del 2014, <https://www.youtube.com/watch?v=3Dy6MZX0Hlg>

## Anexos

---

### **Cuestionario para víctimas del conflicto armado colombiano, 2019.**

Con la finalidad de tener un mejor conocimiento de los temas de investigación elegidos por los/las investigadores/las, les agradecemos por ser parte de este estudio socio jurídico que pretende recolectar información sobre el proceso que han recorrido las víctimas después de la ocurrencia de los hechos victimizantes. La información de este cuestionario será procesada para mantener el anonimato de los/las participantes. Ningún dato personal será divulgado a terceros. La utilización de la información recolectada en este cuestionario estará acorde con las leyes y datos de protección de datos personales. Al completar este cuestionado los/las participantes autorizan la utilización estadística de la información para actividades de docencia e investigación de las universidades que participan en la formulación de los cuestionarios y para la difusión pública de conocimiento científico, en estricto respeto de la ley 1581 de 2012.

#### **\*Obligatorio**

#### **Preguntas sociodemográficas**

1. Edad \*

---

2. Lugar de nacimiento y Fecha de nacimiento

---

3. Lugar de residencia actual

---

## 4. Etnia con la que te identificas \*

*Marca solo un óvalo.*

- ☐ Mestiza
- ☐ Indígena
- ☐ Afrocolombiana
- ☐ Otros: \_\_\_\_\_

## 5. Tiene alguna condición de discapacidad \*

*Marca solo un óvalo.*

- ☐ Si
- ☐ No

## 6. Estado civil \*

*Marca solo un óvalo.*

- ☐ Casada
- ☐ Soltera
- ☐ Union Libre
- ☐ Viuda
- ☐ Otros: \_\_\_\_\_

## 7. Nivel Educativo Alcanzado \*

*Marca solo un óvalo.*

- ☐ Primaria
- ☐ Secundaria
- ☐ Bachillerato
- ☐ Técnico
- ☐ Tecnólogo
- ☐ Profesional
- ☐ Postgrado
- ☐ Ninguno

## 8. ¿Cuántas personas tiene a su cargo? \*

*Marca solo un óvalo.*

- ☐ 1
- ☐ 2
- ☐ 3
- ☐ Más de 3
- ☐ Ninguna

**Preguntas sobre Proceso Judicial**

## 9. ¿Has sido víctima del conflicto armado? \*

*Marca solo un óvalo.*

- ☐ Si
- ☐ No



10. ¿Cuáles son los delitos de los que has sido víctimas? Puedes seleccionar más de una opción \*

*Marca solo un óvalo.*

- ☐ Delitos contra la vida y la integridad física
- ☐ Desplazamiento Forzado
- ☐ Desaparición Forzada
- ☐ Delitos contra violación o actos sexuales abusivos
- ☐ Otros: \_\_\_\_\_

11. ¿Has denunciado ante la Fiscalía ? \*

*Marca solo un óvalo.*

- ☐ Si
- ☐ No
- ☐ ¿Por qué?

12. Si la respuesta es negativa, ¿ante qué autoridad has declarado?

\_\_\_\_\_

13. Si la respuesta es afirmativa, en qué estado está tu proceso

\_\_\_\_\_

14. ¿Se ha adoptado algún tipo de medida respecto a tu caso?

*Marca solo un óvalo.*

- ☐ Si
- ☐ No

15. ¿Se han tomado algún tipo de medidas con respecto al agresor/es?

*Marca solo un óvalo.*

- ☐ Si
- ☐ No
- ☐ Cuáles medidas:

16. ¿Te han dado reparación por vía judicial?

*Marca solo un óvalo.*

- ☐ Si
- ☐ No

17. ¿Estas conforme con tu proceso judicial?

*Marca solo un óvalo.*

- ☐ Si
- ☐ No
- ☐ ¿Por qué?

18. ¿Qué esperas con el proceso judicial en tu caso?

---

---

- ¿Crees que en tu caso, el proceso judicial genera impunidad?

*Marca solo un óvalo.*

- ☐ Si
- ☐ No
- ☐ Por qué?

19. ¿Consideras que el proceso judicial sirve para repararte?

*Marca solo un óvalo.*

- ☐ Si
- ☐ No
- ☐ Por qué?

20. ¿Cuál sería tu propuesta para que los procesos judiciales logren reparar a las víctimas?

---

---

### **Reparación por procesos autogestionados**

21. ¿Pertenece a alguna fundación de víctimas? \*

*Marca solo un óvalo.*

- ☐ Si
- ☐ No

22. Si la respuesta es afirmativa, refiere el nombre de la Fundación a la que perteneces

---

23. ¿La fundación ofrece procesos de reparación para las víctimas?

*Marca solo un óvalo.*

- ☐ Si
- ☐ No

24. Si la respuesta es afirmativa, cuáles han sido las actividades y procesos de reparación en los que has participado

¿Consideras que en tu caso , han logrado su objetivo?

*Marca solo un óvalo.*

- ☐ Si
- ☐ No
- ☐ Por qué?

25. ¿Has sido parte de procesos de memoria?

*Marca solo un óvalo.*

- ☐ Si
- ☐ No
- ☐ Por qué?

26. ¿Has participado de procesos donde se aplican técnicas artísticas para reparar ?  
( pintar, danzar, cantar, entre otras) \*

*Marca solo un óvalo.*

- ☐ Si
- ☐ No

27. ¿ Cuales son las técnicas artísticas que se han utilizado? \*

---



---

28. ¿Consideras estos procesos efectivos? \*

*Marca solo un óvalo.*

- ☐ Si
- ☐

No

29. Haciendo una comparación entre el proceso judicial y el proceso de reparación de la fundación;  
¿cuál de los dos te ha aportado más en tu vida para superar el hecho victimizante?.  
¿ Por qué? \*
- 

30. ¿Las autoridades han tomado en cuenta tu participación en las decisiones que se toman en tu caso? \*

*Marca solo un óvalo.*

☐ Si

☐ No

31. ¿Has participado de manera activa dentro de la Fundación a la cuál perteneces? \*

*Marca solo un óvalo.*

☐ Si

☐ No

32. Describe como se llevan a cabo los ejercicios de participación dentro de la Fundación a la que perteneces
- 

33. ¿Has participado en los ejercicios que se llevan a cabo en la mesa de participación municipal de víctimas? \*

*Marca solo un óvalo.*

☐ Si

☐ No

☐ Por qué?

☐ ¿En cuáles ejercicios?

☐ Otros: \_\_\_\_\_

34. Con los ejercicios de participación y los de sanción te sientes empoderada \*

*Marca solo un óvalo.*

☐ Si

☐ No

☐ Por qué?

35. En tu caso, ¿cuál es la técnica artística que más te ha funcionado en tu proceso de reparación? \*

\_\_\_\_\_

36. ¿Qué crees que los procesos llevados a cabo en la fundación deben mejorar para que tu logres culminar el proceso de reparación? \*

*Marca solo un óvalo.*

☐ Si

☐ No

☐ Por qué?

37. Desde tu punto de vista, por lo que conoces y has podido observar ¿Crees que las técnicas creativas son efectivas para la construcción de paz y empoderamiento de las víctimas?

*Marca solo un óvalo.*

☐ Si

☐ No

¿Por qué?

38. Desde tu punto de vista, por lo que conoces y has podido observar ¿Cuáles crees que son las medidas necesarias para tu reparación?
-